DECRETO por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2016

PROCESO LEGISLATIVO	
01	**1)** 04-11-2015 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García (PAN) Se turnó a la Comisión de Gobernación. Diario de los Debates, 4 de noviembre de 2015.
	2) 01-03-2016 Cámara de Diputados. **INICIATIVA** con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco (PES) Se turnó a la Comisión de Gobernación. Diario de los Debates, 1 de marzo de 2016.
	3) 04-05-2016 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el Dip**.** Omar Ortega Álvarez (PRD) Se turnó a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados. Diario de los Debates, 4 de mayo de 2016.
	4) 25-05-2016 Comisión Permanente. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Presentada por el Dip**.** Virgilio Dante Caballero Pedraza (MORENA) Se turnó a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados. Diario de los Debates, 25 de mayo de 2016.
	NOTA: La comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados decidió incluir en los antecedentes del dictamen las siguientes dos iniciativas del Senado dada la materia coincidente de estas.
	5) 01-03-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expiden, reforman y adicionan diversas Leyes para la Reglamentación Integral del Sistema Nacional Anticorrupción. Presentada por el Senador Miguel Barbosa Huerta (PRD) Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 1 de marzo de 2016.
	6) 01-03-2016 Cámara de Senadores. **INICIATIVA** con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con faltas graves, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Presentada por el Senador Pablo Escudero Morales (PVEM) Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 1 de marzo de 2016.

PROCESO LEGISLATIVO	
02	16-06-2016 Cámara de Diputados. **DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal. **Aprobado** en lo general y en lo particular, por 450 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. Diario de los Debates, 16 de junio de 2016. Discusión y votación, 16 de junio de 2016.
03	16-06-2016 Cámara de Senadores. **MINUTA** con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal. Se turnó a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda. Gaceta Parlamentaria, 16 de junio de 2016.
04	16-06-2016 Cámara de Senadores. **DICTAMEN** de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal. **Aprobado** en lo general y en lo particular, por 106 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones. Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Gaceta Parlamentaria, 16 de junio de 2016. Discusión y votación 16 de junio de 2016.
05	18-07-2016 Ejecutivo Federal. **DECRETO** por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.

1) 04-11-2015
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Presentada por la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García (PAN)
Se turnó a la Comisión de Gobernación.
Diario de los Debates, 4 de noviembre de 2015.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra por cinco minutos la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, una de las mayores expectativas del cambio democrático en México en el año 2000 fue la posibilidad de transparentar las decisiones del gobierno, abatir los niveles de corrupción que se observaron en administraciones anteriores y contar con gobiernos eficientes.

Por ello, en el mes de octubre del año 2002 el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa por la que se creó la Secretaría de la Función Pública, sustituyendo a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Secodam, a la par de la aprobación de otro instrumento que pretendía romper con las históricas prácticas de opacidad y nepotismo al interior de la administración pública; la Ley del Servicio Profesional de Carrera.

Lo que en aquellos momentos se pretendía era contar con sólidas instituciones encargadas de dar seguimiento, vigilar y evaluar lo establecido en la ley en los términos de acción gubernamental, el gasto público y los esquemas de contratación de personal en las distintas dependencias del gobierno. Es decir, que en nuestro país se contara con elementos de control gubernamental para evitar los malos actos por parte de los funcionarios públicos.

Sin embargo, el 2 de enero del año 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal a efecto de de-saparecer la Secretaría de la Función Pública, sujetando su extinción a la conformación de un órgano constitucional autónomo responsable de combatir la corrupción y se distribuyeron sus facultades en distintas dependencias del Ejecutivo federal, entre las que se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No obstante las modificaciones señaladas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el órgano autónomo previsto no fue aprobado y en la actualidad permanece en funciones la Secretaría.

Cabe destacar que en la reforma constitucional aprobada por esta soberanía el año pasado, en noviembre de 2014, por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, se estableció que la Secretaría de la Función Pública, como responsable del control interno del Ejecutivo federal debía reasumir las funciones que tenía previo a las reformas aprobadas en el año 2013.

En Acción Nacional estamos convencidos que el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública es indispensable para lograr los objetivos del nuevo sistema nacional dentro del cual dicha dependencia es una institución fundamental para su diseño e instrumentación.

Para ello, compañeros y compañeras, debemos de volver a dotar de facultades y atribuciones a dicha dependencia, el Sistema Nacional Anticorrupción así lo precisa y necesitamos llevar a cabo las acciones legislativas que sean necesarias para ponerlo en marcha.

Es por ello que a nombre propio y de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento ante esta soberanía la iniciativa por la cual se restablece formalmente a la Secretaría de la Función Pública y se le reincorporan atribuciones que le fueron eliminadas en la última reforma en el año 2013.

La Secretaría de la Función Pública será la única dependencia encargada del control interno de todas las dependencias del gobierno federal. Una de sus principales atribuciones será la de conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como remitir para su sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y/o presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

La Secretaría de la Función Pública organizará y coordinará el sistema de control y evaluación gubernamental. Se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas de control y el cumplimiento de las normas en materia de fiscalización.

Con esta iniciativa y en congruencia con nuestras propuestas en materia de anticorrupción, se le están otorgando atribuciones específicas como miembro integrante del sistema nacional, pues la Secretaría deberá informar periódicamente al sistema y al titular del Ejecutivo federal sobre el resultado de la evaluación respecto de las dependencias y entidades de la administración pública. Es por ello, compañeros, que estamos presentando esta iniciativa.

También habla sobre los requisitos para ser secretario de la Función Pública, que es indispensable que para que pueda nombrarse al secretario de la Función Pública, este no debe ser ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de los de la coalición, en su caso, que haya postulado el titular del Ejecutivo federal en funciones. No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al titular del Ejecutivo en funciones. Y no tener conflicto de interés o vínculos de amistad con el presidente de la república ni con el resto de los titulares de las dependencias o entidades de la administración pública federal.

Compañeras y compañeros diputados, en el PAN estamos convencidos de la necesidad y la urgencia de que haya un control real sobre las acciones del gobierno y de sus funcionarios.

El combate frontal a la corrupción es una tarea pendiente que no puede esperar ni un minuto más, requerimos una Secretaría de la Función Pública que realmente atienda una de las problemáticas que más hieren a la sociedad y, por supuesto, un titular que se ciña a los principios de honestidad y responsabilidad en el que el cargo demanda. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo de la diputada Lorena del Carmen Alfaro García y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Lorena Alfaro García, en nombre de las legisladoras y los legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental la presente administración propuso desaparecer la Secretaría de la Función Pública, distribuyendo sus facultades en distintas dependencias del Ejecutivo federal previendo además la conformación de un órgano constitucional autónomo responsable de combatir la corrupción. Así a través del fortalecimiento de los órganos internos de control mediante su transformación en unidades de auditoria preventiva; de la reasignación de funciones de control gubernamental, además de otras de carácter normativo se distribuyeron facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, buscando eliminar burocracia a través de la “simplificación administrativa.”

Las otrora Comisiones Unidas de Gobernación, y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados señalaron en el dictamen con proyecto de decreto –que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal– que resultaba adecuada "la propuesta de reasignar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las competencias que hasta la fecha ha tenido la Secretaría de la Función Pública, en materia de servicio civil de carrera; transparencia en las compras de gobierno; administración de inmuebles federales y generación de indicadores de gestión de las dependencias federales, buscando la necesaria congruencia en la asignación, control y rendición de cuentas del Presupuesto de Egresos de la Federación, y la necesaria coordinación, para los fines del combate a la corrupción, entre los Poderes federales y los tres órdenes de gobierno de las República."

No obstante las modificaciones señaladas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el órgano constitucional previsto en el artículo Segundo Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de enero de 2013 no fue aprobado.

Aunado a ello, y a consecuencia de la iniciativa presentada por legisladores federales de Acción Nacional en el pasado mes de noviembre de 2014, se conformó en Nuestra Carta Magna el Sistema Nacional Anticorrupción. En su aprobación, el Constituyente estableció que la Secretaría de la Función Pública, como la responsable del control interno del Ejecutivo federal, debía reasumir las funciones que tenía previo a las reformas publicadas el 2 de enero de 2013. Así, el artículo Segundo Transitorio señala lo siguiente:

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-W del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. **Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.**

En Acción Nacional estamos convencidos que la Secretaría de la Función Pública es indispensable no sólo para el adecuado funcionamiento de la administración pública federal, sino para dar plena vigencia a las atribuciones que se proponen reasignarle y que permitirán lograr los objetivos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del cual dicha dependencia es una institucional fundamental para su diseño e instrumentación.

Es necesario restablecer formalmente a la Secretaría de la Función Pública y dotarla de las atribuciones que le fueron eliminadas para que pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del Sistema y una distribución de competencias donde el combate a la corrupción se realice a través de subsistemas que aseguren su eficacia.

La Secretaría de la Función Pública se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno federal, una de sus principales atribuciones será la de conocer e investigar las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas leves y graves, y una vez que entre en vigor la ley general de responsabilidades administrativas prevista la fracción XXIX-W del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas últimas la deberá remitir para su sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y o presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Además organizará y coordinará el sistema de control y evaluación gubernamental, se encargará de vigilar el cumplimiento de las normas de control y el cumplimiento de las normas de fiscalización.

Deberá designar y, en su caso, remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y de la Procuraduría General de la República, así mismo, regulará el registro de servidores públicos.

De igual manera, tendrá atribuciones específicas como miembro integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, pues dicha dependencia deberá informar periódicamente al sistema y al titular del Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

De igual manera, estará a cargo de la plataforma para el registro de declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal del Sistema Nacional Anticorrupción.

Deberá emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Por último, siendo que el nombramiento que realice el Ejecutivo federal respecto del secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado de la República, la presente iniciativa plantea la necesidad de establecer ciertos requisitos objetivos que deberá cubrir el nombramiento propuesto por el presidente de la República, en los que por la importancia y trascendencia de sus atribuciones, deberá estar ausente de cualquier conflicto de interés tanto con él como con el resto de los titulares de las dependencias o entidades del Ejecutivo Federal. En este sentido, y tomando en consideración que el nombramiento de quien sea el titular de dicha dependencia se perfecciona con la participación de otro de los Poderes de la Unión –Senado de la República– , resulta válido y oportuno que su designación deje de ser absolutamente discrecional por el presidente de la República, por lo que el establecimiento de requisitos que garanticen el eficaz desarrollo de sus funciones resulta acorde al espíritu del nuevo esquema de combate a la corrupción diseñado por el Constituyente Permanente..

En Acción Nacional estamos convencidos de la urgente implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo, creemos que dotar de las atribuciones que correspondían a la Secretaría de la Función Pública previo a las reformas de enero de 2013 no sólo es oportuno sino necesario, pues dicha dependencia debe tener desde ya la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción, mismas atribuciones que se realizarán acorde a lo aprobado en el Sistema Nacional Anticorrupción, una vez que éste entre en vigor.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 25 y 26; se adiciona el 37 y se derogan los artículos 31, fracciones V, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y 44, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 25. Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la **Secretaría de la Función Pública.**

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Secretaría de Desarrollo Social

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Secretaría de Energía

Secretaría de Economía

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Secretaría de la Función Pública

Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Salud

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Secretaría de Turismo

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. (Se deroga).

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

X. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. Se deroga.

XX. ...

XXI. Se deroga.

XXII. Se deroga.

XXIII. ...

XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro, las cuales deberán opinarse previo a su implementación o entrada en vigor por la Secretaría de la Función Pública.

XXV. Se deroga.

XXVI. Se deroga.

XXVII. Se deroga.

XXVIII. Se deroga.

XXIX. Se deroga.

XXX. Se deroga.

XXXI. Se deroga.

XXXII. Se deroga.

XXXIII. Se deroga.

XXXIV. ....

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño, su evaluación y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción;

IV. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, así como aquellas que impulsen la simplificación administrativa;

V. Vigilar el cumplimiento de las normas de control así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VI. Vigilar en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento de las normas fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a las reglas que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;

VII. Realizar investigaciones y auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control, conforme a las reglas y bases generales que emita el Sistema Nacional Anticorrupción.

VIII. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, en términos de las disposiciones aplicables;

IX. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, y emitir conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción, las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;

X. Dirigir, organizar y operar el sistema de servicio profesional de carrera en la administración pública federal conforme a lo que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción, y en los términos de las disposiciones aplicables;

XI. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;

XII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos, así como Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones aplicables;

XIII. Opinar previo a su entrada en vigor, sobre las políticas, normas y criterios correspondientes en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XIV. Designar, llevar a cabo el registro y mantener un padrón actualizado de los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XV. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal, conforme a los perfiles que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones aplicables;

XVI. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, conforme a lo que determine la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al titular de dicha secretaría;

XVII. Colaborar y coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Informar periódicamente al Sistema Nacional Anticorrupción y al Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de investigación y fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones, asimismo proponer y dar seguimiento a cumplimiento de las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas conforme a las bases que dicte el Sistema Nacional Anticorrupción;

XIX. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la administración pública federal, conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción en donde se incluirán, las declaraciones patrimoniales, de intereses y su evolución, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

XX. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en la plataforma que para los efectos se determine por el Sistema Nacional Anticorrupción, y verificar y dar seguimiento a la evolución patrimonial de los mismos, mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XXI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como informar al Sistema Nacional Anticorrupción del seguimiento de las mismas, en términos de las disposiciones aplicables;

XXII. Implementar las acciones de participación ciudadana que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción en la celebración de convenios o contratos que celebren con los particulares, las dependencias y entidades de la administración pública federal, en términos de las disposiciones aplicables;

XXIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas leves; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

XXIV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas graves y remitir para su sanción al Tribunal Superior de Justicia Administrativa y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;

XXV. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones;

XXVI. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal;

XXVII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

XXVIII. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;

XXIX. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países;

XXX. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;

XXXI. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, en términos de las disposiciones aplicables;

XXXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República;

XXXIV. Formular y conducir la política general de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere, conforme a lo que establezca el Sistema de Transparencia y el Sistema Nacional anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables;

XXXV. Promover y coordinarse las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, en términos de las disposiciones aplicables;

XXXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento que someta el presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración sobre conflictos de interés o vínculos de amistad, con relación al titular del Ejecutivo federal y con cualquier titular de las dependencias y entidades de la Administración Pública así como de las empresas productivas del Estado.

Para ser nombrado secretario de la Función Pública, se requiere:

a) No ser ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de la coalición, en su caso, que haya postulado al titular del Ejecutivo federal en funciones;

b) No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al titular del ejecutivo en funciones;

c) No tener relaciones de afecto o amistad estrecha ni con el Presidente de la República ni con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Artículo 44. Derogado

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que dependan del Sistema Nacional Anticorrupción deberán ser ejercidas por la dependencia en tanto no entre en vigor dicho Sistema y emita los actos propios de su competencia conforme a la ley que lo regule.

Artículo Tercero. El presidente de la República, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberá someter a consideración del Senado de la República la ratificación del secretario de la Función Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2015.— Diputados: **Lorena del Carmen Alfaro García,** Alejandra Gutiérrez Campos, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Alejandro Armenta Mier, Alfredo Miguel Herrera Deras, Brenda Velázquez Valdez, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Elio Bocanegra Ruiz, Emma Margarita Alemán Olvera, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Hugo Alejo Domínguez, José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Lilia Arminda García Escobar, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Mayra Angélica Enríquez Vanderkam, Miguel Ángel Huepa Pérez, Nadia Haydee Vega Olivas, Oscar Ferrer Ábalos, Patricia Sánchez Carrillo, René Mandujano Tinajero, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Víctor Ernesto Ibarra Montoya (rúbricas).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.

2) 01-03-2016
Cámara de Diputados.
INICIATIVA con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Presentada por el Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco (PES)
Se turnó a la Comisión de Gobernación.
Diario de los Debates, 1 de marzo de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es que el otro día me regañó el diputado Ferreiro, porque dice que no pronuncié correctamente su apellido.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Sí, señor presidente. Con la venia. A la mejor fue un exceso de mi parte haberle dicho.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: No, hombre. Adelante.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: En Encuentro Social queremos gobiernos de leyes y más que de hombres. La iniciativa que con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que hoy se presenta, responde a la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, en materia de anticorrupción. Esta tiene como finalidad facultar a la Secretaría de la Función Pública, hoy control interno del Ejecutivo federal, a dar cumplimiento a las obligaciones sugeridas del Sistema Nacional Anticorrupción y otras leyes afines.

Como saben, la Secretaría de la Función Pública ha venido ejerciendo sus facultades en base a un artículo transitorio, que estableció que la Secretaría de la Función Pública continuaría ejerciendo sus atribuciones conforme a ordenamientos vigentes al momento de la expedición de aquel decreto.

Si bien es cierto, a la fecha no se ha completado el proceso para que se perfeccione el Sistema de Anticorrupción, también lo es que es necesario que dicho sistema sea perfeccionado con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que se otorguen facultades que correspondan a la Secretaría de la Función Pública.

Considerando que el sistema nacional anticorrupción eleva a rango constitucional a los denominados órganos internos de control, se justifica la necesidad de reintegrar las facultades a la Secretaría de la Función Pública para hacer posible que cumpla las funciones que la referida reforma otorga dentro del sistema de combate a la corrupción.

Las nuevas facultades a la Secretaría de la Función Pública a raíz de la creación de dicho sistema serán las siguientes.

Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental inspeccionando el ejercicio al gasto público federal y la congruencia de éste con los Presupuestos de Egresos, así como coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la evaluación que permita conocer los resultados a la aplicación de los recursos públicos federales –algo muy importante– y validar los indicadores de gestión.

Además, vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización coordinando, asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por otra parte deberá establecer las bases generales para la realización de auditorías a dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar auditorías que se requieran en las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control, para lo que se

tendrá que coordinar con la Auditoría Superior de la Federación con el fin de establecer los procedimientos necesarios para que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades evitando con ello la duplicidad.

En coordinación con la Auditoría Superior de la Federación informará qué dependencias y entidades han sido objeto de fiscalización, además de avisar de las recomendaciones, acciones que la propia auditoría haya hecho.

También recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal ante la secretaría o ante los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración.

Conocerá de las conductas de los funcionarios públicos que puedan constituir delitos, responsabilidades administrativas o hechos de corrupción, aplicando las sanciones que corresponda y, en su caso –ahí lo importante–, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A su vez, habrá de conducir la política general en la administración pública federal, a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Igualmente tendrá potestad de recurrir, en su caso, a la determinación de la fiscalía especializada en combate a la corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo formará parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Tomando en cuenta todo lo que se ha expresado en esta iniciativa de decreto, es importante para Encuentro Social que este sistema quede bien terminado, y sobre todo cumplir una demanda ciudadana de combatir enérgicamente la corrupción.

En Encuentro Social anhelamos y queremos un país de leyes, queremos un país de instituciones fuertes. Queremos un país donde quién cometa un delito o una infracción, pague su culpa.

Queremos un gobierno fuerte y decidido, representado realmente por la identidad nacional y por todos los ciudadanos. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 73, fracción XXIV, y 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; Así como el segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción; someto a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tras la reforma del 27 de mayo de 2015, en materia de anticorrupción, se cumple la condición establecida en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en cuyo contenido se establece lo siguiente:

" **Segundo.** Las modificaciones previstas en el presente decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean

congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.

Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este decreto."

Si bien es cierto a la fecha no se ha completado el proceso para que se perfeccione el Sistema Nacional Anticorrupción, también lo es, que es necesario que dicho sistema sea perfeccionado con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorgan las facultades que correspondan a la Secretaría de la Función Pública, tanto generales como las derivadas de la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

Es por lo anterior que esta iniciativa responde al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción de fecha 27 de mayo de 2015.

Dicho transitorio posibilita a este Congreso a realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con el objeto de que la hoy secretaría responsable del control interno del Ejecutivo federal, asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el decreto que crea el Sistema Nacional Anticorrupción y a las leyes que se derivan del mismo.

Considerando lo anterior y dado que en la estructura actual de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no están descritas las facultades para dicha secretaría, sino que éstas se ejecutan en virtud del segundo transitorio al cual nos hemos referido anteriormente, y que dejó suspendidas dichas facultades hasta en tanto no entren en vigor las leyes secundarias del hasta entonces no decretado Sistema Nacional Anticorrupción.

Para que el decreto mencionado que derogó las facultades de la Secretaría de la Función Pública se pudiera llevar a cabo se presentó una iniciativa con proyecto de decreto, con fecha 15 de noviembre de 2012. En el que, según los propios inicialistas de la mencionada reforma se buscaba lo siguiente:

• Diseñar un nuevo sistema de control gubernamental que, a la vez de vigilar la correcta gestión y manejo de recursos, estimulará prioritariamente el carácter preventivo, así como la calidad y agilidad del desempeño público eficaz, transparente y con honradez."

Además, de que en esa iniciativa se propusieron los siguientes cambios, en la estructura de la Administración Pública Federal:

• Crear un nuevo régimen de control gubernamental, a través de la consolidación de unidades de auditoría preventiva en las dependencias y entidades de la administración pública federal, con distribución de facultades de la actual Secretaría de la Función Pública en distintas estructuras y órganos, principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

• Asimismo, se previó que el proceso de transferencia de los asuntos pendientes en materia de responsabilidades y auditoría, de las unidades centrales de la Secretaría de la Función Pública a las unidades de auditoría preventiva que correspondan, a fin de que fueran éstas las que concluyeran el trámite respectivo. En este tema se hace énfasis en que serán los actuales órganos internos de control los que pasarán a ser las unidades de auditoría preventiva, a fin de atender todos los asuntos pendientes.

• Por otra parte, se propuso mantener en vigor toda la normatividad de la Secretaría de la Función Pública que hasta la fecha se encontrara vigente, hasta en tanto las unidades administrativas competentes realicen la reforma o abrogación que consideren procedente. Por su parte, las actuales tareas normativas y de mejora de la gestión desarrolladas por la Secretaría de la Función Pública se transferirían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, dentro de la iniciativa en comento, en sus artículos transitorios, se especificó el porqué era importante en ese momento que las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública fueran competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

• Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones. Respecto de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que determinará, en su caso, si las mismas correspondían a esta última dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.

• Las facultades que los ordenamientos legales otorgaban a la Secretaría de la Función Pública para investigar y sancionar responsabilidades administrativas de servidores públicos, así como otras que las leyes señalaban en particular para los órganos internos de control, se entendieron conferidas a las unidades de auditoría preventiva de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

En consideración a todo lo anterior la iniciativa de reforma que hoy se presenta, busca reincorporar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las facultades de la Secretaría de la Función Pública, facultades que a la fecha viene ejerciendo la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo, en virtud del artículo segundo transitorio del decreto ya mencionado.

Lo anterior tomando en consideración las nuevas atribuciones que se desprenden del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular con el Sistema Nacional de Fiscalización en el ánimo de evitar duplicidad de algunas acciones con la Auditoría Superior de la Federación.

Como hoy se sabe, el Sistema Nacional Anticorrupción está constituido esencialmente por cuatro pilares, siendo el de la trasparencia y acceso a la información pública el propio, Sistema Nacional de combate a la corrupción el relativo al Sistema Nacional de Fiscalización y el pilar que integra diversas reformas al andamiaje jurídico del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las propias que habrán de hacerse al Código Penal Federal.

Derivado de lo anterior y considerando que pudo existir duplicidad de funciones entre la Auditoría Superior de la Federación y la propia Secretaría de la Función Pública, fue necesario a través de la reforma constitucional, antes aludida, establecer de manera clara una serie de reformas al artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos creándose así, el Sistema Nacional de Fiscalización.

Y por otra parte dicha reforma eleva a rango constitucional a los denominados Órganos Internos de Control (OIC), lo que justifica la necesidad de reintegrar las facultades a la Secretaría de la Función Pública, para hacerle posible el cumplimiento de las facultades que la referida reforma le otorga dentro del sistema de combate a la corrupción, y con el propio Sistema Nacional de Fiscalización.

En otras palabras la presente reforma pretende reintegrar las facultades que la Secretaría de Función Pública tenía hasta el 1o. de enero de 2013, además se anexan las facultades que se derivaron de la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Las nuevas facultades de la Secretaría de la Función Pública a raíz de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción serán las siguientes:

Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental, inspeccionando el ejercicio del gasto público federal y la congruencia de éste con los presupuestos de egresos.

Así como coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, y validar los indicadores de gestión.

Además, vigilará el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, coordinando, asesorando y apoyando a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Por otra parte, deberá establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran en las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.

Para lo que se tendrá que coordinar con la Auditoría Superior de la Federación, con el fin de establecer los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, evitando con esto la duplicidad de funciones.

Habrá de informar al Ejecutivo de la gestión de las dependencias de la administración pública federal.

Y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación informará qué dependencias y entidades han sido objeto de fiscalización. Además de avisar las recomendaciones y acciones que la propia auditoría les haya hecho.

También recibirá y registrará las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, ante la secretaría o ante los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración.

Conocerá de la conducta de los funcionarios públicos que pueda constituir delitos, responsabilidades administrativas, o hechos de corrupción; aplicando las sanciones que correspondan y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

A su vez habrá de conducir la política general de la administración pública federal, a efecto de dar cumplimiento a las leyes de transparencia en la gestión pública, a la rendición de cuentas, y al acceso a la información pública por parte de los ciudadanos.

Igualmente tendrá la potestad de recurrir, en su caso, a las determinaciones de la fiscalía especializada en combate a la corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Asimismo formará parte del comité coordinador del sistema nacional anticorrupción.

Para el mejor análisis de la propuesta de reforma se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado en lo señalado someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales. Y el impacto de los programas y políticas públicas de modo que sean congruentes con el presupuesto basado en resultados. Así como validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables.

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo.

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como coordinar, asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores.

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;

VII. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal en los términos de la ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas.

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas.

IX. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal.

X. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XI. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño.

XII. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal.

XIII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha secretaría.

XIV. Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.

XV. Informar periódicamente al Ejecutivo federal sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación informará al Ejecutivo, de las dependencias y entidades que hayan sido objeto de fiscalización, y

Del cumplimiento que dichas entidades hayan realizado de las recomendaciones y acciones que la Auditoría Superior de la Federación les haya hecho.

XVI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, ante la secretaría o ante los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes.

XVIII. Conocer e investigar de manera directa o a través de los órganos internos de control las conductas de los servidores públicos, que pueda constituir delitos, responsabilidades administrativas, o hechos de corrupción; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de la ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.

XIX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XX. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal.

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública federal;

XXII. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales.

XXIII. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países.

XXIV. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;

XXV. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello.

XXVI. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.

XXVII. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República.

XXVIII. Formular y conducir la política general de la administración pública federal en cumplimiento de las leyes de transparencia en la gestión pública, las relativas a la rendición de cuentas, y al acceso a la información pública por parte de los particulares a la información que aquélla genere;

XXIX. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico.

XXX. Recurrir, en su caso, a las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, apartado C, fracción VII, y 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

XXXII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Transitorio

Único. La presente reforma entrará en vigor el mismo día de la entrada en vigor de las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas:

1 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado José Sergio Manzur Quiroga y suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM

2 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de marzo de 2016.— Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica).»

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. **Túrnese a la Comisión de Gobernación, para dictamen.**

3) 04-05-2016
Comisión Permanente.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Presentada por el Dip**.** Omar Ortega Álvarez (PRD)
Se turnó a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates, 4 de mayo de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD)

El Diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:

La reciente reforma constitucional en materia de combate a la corrupción dejo tareas pendientes al Congreso de la Unión, donde de manera clara tenemos que trabajar en la prevención, evaluación, control, investigación, fiscalización y aplicación de sanciones administrativas y en su caso en materia penal.

Dentro de este ordenamiento el Congreso está obligado a emitir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley de la Auditoría Superior de la Federación, la Ley Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que es materia de esta presente iniciativa.

El régimen de responsabilidades de nuestro país es muy precario y ello nos ha colocado en una situación límite en la que la impunidad y la corrupción han vulnerado nuestras instituciones y amenazan seriamente nuestra seguridad, nuestra estabilidad y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.

De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2015, elaborado por Transparencia Internacional, México es considerado como el país más corrupto de los 34 que lo integran.

Compañeras y compañeros, el Congreso de la Unión no puede seguir aplazando esta reforma; hoy más que nunca tenemos la necesidad de construir instituciones sólidas que nos permitan instrumentar mecanismos para prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción, y para ello debemos preservar lo que establecen los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de combate a la corrupción, los cuales plantean una serie de instrumentos para alcanzar los mayores estándares de un buen gobierno.

La Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, que por mandato constitucional debemos crear, será una de las piezas claves del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Tendrá atribuciones más sólidas para prevenir, corregir, disuadir faltas administrativas y actos de corrupción vinculados con el ejercicio de la función pública a nivel federal.

En la parte preventiva, hemos incluido una serie de medidas para evitar conflictos de interés y garantizar el buen ejercicio de los recursos públicos; por eso, la Secretaría de Control Interno será la encargada de llevar el registro y dar seguimiento a las declaraciones de interés y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y coordinarse con la Secretaría de Hacienda para sistematizar la información derivada de las declaraciones fiscales.

También hemos previsto que la Secretaría dirija y opere tanto el Sistema de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal como el sistema para contrataciones de bienes y servicios, garantizando siempre la máxima publicidad.

La Secretaría de Control Interno del Ejecutivo también tendrá la capacidad de sustanciar y presentar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando detecte anomalías que ameriten una sanción de carácter administrativo para los servidores públicos.

La Secretaría también podrá sustanciar y presentar las denuncias correspondientes para la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cuando se constituya anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción.

El diseño constitucional prevé que el titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo sea designado por el Presidente de la República y ratificado por la Cámara de Senadores con lo cual, éste funcionario gozará de mayor independencia del Ejecutivo; también se contempla que formen parte del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual está integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del INAI, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Consejo de la Judicatura Federal y el Comité de Participación Ciudadana.

Esta propuesta que propongo a su consideración, es una de las piezas que aún están pendientes de todo el entramado legislativo que se ha previsto para que podamos crear el Sistema Nacional Anticorrupción y espero que antes de que nos venzan los plazos que marca la Constitución, podamos cumplir con esta responsabilidad en un muy próximo periodo extraordinario de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Es cuanto, señor Presidente.

Iniciativa

El suscrito, Diputado **OMAR ORTEGA ÁLVAREZ**, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El decreto de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 instruye al Congreso de la Unión a expedir en un plazo de un año a partir de la publicación, la legislación secundaria para lograr que dicha reforma Constitucional pueda cobrar vigencia.

Dentro de los ordenamientos que el Congreso está obligado a expedir en el mes de mayo, destacan la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de la Auditoría Superior de la Federación y las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que precisamente son motivo de la presente iniciativa, que tiene el objeto de crear la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, entidad que se encargará de vigilar, prevenir y corregir posibles actos u omisiones que se susciten en la administración pública federal y para que en caso de detectar anomalías, sustancie y presente las denuncias correspondientes, ya sea ante el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, cuando sea necesaria una sanción de carácter administrativo, o bien, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando se trate de anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción.

En enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el que se creó la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en sustitución de la Reforma Agraria. En ese decreto también se fortalecieron las facultades de la Secretaría de Gobernación, la cual atrajo las atribuciones que tenía la entonces Secretaría de Seguridad Pública. En principio, se previó la desaparición de la Secretaría de la Función Pública en la idea de constituir a corto plazo una entidad mucho más fuerte para atender las funciones de evaluación y control interno en la administración pública federal. Para lo cual se acordó establecer un régimen transitorio que estipuló que en tanto no se creará un nuevo organismo para el combate a la corrupción, las reformas referentes a la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, así como la transferencia de sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público previstas en las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50 no entrarían en vigor.

No obstante y contrario a esa disposición, el decreto que se publicó el 30 de diciembre de 2015 en el Diario Oficial de la Federación en el que se reforman la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se estableció en el artículo cuarto transitorio, la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, relativa a la

facultad de la Secretaría de Hacienda de coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos.

Cuarto Transitorio del Decreto publicado el 30 de diciembre de 2015:

"En la fecha a que se refiere el transitorio Primero del presente Decreto, entrará en vigor la modificación prevista a la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecida en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013."

Cabe destacar que la vigencia de esta disposición se mantenía pendiente hasta que entrara en funciones el nuevo organismo anticorrupción, tal como lo establece el artículo segundo transitorio del Decreto del 2 de enero de 2013:

*"Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos **26, 31, 37, 44, y 50** de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.*

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar.

Entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere este artículo, la Secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición de este Decreto."

Con la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 31, anteriormente referido, se traslada en forma exclusiva a la Secretaría de Hacienda una atribución que anteriormente requería del trabajo coordinado con la Secretaría de la Función Pública. Por tal motivo, con la presente iniciativa se propone ampliar esta atribución a la nueva Secretaría de Control Interno del Ejecutivo.

Así mismo, se propone trasladar a la nueva Secretaría, las facultades que en el Decreto del 2 de enero de 2013 se establecieron como facultades exclusivas de la Secretaría de Hacienda, ya que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, el Congreso de la Unión, al expedir la legislación secundaria, deberá garantizar que la Secretaría no solo mantenga las atribuciones que tenía sino que además se fortalezca y potencie sus mecanismos para la prevención, evaluación, corrección, auditoría e investigación y pueda estar en condiciones óptimas para sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos y presentar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Dentro de las nuevas disposiciones que se incorporan en esta propuesta destacan el nuevo procedimiento para la designación del titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, que de acuerdo con lo que establecen las nuevas disposiciones del artículo 76 Constitucional aprobadas con la reciente reforma anticorrupción, la Cámara de Senadores intervendrá en la ratificación del funcionario que proponga el Presidente de la República. No obstante, de acuerdo con lo que establece el régimen transitorio de la reforma constitucional anticorrupción del 27 de mayo de 2015 en su artículo octavo transitorio, el titular de la Secretaría de la Función Pública se mantendrá en el cargo:

*"… los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y **II del artículo 76,** que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados."*

La Secretaría de Control Interno será la autoridad encargada de llevar el registro y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, con

lo cual cobra vigencia la nueva disposición constitucional establecida en el artículo 108 respecto a la nueva obligación que tienen los servidores públicos de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses.

Como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría deberá informar periódicamente los resultados de la evaluación sobre la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. También atenderá las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo.

ÚNICO.- Se Reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; **se adiciona** el artículo 37, así como un tercer párrafo al artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Control Interno del Ejecutivo

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- XVIII.- (…)

XIX. Coordinar **conjuntamente con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo** la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XX.- (…)

XXI.-Se deroga

XXII.- Se deroga

XXIII.- Vigilar en coordinación con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

XXIV. Se deroga

XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y sistematizar la información con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo.

XXVI. Se deroga

XXVII. Se deroga

XXVIII. Se deroga

XXIX. Se deroga

XXX. Se deroga

XXXI. (…)

XXXII. (…)

XXXIII. Se deroga

XXXIV. (…)

Artículo 37.- La Secretaría de Control Interno del Ejecutivo es la entidad encargada de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

El titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo será propuesto por el Presidente de la República y ratificado por la mayoría de los senadores, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Conocer, investigar y en su caso, sustanciar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos y particulares, por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.

II.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y presentar las denuncias correspondientes por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

III.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.

IV.- Recibir y registrar, verificar y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

V.- Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y el personal de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario;

VI. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IX. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

X. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;

XI.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

XII. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

XIII. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XIV.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los

instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XV. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

XVI.- Designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;

XVII. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XVIII. Informar periódicamente al Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización;

XIX. Atender las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXIV. Las demás que le otorguen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 43 Ter.- (…)

(…)

Cada uno de los Órganos Reguladores contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y funcionarán de conformidad con lo que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal **y los titulares de los Órganos Internos de Control,** serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los

perfiles que establezca la **Secretaría de Control Interno del Ejecutivo**, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la **Secretaría de Control Interno del Ejecutivo** respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.

(…)

En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la **Secretaría de Control Interno del Ejecutivo**, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la **Secretaría de Control Interno del Ejecutivo**, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.

(Se suprime Quinto Párrafo)

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de los **Órganos Internos de Control**, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 4 de mayo de 2016.

Suscribe

Dip. **Omar Ortega Álvarez**.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Diputado Ortega Álvarez. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

4) 25-05-2016
Comisión Permanente.
INICIATIVA con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Presentada por el Dip**.** Virgilio Dante Caballero Pedraza (MORENA)
Se turnó a la Comisión de Gobernación, de la Cámara de Diputados.
Diario de los Debates, 25 de mayo de 2016.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

(Presentada por el Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, a nombre del Diputado Vidal Llerenas Morales, del grupo parlamentario de Morena)

El suscrito, Dip. **VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA** a nombre del Dip. **VIDAL LLERENAS MORALES**, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de las publicaciones delos decretos que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y disciplina financiera, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, así como el 26 y 27 de mayo de 2015, respectivamente.

A partir de estas reformas Constitucionales, deben integrarse y coordinarse cambios que son indispensables en la modificación y actualización de la legislación secundaria. Dentro de este nuevo andamiaje jurídico y administrativo está la creación de la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa**, por lo que es esencial reformar además la Ley Orgánica de la Administración Pública. Este es el objetivo esencial de esta Iniciativa.

ARGUMENTOS

El 2 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que entre otros cambios, se propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que al existir el Sistema Nacional Anticorrupción, se requeriría de una entidad con mayor capacidad para atender las funciones de evaluación y control interno en la administración pública federal.

Con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Puesto que en el artículo segundo transitorio de ese decreto se establece que:

"Las modificaciones previstas en el presente Decreto para los artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta Ley exclusivamente por lo que se refiere a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional autónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia jurídica.

Al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar."

El 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en

materia de combate a la corrupción, mediante las cuales se facultó al Congreso de la Unión para expedir diversas normas, entre ellas, aquellas que ampliaron las facultades del órgano autónomo fiscalizador.

Acatando esta disposición, el 26 de abril de 2016, el Grupo Parlamentario de Morena presentó la Iniciativa de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y las reformas a los artículos 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y crear un real Sistema Nacional de Fiscalización.

Siguiendo con las reformas constitucionales publicadas el 27 de mayo de 2015, en el artículo segundo transitorio:

"El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo."

El Grupo Parlamentario de Morena, presenta la Iniciativa por mediante la cual se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se Adiciona el artículo 37de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Grupo Parlamentario de Morena propone que la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa**, cumpla con tres objetivos básicos: Regular, Vigilar y Evaluar.

La **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** coordinará, asesorará y supervisará que los funcionarios de la administración pública federal cumplan con los instrumentos y procedimientos de control gubernamental en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

La **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** vigilará que los funcionarios de la administración pública federal no comentan posibles actos u omisiones que no están contemplados en la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, estableciendo para ello las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y en caso de que detecte anomalías, integre toda la información disponible y presente las denuncias correspondientes, ya sea ante el Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, cuando sea necesaria una sanción de carácter administrativo, o bien, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando se trate de anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción, acorde a la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos.

La **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** y con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluarán la calidad del desempeño público, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa.

ÚNICO.- Se Reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; y **Se Adiciona** el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- XVI.- (…)

XVII.- Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera **la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa para** el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;

XIX. Coordinar **conjuntamente con la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XX.- (…)

XXI.- Se deroga

XXII.- Se deroga

XXIII.- Vigilar en coordinación con la Secretaría de Controly Vigilancia Administrativa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

XXIV. Se deroga

XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, sistematizar la información y proporcionarla a la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa.

XXVI. Se deroga

XXVII. Se deroga

XXVIII. Se deroga

XXIX. Se deroga

XXX. Se deroga

XXXI. Se deroga

XXXII. Se deroga

XXXIII. Se deroga

XXXIV. (…)

Artículo 37.- La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa es la entidad encargada de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.

A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;

II.- Revisar y vigilar que los instrumentos y procedimientos normativos de control interno de la Administración Pública Federal que incluye la aplicación de recursos públicos federales, se realicen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.

III.- Investigar y en su caso, sustanciar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos y particulares, o en su caso integrar la información para presentar las denuncias correspondientes por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

IV.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa.

V.- Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

VI.- Recibir y registrar, verificar y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como la información sobre las

sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

VII.- Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;

VIII.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

IX. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XI.- Asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de las normas de control y fiscalización;

XII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;

XIII.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XIV.- Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;

XV. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XVI. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XVII. Elaborar bimestralmente un informe sobre el resultado de la evaluación y seguimiento respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que incluya las acciones correctivas que deben adoptar los entes públicos que hayan sido objeto de fiscalización;

XVIII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización;

XIX. Atender las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXIV. Las demás que le otorguen expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal **y los titulares de los Órganos Internos de Control,** serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad. Los **titulares de los Órganos Internos de Control** tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa**, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.

(…)

En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa**, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa**, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.

(Se deroga Quinto Párrafo)

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de los **Órganos Internos de Control**, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

TRANSITORIO

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- El Titular de la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, dentro de los treinta días siguientes a su designación, iniciará con el proceso para la designación delos Titulares de los Órganos del Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el 25 de mayo de 2016

Suscriben

Dip. **Virgilio Dante Caballero Pedraza**.- Dip. **Vidal Llerenas Morales**.

Se da cuenta con la iniciativa y se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Quienes suscriben, Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2, así como 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS LEYES PARA LA REGLAMENTACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN,** de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sin duda alguna, el fenómeno de la corrupción constituye una grave crisis institucional en nuestro país. Es un problema transversal, opera de manera sistémica y estructural. Se traduce en un complejo sistema que permea diversas áreas de nuestra sociedad, a nadie le resulta ajena y constituye un lastre que nos impide transitar como sociedad y nación hacia un estado de mayor bienestar y desarrollo económico.

La corrupción es un fenómeno colectivo que afecta el desarrollo de las instituciones democráticas del país y el estado de derecho, origina violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana.La pérdida de credibilidad en el sistema político y en sus líderes debilita nuestras instituciones y genera un clima de frustración por parte de la sociedad.

Asimismo, la corrupción afecta al desarrollo económico ya que desalienta a la inversión extranjera, y a las pequeñas empresas nacionales les resulta imposible superar los gastos iniciales requeridos para solventar esa aciaga conducta. Por ese motivo, la corrupción nos cuesta, se estima, alrededor del 9% de nuestro Producto Interno Bruto (PIB).

Si bien México ha manifestado su compromiso con las convenciones internacionales en materia de combate a la corrupción (como lo son la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos de 1996, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de 1999 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2004y ha instrumentado distintas estrategias de política pública en esta materia durante las últimas dos décadas, persiste una gran deuda del Estado mexicano para identificar, perseguir y sancionar, de manera efectiva y contundente, este fenómeno.

Además de los factores políticos y económicos, la corrupción también tiene profundas raíces en causas culturales, en donde las tradiciones sociales determinan en gran medida su existencia y amplitud. El fenómeno de la corrupción en México se ha convertido en un tema tanto complejo como delicado. El abuso del poder público y la impunidad, prácticamente incentivan a quienes operan recursos públicos a realizar acciones u omitir sus obligaciones con miras a obtener un beneficio privado.

Los escándalos no son nada nuevo en la política mexicana, pero si el ritmo de las revelaciones y de la impunidad que las acompaña. Gracias a las redes sociales y a que los grupos de la sociedad civil ejercen una mayor presión sobre la actuación de las autoridades, estos hechos resultan cada vez

más evidentes. Pero ni la precipitada pérdida de popularidad conmueve a los políticos mexicanos en el ejercicio del poder para perseguir a los servidores públicos involucrados y sancionarlos.

Por años se consideró que la corrupción era un fenómeno asociado solo al partido hegemónico en el poder federal. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que ninguna agrupación política es inmune.En los últimos años, el tema de la corrupción ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad frente a los escándalos de endeudamiento de estados y municipios, licitaciones amarradas, concesiones pactadas, sindicatos opacos, aduanas ineficientes, guarderías sin medidas de seguridad y un conjunto de leyes laxas que han despertado un profundo malestar social.Escándalos políticos que van desde exgobernadores en proceso de investigación, tráfico de influencias, nexos entre políticos y empresas privadas, video escándalos, moches en la asignación de presupuesto, y nexos entre funcionarios públicos y el crimen organizado se vuelven parte de nuestra vida cotidiana y demuestran que la corrupción, no solamente consiste en el mal uso del erario, sino en una profunda distorsión sobre la forma en la que opera el servicio público.

Lamentablemente abundan los ejemplos de casos concretos que han constituido escándalos nacionales como son: el tema de obra pública en casos como OHL; los conflictos de interés como Grupo Higa y la llamada Casa Blanca, o los trágicos eventos de Ayotzinapa que involucran corrupción política y de los cuerpos de seguridad en distintos niveles; mismos que demuestran las fallas estructurales de nuestros sistema jurídico.

La corrupción de la clase política es uno de los fenómenos modernos más lesivos para los Estados modernos porque disminuye la capacidad de los representantes populares para atender las demandas de los ciudadanos.Por estos motivos, la percepción ciudadana sobre los asuntos de gobierno ha sido de desconfianza y cautela.

Frente a una corrupción más sofisticada que incluye una ingeniería de negocios sólida, así como el apoyo de abogados, contadores y empresarios, esta propuesta no consiste sólo en instrumentos, sino también en la ruta para tener una respuesta adecuada y proporcional al mal de la corrupción.

La propuesta es urgente y oportuna,muchos espacios públicos viven la degradación del poder, la bancarrota moral, y las instituciones carecen de credibilidad.

Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través del incremento de su credibilidad y legitimidad; y anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza bruta de los intereses fácticos.

Esta propuesta no es la más ambiciosa, es necesaria, pertinente, posible y armónica con la Constitución y las convenciones internacionales aplicables.

La ineficacia, opacidady deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y abre la puerta a la corrupción que es un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en las instituciones así como debilita la ejecución de las obras y acciones prioritarias que necesita nuestro país.

La corrupción es un acto mediante el cual un servidor público, en abuso de sus funciones, lleva a cabo acciones para obtener beneficios indebidos, de manera directa o indirecta, contrarios al bien común.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señalóen la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Mérida, Yucatán en 2003, que el delito establece una relación directa entre el sector público y el privado, o de manera específica entre varios individuos coludidos para beneficio propio y en perjuicio de la sociedad, esto es, mediante redes de corrupción, de manera directa o indirecta, contrarios al bien común.

La Convención señala que los delitos de soborno de funcionarios públicos nacionales, extranjeros, de organizaciones internacionales públicas y en el sector privado, malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un funcionario público, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, malversación o peculado de bienes en el sector privado, blanqueo del producto del delito, encubrimiento, obstrucción de la justicia, asimismo, los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las decisiones judiciales, entre varias otras prácticas, están catalogadas como actos de corrupción.

Resulta innegable que todas y cada una de las conductas relacionadas con la corrupción son percibidas por los ciudadanos como un mal endémico, donde la impunidad es el fin último de la gran mayoría de los casos que salen a la luz.

Conforme a los datos derivados del Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional[1], México se ubicó en el lugar 103 de 175 países, en el cual obtuvo una puntuación de 35/100. En 2015[2], se posicionó en el lugar 95 de 168, sin variación en el resultado, con lo cual nuestro paísse encuentra en el grupo de naciones peor evaluadas, comparable con países cuyos niveles de desarrollo y bienestar social están en los últimos lugares.

México es último lugar (34/34) de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El *WorldwideGovernanceIndicators: Control of Corruption*, del Banco Mundial[3], examina diversos ámbitos de 215 economías, asignando una escala de 0 a 100; en 2013 México obtuvo 39 puntos, con lo cual se posicionó enel lugar 127 del ranking.

De acuerdo con el Banco Mundial, la corrupción tiene un costo de 1.5 billones de pesos,cantidad equiparable a 9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa la pérdida de recursos en programas que deberían combatir la pobreza, la desigualdad y que servirían para al mejoramiento de los programas de infraestructura, sociales, productivos, educativos, entre otros, que por esta situación no se llevan a cabo a cabalidad.

La corrupción en nuestro país es muy superior a la capacidad del gobierno para mitigar sus repercusiones y ni siquiera los ahorros del Gobierno Federal, en un año fiscal, alcanzarían a equipararse con los elevadísimos costos que tiene ésta.

Los niveles actuales de corrupción e impunidad son parte de la explicación del freno al crecimiento y detrimento catastrófico en la inversión interna y externa,lo que sin duda impacta directamente

[1] **CorruptionPerceptionIndexResults 2014**, consultado el 26 de febrero de 2016, en: http://www.transparency.org/cpi2014/results
[2] **CorruptionPerceptionIndexResults 2015**, consultado el 28 de febrero de 2016, en: http://www.transparency.org/cpi2015
[3] **WorldwideGovernanceIndicators: Control of Corruption**del Banco Mundial, consultado el 30 de Junio de 2015, en: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

en la economía, en las fuentes de empleo, en la producción tanto en los ámbitos micro, como macro económicos sin considerar el enorme impacto en la generación de infraestructura para el país y de los proyectos de inversión estratégica, necesarios para el crecimientode México.

Derivado de un proceso abierto a la sociedad y sin precedentes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, en el Senado de la República, presentaron el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

El 26 de febrero de 2015 fue aprobado en las Comisiones Unidas de la Cámara de Origen, y posteriormente en el Pleno del Senado y turnado a la Revisora[4]. La Cámara de Diputados recibió la Minuta el 3 de marzo de 2015, lo aprobó en Comisiones el 16 de abril y 5 días después fue aprobado en el Pleno; fue turnado a los Congresos Locales para su aprobación.

Luego del voto aprobatorio de veinticuatro congresos: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, el 20 de mayo de 2015 fue turnada al Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación 7 días después.

Por ello, la iniciativa que hoy se presenta obedece al mandato establecido por la reforma constitucional en materia de combate a la Corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 y es reglamentaria del artículo 113 de la propia Constitución.

Esta propuesta, de carácter integral, se compone de: dos nuevas leyes de carácter general, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; dos nuevas leyes de carácter federal: La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de crear la Secretaría del Control Interno.

A continuación se exponen las principales virtudes de cada una de las leyes que componen nuestra propuesta:

I. SOBRE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

La historia de México se puede resumir como la lucha por construir un Estado sólido y funcional, arena de una permanente batalla entre el interés público contra los abusos, los excesos y los privilegios.

El mayor lastre de nuestro país ha sido que unos pocos se han apropiado de los recursos de todos, mediante la depredación, expoliación y el abuso. La corrupción se ha vuelto una sombra permanente detrás de cada servidor público.

[4] Cronología del Asunto: http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=09f5287c6c5d174eccc83f5a946bd366&Seguimiento=3058299&HistoriaLeg=1&Asunto=3207015

La reforma constitucional es el avance más importante en el combate a la corrupción en toda la historia de México, pero es hueca si las leyes secundarias no están a la altura. No aprobar una ley que resguarde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y le otorgue la potencia y viabilidad, sería renunciar a cualquier sentido de progreso.

Frente a una corrupción más sofisticada que incluye una ingeniería de negocios sólida, así como el apoyo de abogados, contadores y empresarios, esta propuesta no consiste sólo en instrumentos, sino también en la ruta para tener una respuesta adecuada y proporcional al mal de la corrupción.

La propuesta es urgente y oportuna, muchos espacios públicos viven la degradación del poder, la bancarrota moral, y las instituciones carecen de credibilidad.

Con esta iniciativa se busca potenciar la fuerza del Estado a través del incremento de su credibilidad y legitimidad; y anteponer la racionalidad de la ley frente a la fuerza bruta de los intereses fácticos.

Esta propuesta no es la más ambiciosa, es necesaria, pertinente, posible y armónica con la Constitución y las convenciones internacionales aplicables.

La ineficacia, opacidad y deshonestidad lacera y perjudica los intereses de la sociedad en su conjunto y abre la puerta a la corrupción que es un cáncer que corroe la credibilidad ciudadana en las instituciones así como debilita la ejecución de las obras y acciones prioritarias que necesita nuestro país.

La corrupción es un acto mediante el cual un servidor público, en abuso de sus funciones, lleva a cabo acciones para obtener beneficios indebidos, de manera directa o indirecta, contrarios al bien común.

Derivado de la supra citada Reforma Constitucional, por la que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, la misma Carta Magna estableció en la fracción XXIV del artículo 73, y el artículo 113, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el mandato de presentar una iniciativa de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, misma que se propone en este instrumento parlamentario.

En concordancia con los instrumentos internacionales de los que México es parte, esta iniciativa pretende sentar las bases en materia de prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción relacionada con el ejercicio de la función pública.

La Ley General tiene como objeto reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la distribución de competencias y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

La iniciativa se divide en cuatro Títulos: Disposiciones Generales; Del Sistema Nacional Anticorrupción; Del Registro Nacional de los Servidores Públicos; y, De la denuncia, la queja, la protección a personas y beneficios.

A partir de las Disposiciones Generales de la Ley, se establece que los sujetos obligados que se incluyen en esta legislación por mandato Constitucional son:

a) En su carácter colectivo: Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno; y,

b) En su carácter individual: Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Es fundamental considerar que el Sistema velará porque los sujetos obligados observen, en el ejercicio de su función pública los principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Esto se establece en el entendido de que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia superior de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Las muchas experiencias previas en la ejecución de políticas públicas y de procesos administrativos nos hacen estar convencidos de la importancia de la participación ciudadana en este tipo de acciones y que sin ella sus resultados son muy inferiores a los esperados.

La integración del Sistema Nacional Anticorrupción deberá contar con una estructura dinámica y eficaz, por lo que se propone este conformada y diseñada en atención a la siguiente descripción:

1. Comité Coordinador.

Le corresponde la instrumentación de las bases que establece esta ley y el diseño de la Política Nacional y de otras políticas integrales en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación, velar por la estricta observancia de las bases y conducir las relaciones interinstitucionales.

Estará integrado por los titulares de:

a) Auditoría Superior de la Federación,
b) Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,
c) Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del Control Interno,
d) Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
e) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y,
f) Consejo de la Judicatura Federal.

2. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema en su integridad;

Se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

Para el ejercicio de su encargo, se propone una duración de siete años, sin posibilidad de reelección. Su nombramiento será de manera escalonada mediante la declaratoria de validación que emita el Senado, resultado del Colegio Calificador integrado por el Comité Coordinador.

3. Los órganos internos de control de los de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución; y,

4. Representantes de los Sistemas Locales.

Se establecen las bases de creación de los Sistemas Anticorrupción, así como la coordinación en los tres órdenes de gobierno.

El Comité de Participación Ciudadana promoverá denuncias de conductas de servidores públicos o particulares que puedan constituir o relacionarse con faltas administrativas graves o hechos de corrupción; diseñará las recomendaciones que presente el Comité Coordinador a nombre del Sistema; coadyuvará a las autoridades fiscalizadoras de control interno en los procedimientos que se substancien ante el Tribunal; presentará ante las autoridades jurisdiccionales medios de impugnación; brindará orientación, atención y acompañamiento a las personas para la denuncia ante el sistema electrónico de denuncia y queja; evaluará y vigilará el correcto funcionamiento de la Política Nacional a través de su evaluación y emitirá indicadores y metodologías para la medición y seguimiento, entre otras facultades.

Se aplicarán obligatoriamente al menos los indicadores de gestión de las políticas públicas referentes a: planificación, presupuesto, gestión financiera pública, gestión de programas y proyectos, y seguimiento y evaluación.

En la búsqueda de una Política Nacional Anticorrupción efectiva, idónea y coordinada se establece que el sistema propuesto en esta iniciativa será el rector de todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades del Estado Mexicano deben seguir con relación a sus propias políticas y lineamientos para la prevención, detección, combate y eventual erradicación de la corrupción.

Las recomendaciones no tendrán carácter vinculante, pero las autoridades destinatarias deberán informar de manera justificada al Comité Coordinador, por vía de la Secretaría Técnica del Sistema y en término que no exceda de 10 días hábiles, sobre la atención que habrán de brindarles, en caso contrario se podrá aplicar el control político a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Considerando la propuesta promovida por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, denominada Tres de Tres[5], se incluye que el Sistema Nacional Anticorrupción instrumente un Registro Nacional de los Servidores Públicos con la finalidad de llevar un seguimiento público de las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como de las responsabilidades y las sanciones a las que sean sujetos.

El Registro Nacional contará con una base de datos digital administrada, implementada y operada por el Sistema, por conducto de su Secretaría Técnica y los Sistemas Locales, la cual estará conformada por tres módulos electrónicos:

a) Módulo de Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal;
b) Módulo de Registro Nacional de Responsabilidades y Sanciones;
c) Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja sobre actos de corrupción, lo cual es una de las propuestas más importantes de esta iniciativa, ya que si buscamos que el ciudadano sea el centro del Sistema, para que efectivamente funcione, debemos poner a su alcance las herramientas que le permitan efectuar denuncias o quejas, de manera accesible y eficiente.

Se prevé en esta iniciativa la creación de un procedimiento para la captación de denuncias o quejas, derivado de la detección de faltas administrativas o hechos de corrupción. Así, se obliga a que todas la personas que tengan conocimiento de actos de corrupción denuncien, pero se otorgan incentivos para su protección y salvaguarda.

Con el propósito de cuidar de la equidad, el respeto al derecho y la pronta atención a los ciudadanos esta iniciativa incluye nuestra propuesta de establecer un escrupuloso respeto al turno y secuencia de las denuncias y las quejas ante los Órganos Investigadores y substanciadores del Proceso, a través del Secretario Técnico y también se prevé la posibilidad de utilizar información reservada o protegida extraída ilegalmente por el denunciante, con candados que obligarán a que esta sólo pueda ser usada por las autoridades que conozcan del procedimiento. Esto porque desde la reforma en materia de transparencia se ha insistido en la regulación de la figura de los informantes.

Los informantes de buena fe que divulgan información de interés público que fue reservada de manera incorrecta o indebida son conocidos a nivel mundial como "*whistleblowers*" o "*lanceursd'alertes*".

Como ha sido reconocido por diversos organismos internacionales, es necesario que las personas que divulguen información reservada que revela violaciones de derechos humanos, actos de corrupción o infracciones graves a la ley no sean sujetos de responsabilidades, toda vez que la actividad que realizan resulta ser una herramienta eficaz en el combate a la corrupción que realizan las democracias liberales más consolidadas.

A pesar de la falta de existencia de mecanismos de protección al "*whistleblowing*", la sociedad civil organizada en México ha realizado destacados esfuerzos para suplir la ausencia de legislación específica. En no pocas ocasiones ha denunciado la existencia de actos indebidos sin contar siquiera, con la más mínima protección en el marco normativo mexicano. Un ejemplo emblemático es el surgimiento de la plataforma "*Mexicoleaks*", el 10 de marzo de 2015, cuyo objeto fundamental es publicar información sobre actos antiéticos o ilícitos y proteger a quienes la proporcionan mediante una garantía de anonimato.

Es necesario establecer un fuero ciudadano; es decir, una esfera jurídica que garantice protección contra represalias de cualquier tipo, por lo que planteamos la protección de los denunciantes, informantes y testigos como parte toral de la denuncia o queja.

La protección de los Denunciantes, Informantes y Testigos, como elemento novedoso para la legislación, determina que el Sistema otorgará las garantías y medidas de protección básicas a la persona que realice la denuncia o queja, a los testigos o a personas que sin tener esa calidad aporten información contundente en la investigación y a los terceros perjudicados, todo esto mediante un Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos.

El Comité de Participación Ciudadana fijará las medidas necesarias, a fin de otorgar protección a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales, y de sus familiares hasta el primer grado o parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el primer grado.

La propuesta de legislación establece que para la protección efectiva de denunciantes y testigos, las autoridades deberán realizar un adecuado análisis de riesgos y observar los siguientes principios:

a) Resguardo absoluto de los datos personales y familiares.
b) Resguardo de la integridad física, personal y familiar.
c) Atención prioritaria a las demandas razonables del testigo o denunciante.
d) Protección de la fuente de empleo o negocios.
e) Creación de alternativas razonables a la fuente de ingresos.

El Sistema y los Sistemas Locales serán responsables de supervisar, coordinar y emitir los lineamientos para la operación y funcionamiento de los mecanismos de protección, en coordinación con los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, que deban implementar los mecanismos de protección determinados por el Sistema o algún Sistema Local, a través de las instituciones que determine su normatividad.

Otro elemento progresista que se suma a la propuesta, con el fin de generar una cultura de la honestidad, transparencia y denuncia se contempla un programa de benéficos para quien haga de conocimiento de la autoridad un acto de corrupción; así, el Comité Coordinador del Sistema y el titular de la Fiscalía podrán autorizar el otorgamiento de incentivos económicos cuando el denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción por el servidor público implicado.

Se contempla que si el denunciante ha tenido algún grado de participación en faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, que lo haya beneficiado directamente, podrá disminuir la sanción o conmutación de la pena, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando restituya el daño causado.

Por supuesto que lo anterior no contempla a quienes generen las faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

En el supuesto que la información sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de

corrupción, la o las personas serán objetos de un reconocimiento de carácter no económico.

II. SOBRE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

La potencia del estado radica en su credibilidad y en la capacidad de que sus agentes sean capaces de cumplir sus mandatos legales. El marco jurídico que requerimos es el que haga viable un castigo cierto cuando se cometa la falta pero que también evite la injusticia.

La corrupción está vinculada lógicamente a un sistema normativo es decir al conjunto de reglas vigentes que regulan una práctica social y la falta de este marco normativo solo le es funcional al corrupto.

Igualmente útil y funcional es al funcionario deshonesto la existencia de una sobrerregulación administrativa o ineficiencia de la gestión que da como resultado una falta de coordinación y ventanas de oportunidad al corrupto.

El Estado mexicano se encuentra afecto de una lacerante corrupción, tanto en sus distintos niveles de gobierno como en su conjunto. Esto entraña un fenómeno complejo por su ramificación institucional; por la multiplicidad de conductas que lo generan, no todas ellas formalmente ilícitas, aunque no resulten éticas, y por la ausencia de mecanismos eficaces y efectivos para su combate. Esto, determina un Estado débil en su capacidad de afrontar a la corrupción en cada uno de los ámbitos en que se genera.

La reforma constitucional que da origen a la presentación de las diversas iniciativas que componen la propuesta del Grupo Parlamentario del PRD, de la que esta iniciativa forma parte, dispone en el particular relativo a la determinación de Responsabilidades Administrativas, un esquema de concurrencia en las funciones investigadoras de la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control de cada ente público; concurrencia que aspira a garantizar la fiscalización y control desde diversas autoridades para actos que se manifiestan en procesos igualmente diversos.

En este tenor, la virtud de la reforma constitucional estriba, no en la reinstauración del esquema de control mediante contralorías internas, que aisladamente es una herramienta limitada, sino en la posibilidad de cooperación interinstitucional para determinar responsabilidades y en la necesidad de establecer una nueva caracterización de conductas que dañan al Estado o a sus funciones. El abuso del poder público y la impunidad, propiciados por una democracia disfuncional, han provocado que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público con miras a obtener un beneficio privado, por lo que son precisamente esos espacios de impunidad los que deben erradicarse.

Bajo la concepción del Grupo Parlamentario del PRD, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tiene trascendencia por ser el instrumento que da contenido a los procesos que permitirán al Estado y sus entes públicos, la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción; mediante este instrumento, se podrá garantizar el eficiente ejercicio de la función pública y procurar la protección del patrimonio nacional, mediante la posibilidad de detectar conductas corruptas, sancionarlas y determinar el resarcimiento de recursos y la neutralización de las personas que incurrieron en dichas faltas para evitar que generen nuevos daños al Estado. Para ello se establecen conductas, procesos, procedimientos y sanciones que

permitirán determinar las responsabilidades administrativas en que incurren los Servidores públicos y los particulares, obteniendo, como meta mayor la reingeniería que permitirá restituir el Estado de Derecho en México.

México nos demanda y requiere una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos pues la actual no es armónica con el precepto constitucional y tampoco es efectiva para limitar las acciones de los servidores públicos. Debemos reconocer que la condición humana es proclive a la recompensa inmediata y si no hay sanción que sirva como un incentivo contra la corrupción no se lograría el cumplimiento de los objetivos de esta ley. El diseño actual, por el contrario, con sus lagunas y ambigüedades incentiva la corrupción no la desaparición de esta.

Muestra de la falta de coordinación entre las dependencias para efectos del tratamiento de los actos de corrupción en los que inciden servidores públicos y se observa en casos como el enmarcado cronológicamente desde el 1 de diciembre de 2006 al 1 de diciembre de 2012, periodo en el cual el SAT recuperó más de 190 millones de pesos por diferentes sanciones económicas y multas administrativas a servidores públicos, sin embargo, desconocía los montos recuperados por multas y sanciones a funcionarios por actos de corrupción debido a que los sistemas con los que cuenta no le permiten distinguir si los créditos fiscales a cargo de personas físicas son remitidos por la Secretaría de la Función Pública para que efectúe su cobro derivado de multas o sanciones por actos de corrupción[5]. Todo esto derivado de una investigación realizada por El Universal.

Hoy la incompetencia sumada a la simulación y el ocultamiento, han dado como resultado caos y situaciones como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal que reconoce que el 51.33% de los funcionarios denunciados por corrupción ganó los casos al Estado debido a malas integraciones de las investigaciones o fallas tan básicas como no incluir en la demanda el lugar en el que ocurrieron los hechos y la falta de seguimiento que permite que los casos prescriban[6].

Durante 2015 este tribunal recibió mil 558 expedientes en materia de responsabilidades de los servidores públicos por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad, entre otros. Sin embargo, únicamente 680 casos fueron sancionados con penas por sólo 614 millones de pesos. En ese mismo periodo, servidores públicos que fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentaron 2 mil 128 recursos de inconformidad ante el mismo tribunal[7], la mitad de los servidores solicitaron reparación patrimonial del Estado pues piden ser indemnizados por actos de negligencia o mala fe de parte de la institución federal.

En relación al diferente tipo de acción, de tiempo atrás, existe y se determina con claridad cuatro tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los funcionarios públicos y estas son:

1) Responsabilidad política que se encuentra definida en el artículo 11º de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos
2) Administrativa regida por lo ordenado en el artículo 113 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 7-16 de la Ley Federal de

[5]El Universal, *Gobierno cobra sólo una parte de multas*, 9 de marzo de 2015.
[6]Milenio, *Millonarias sanciones a funcionarios y sin esclarecer*, 14 de septiembre de 2015.
[7]La Jornada, *Tribunal fiscal absuelve a la mayoría de funcionarios acusados de ilícitos*, 15 de febrero de 2016.

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos)

3) Penal sancionadas por los artículos 111 de la Constitución y 212-214 del Código Federal Penal y de procedimientos penales sustantivo y
4) Resarcitoria. Contemplado en el artículo 79 de nuestra Carta Magna y en los artículos 46-58 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Todos ellos son figuras de diversa índole de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos no obstante cuando conocemos los resultados que se derivan de estos procedimientos los números nos señalan deficiencias importantes:

En lo referente solo a las responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es precisamente la administrativa la causa por la que se sanciona a la mayoría de los servidores públicos.

De acuerdo con los reportes dados a conocer por la Secretaría de la Función Pública durante la presente administración se han aplicado 33 mil 958 sanciones administrativas, de las cuales más del cincuenta y cinco por ciento se aplicaron porque los servidores públicos no presentaron su declaración patrimonial y casi el seis por ciento porque lo hicieron de manera extemporánea.

Respecto a las quejas y denuncias que recibieron los órganos de control interno de la administración pública federal 47 por ciento se debieron al incumplimiento de leyes y reglamentos, seguidas del descuido o falta de atención de las obligaciones 27 por ciento a abuso de autoridad; 17 por ciento; maltrato en la prestación de un trámite o servicio y únicamente 4 por ciento por uso indebido de recursos públicos.

Las dependencias con el mayor número de quejas fueron la Policía Federal, la Secretaría de Educación Pública, ISSSTE, IMSS y el SAT sin mencionar en las faltas incurridas por los propios funcionarios de la misma Secretaría de la Función Pública.

Es decir que existe una zona de hipertrofia gubernamental cuando de esto se trata pues son los propios organismos encargados de realizar las tareas de control administrativo (SFP, SHCP, PGR y ASF)[8] los que con frecuencia han recibido cuestionamientos sobre su efectividad y capacidad para restringir las acciones corruptas de los servidores públicos cuando no incurrir en las mismas faltas que pretenden sancionar.

Todo lo anterior se refleja en una falta de eficacia, credibilidad y coordinación entre las institucionesque, además, adolecen de autonomía e independencia y por el contrario generan duplicidad de funciones entre ellos mismos haciendo evidente la insuficiencia de capacidad para limitar el fenómeno de la corrupción y el abuso del poder entre los servidores públicos.

Tampoco estamos mejor en lo referente a las denuncias penales pues el noventa y siete por ciento de las denuncias penales impuestas por actos de corrupción en la Auditoría Superior de la

[8]Las tareas de control administrativo internos las llevan a cabo la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría General de la República (PGR), mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es responsable del control externo.

Federación han quedado impunes o no tuvieron el castigo que presuntamente debió haber sido[9].

En conclusión, pese a las reformas que se han realizado para intentar sancionar la corrupción, es común observar su falta de efectividad en la misma, baste decir que entre los años 2000-2006 se exhibieron setenta y un casos de corrupción por parte de 41 gobernadores, de los cuales 16 fueron investigados y sólo 4 gobernadores fueron procesados y encontrados culpables[10].

Para la cabal y completa obtención de los mejores resultados que esta iniciativa auspicia se inicia por establecer y tipificar correctamente las conductas, así como los procedimientos y sanciones que permitirán determinar las responsabilidades administrativas en las que estos pudieran incurrir pues como ya hemos señalado es tan importante el castigo proporcional a la falta como las acciones que eviten la injusticia.

Si bien los objetivos deseados son incuestionables bajo la concepción del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, esta ley está justamente motivada por la creciente demanda de la ciudadanía por la existencia de mecanismos eficaces que hagan posible combatir las conductas de corrupción

Solo como ilustración de lo anterior basta con recordar que tan solo a principios del año 2015, el sesenta por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba como el principal problema del país.

Pocas conductas lesionan más la percepción de la ciudadanía con respecto al gobierno, en cualquiera de sus tres niveles, que la deshonestidad de aquellos quienes por sus responsabilidades deberían ser ejemplo de decoro y honestidad.

No existe forma de sobredimensionar este problema ya que toda actividad de deshonestidad y conducta inadecuadas debe ser sancionada, a la que se hace al amparo de una posición de poder dentro de la administración pública posee peligrosos y serios agravantes que dejan en un estado de mayor indefensión a la ciudadanía y afectan -en ocasiones de forma irreversible- la imagen y buen nombre de la administración pública restando credibilidad a los programas y acciones de gobierno con las que se pretende instaurar políticas públicas en benéfico de la sociedad.

Y quizás aún más preocupante es considerar que un porcentaje similar, es decir del treinta y cuatro por ciento atribuyó este crecimiento a la falta de aplicación de la ley[11]. Lo anterior no deja duda que el espíritu de la ley es presentar un combate frontal contra las actitudes de deshonestidad corrupción y la impunidad con la que la ciudadanía percibe existe ante esta problemática.

Mucho debe decirnos que hoy, en un país con casi cincuenta millones de pobres, el tema de la corrupción esté posicionado por arriba de la pobreza si nos atenemos a los datos que aportan las siguientes instituciones, las cuales se muestran coincidentes como lo es el caso del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México ¿cómo vamos?, México Evalúa y Mexicanos

[9]Aristegui Noticias, *Impunes, 97% de denuncias penales de la ASF por corrupción: Ríos Pitter*, 22 de febrero de 2016.
[10]Casar, María Amparo, *México: Anatomía de la Corrupción*, CIDE/IMCO, México, 2015, p. 58.
[11]Grupo Reforma, Encuesta Nacional telefónica realizada el 13 y 14 de febrero de 2015.

Primero.

Ya en 2014 más de treinta organizaciones sociales e instituciones habían presentado una propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción dirigido a eliminar este problema en el país[12]. Por lo que la fracción parlamentaria del PRD recoge con interés y alto compromiso esta demanda social plenamente justificada.

Corresponsabilizar y hacer coparticipe al servidor público de la necesidad de crear una cultura de prevención de conductas de corrupción y la reducción y combate a estos comportamientos es fundamental para hacer frente a este fenómeno social que daña la credibilidad en la acción del gobierno, genera conductas de notoria injusticia y desigualdad y frena las capacidades de crecimiento y desarrollo de la sociedad.

Al análisis de este fenómeno no escapa la observación de la coexistencia de estas expresiones de la corrupción en casi todas las esferas del gobierno y que comprenden conductas indebidas e ilegales por parte de funcionarios públicos, pese a que "está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho público o mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los intereses primordiales del Estado"[13], en este caso nos referimos a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada en 1982 y que muy poco o nada ha hecho por resolver este problema o reducir la percepción de corrupción que, como antes hemos señalado, es hoy una preocupación de primer orden entre los ciudadanos de nuestro país.

Bajo la premisa de que a través de la profesionalización de los cuadros de funcionarios públicos se lograría un paso para reducir este tipo de conductas, la preocupación en años anteriores por mejorar los resultados del gobierno en relación a honestidad y transparencia se enfocó en garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.

Los vicios y lagunas en este proceso dejaron en tela de juicio la capacidad de estos instrumentos para reducir la corrupción y mejorar los niveles de aceptación entre la ciudadanía, que, de forma cotidiana suele ser victimizada por los actos de deshonestidad ejercidos por los funcionarios y servidores públicos.

Hoy persiste un notorio escepticismo con respecto al actuar de los servidores públicos y el debate sobre el origen de las conductas y corrupción extendida en nuestro país y es un tema recurrente en los ámbitos académicos, de investigación, entre expertos y especialistas en diversos medios de comunicación hasta en el ámbito y entorno de las reuniones familiares, con amigos, en todos los cuales parece existir coincidencia de la corrupción como un denominador común de la administración pública y del actuar de los servidores públicos.

La percepción es tan pesimista y desoladora que basta con mencionar la encuesta realizada el año pasado por Grupo Reforma, en la que se obtuvo como resultado que el setenta y seis por ciento de las personas entrevistadas consideró que, si una persona honesta consigue un puesto público, lo

[12]IMCO, Sociedad civil unida presenta propuesta de Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), 10 de diciembre de 2014. Disponible en: http://imco.org.mx/politica_buen_gobierno/sociedad-civil-unida-presenta-propuesta-de-sistema-nacional-anticorrupcion-sna/

[13]Guerrero, Omar, *El funcionario, el diplomado y el Juez*, INAP-Plaza y Valdés Editores, México, p. 52.

más probable es que se vuelva corrupta, como un destino ineluctable de quienes son servidores públicos.

Y cabe hacer mención que tan solo hace quince años la misma percepción la compartía solo el cincuenta y siete por ciento de la población, es decir en un lapso de poco más de dos sexenios, está percepción se incrementó en casi veinte puntos porcentuales.

Estos datos duros demuestran el estrepitoso fracaso en lograr que la honestidad y probidad del comportamiento del servidor público sea una constante reconocida por la ciudadanía.

Esta alarmante tendencia no es privativa de tan solo una encuesta realizada a través de un medio de comunicación y de su metodología de sondeo sino que es del todo coincidente y congruente con los resultados observados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que dio a conocer en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, con base en la cual se estima que la tasa de la población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción fue de 12,080 por cada 100,000 habitantes.

Simultáneamente el promedio de la percepción que la ciudadanía tiene sobre la corrupción en los sectores Gobierno Federal, Estatal y Municipal es de 76 por ciento 14. ¡Es decir más de tres cuartas partes de la población nacional!

Hoy también podemos fundamentar la estrecha relación que existe entre los índices de eficiencia administrativa, endeudamiento gubernamental con los mismos indicadores de percepción en corrupción por tal razón no debiera de extrañarnos que de los 7 estados más endeudados del país, 4 estén calificados como los más corruptos.

Ante los magros resultados obtenidos en el combate a la corrupción y la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos, la presente ley pretende una muy seria y profunda reconfiguración de las faltas administrativas y establece una nueva estructura que si bien toma como base el catálogo sancionador vigente, también desagrega, replantea los perfiles y configuraciones de nuevas conductas, con la finalidad de facilitar a la autoridad investigadora la acreditación de los elementos constitutivos de las violaciones a las responsabilidades de los servidores públicos.

Lo anterior es una herramienta básica que permitirá identificar violaciones sistemáticas, estructuras y redes de corrupción. También se ha incluido una definición progresista de Conflictos de Intereses, dotando al ciudadano de la potestad para denunciarlos y sancionar el ocultamiento de información.

Uno de los factores que son dignos de destacar como una aportación única y singular de esta iniciativa tiene que ver con la definición de criterios de convencionalidad en la determinación de las conductas que soporte razonamientos unificados y delimitados de los conceptos que ayuden a determinar las faltas administrativas graves de las que no los son.

Las faltas que por su naturaleza son definidas como graves se derivan de cuatro criterios básicos y esenciales para determinar la gravedad con independencia de la conducta o conductas

[14] INEGI, *Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2013*, Junio 2014, pp. 50-55.

investigadas:

1. Cuantía: En todos aquellos casos en que se cause un daño patrimonial al estado cuyo monto afecte y merme la capacidad económica de la institución afectada.

2. Sujeto: Los servidores Públicos a partir del grado jerárquico que determine el Sistema nacional Anticorrupción, considerando el Sistema de Valuación de Puestos de la Administración Pública Federal, los de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella;

3. Sistematicidad: La violación reiterada de una sola conducta o comisión de diversas faltas administrativas con un fin específico, también en el caso de las personas morales, la utilización sistemática (bajo los mismos criterios) de una sociedad para vincularse con faltas administrativas graves. Y con especial énfasis el

4. Daño social: En aquellos casos en que una falta no calificada como grave trae consecuencias directas que dañan o amenazan la vida, salud seguridad o patrimonio de una persona o un grupo en situación de vulnerabilidad.

En el sentido más apegado al espíritu de las leyes de Juan Bodino la presente iniciativa encuentra un justificado motivo de existencia ante la realidad al recordar casos y situaciones cuyo cinismo es una afrenta a las buenas prácticas de gobierno y un ataque a la credibilidad de instituciones públicas que tienen, precisamente en su credibilidad su activo más importante, tal es el caso, de entre otros muchos, el recientemente acontecido en Pronósticos Deportivos.

Hechos y situaciones, como los cometidos por el señor Adolfo Blanco Tatto, quien siendo Director General de Pronósticos para la Asistencia Pública ejemplifica este tipo de prácticas. Blanco Tatto estuvo involucrado en la manipulación a su favor y en contra de la credibilidad misma de esa institución, el sorteo y concursos de Melate, Revancha y Revanchita. Después de una serie de investigaciones, en 2014 fue inhabilitado por 17 años y recibió una sanción económica de más de 60 millones de pesos, por parte del Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública (SFP); desgraciadamente y pese al nivel de la falta cometida, que afecto credibilidad en un sistema de sorteos que requiere de la confianza de sus usuarios como una condición infaltable, la falta cometida por este individuo fue catalogada simplemente como “negligencia administrativa”.

Casos como el anterior, muy recurrentes en la cotidianeidad del actuar de la función pública obligan a profundizar en los criterios de convencionalidad en la determinación de las conductas graves de corrupción en la administración pública

El ámbito de las acciones que configuran violaciones a la ley y fomentan la corrupción también es redimensionado a las esferas de la influencia en el ámbito privado.

Por consiguiente la participación de los servidores públicos en actos de corrupción no solo se enmarca en el terreno de lo público, también trasciende al espacio privado. Los resultados de la Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008 realizada por KPMG refieren que cuarenta y cuatro por ciento de las empresas en México realizaron pagos extraoficiales a servidores públicos y, en promedio, las empresas que operan en nuestro país destinan hasta un cinco por ciento de

sus ingresos anuales en este tipo de pagos 15.

Un caso representativo de este tipo de conductas entre actores públicos y privados es el denominado "Casa Blanca", que involucró al Presidente de la República y al Grupo Higa, empresa que construyó obras millonarias para el Estado de México cuando el hoy presidente fue gobernador y que formaba parte del consorcio de empresas al que le fue revocada la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. La residencia donde habitaba el Presidente y su familia, valuada en más de 7 millones de dólares, era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que pertenece justamente a Grupo Higa16.

Lamentablemente ejemplos como estos en los que consorcios constructores, empresas financieras, manufactureras y de comercio que se han visto involucradas en este tipo de casos son abundantes en nuestro país.

Una lógica consecuencia de lo anterior es que esta misma ley atiende con especial cuidado lo referente a sus interacciones y competencias en las diversas esferas de lo público y lo privado, así como en la relacionada con los tres niveles de gobierno. Y con el mismo nivel de perversidad la relación entre los ámbitos de la cosa pública con los intereses privados.

La corrupción no solo es la apropiación directa del Patrimonio Público o las referentes a decisiones para favorecer a grupos o empresarios es también la gestión indebida de activos nacionales para obtener de ello beneficio económico o político, como es el caso de los llamados "moches".

Caso vergonzoso que ha ocupado la agenda pública y que atañe a las conductas de este tipo es solicitar, a cambio de gestionar la obtención de un recurso, un porcentaje del mismo. Por ejemplo, entre otras instancias, en la Cámara de Diputados.

Así mismo, se establecen dos secciones especiales en las que se consideran las faltas administrativas, consideradas en todo caso como hechos de corrupción, en que pueden incurrir:

1. Los titulares de las Secretarías de Estado, y
2. Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y los Diputados de las Entidades federativas.

En estas secciones se establecen los siguientes supuestos:

1. Respecto delos Titulares de Secretarías de Estado:

a) El beneficio patrimonial que provenga de personas que hayan celebrado contratos de obra pública o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, independientemente de que el titular de la dependencia no haya dado la autorización formal, por ser una de sus funciones legales;
b) La obtención de bienes muebles o inmuebles, al contado o mediante crédito, en condiciones notoriamente favorables o precio notoriamente inferior al que prima en el mercado, independientemente de quién sea el otorgante;

[15]KPMG, Encuesta de Fraude y Corrupción en México 2008, p. 23.
[16]Aristegui Noticias, *La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)*, 9 de noviembre de 2014.

c) La adquisición de bienes inmuebles que incrementen su valor o, mejoren sus condiciones en virtud de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, y
d) La instrucción de dar tratos preferenciales o de exclusión a cualquier persona en los procesos de contratación de obra pública y servicios.

2. Respecto de los Diputados y Senadores, y los diputados locales:

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, a cambio de comisión de cualquier naturaleza;
b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
c) El aprovechamiento del cargo para promover la resolución de un asunto en un sentido determinado, incluyendo la prohibición a litigar en juicios o procedimientos en contra del Estado o un ente público;
d) Acordar con negociadores o cabilderos, el destino de cualquier instrumento legislativo, obteniendo un beneficio económico o en especie, o no reportar dichas reuniones o encuentros conforme a la normatividad parlamentaria, y
e) aprovechar la información reservada a la que accede para obtener un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o una ventaja en los procesos de negociación.

Lo anterior, constituye admisión clara y determinada de que existe corrupción en las más altas esferas de poder y la asunción de manera responsable, de la posibilidad de que estas conductas sean sancionadas.

A la vez, se establecen reglas y Herramientas para la investigación de Faltas Administrativas, a efecto de propiciar la adecuada coordinación de investigaciones, de entre las que destacan la prohibición a que un órgano interno de control investigue al titular de la dependencia que integra, caso en que deberá declinar su competencia a favor de la auditoría Superior de La Federación, y en su caso dar vista a la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción; la Coadyuvancia obligada de los entes públicos en la conducción de las investigaciones; la coordinación de la Secretaría en las investigaciones que involucren a órganos internos de control de dos o más dependencias; la posibilidad de declinación de competencia de los órganos Internos de Control a favor de la Auditoría Superior de la Federación; la acumulación ante el Tribunal de expedientes conexos, y la atracción de expedientes locales cuando se involucren recursos públicos federales.

Cabe señalar que un elemento fundamental de esta ley es la capacidad real de reconocer la maldad en el compañero de gabinete o de institución sin atender a tintes ideológicos o de membresíapolítica.

Esta ley también sanciona y no puede ser omisa sobre los prevaricadores aquellos que con una mano cobran al Estado como servidores públicos y con la otra lo demandan y buscan su merma pecuniaria.

Esta ley no tendrá efecto si no toca a los propios traficantes de influencias, aquellos que como los mercaderes en el Templo usan la ley y su posición de poder para enriquecerse.

En muchos casos, se podrían mencionar a abogados, despachos encumbrados y de elite que han hecho nombre y fortuna a costa del dinero de todos para beneficios de unos pocos.

El problema que presenta el vacío de la ley es que perjudica al Estado, pero también daña al servidor público porque, el que no tiene un proceso confiable es proclive a la infamia y queda al final sin elementos en el debido proceso para limpiar su nombre.

Existen diferentes ejes de acción que abarcan un espíritu federalista con la vinculación de los tres órdenes de gobierno e incluyendo la cooperación internacional e interinstitucional, entre entes públicos y privados.

Lo anterior constituye una garantía de integralidad y transversalidad en el ejercicio de funciones, permitiendo la conducción de investigaciones complejas al establecer mecanismos para engarzar procedimientos que hasta ahora se sustancian por separado facilitando la desagregación de esfuerzos y generando espacios no deseados de impunidad.

Tampoco es de extrañar que las instituciones dedicadas a la seguridad y procuración de justicia son de las que gozan de la desconfianza de la población. Son los ciudadanos los que no dudan en percibir y delatar a estas instituciones como sujetas a un régimen perverso de corrupción y clientelismo.

Es por eso que se debe reconocer que la participación ciudadana, es -en estricto purismo- un acto diáfano de gobernanza que rebasa al gobierno y de las cuales han surgido iniciativas como la conocida como la Ley Tres de Tres que pretende establecer la obligación de todos los funcionarios públicos de hacer públicas tres declaraciones: La patrimonial, de intereses y fiscal.

Por todo lo antes expuesto esta iniciativa contempla reglas claras y herramientas idóneas para la investigación de las faltas cometidas por los servidores públicos y asegurar su posterior consignación para evitar la impunidad.

Esta iniciativa establece reglas para propiciar la adecuada coordinación de investigaciones, de entre las que destaca:

1) Un órgano interno de control no podrá investigar al titular de la dependencia que integra (declinatoria a la ASF y en su caso vista a la Fiscalía);
2) Se dispone la coadyuvancia obligada de los entes públicos en la conducción de las investigaciones de la ASF y los Órganos Internos de Control (OICs);
3) La coordinación de la Secretaría en las investigaciones que involucren a OICs de dos o más dependencias;
4) La posibilidad de declinación de competencia de los OICs a favor de la ASF,
5) La acumulación ante el Tribunal de expedientes conexos y
6) La atracción de expedientes locales cuando se involucren recursos públicos federales. A su vez, se establecen como herramientas de investigación

A su vez, se establecen como herramientas de investigaciónel quebranto de los secretos Fiscal, bancario, fiduciario y bursátil, señalando además que no será oponible la reserva de información a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos Internos de Control; así como la secrecía en las investigaciones, siendo sancionable como falta grave su quebranto.

Además, se establece como mecanismo de control ciudadano, la posibilidad de que cualquier integrante del Comité de Participación Ciudadana, como representante del interés de la ciudadanía, recurra la determinación de inexistencia de falta administrativa o la clasificación de las faltas administrativas como no graves los fallos, por parte de los órganos internos de control, para tales efectos contará con el patrocinio del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

En lo que toca a las sanciones, Se dispone que con excepción de la amonestación privada, toda Sanción a servidores públicos y particulares, se asentará en un registro público nacional, que tiene por función dar seguimiento a las sanciones que sean impuestas a los servidores públicos y a los particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Así mismo, las sanciones de destitución e inhabilitación impuestas a los servidores públicos federales y a las personas físicas y morales por causa de faltas administrativas graves, por la Secretaría, los órganos Internos de Control y el Tribunal, surtirán efectos en los entes públicos de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

De esta forma, se hace mandatorio que ningún ente público federal, de las entidades federativas o municipal pueda celebrar contratos o convenios de naturaleza contractual o de cualquier naturaleza que implique la asignación, transferencia o pago de recursos públicos, con quienes fueren impuestos de inhabilitación por autoridades federales.

Además, las autoridades que investiguen o sustancien faltas administrativas, deberán considerar la imposición previa de sanciones a nivel federal o de las entidades federativas, como elemento de valoración en sus investigaciones o resoluciones.

Cabe destacar que la inhabilitación a servidores o particulares, incluye siempre la prohibición a ser funcionario o contratar con entes públicos, que la suspensión, inhabilitación y destitución impuestas a nivel federal harán extensivos sus efectos a nivel estatal y municipal y que las sanciones impuestas a nivel local, obligan al titular del ente público a autorizar a la persona sancionada a laborar o contratar y hacerse corresponsable de las faltas que pudiere cometer.

Ahora bien, respecto del procedimiento administrativo Sancionador, la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015 establece como instrumento procesal para sancionar administrativamente a los servidores públicos un proceso dividido en tres etapas: de investigación, de sustanciación y de sanción.

La competencia que desde la Constitución se establece en cuánto al órgano para desahogar este proceso es casi homogénea, ya que la investigación y la sustanciación están encomendadas a los Órganos Internos de Control o a la Auditoría Superior de la Federación, según corresponda, y la sanción al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando se trate de faltas administrativas graves. En el caso de faltas administrativas, la investigación, sustanciación y la sanción están atribuidas a los Órganos Internos de Control o a la Auditoría Superior de la Federación, cuando así competa a ésta.

Cómo puede fácilmente observarse, por lo que hace a las etapas de investigación y sustanciación, la reforma constitucional que se reglamenta las asigna a los Órganos Internos de Control o a la Auditoría Superior de la Federación, según sea el caso, sea que la materia del proceso sea una falta

administrativa no grave o una de carácter grave.

Esta identidad del órgano para conocer de ambas etapas lleva a que se haga una sola estructuración de las mismas, ya que no tenía lógica desarrollar dos procedimientos distintos cuando en sus supuestos de activación solo existe una diferencia de grado o cualificación: que la falta administrativa fuera grave o no. Ya que la Auditoria Superior de la Federación tiene regulado el ejercicio de sus facultades y atribuciones en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se hace una remisión a esta legislación cuando el proceso administrativo sancionador se active en el caso de las facultades de dicha Auditoria.

Esta regulación unificada en las etapas de investigación y sustanciación contempla requerimientos procesales específicos que en su caso puedan necesitarse cuando, al tratarse de faltas administrativas graves, se vea involucrado un particular como probable responsable, como en el caso del acreditamiento de personalidad del representante de una persona moral, las medidas cautelares destinadas cuando sea un proveedor de bienes, obras y servicios de una ente público.

Pasadas estas etapas y llegada la de resolución, la regulación procesal se bifurca según se trate de faltas administrativas graves o no. Esto obedece al criterio ya esbozado del órgano de que desarrolle la etapa procesal.

La Constitución ordena cuando la falta no sea grave la resolución también la pronuncien los Órganos Internos de Control respectivos o la Auditoría Superior de la Federación, según sea el caso. Cuando la falta sea grave conforme a lo que dispone la iniciativa de esta Ley, la resolución será emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es por eso que para esta etapa sí se establecen regulaciones distintas: No sólo por los órganos distintos a los que corresponde la resolución, sino porque la cualificación de gravedad establecida desde la Constitución obedece a la finalidad de que las sanciones sean más severas para este caso, lo que lleva a establecer parámetros legales distintos para su imposición en cada tipo de falta.

Este el diseño procesal que se dispone desde la Constitución y es el que determina el desarrollo normativo que se realiza en la presente iniciativa de Ley.

La presente iniciativa establece que el proceso administrativo sancionador iniciará con la etapa de investigación, la cual se activará con las quejas, denuncias, auditorías y verificaciones cuando se adviertan hechos de corrupción o la realización de conductas que puedan constituir alguna de las responsabilidades administrativas de la Ley que ahora se propone.

La investigación aquí regulada tiene por objeto que los Órganos Internos de Control respectivos, según sea el caso, cuente con los instrumentos legales necesarios para indagar la existencia o no faltas administrativas.

Toda vez que los Órganos Internos de Control (OIC) realizarán su investigación en el ámbito interno del propio ente público al cual se encuentran adscritos, se establece que esta etapa se realizará bajo el principio de secrecía, la cual es responsabilidad de mantener al propio Órgano investigador y se hace extensiva a los funcionarios públicos del propio ente público que tengan conocimiento de la existencia de la indagatoria, cuando el OIC les requiera información y los aperciba de la secrecía en que debe mantenerse la propia investigación. Esto con la finalidad asegurar la eficacia de la misma y evitar que los elementos probatorios puedan ser destruidos,

alterados u ocultados.

Con la ésta última finalidad, se faculta al OIC para requerir el aseguramiento de documentos, archivos, objetos y demás elementos probatorios que sean necesarios para determinación de las responsabilidades correspondientes.

En acatamiento de la reforma constitucional, los OIC en el ejercicio de sus facultades indagatorias no estarán limitados por los secretos bancario, fiduciario, bursátil y fiscal. No les serán oponibles tampoco las reservas de información conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia. Por tanto, se dispone que las autoridades y los particulares que tengan en su poder información de este tipo la entreguen al OIC cuando así se les requiera y deberán cumplir la secrecía de la investigación en los términos que se les aperciba.

Se establece que la investigación del OIC deberá realizarse de manera exhaustiva, lo que implica que éste deberá realizar todas las diligencias necesarias determinar o deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan. Para esto se le otorga un plazo razonable de hasta seis meses para completar su investigación.

Esta etapa concluye con la emisión del acuerdo respectivo, que puede ser de inexistencia de responsabilidad administrativa o de probable existencia de la falta administrativa. Este último da inicio a la siguiente etapa del proceso, que es la de sustanciación.

Cabe resaltar que esta iniciativa establece de manera novedosa que el acuerdo de inexistencia de responsabilidad podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo indirecto por el quejoso, el denunciante o por un integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Se establece que sea el juicio de amparo la vía idónea para impugnar un acuerdo de inexistencia de falta administrativa por tres razones: 1.- Permitirá que la litis acerca de la responsabilidad de un funcionario público se convierta en un debate constitucional sobre derechos fundamentales; 2.- Empoderará al Comité de Participación Ciudadana al legitimarlo para acudir al juicio de derechos fundamentales considere que la exoneración de un servidor público sea injustificada; y 3.- Provocará que se emita de manera procesalmente más corta tesis y jurisprudencia por parte de Tribunales Colegiados de Circuito o por la Suprema Corte de Justicia sobre temas sustanciales en materia de combate a la corrupción.

La etapa de sustanciación se encomienda a los OIC tal y como lo ordena la Constitución. Al estructurar esta etapa, se cuidó respetar el derecho fundamental audiencia y de defensa de los probables responsables.

Al efecto, se diseñó un procedimiento que les permite conocer los hechos que se les imputan; rendir su declaración sobre los mismos; ser asistidos por abogado que cuente con cédula profesional; ofrecer los medios de prueba que estimen pertinentes para su defensa y participar en el desahogo de todos estos medios de convicción; ser escuchados cuando planteen cuestiones incidentales y cuando sean soliciten solicitadas providencias precautorias y medidas cautelares, así como rendir alegatos en el momento procesal oportuno.

Como puede observarse, la estructura de esta etapa procesal se rige bajo el principio de contradicción y de audiencia, lo que permite que se materialicen normativamente las

formalidades esenciales del procedimiento.

De manera novedosa en un procedimiento de responsabilidades de servidores públicos, se introduce un esquema de beneficios para aquellos probables responsables, sean servidores públicos o particulares, que proporcionen información cierta que lleve a la imposición de sanciones de otros participantes en la falta administrativa. Esto se propone con la finalidad de potencializar la eficacia de la investigación y evitar la impunidad de aquellos sujetos que realizaron conductas corruptas pero habían podido sustraerse del proceso sancionador.

También se introducen de manera novedosa para este tipo de procedimientos providencias precautorias y medidas cautelares para asegurar que, caso de acreditarse la responsabilidad de un servidor público o particular, el daño a la Hacienda Pública sea resarcido mediante el congelamiento de cuentas que se encuentren en el sistema financiero mexicano y el embargo de bienes, para el caso de las providencias. Para el caso de las medidas cautelares, las mismas tienen por objeto que el patrimonio del Estado no siga siendo afectado por los probables responsables o afecten el desarrollo del proceso, por lo que se dispone que un servidor público podrá ser suspendido temporalmente de su empleo, cargo o comisión, con lo que evitará que siga teniendo acceso a información o recursos del ente público al que presuntamente afectó.

Dentro de este mismo tipo de medidas se contempla que se suspenda temporalmente el pago a personas físicas o morales probablemente responsables de faltas administrativas graves, de contratos de servicios, de obra pública o de suministro de bienes. Esta suspensión temporal del pago se realizará sobre todo contrato que la persona física o moral tenga celebrado con la entidad, dependencia, poder u órgano constitucional autónomo del nivel de gobierno respectivo que presuntamente haya sido afectado por la falta administrativa grave materia del procedimiento sancionador. La finalidad de esta medida es evitar que el daño patrimonial al Estado se siga perpetrando por el presunto infractor y contribuir a eliminar incentivos para realizar conductas corruptas por parte de particulares que realizan varios contratos con entes públicos.

De manera garantista, estas providencias y medidas se efectúan bajo control jurisdiccional, ya que el OIC deberá solicitarlas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y notificar al presunto responsable del plazo que tiene para concurrir ante dicho Tribunal a manifestar lo que a su derecho convenga. Será este Órgano Jurisdiccional el que resuelva sobre el otorgamiento, negativa, modificación o cancelación de las mismas.

Finalmente, la etapa de Resolución se regula por separado, según ya se dijo. Por un lado, se norma el supuesto que corresponde al OIC en el caso de faltas administrativas no graves y, por el otro, el que compete al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para las faltas administrativas graves.

Conforme a la regulación constitucional, las sanciones que podrán imponerse tratándose de servidores públicos, consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

En el caso de particulares, en sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o

municipales.

Cuando se trate de personas morales podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

No hay forma de exponer está lacerante y difícil situación en la que se encuentra sujeto y sometido nuestro país sin tener una reacción justificada de indignidad y de ataque mínimo al pudor institucional que parece haberse adormecido ante tanta impunidad, torpeza e inefectividad.

Son los dolorosos y penetrantes resultados de la impunidad los que contribuyen al desasosiego de una sociedad que observa impotente como crece la corrupción y se desgasta de forma inexorable la credibilidad institucional. Perpetuar estas condiciones de corrupción, de inacción y de ineficacia aun conociendo, con certeza, cuales son las causas de este ingente mal extendido de nuestro país es ser copartícipe de esta extendida descomposición.

El obtuso comportamiento de mantenerse omiso ante esta realidad que es evidente y punzante para todos los ciudadanos de este país y que ataca a todos los niveles de la sociedad no es una conducta que, bajo ninguna premisa, sea disimulada o tolerada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, es por esta razón que impulsamos y promovemos la presente iniciativa de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Solo es en la cualidad de la probidad, honestidad y rectitud del comportamiento administrativo y en la vocación de servicio público en la que encontraremos los importantes depósitos de credibilidad institucional, confianza ciudadana, eficiencia administrativa, transparencia, justicia y equidad que se requieren para hacer de la labor pública un digno referente de las cualidades culturales y humanas de una sociedad como la nuestra que está llamada a un desarrollo incluyente y armónico en contraste a la postración ante el limitado poder que, desde el escritorio público, ejerce actualmente el funcionario que, lejos de prestar auxilio a la sociedad, vive y abusa del honorable Servicio Público.

III. SOBRE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La corrupción se trata de poder y de dinero, en particular de la apropiación, aprovechamiento y expoliación del patrimonio nacional; ante la escasez de los recursos y limitaciones de la patria, la fiscalización y la auditoría son elementos fundamentales para hacer realidad la aspiración constitucional.

El modelo actual de fiscalización tiene limitantes en cuanto a la periodicidad de la revisión, auditoría y la supervisión del órgano encargado; así, la transformación de la fiscalización de los recursos en un modelo confiable e independiente, incrementará la credibilidad frente a los ciudadanos y la potencia del Estado, lejos del sistema actual, en el que se tiene acceso a los resultados de la cuenta pública con dos años de diferencia.

Las excepciones en la fiscalización y transparencia sólo son los manantiales donde abreva la corrupción y el desvío. Por eso, es irreductible que toda institución que tenga recursos del estado esté sujeta a esa fiscalización, auditoría y rendición de cuentas.

El objetivo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es regular la organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación; los procedimientos de verificación, fiscalización e imposición de responsabilidades resarcitorias y aquellos derivados de la prevención y el combate a la corrupción; la apertura de la participación de la sociedad en los procesos de fiscalización; la evaluación de la gestión pública en la progresividad o regresividad de los derechos de las personas o comunidades; la estabilidad de las finanzas públicas; el funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización; y, las bases del Subsistema Nacional de Evaluación.

En este orden de ideas, se incluyen como sujetos obligados a todos aquellos que ejerzan recursos públicos, como los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; los órganos constitucionalmente autónomos; los órganos reguladores coordinados en materia de energía; y, las empresas productivas del Estado.

Asimismo, se incluye a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que administren o ejerzan recursos públicos federales, incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; partidos políticos; entidades de interés público; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social.

En general, se considera a cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, o que reciba aportaciones, acciones, títulos, certificados o cualquier instrumento de naturaleza análoga que le dé derecho al aprovechamiento o usos de recursos públicos incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines.

La sociedad exige que los responsables rindan cuentas, para efectos de conocer el destino que guardan los recursos de la sociedad, evitando así la desviación de los mismos, por causa de la corrupción. Con esta nueva ley, será posible para la Auditoría vigilar el destino de las participaciones federales, de tal manera que su destino y efecto sea conforme a lo dispuesto en la ley y el Presupuesto de Egresos.

Como se ha mencionado en la conformación del Sistema Nacional, definir el concepto de corrupción va más allá de la simple pero dolorosa descripción que, los ciudadanos de este país hacen de este fenómeno, fruto de su cotidiana convivencia con esta ingeniería compleja que es en lo que se ha convertido la corrupción en nuestro país.

Debemos reiterar que el Estado Mexicano está vulnerado. Su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida, sin que se pueda llegar a castigar a los

responsables de los actos delincuenciales derivados de la corrupción, debidos también a la falta de precisión en la capacidad persecutoria de las instituciones fiscalizadoras de nuestro país.

México está enfermo de corrupción e impunidad. Parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de servicios básicos o apoyos sociales que un ama de casa realiza para su hogar, los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que en algunos casos ha servido para lavar dinero.

Ante la demanda social de confrontar estos lamentables fenómenos, el 27 de mayo de 2015 se publicó la reforma constitucional que dio apertura al Sistema Nacional Anticorrupción; la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció los artículos 25 segundo párrafo, 74, fracciones II y VI, y 79, el mandato de reglamentar fiscalización y rendición de cuentas, mismo que, la fracción parlamentaria del PRD propone en este mismo instrumento parlamentario.

Una de las decisiones más novedosas y positivas que se integran, es la mayor participación de la ciudadanía en el proceso de fiscalización. A través del Comité de Participación Ciudadana del SNA, podrá opinar sobre los Programas General y Anual de Auditorías; vigilará que las acciones de la auditoría se apeguen a los principios, criterios y disposiciones legales; podrá presentar denuncias cuando se detecten irregularidades en el uso de los recursos públicos, entre otras acciones. Asimismo, se le da un papel más activo en la designación de la persona titular de la Auditoría y de quien encabece la Unidad de Vigilancia de la ASF.

La iniciativa eleva a rango de ley el Sistema Nacional de Fiscalización, un conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica que contempla el principio de progresividad de los derechos humanos, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.

La necesidad de que se establezca una estricta fiscalización, la vemos reflejada en la investigación que señala que de las 664 denuncias penales por actos de corrupción, 97% de las denuncias por corrupción ante la Auditoría Superior de la Federación no se han resuelto[17].

No sólo podemos ver el extremo grado de impunidad y la ineficacia de las instituciones fiscalizadoras, sino su alto costo para el país, ya que de la misma investigación se desprende que entre 1998 y 2015, cada una de las 664 denuncias representó un costo de 25 millones de pesos para el erario público[18], derivando en que tan sólo 21 de ellas resultaron en consignaciones y 97% en impunidad.

Con esta iniciativa buscamos la fiscalización en tiempo real de la cuenta pública y generar mejores y efectivas prácticas, siendo necesario acabar con las islas de opacidad que durante décadas han saqueado al país, como sucede en determinadas operaciones de comercio internacional en

[17]Auditoría Superior de la Federación, **Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014**. Consultado el 29 de febrero de 2016 en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf
[18]El financiero (2016) **Impunes, 97% de denuncias por corrupción de la ASF.**Consultada el 15 de febrero de 2016, en: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/impunes-97-de-denuncias-por-corrupcion-de-la-asf.html 15/02/2016

Petróleos Mexicanos, o los partidos políticos, sin detrimento de las facultades que se atribuyen al Instituto Nacional Electoral.

Cuando así se requiera, se propone que los sujetos obligados deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, debiendo acompañar a la información solicitada, los anexos, estudios, memorias de cálculo y demás documentación de soporte relacionada con la solicitud; asimismo, para su incumplimiento se establecerá una multa, la cual se duplicará por reincidencia.

Es de gran conveniencia que la estructura fiscalizadora de nuestro país pueda agilizar los procesos, y de mayor interés de nuestro Grupo Parlamentario que tenga el mayor alcance en sus facultades, que al mismo tiempo puedan generar indicadores que permitan medir el ejercicio público y la eficacia de la institución encargada de la supervisión y vigilancia.

Hay que considerar que dentro de la inestabilidad económica global, la revisión permanente y efectiva de la cuenta pública contribuye a la estabilidad de las finanzas y a la mejor toma de decisiones que beneficien a nuestro país en esta materia. En este mismo sentido, será de vital importancia que la Auditoría realice las funciones de revisión de la deuda pública, tanto nacional como de las entidades federativas y los municipios, a fin de contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.

En los círculos del infierno de la corrupción, el lugar reservado para los peores es la corrupción política, la que cometen aquellos que debiendo luchar por el bienestar nacional, acaban siendo ambiciosos y voraces, por lo que será fundamental para limitar la corrupción política, la fiscalización y auditoría de sindicatos, partidos políticos y organizaciones similares.

La fiscalización y la auditoría son fundamentales para limitar la corrupción política que se pueda generar al interior de instituciones como partidos políticos y organizaciones gremiales o similares.

Entre las innovaciones que se integran en esta propuesta progresista, encontramos la fiscalización de obligaciones que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios, en coordinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las haciendas de los Estados y Municipios, que deberán informar a la Auditoria de los montos máximos anuales de inversión por proyecto, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos.

La Auditoría fiscalizará los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos de Prestación de Servicios, con prioridad en su impacto en la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial.

Además verificará que la estructura de la Asociación Público-Privada es menos cara y ofrece mayor rendimiento social que otra forma de inversión o proveeduría de servicios públicos.

Derivado del mandato Constitucional de la fracción I, del artículo 79 de la Carta Magna, cuando se

presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, y previa autorización de su Titular, la Auditoría podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como de ejercicios anteriores.

Las denuncias podrán presentarse ante la Cámara, la Comisión, el Sistema o directamente a la Auditoría y el Titular de la Auditoría deberá manifestarse respecto a su admisibilidad.

Finalmente, se propone dotar a la Auditoría de una mayor identidad en la progresividad de los derechos. En este sentido, no sólo se le mandata a revisar si la gestión pública ha estado encaminada a ese fin, con la posibilidad de emitir recomendaciones para hacerlo, sino que también se propone la creación de un Subsistema Nacional de Evaluación para evaluar la calidad del desempeño público conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, en coordinación con los organismos constitucionalmente autónomos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Lo anterior implica un importante avance en la manera de fiscalizar que se desarrolla en nuestro país.

No hay pretexto, la opacidad sólo le sirve a los sectarios; es un hecho que no se puede anteponer el interés de un grupo frente al de la sociedad, por lo que cualquier táctica no hará más que desenmascarar a aquellos que abonan y siembran en los campos de los privilegios, las excepciones y la opacidad.

IV. SOBRE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

No hay ley justa sin juez justo, por ello es de la máxima atención y preocupación adecuar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) no sólo a la demanda constitucional, sino a las necesidades del Estado y de justicia del siglo XXI. Actualmente el TFJA no garantiza ni los derechos del ciudadano, ni los intereses del Estado. Es un diseño con vocación de nulidad, pero no de justicia.

Durante 2015 este tribunal recibió mil 558 expedientes en materia de responsabilidades de los servidores públicos por presuntos actos de corrupción, desvío de recursos, abuso de autoridad, entre otros. Sin embargo, únicamente 680 casos fueron sancionados con penas por sólo 614 millones de pesos. En ese mismo periodo, servidores públicos que fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentaron 2 mil 128 recursos de inconformidad ante el mismo tribunal[19], la mitad de los servidores solicitaron reparación patrimonial del Estado pues piden ser indemnizados por actos de negligencia o mala fe de parte de la institución federal.

Su presidente, Magistrado Dr. Manuel Hallivis, reconoce que el 51.33% de los funcionarios denunciados por corrupción ganó los casos al Estado debido a malas integraciones de las investigaciones o fallas tan básicas como no incluir en la demanda el lugar en el que ocurrieron los hechos y la falta de seguimiento que permite que los casos prescriban[20].

[19]La Jornada, *Tribunal fiscal absuelve a la mayoría de funcionarios acusados de ilícitos*, 15 de febrero de 2016.
[20]Milenio, *Millonarias sanciones a funcionarios y sin esclarecer*, 14 de septiembre de 2015.

Derivado de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción publicada el 27 de mayo de 2015, se facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

Esta reforma constitucional representa el avance más importante para nuestro país. La eficacia de la ley está íntima y lógicamente vinculada con la independencia y potencia del tribunal que la aplica.

Derivado de dicha obligación legislativa mencionada, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta la iniciativa con proyecto de Decreto por medio de la cual se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que con una visión progresista este tribunal se constituye en un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena para Imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como para fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

Además de los asuntos que ya conocía el Tribunal, se establecen las siguientes facultades:

- Imponer sanciones a los servidores públicos y particulares que participen en actos vinculados con responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves;
- Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales;
- Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos en cargos públicos del orden federal o local.
- Sancionar con suspensión de actividades, disolución o intervención a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella.

La Conformación del Tribunal es modificada, estableciendo que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de 16 Magistrados, de los cuales, 1 será el Presidente del tribunal, 2 formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración y 13 ejercerán funciones jurisdiccionales. La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en Secciones. El Tribunal contará con tres secciones, dos de ellas estarán integradas por 5 Magistrados de Sala Superior y la Tercera se integrará por 3 Magistrados de Sala Superior.

A la Tercera sección le corresponderá conocer de los asuntos relativos a responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares, así como fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

En este tenor, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado propone que el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares con ellas relacionados sea resuelto en única instancia por dicha Sección Especializada

de la Sala Superior, esto con el objetivo de agilizar el procedimiento sancionador y reducir los tiempos de resolución. De otorgarse competencia a Salas Regionales para imponer sanciones a servidores públicos y particulares, provocaría un efecto distorsionador en el ejercicio de la funciones del Tribunal, ya las Salas tendrían que sancionar a personas respecto a las cuales tendría cercanía geográfica, lo que provocaría un regionalismo en la impartición de justicia sobre anticorrupción posiblemente afectado por lazos afectivos, de compadrazgo o incluso de presión sobre Magistrados Regionales cuando tengan que sancionar administrativamente a Gobernadores, Diputados locales, Delegados de Secretarios de Estado, Presidentes Municipales de la Región donde ejerzan su jurisdicción, etc.

Que se faculte exclusivamente a la Sección Especializada de la Sala Superior para resolver en única instancia los temas de responsabilidades sobre faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados a estas obedece a otra razón de índole procesal, la cual se encuentra establecida desde la reforma constitucional contra la corrupción que ordena la expedición de esta Ley: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa no sustanciará el proceso administrativo sancionador, sino que sólo impondrá las sanciones correspondientes.

Lo anterior significa que la Sección Especializada en materia de Responsabilidades será un Tribunal de sólo de sentencia y no practicará ninguna audiencia entre las partes ni desahogará ningún medio de convicción. Serán los Órganos Internos de Control respectivos o la Auditoria Superior de la Federación en los casos de la competencia de esta los que realicen la investigación y sustanciación del proceso.

Este diseño procesal mandatado desde la Constitución reduce sustancialmente las cargas de trabajo sobre el órgano jurisdiccional, quien sólo se encargará del análisis del expediente ya sustanciado y emitirá la resolución respectiva. Esta sustancial reducción en los actos procesales a cargo del Tribunal debe verse reflejada en la estructura orgánica del mismo, que permite que sea la Sección Especializada en la materia la que resuelva en única instancia los procesos sancionadores.

Establecer dos instancias dentro del Tribunal para este tipo de procesos sólo es innecesario pues de hacerlo así, la Sección Especializada en todo caso concentraría la resolución de todos los recursos de apelación que sobre la materia dictarán las Salas Regionales especializadas, es decir, terminaría provocándose un efecto embudo en la Sección Especializada.

Esta tramitación biinstancial innecesaria provocaría también que los procesos de alargaran en perjuicio de la certeza jurídica de las partes, de tutela judicial efectiva y de la prontitud de unos de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción: el combate eficaz y pronto de las faltas administrativas graves y el abatimiento de la impunidad de los servidores públicos que se desvían del recto desempeño de función.

En todo caso, y según las necesidades que imponga la impartición de justicia, se propone que puedan establecerse Salas que auxiliarán a la Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Pleno del Tribunal en el dictado de las sentencias definitivas dentro del proceso administrativo sancionador tramitado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas. La Sala auxiliar que se constituya con la competencia establecida en este párrafo ejercerá jurisdicción material especializada y territorial en toda la República, y tendrán su sede en la Ciudad México. Esta es una

práctica que actualmente realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando la carga de trabajo de ciertos órganos jurisdiccionales así lo requiere.

Por lo que hace a los recursos, se propone que la reclamación procederá en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sección respectiva. Las resoluciones que se dicten en el recurso de reclamación serán también impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión.

En los casos de clasificación de la falta administrativa que realicen los Órganos Internos de Control y la Auditoria Superior de la Federación, los afectados podrán interponer recurso de inconformidad ante la Tercera Sección.

Por último, se propone que la Junta de Gobierno y Administración sea el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Esta Junta de Gobierno y Administración se integrará por el Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración; dos Magistrados de Sala Superior, y Dos Magistrados de Sala Regional.

Además de lo señalado expresamente en la reforma constitucional este Grupo Parlamentario considera fundamental hacer mención expresa en la ley que el Tribunal formará parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; que el Presidente deberá rendir un informe anual basado en indicadores en materia de corrupción, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y que con base en el informe señalado, presentará desde su competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan.

Lo anterior con la finalidad de conocer no solo el número de asuntos que resuelve al año, sino también conocer cuántos y a qué funcionarios se ha sancionado, el cargo de los mismos, el orden de gobierno y secretaría de estado, órgano constitucional autónomo o entidad o poder al que pertenezca, cuántos particulares, faltas administrativas más recurrentes, órgano de control que presenta más pliegos de responsabilidades y el que menos, lugar de los hechos o región, municipio, estado, entre otras, para identificar patrones de realización de actos de corrupción, la forma en la son abordados y procesados y así identificar debilidades y fortalezas que el Sistema

deba conocer para mejorar su funcionamiento y así prevenir, evitar, investigar, sancionar y reparar los actos que se deriven de hechos de corrupción.

Los proyectos de recomendación que el Presidente del Tribunal lleve ante al Comité Coordinador deben de proponer la adopción de reformas públicas y/o reformas legales que combatan de manera efectiva los patrones de corrupción identificados y más aún, que permitan procesarlos debidamente y finalmente sancionar estos actos que hasta la fecha sólo dejan sentimientos de impunidad ante los ojos ciudadanos.

Este Grupo Parlamentario propone que el procedimiento de responsabilidades sea resuelto en única instancia por la sección especializada del pleno, esto con el objetivo de agilizar el procedimiento sancionador y reducir los tiempos de resolución.

Se desataca que se abren al escrutinio ciudadano todas las actividades del Tribunal obligándolo a llevar a cabo todas sus actuaciones bajo la más amplia transparencia judicial puesto que sus debates y la resolución de los mismos serán transmitidos por medios electrónicos y videograbados, incluso los casos que expresamente la ley refiere su confidencialidad, se impone la obligación de la realización de versiones públicas para consultas ciudadanas y, en este sentido, también se prohíbe que los magistrados ejerzan su profesión bajo cualquier circunstancia, pues el tráfico de influencias en el poder judicial debe quedar particularmente borrado de la ecuación del combate a la corrupción.

La ciudadanía merece un Tribunal a la altura de las circunstancias, que rinda cuentas claras, que sus debates, en particular los relacionados con actos de corrupción, sean un escaparate jurídico de lucha contra la impunidad y para ello se le debe de dotar de las herramientas necesarias que lo doten de confiabilidad y, a la vez que se fomente el control ciudadano sobre la actuación del mismo, evitar que el Sistema caiga en las viejas prácticas que a todas luces ya no tiene lugar.

V. DE LA DE MODIFICACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El control del patrimonio y el desempeño de la administración son una piedra fundamental de la función de gobierno, sin embargo este mandato parece haber sido abdicado. Tan poco ha sido el compromiso del ejecutivo federal, con el combate a la corrupción que el área encargada de está fue desaparecida.El 15 de noviembre de 2012 el Grupo Parlamentario del PRI presentó una iniciativa, propuesta por el presidente electo, para reformular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El 13 de diciembre de 2012, tras un intenso cabildeo del gobierno de la República reciénentrado en funciones, fue aprobada por el Congresoy publicada en el Diario Oficial de la Federación del dos de enero de 2013.

La reforma planteaba un nuevo régimen de control gubernamental, desaparecía a la Secretaría de la Función Pública y pretendía el fortalecimiento de los órganos internos de control mediante su transformación en unidades de auditoría preventiva.

Asimismo se propuso la reasignación de funciones de control gubernamental, además de otras de carácter normativo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incluía la simplificación

administrativa, así como de la existencia de otras autoridades constitucionales en materia de rendición de cuentas, acceso a la información y combate a la corrupción.

Lo anterior en el entendido de que en materia de observancia y sanción de actos de corrupción, se consideró indispensable que dicha tarea se depositara en una instancia dotada de plena autonomía mientras que la vigilancia y el control interno de las dependencias se encontrarían en las propias Secretarías.

Actualmente la Secretaría de la Función Pública no tiene fundamento legal, ya que no está en la Ley Orgánica; los resultados magros, cortos y dispersos, han hecho que la institución, no sólo no sancione, sino que tampoco educa, ni previene.

Siendo el ejecutivo el principal ejecutor de recursos del estado mexicano, es ingenuo y perverso que no haya una actividad de control sustantivo.La evidenciasobre las limitaciones del formato actual, son insultantes y obvias.

Después de intensos debates para la creación del órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, el Pleno del Senado aprobó el dictamen correspondiente el 13 de diciembre de 2013. No obstante que el 04 de febrero de 2014 se recibió en Cámara de Diputados la minuta correspondiente, el tema fue relegado y la Secretaría de la Función Pública continuó sus operaciones con un encargado de despacho.

Sin embargo, la revelación de los hechos en torno de la llamada “Casa Blanca” que habría adquirido la esposa del Presidente de la República (Noviembre, 2014), una residencia de siete millones de dólares ubicada en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México, encendió las alertas y desató un escándalo de corrupción en la más alta esfera del poder en nuestro país.

Esta propiedad fue construida por Grupo Higa, una de las empresas beneficiadas con contratos de obra pública en el Estado de México, durante el periodo de gobierno del ahora primer mandatario federal.

Para ofrecer una solución, el Ejecutivo Federal rehabilitó a la Secretaría de la Función Pública con el objetivo de que investigara estos hechos. La dependencia, que hasta entonces había permanecido vigente en virtud de un artículo transitorio pero sin titular, desarrolló la investigación y, tras ocho meses de la exhibición de la noticia, rindió un informe en donde se descartó el conflicto de interés en la adquisición de la mansión, lo cual generó gran descontento en la ciudadanía.

A ese aciago capítulo siguieron otros registrados también en las más altas esferas del poder político. Y únicamente esa dependencia indagó los hechos y con tal resolución se pretendió cerrar toda posibilidad de indagatoria.

Esa pobre actuación institucional de la Secretaría de la Función Pública fue motivo para que la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción determinara la restitución de la Secretaría para cumplir el estricto papel de órgano de control interno de la Administración Pública Federal.

Para el desarrollo de la reforma constitucional no basta con restablecer a la Secretaría de la

Función Pública.Es necesario crear una Secretaría de control interno con capacidades de interacción dentro del Sistema Nacional Anticorrupción. Con mecanismos para restablecer un mínimo de confianza institucional. Si bien, es preciso dotar a esta Secretaría de las atribuciones originarias que le fueron retiradas a la Secretaría de la Función Pública, aunque sigue ejerciéndolas en virtud de un régimen transitorio, también se deberán establecer las facultades para que la Secretaría pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del Sistema.

Esta iniciativa no busca, construir un juicio, ni una calificación, está orientada a fortalecer al ejecutivo en su capacidad de control, capacitación y prevención de la actividad administrativa.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República presentamos esta propuesta que pone como eje a quien nos debemos, a los ciudadanos, a nuestro país, porque es lo correcto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno del Senado de la República la siguiente iniciativa con:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDEN, SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSAS LEYES PARA REGLAMENTAR EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

ARTÍCULO PRIMERO: Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Es objeto de la presente Ley reglamentar el ejercicio eficaz de la prevención, detección, investigación, combate, sanción y erradicación de la corrupción mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la distribución de competencias y la disposición de las bases de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. **Comité Coordinador:** El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

II. **Comité de Participación Ciudadana:** El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. **Corrupción:** El uso indebido de la función pública con fines privados, que devenga en una conducta típica, antijurídica y punible, que afecte el patrimonio público o el ejercicio del buen gobierno; genere derechos o extinga obligaciones; tolere un hecho en contravención de la ley; u, obtenga algún otro provecho ilegítimo, a cambio de que se otorgue o reciba un beneficio indebido.

IV. **Denunciante:** Toda persona que pone en conocimiento de la autoridad competente un hecho que considera que pueden constituir faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, susceptibles de ser investigados;

V. **Fiscalía:** La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

VI. **Fiscalías locales:** Las fiscalías especializadas en combate a la corrupción de las Entidades Federativas;

VII. **Función Pública:** Cualquier acción u omisión que por motivo de su carácter de servidor público o del ejercicio de funciones, facultades y atribuciones conferidas por una norma jurídica, realice una persona a nombre del Estado;

VIII. **Informante:** Servidor público o cualquier persona que siendo testigo de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, divulga públicamente, de buena fe, información clasificada como reservada, cuando esta revele violaciones del ordenamiento jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad, o el medio ambiente, violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario;

IX. **Ley:** Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

X. **Medidas de Protección:** Conjunto de medidas dispuestas por las autoridades competentes orientadas a proteger el ejercicio de los derechos personales y laborales de los denunciantes y testigos de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, así como el procesamiento administrativo o judicial de dichas conductas. Su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la Autoridad Competente y, de ser el caso, se hará extensible a su cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes y hermanos;

XI. **Persona protegida:** Denunciante o testigo de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, al que se le ha concedido medidas de protección con la finalidad de garantizar el ejercicio de sus derechos personales y laborales, así como el procesamiento administrativo o judicial dichas conductas;

XII. **Política Nacional:** La Política Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción.

XIII. **Registro Nacional:** Registro Nacional de los Servidores Públicos;

XIV. **Secretaría:** La Secretaría de Control Interno de la Administración Pública Federal;

XV. **Servidor Público:** Las personas así definidas por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados y convenciones de los que sea parte el Estado mexicano;

XVI. **Sistema:** El Sistema Nacional Anticorrupción;

XVII. **Sistemas Locales:** Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas;

XVIII. **Testigo:** Toda persona que por alguna razón posee información relevante sobre faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción y que se encuentra dispuesta a colaborar rindiendo al efecto su testimonio o aportando otras pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a los responsables de los actos;

XIX. **Tribunal:** El Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y

XX. **Tribunales Locales:** Los tribunales de justicia administrativa de las Entidades Federativas.

Artículo 4. Son sujetos obligados a la observancia de esta Ley:

I. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno;
II. Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, y
III. Las personas físicas o morales, públicas o privadas a las que se le destinen o que ejerzan recursos públicos o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Artículo 5. El Sistema velará por que los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, así como sus servidores públicos, observen en el ejercicio de su función pública los principios establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 6. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto expida el Sistema y adecuado a sus particulares funciones.

Artículo 7. Los sujetos obligados, en colaboración con el Sistema, establecerán mecanismos efectivos para promover la participación de la ciudadanía y en especial de la Sociedad Civil Organizada, en los esfuerzos para combatir la corrupción y procurar el eficaz ejercicio de la función pública.

Artículo 8. La Federación y las Entidades Federativas en el ámbito de sus respectivas competencias concurrirán en el cumplimiento del objeto de esta Ley.

Artículo 9. Las conductas que generan responsabilidad administrativa y los hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de la función pública serán sancionables incluso cuando se hayan verificado en territorio extranjero.

TÍTULO SEGUNDO
Del Sistema Nacional Anticorrupción

CAPÍTULO I
De su Integración

Artículo 10. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia superior de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Está integrado por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, políticas, instrumentos y procedimientos, con el objeto de prevenir, detectar, investigar, sancionar y resarcir todo acto ilícito en el ejercicio de la función pública, en el que intervengan tanto servidores públicos, como personas físicas o morales particulares, con la finalidad de erradicar todo hecho de corrupción en el Estado mexicano.

Artículo 11. El Sistema Nacional Anticorrupción se integra por:

I. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema;
II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema;
III. Los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, y
IV. Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas, quienes concurrirán a través de sus representantes.

El Sistema será presidido por el titular del Comité de Participación Ciudadana.

El Sistema dispondrá de las instancias internas de coordinación que considere oportunas para la formulación y ejecución de políticas, programas y acciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, así como la realización de estudios y diagnósticos tendientes a la adopción de mejores prácticas en la materia de su competencia.

Artículo 12. El Comité Coordinador del Sistema se integra por:

I. El titular del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;
II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
IV. El titular de la Secretaría de Control Interno de la Administración Pública Federal;
V. El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
VI. El Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y
VII. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 13. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco personas que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Durarán en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada.

Percibirán una remuneración por parte del Estado en los términos del artículo 127 constitucional y su legislación reglamentaria.

Durante el tiempo que permanezcan en el encargo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.

Artículo 14. En la conformación del Comité de Participación Ciudadana será principio rector la equidad de género, por lo que no podrá conformarse por más de tres integrantes de un mismo género.

Artículo 15. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana serán nombrados, conforme al

siguiente procedimiento:

I. Dentro de los 30 días siguientes al en que se dé la vacante, el Comité Coordinador del Sistema integrará un Colegio Calificador con la siguiente composición:
   a) Tres ciudadanos representantes designados libremente por distintas Universidades del país invitadas en forma directa, y
   b) Seis ciudadanos designados de entre las propuestas recibidas de las Redes y Organizaciones de la Sociedad Civil relacionadas con los temas dispuestos por el artículo 13, previa convocatoria.

   El cargo de miembro del Colegio Calificador será honorario. Quienes funjan como miembros no podrán ser designados como integrantes del Comité de Participación Ciudadana por un periodo de siete años contados a partir de la disolución del Colegio.
II. En un plazo máximo de 10 días posteriores a su elección, el Colegio Calificador emitirá y difundirá ampliamente en diarios de circulación nacional y por Internet la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil, universidades del país y a la sociedad en general, para que propongan personas a ocupar la vacante en el Comité de Participación Ciudadana;
III. El Colegio Calificador integrará y sistematizará los expedientes de los ciudadanos propuestos, comprobará su elegibilidad y publicará la lista de quienes resulten elegibles en el Diario Oficial de la Federación, fijando en el mismo instrumento el día y hora en que los candidatos deberán comparecer a sesión pública del Colegio para su auscultación, y
IV. En un plazo máximo de 5 días posteriores a la conclusión de la auscultación de todos los candidatos, el Colegio Calificador, en sesión pública, definirá por el voto de las dos terceras partes de sus miembros a la persona que deberá ocupar el cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 16. Para ser integrante del Comité de Participación Ciudadana se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Contar con reconocido prestigio y experiencia que permitan acreditar su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción;
III. No haber sido condenado por delito doloso;
IV. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria;
V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, dentro del plazo señalado en la convocatoria respectiva, y
VI. No desempeñar dentro del año previo al día de la emisión de la convocatoria ningún empleo, cargo o comisión en el servicio público, salvo aquéllos no remunerados en actividades de científicas, culturales o de investigación.

Artículo 17. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana elegirán a su titular por el voto de la mayoría absoluta, quien presidirá también el Sistema. Durará en el encargo dos años, improrrogables. Durante el tiempo de su encargo será sustituido por el propio Comité de Participación Ciudadana cuando así lo soliciten seis de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema.

De presentarse la ausencia temporal del presidente el Comité de Participación Ciudadana

nombrará de entre sus miembros a quien deba sustituirle.

Artículo 18. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas estarán integrados, conforme con las disposiciones correspondientes, con las autoridades de las entidades federativas y de los municipios competentes en las materias de fiscalización y de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

En su estructura operativa establecerán un órgano responsable de la coordinación de las políticas, acciones y recomendaciones que se implementen desde el propio sistema local, así como de la ejecución en ese ámbito de competencia de la Política Nacional, las demás políticas integrales, los lineamientos, acciones, recomendaciones, convenios y demás bases de coordinación que se establezcan por el Sistema.

Los sistemas locales concurrirán al Sistema mediante la representación que ostente uno de los integrantes del órgano de coordinación a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 19. El Sistema Nacional contará con un Secretario Técnico designado por el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana. Para ser Secretario Técnico se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de nivel Licenciatura en carreras afines al cumplimiento de las funciones que esta Ley le atribuye;
III. Comprobar experiencia mínima de cinco años en el desempeño de actividades relacionadas con la administración pública, la fiscalización, la transparencia o la rendición de cuentas;
IV. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público;
V. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cinco años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y
VI. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento.

Artículo 20. El Sistema Nacional estará dotado de los recursos humanos, financieros y materiales suficientes para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones.

El Comité Coordinador aprobará anualmente, en los plazos establecidos de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el proyecto de presupuesto del Sistema, mismo que será incorporado al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que presentará el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis y aprobación, de conformidad con la fracción I del artículo 5 de dicha legislación presupuestaria.

CAPÍTULO II
De las funciones del Sistema

Artículo 21. Son funciones del Sistema:

I. El diseño, implementación y supervisión de la Política Nacional y demás políticas

integrales, como base para la coordinación intergubernamental de políticas públicas sistemáticas, continuas y evaluables para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;

II. La reglamentación de la operación y funcionamiento eficientes del Sistema y sus instancias internas, así como la efectiva coordinación y cooperación intergubernamentales;

III. El establecimiento de los lineamientos tendientes a sustentar la disposición permanente de los órganos integrantes del Sistema hacia la cooperación y coadyuvancia con los sistemas nacionales de Transparencia y de Fiscalización, para efecto del mejor cumplimiento de sus respectivos objetos y objetivos;

IV. La coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia para la implementación de las acciones necesarias para garantizar el acceso a la información que permita prevenir o combatir la corrupción, incluyendo aquella relacionada con faltas administrativas, faltas graves y hechos de corrupción y demás que se genere en el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente ley;

V. Promover, en coordinación con el Sistema Nacional de Fiscalización, las acciones necesarias para garantizar la adecuada aplicación de los recursos de la hacienda pública; así como el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente ley;

VI. Evaluar el cumplimiento de la Política Nacional, las demás políticas integrales, los lineamientos, acciones, recomendaciones, convenios y demás instrumentos y determinaciones que establezca el Comité Coordinador.

VII. El establecimiento de esquemas de cooperación internacional del Sistema y los órganos que lo conforman;

VIII. Establecer los lineamientos de conducta que deberán observar los servidores públicos, para efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés por parte de los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno;

IX. Promover la homologación de criterios entre las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios respecto de las disposiciones de la presente ley;

X. Establecer, resguardar y mantener actualizado el Registro Público de Intereses, Patrimonial y Fiscal a que hace referencia el Título Tercero de esta Ley, y

XI. Promover la simplificación y homologación de los procedimientos para la recepción de denuncias y la conducción de los procedimientos administrativos a que hace referencia esta ley, aprovechando las tecnologías de la información y las experiencias de organismos o sistemas, nacionales e internacionales.

Artículo 22. El Sistema celebrará reuniones plenarias de carácter trimestral, a convocatoria de su presidente. El orden de los asuntos a desahogar será aprobado por el Comité Coordinador y comunicado con oportunidad a todos los integrantes del Sistema por vía del Secretario Técnico.

CAPÍTULO III
De las atribuciones de los órganos del Sistema

Artículo 23.- Son atribuciones del Comité Coordinador:

I. La elaboración de su programa de trabajo anual;

II. La instrumentación de las bases que establece esta ley y el diseño, aprobación y aplicación de bases adicionales para garantizar la efectiva coordinación de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno en las materias de fiscalización y

control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

III. La aprobación e instrumentación de la Política Nacional y de otras políticas integrales en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación;

IV. Velar por la estricta observancia de las bases, políticas, lineamientos y demás instrumentos y medidas que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto y los objetivos de la presente Ley;

V. Requerir información a los entes públicos, respecto del cumplimiento de la Política Nacional y las demás políticas integrales implementadas, así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación, de conformidad con los indicadores generados para tales efectos;

VI. Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno y rendición de cuentas;

VII. La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la formación, resguardo y actualización de la plataforma informática que albergue el Registro Nacional a que hace referencia el Título Tercero de esta Ley;

VIII. La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley;

IX. La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja;

X. La determinación de los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación de las medidas de protección de denunciantes, informantes y testigos;

XI. Opinar sobre el proceso de planeación de los programas de auditoría de los órganos de fiscalización y control integrantes del Sistema;

XII. La aprobación de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones, así como de la implementación de la Política Nacional y de otras políticas integrales, programas y acciones en materia de combate a la corrupción y su comunicación a los integrantes del Sistema, a las cámaras del Congreso de la Unión, a los congresos de las entidades federativas, a los titulares de los poderes ejecutivos Federal y locales, así como su difusión pública en el Diario Oficial de la Federación, por internet y demás medios electrónicos e impresos;

XIII. Promover el establecimiento de lineamientos y convenios de cooperación con las autoridades financieras y fiscales para facilitar a los órganos de fiscalización y de control interno la consulta expedita y oportuna a la información que resguardan relacionada con la investigación de faltas administrativas y hechos de corrupción en los que estén involucrados flujos de recursos económicos;

XII. Celebrar convenios con instituciones académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil para promover el óptimo cumplimiento de los objetivos del Sistema;

XIV. La reglamentación de la operación y funcionamiento eficientes del Sistema y sus instancias internas;

XV. La interpretación en el ámbito de sus atribuciones de esta Ley, los lineamientos y demás disposiciones reglamentarias, y

XVI. Las demás que determinen las disposiciones reglamentarias.

Artículo 24. Son atribuciones del Comité de Participación Ciudadana:

I. La elaboración de su programa de trabajo anual;
II. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema en materia del Registro Nacional a que se refiere el Título Tercero y la demás que recabe el Comité Coordinador para el cumplimiento de sus atribuciones;
III. Promover denuncias cuando tenga conocimiento de conductas de servidores públicos o particulares que puedan constituir o relacionarse con faltas administrativas graves o hechos de corrupción;
IV. Constituirse como coadyuvante de las autoridades fiscalizadoras de control interno en los procedimientos que se substancien ante el Tribunal;
V. Presentar ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes los medios de impugnación dirigidos a combatir la clasificación relativa a la gravedad de las faltas administrativas que realicen los órganos fiscalizadores y de control interno, las resoluciones de no ejercicio de la acción penal o la abstención prolongada para ejercitarla por la Fiscalía, así como las resoluciones definitivas que emitan los órganos fiscalizadores o de control interno o el Tribunal respecto de los procedimientos sancionatorios por faltas administrativas que los propios órganos se abstengan de recurrir;
VI. Brindar orientación, atención y acompañamiento a las personas para la denuncia ante el sistema electrónico de denuncia y queja;
VII. Establecer y vigilar el correcto funcionamiento de la unidad de vinculación, orientación y participación ciudadana en la ejecución de las atribuciones a las que se refieren las fracciones IV, V y VI de este artículo;
VIII. Proponer al Comité Coordinador, para su consideración:
    a. El proyecto de la Política Nacional, así como proyectos para su ajuste y modificación;
    b. Proyectos de políticas integrales en la materia;
    c. Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
    d. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación la plataforma informática que albergue el Registro Nacional a que se refiere el Título Tercero de esta Ley,
    e. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta Ley;
    f. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.
XIII. Emitir indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la Política Nacional, otras políticas integrales y los programas y acciones que implemente el Sistema;
IX. Realizar observaciones a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;
X. Proponer al Comité Coordinador la emisión de las recomendaciones a que hace referencia la fracción VI del artículo 23 de esta Ley;

XI. Proponer al Comité Coordinador la emisión o modificación de instrumentos, lineamientos y mecanismos a que hace referencia la fracción X del artículo 23 de esta Ley.
XII. Promover mecanismos de participación ciudadana para el diseño y revisión de los lineamientos, programas, estrategias y acciones que implemente el Sistema;
XIII. Elaborar lineamientos relativos a la ética y conducta del servidor público, así como para la adopción de mejores prácticas para la mejora de la gestión pública y la prevención, la fiscalización y el combate a la corrupción;
XIV. Elaborar estudios, diagnósticos y propuestas en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;
XV. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus actividades específicas y hacerlos públicos por vía del Secretario Técnico;
XVI. Establecer programas de capacitación, promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materia de mejora de la gestión pública y la prevención, la fiscalización y el combate a la corrupción, y
XVII. Las demás que determinen las disposiciones reglamentarias.

Artículo 25. Son atribuciones del Secretario Técnico del Sistema:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y de su Presidente;
II. Elaborar en acuerdo con el Comité de Participación Ciudadana la evaluación del cumplimiento de la Política Nacional, las demás políticas integrales, los lineamientos, acciones, recomendaciones, convenios y demás instrumentos y determinaciones que se establezcan por el Comité Coordinador;
III. Proveer al Comité de Participación Ciudadana de la información que le solicite así como de aquella relevante para el óptimo desempeño de sus atribuciones, de conformidad con los lineamientos que emita el Comité Coordinador;
IV. Colaborar con los integrantes del Sistema para promover la fluidez en la comunicación y difusión de la información que se genera en el Sistema, así como garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación;
V. Administrar el Registro a que se refiere el Título Tercero de esta Ley, conforme a los lineamientos que emita el Comité Coordinador;
VI. Administrar el sistema electrónico de denuncia y queja y dar curso a las denuncias presentadas, conforme a los lineamientos que emita el Comité Coordinador;
VII. Elaborar los proyectos de informes del Sistema, someterlos a la revisión y observación del Comité de Participación Ciudadana y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación, conforme a las disposiciones reglamentarias aplicables;
VIII. Publicar los informes de actividades específicas aprobados por el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana;
IX. Elaborar, en los términos que establece esta Ley y bajo instrucciones del Comité Coordinador, proyectos de recomendaciones no vinculantes y comunicarlas a las autoridades correspondientes una vez aprobadas;
X. Recibir y comunicar al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana los informes sobre la atención que las autoridades brinden a las recomendaciones, dando seguimiento a su implementación y resultados y publicidad por vía de Internet y en medios impresos y electrónicos;

XI. Informar periódicamente al Comité Coordinador y al Comité de Participación Ciudadana, por vía de su titular, del desempeño de sus funciones, y
XII. Las demás que establezcan las disposiciones reglamentarias.

Artículo 26. El Comité de Participación Ciudadana ejercerá las atribuciones definidas en las fracciones IV, V y VI del artículo 24 por conducto de la unidad de vinculación, orientación y participación ciudadana de conformidad con los lineamientos generales y disposiciones reglamentarias.

Artículo 27. Los comités del Sistema trabajarán de manera colegiada y adoptarán sus decisiones por mayoría absoluta de sus miembros, procurando en todo momento el consenso, salvo cuando esta Ley establezca una mayoría calificada para el comité respectivo.

Artículo 28. Los comités del Sistema celebrarán reuniones públicas ordinarias con la periodicidad que determine la reglamentación respectiva, celebrándose cuando menos una reunión trimestral.

Para la validez de sus actos, a las reuniones del Comité de Coordinación deberán concurrir cuando menos cinco integrantes y a las que celebre el Comité de Participación Ciudadana cuando menos tres de sus integrantes.

El titular de los comités podrá convocar a reuniones extraordinarias, a las que deberán concurrir el mismo número de integrantes.

En caso de existencia de conflicto de intereses de alguno de los integrantes de cualquier comité, sobre algún asunto a tratar, éste deberá excusarse de su participación en la discusión, denuncia o proceso de investigación del mismo.

Artículo 29. El Comité Coordinador podrá invitar para el desahogo de sus reuniones, según la naturaleza de los asuntos a tratar, a los representantes de los sistemas locales y los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, así como a las personas, instituciones y representantes de la sociedad. En todo caso, los representantes de los sistemas locales y de los organismos autónomos podrán solicitar ser invitados a estas reuniones.

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana podrán concurrir con voz, pero sin voto, a las reuniones del Comité Coordinador.

Artículo 30. El Comité de Participación Ciudadana podrá invitar a las personas, órganos e instituciones que considere oportuno para el mejor desahogo de sus reuniones.

Artículo 31. Los integrantes de los comités podrán formular al Comité Coordinador propuestas de acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

CAPÍTULO IV
Política Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción

Artículo 32. La Política Nacional de Prevención y Combate a la Corrupción es el instrumento público transversal en el que, de conformidad con la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, se tendrá por objeto delinear el diseño y promoción de políticas integrales en

materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan.

Asimismo establecerá los mecanismos de coordinación en los tres órdenes de gobierno, así como los programas y las acciones concretas para el combate integral y multidisciplinario de la corrupción.

Artículo 33. El Sistema determinará la Política Nacional, actualizándola anualmente. Las partes integrantes del Sistema implementarán las medidas de coordinación necesarias entre los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, para la coordinación, ejecución y seguimiento interinstitucional de dicha Política.

Artículo 34. Todo ente público está obligado a diseñar, crear y construir estructuras, normas, procesos y políticas públicas que minimicen los riesgos de corrupción, y hagan posible su identificación y administración.

El sistema promoverá la investigación, difusión de materiales y capacitación de los servidores públicos y de la ciudadanía en general.

Artículo 35. Los lineamientos y criterios que establezca el Sistema respecto de la Política Nacional son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los recursos públicos y deberá utilizar la información que generen los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores de gestión de las políticas públicas:

I. Planificación,
II. Presupuesto,
III. Gestión financiera pública,
IV. Gestión de programas y proyectos, y
V. Seguimiento y evaluación.

Para cumplir con estas obligaciones, el Sistema establecerá convenios de colaboración con los integrantes del Subsistema Nacional de Evaluación, al que se refiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Artículo 36. Los estudios del Sistema respecto del fenómeno de la Corrupción deberán hacerse de manera federal, por entidad federativa y a nivel municipal, para lo cual deberán hacerse las previsiones presupuestarias correspondientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que el Subsistema Nacional de Evaluación pueda llevar a cabo los censos, conteos y encuestas correspondientes.

CAPÍTULO IV
De las Recomendaciones

Artículo 37. Las recomendaciones que emita el Comité Coordinador serán públicas y harán referencia a procesos, mecanismos, estructuras, normatividad y actos que generen o puedan incidir en la generación de faltas administrativas o hechos de corrupción, o que reporten

debilidades en el desempeño, en la eficiencia del control interno o en los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades de los distintos órdenes de gobierno a las que estén dirigidas.

Artículo 38. Las recomendaciones no tendrán carácter vinculante, pero las autoridades destinatarias deberán informar de manera justificada al Comité Coordinador, por vía de la Secretaría Técnica del Sistema y en término que no exceda de 10 días hábiles contados a partir de que les sean comunicadas, sobre la atención que habrán de brindarles.

Artículo 39. Una vez que la autoridad destinataria dé cumplimiento a las medidas de atención de las recomendaciones contenidas en el informe a que se refiere el artículo anterior, remitirá un reporte al Comité Coordinador en el que relacione las acciones implementadas y su resultado.

Artículo 40. En caso de que el Comité Coordinador considere que las medidas de atención a la recomendación no están justificadas con suficiencia, que la autoridad destinataria no realizó las acciones necesarias para su debida implementación o cuando ésta sea omisa en los informes a que se refieren los artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad que concurra a una reunión de trabajo en la que se aborde el caso, sin perjuicio de la potestad de los órganos legislativos competentes para ejercer los mecanismos de control político a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Si el Comité Coordinador advierte que por las omisiones la autoridad puede incurrir en algún tipo de responsabilidad, presentará las denuncias que correspondan conforme a lo dispuesto por esta Ley.

TÍTULO TERCERO
Del Registro Nacional de los Servidores Públicos

CAPÍTULO I
Generalidades

Artículo 41. El Sistema implementará el Registro Nacional de los Servidores Públicos con la finalidad de publicitar y actualizar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como de las responsabilidades y las sanciones a las que sean sujetos.

Artículo 42. El Registro Nacional será público, y será un instrumento de consulta obligatoria para todos los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órdenes de gobierno, en sus procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo de cualquier persona.

Los organismos electorales nacionales y locales, estarán obligados a consultar este registro en el ámbito de sus competencias, para la definición de candidaturas a cargos de elección popular.

Artículo 43. El Registro Nacional será instrumentado a través de una plataforma digital administrada, implementada y operada por el Sistema, por conducto de su Secretaría Técnica y de los Sistemas Locales, de conformidad con la normatividad que establezca el Comité Coordinador del Sistema, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.

Todas las actuaciones y consultas ante el Registro Público Nacional serán gratuitas.

Artículo 44. La plataforma digital del Registro Nacional estará conformada por, al menos, los siguientes elementos:

I. Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal;
II. Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones;
III. Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja.

Artículo 45. El Sistema y los Sistemas Locales promoverán la publicación de la información en datos abiertos y accesibles así como los principios de transparencia y acceso a la información, contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

Artículo 46. El Sistema establecerá las medidas necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del Registro Nacional y sus componentes, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso de los módulos establecidos en el artículo 44, por parte de los usuarios.

Artículo 47. El Sistema, los Sistemas Locales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, están obligados a utilizar el Registro Nacional para el cumplimiento de las finalidades y funciones previstas en esta Ley, así como coadyuvar con el Sistema, a través de la Secretaría Técnica, para el buen funcionamiento del Registro Nacional. Asimismo, estarán obligados a intercambiar información y bases de datos en los procesos de investigación, de conformidad con los lineamientos que el Sistema expida para estos efectos.

CAPÍTULO II
Del Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal

Artículo 48. El Registro Nacional contará con un Módulo de Registro de Declaraciones de Intereses, Patrimonial y Fiscal cuya función es la de registrar y dar seguimiento de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las personas físicas y morales que reciban o apliquen recursos públicos federales, de conformidad con los lineamientos que expida el Sistema.

Artículo 49. De presentarse alguna irregularidad en las declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos, elComité de Participación Ciudadana lo denunciará a las instancias competentes.

Cuando se adviertan situaciones que hagan presumible una falta administrativa, una falta administrativa grave, un hecho de corrupción o un delito, el Secretario Técnico lo informará al Comité de Participación Ciudadana para que éste promueva ante las autoridades competentes la investigación y en su caso, la determinación de responsabilidades.

Junto con la declaración patrimonial, se presentarán la declaración de intereses y copia de la declaración anual a la que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo 50. Es obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones o dependencias que designe su normatividad, recibir y remitir al Sistema, mediante el Registro Nacional, las declaraciones de los servidores públicos que tengan adscritos.

Artículo 51. Sin perjuicio de lo que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los formatos de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses publicados en el Registro Nacional, deberán contener, como mínimo, lo siguiente:

I. Ambas declaraciones, deberán incluir los siguientes datos:
   a) Datos generales del declarante;
   b) Datos curriculares del declarante;
   c) Experiencia laboral del declarante;
   d) Datos generales y curriculares del cónyuge, concubina o concubinario, así como de los dependientes económicos;
   e) Datos del encargo que inicia;
   f) Antecedentes en el servicio público del declarante;
   g) La manifestación expresa en la que consienta o prohíba la publicación de la información contenida en la declaración, y
   h) La manifestación expresa de declarar la verdad.

II. En la declaración patrimonial se deberá contemplar por lo menos los siguientes datos adicionales:
   a) Remuneración mensual neta del declarante por el cargo que inicia;
   b) Remuneración mensual neta del cónyuge, concubina o concubinario y de los dependientes económicos;
   c) Ingreso anual neto, tanto del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos durante el año calendario inmediato anterior;
   d) La relación de los bienes inmuebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;
   e) La relación de los vehículos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;
   f) La relación de los bienes muebles del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;
   g) La relación de las inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos;
   h) Los adeudos del declarante, de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos, y
   i) Cualquier observación o aclaración que desee hacer el declarante.

III. En la declaración de intereses se describirá la información correspondiente a:
   a) Los intereses de carácter económico y financiero, tales como participación en direcciones y consejos de administración; participación accionaria en sociedades; préstamos, créditos y obligaciones financieras;
   b) Las actividades profesionales o empresariales, dependientes o independientes, que ha desempeñado de forma permanente u ocasional independientemente sean remuneradas o no;

c) La participación en cualquier cargo honorario;
d) La participación en organizaciones sin fines de lucro o que lleven a cabo actividades filantrópicas;
e) Los apoyos financieros o materiales recibidos por el declarante en cualquier forma;
f) Los apoyos financieros o materiales realizados por el declarante en cualquier forma;
g) Si existen viajes financiados por terceros, y
h) Cualquier interés que en opinión del declarante no se encuentra contenido en el formato.

En la declaración de intereses, el servidor público deberá manifestar los nombres o razones sociales de las personas físicas o morales con las que sostuvo alguna de las relaciones contenidas en esta fracción durante los últimos cinco años, así como los valores monetarios de los intereses que puedan ser traducidos como tales.

Asimismo, el declarante deberá manifestar las obligaciones contenidas en la fracción III con respecto a los intereses de su cónyuge, concubina o concubinario y de sus dependientes económicos.

Artículo 52. El Secretario Técnico podrá solicitar a los registros públicos de la propiedad y del comercio de las entidades federativas, a las autoridades catastrales municipales, o a las autoridades que correspondan, incluyendo a fedatarios públicos, la información que considere pertinente para verificar la veracidad del contenido de la declaración patrimonial.

CAPÍTULO III
Del Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones

Artículo 53. El Registro Nacional contará con un Módulo de Seguimiento de Responsabilidades y Sanciones cuya función es dar seguimiento a las sanciones que sean impuestas a los servidores públicos y a los particulares en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Asimismo, fungirá como un instrumento de consulta que ayude a verificar el estatus de cualquier persona, para los procesos de selección, incorporación, contratación, comisión o empleo dentro de la función pública o puestos de elección popular.

Artículo 54. Las resoluciones de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, serán de carácter público y estarán a disposición para consulta, de quien las solicite, en la plataforma digital del Registro Nacional.

Solo se darán a conocer por el mismo tiempo de la duración de la sanción que haya sido impuesta por los órganos competentes, transcurrido el lapso serán archivadas para los efectos de reincidencia que determinen las leyes aplicables a la materia.

Artículo 55. Los formatos publicados en el Registro Nacional respecto del seguimiento de responsabilidades y sanciones por lo menos deberán contener la siguiente información:

I. Nombre del sancionado.
II. Describir si es una falta administrativa grave o no grave.

III. Implicación de la Sanción.
IV. Ente donde prestaba o presta servicio al momento de la falta administrativa.
V. Tiempo que dura o duró la Sanción.
VI. Órgano que emite la resolución.

Artículo 56. Es obligación de los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, a través de las instituciones o dependencias que designe su normatividad, notificar al Sistema las sanciones que impongan.

CAPÍTULO IV
Del Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja

Artículo 57. El Registro Nacional contará con un Módulo del sistema electrónico de denuncia y queja, cuya función es simplificar y homologar los procedimientos para la recepción de denuncias y quejas de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, aprovechando las tecnologías de la información que se implementen.

Artículo 58. El procedimiento para la presentación de las denuncias y quejas se realizará de conformidad con lo establecido en el Título cuarto de esta Ley.

Los procesos y procedimientos para sustanciar las denuncias o quejas se conducirán de conformidad con la normatividad aplicable a la instancia competente.

TÍTULO CUARTO
De la denuncia, la queja, la protección a personas y beneficios.

CAPÍTULO I
De la Denuncia y la Queja

Artículo 59. La denuncia y la queja de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, es la acción de poner en conocimiento de las autoridades competentes las conductas referidas para que sean investigadas, calificadas y sancionadas por los órganos competentes en los términos que establezcan las leyes de la materia.

Artículo 60. Con el objeto de promover la denuncia, las leyes federales y locales deberán establecer:

I. Un sistema de incentivos para la denuncia de falta administrativa grave o un hecho de corrupción.
II. Mecanismos eficaces para la protección de denunciantes y testigos.

Artículo 61. Toda persona que tenga conocimiento de una falta administrativa, falta administrativa grave o un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente, dicha denuncia puede o no estar acompañada de una solicitud expresa de medidas de protección.

La denuncia podrá presentarse ante cualquiera de los órganos integrantes del Sistema.

El Estado, por conducto del Sistema, deberá garantizar la integridad de los denunciantes, testigos y

perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de corrupción y protegerá la identidad de aquellos que así lo requieran, otorgando medidas de protección cuando éstas sean solicitadas expresamente.

Artículo 62. La queja debe ser presentada por cualquier persona que, teniendo conocimiento de las conductas descritas en el artículo anterior, es afectada directamente o indirectamente o que le pueda generar una afectación en el desempeño de sus funciones o atribuciones.

Artículo 63. Cuando se tenga conocimiento público de hechos de corrupción o faltas administrativas graves, el Secretario Técnico, de oficio, deberá solicitar a los órganos de control interno de los entes de gobierno o a la Auditoría Superior de la Federación o a ambos según sea el caso, que realicen las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cuando se advierta la posible existencia de un delito, el Secretario Técnico deberá dar vista a la Fiscalía.

Artículo 64. El Sistema contara con un sistema electrónico de recepción de quejas o denuncias, el cual será operado por la Secretaría Técnica del Sistema, su funcionamiento será establecido en el reglamento que se emita para tal fin.

Artículo 65. Las quejas o denuncias que se hagan en el sistema electrónico deben contener por lo menos los siguientes elementos:

I. Datos generales del particular que realiza la denuncia, excepto en el caso de la denuncia anónima;
II. Descripción sucinta de los hechos que motivaron la queja o denuncia, así como el día y lugar donde ocurrieron; y
III. Nombre del Servidor público denunciado, así como del o de los particulares que intervinieron en los hechos, si es el caso, o datos generales que permitan identificarlos.

Artículo 66. La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen los órganos de control interno y los órganos de fiscalización Federal y locales, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente será calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que consten en el expediente administrativo. No obstante, las autoridades judiciales podrán solicitar la información pertinente, ante la posible existencia de un delito contra el honor de la persona denunciada.

Artículo 67. Sin demerito de lo establecido en los artículos anteriores, el Sistema otorga la atribución de ser receptores de denuncias o quejas a los siguientes integrantes:

I. La Fiscalía;
II. La Auditoría Superior de la Federación;
III. El Consejo de la Judicatura;
IV. Las cámaras del Congreso de la Unión;

V. La Secretaría;
VI. Cualquier integrante de los Sistemas Locales;
VII. Los Órganos de Control Interno; y
VIII. Los demás órganos administrativos o jurisdiccionales que determinen las leyes.

La denuncia o queja que sea recibida por alguna de las instancias señaladas en este artículo, deberá ser informada inmediatamente al Comité Coordinador por conducto de la Secretaría Técnica, mediante su inscripción en el Sistema Electrónico.

Artículo 68. Registrada la denuncia en el Sistema Electrónico, le será asignado un código numérico, que servirá para identificarla y darle seguimiento.

Artículo 69. La denuncia o queja será turnada a los órganos de control y de fiscalizaciónque resulten competentes para realizar la investigación y sustanciación del procedimiento, en los términos establecidos en la presente Ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas,la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y demás normatividad aplicable.

Artículo 70. Una vez remitida la denuncia o queja a los órganos competentes, el Comité Coordinador tiene la facultad de solicitarle información para conocer el estatus del asunto.

Las instancias competentes para realizar las investigaciones administrativas, pueden recabar prueba y efectuar investigaciones fuera del territorio nacional, así como prestar y solicitar cooperación técnica e intercambio internacional, por medio de la instancia competente, en cumplimiento con la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Artículo 71. Para tales efectos de esta ley y las norma jurídicas aplicables, no será sancionable quien en ejercicio de sus funciones públicas o responsabilidades privadas conozca y sustraiga para efectos de su denuncia o testimonio cualquier información reservada, protegida por algún grado de secrecía o privada.

No podrá ser impugnada como medio de probanza en las investigaciones de faltas administrativas graves o hechos de corrupción, la información a que hace referencia el párrafo anterior, pero ésta deberá ser fortalecida por otros medios para hacer prueba plena.

La información a que se hace mención en el primer párrafo, no tendrá el carácter de ser pública y solo será conocida por quienes integren el proceso, salvo que por resolución de la autoridad competente, determine lo contrario.

La divulgación de la información, referida en los párrafos anteriores, por alguna de las partes que intervienen en el proceso, será sancionada en los términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 72. Cuando de la resolución emitida por el órgano competente se desprenda que los denunciantes y testigos, a sabiendas que los actos motivo de la queja o denuncia no se han cometido, hayan simulado pruebas o indicios de su comisión o hayan formulado testimonios contra terceros sin estar ciertos de los actos seránsujetos de investigación administrativa o penal, en términos de lo que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la legislación penal aplicable.

CAPÍTULO II
Protección de los Denunciantes, Informantes y Testigos.

Artículo 73. El Sistema otorgará las garantías y medidas de protección básicas a la persona que realice la denuncia o la queja, a los testigos o a personas que sin tener esa calidad aporten información contundente en la investigación y a los terceros perjudicados.

Artículo 74. El Comité de Participación Ciudadana establecerá un Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos.

Este programa tendrá como objeto otorgar protección a los servidores públicos o particulares que denuncien o den testimonio sobre faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, a través de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su identidad, así como también a proteger su integridad, la de sus bienes, sus derechos laborales y la identidad, integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o su concubina o su concubinario, sus ascendientes o descendientes hasta el primer grado o parientes por consanguinidad en línea colateral hasta el primer grado.

Artículo 75. El Comité de Participación Ciudadana deberá determinar las medidas necesarias, sin demerito de las demás disposiciones contempladas en esta ley, para que ningún denunciante o quejoso sea sometido injustificadamente e ilegalmente a una destitución, remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado, reasignación o privación de funciones, calificaciones o informes negativos, privación de derechos; que se deriven como consecuencia de haber informado a la autoridad del acto de corrupción.

En caso de que se realicen los supuestos mencionados en el párrafo anterior o el denunciado realice actos de hostilidad u hostigamiento contra la persona referida, el Comité Coordinador por vía del Secretario Técnico, debe informar al Órgano de Control o a la autoridad competente que conozca del asunto, para que realice los actos tendientes al cese de las acciones aflictivas, dando a su vez vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o la Fiscalía General de la República, para que en el ámbito de su competencia realice las acciones que determine la ley.

Artículo 76. El Comité de Coordinador establecerá las bases de los mecanismos de protección a las personas que resulten perjudicados por la interposición de una queja o denuncia.

Las bases de los mecanismos de protección deben ser encaminadas a la protección de la integridad, los datos personales, su identidad, patrimonio o cualquier derecho humano que resulte o pude resultar afectado.

La protección del Sistema, en ningún caso, extinguirá la responsabilidad de las personas involucradas en los hechos ilícitos.

Artículo 77. Para la protección efectiva de denunciantes y testigos, las autoridades deberán realizar un adecuado análisis de riesgos y observar los siguientes principios:

I. Resguardo absoluto de los datos personales y familiares.
II. Resguardo de la integridad física, personal y familiar.

III. Atención prioritaria a las demandas razonables del testigo o denunciante.
IV. Protección de la fuente de empleo o negocios.
V. Creación de alternativas razonables a la fuente de ingresos.

Artículo 78. El Sistema y los sistemas locales serán responsables de supervisar, coordinar y emitir los lineamientos para la operación y funcionamiento de los Mecanismos de Protección.

Artículo 79. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, que deban implementar los mecanismos de protección determinados por el Sistema o algún sistema local, a través de las instituciones que determine su normatividad, deberán elegir al titular responsable que será quien decida sobre la admisión, duración de la protección, medidas a aplicarse, políticas de confidencialidad, operación y procedimientos.

Artículo 80. La admisión para el otorgamiento de mecanismos de protección, debe ser concedida en todos los casos de denuncia o queja y el titular al que se refiere el artículo anterior no debe sujetarla a la carga de la prueba para su concesión.

Adicionalmente, el titular de los mecanismos de protección realizará todas las acciones necesarias para salvaguardar la identidad del sujeto en el supuesto de la denuncia anónima.

Artículo 81. Sin demerito de lo dispuesto en preceptos anteriores, el titular que sea designado para otorgar los mecanismos de protección, deberá activar las providencias que estime necesarias ante la existencia o probabilidad fundada de amenazas, agresiones, intimidaciones o cualquier otro medio que afecte o ponga en peligro sustancial y específico la vida, integridad, patrimonio o seguridad laboral del denunciante, testigo, tercero perjudicado o víctima, y sus familiares hasta dentro del cuarto grado o el que establezca el sistema local competente.

Artículo 82. La información y documentación relacionada con las personas protegidas, será considerada como reservada y confidencial, en los términos que dispone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normatividad en la materia, con excepción de aquella de carácter estadístico la cual podrá ser proporcionada en los términos de la ley referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad de las personas sujetas a protección.

Artículo 83. El Reglamento de esta Ley determinará cuales son los mecanismos de protección a los que se hace referencia en este capítulo, pero deberá contemplar cuando menos los siguientes elementos:

I. La vulnerabilidad del denunciante o testigo sujeto a las medidas de protección;
II. La situación de riesgo;
III. La importancia del caso;
IV. La trascendencia e idoneidad de la denuncia o testimonio;
V. La capacidad de la persona para adaptarse a las condiciones del Programa de Protección de Denunciantes, Informantes y Testigos;
VI. La jerarquía del Servidor Público denunciado o el poder de daño de la persona señalada;
VII. Las medidas de protección laboral y personal del denunciante o quejoso, testigos y terceros perjudicados, y

VIII. Otras circunstancias que justifiquen la medida.

Artículo 84. El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones, otorgadas por el titular de los mecanismos de protección a los denunciantes y testigos será sancionada conforme a lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 85. Lo dispuesto en el artículo anterior se realizará, tomando en cuenta las siguientes consideraciones:

I. El perjuicio ocasionado al denunciante o testigo;
II. La afectación a los procedimientos;
III. La naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y jerarquía del infractor;
IV. La reincidencia en el acto, y
V. La intencionalidad con la que se haya actuado.

Artículo 86. El Sistema deberá establecer medidas y protocolos que aseguren la atención oportuna y la confidencialidad de la denuncia, así como de las solicitudes de medidas de protección a denunciantes, informantes y testigos de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Artículo 87. A fin de lograr los objetivos de esta Ley, el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana, en términos de sus atribuciones, podrán celebrar acuerdos, convenios o demás instrumentos jurídicos con personas físicas o morales, con autoridades federales, gobiernos, poderes u órganos de gobierno de las Entidades Federativas y de los Municipios, con los organismos públicos autónomos, así como con organismos de los sectores social y privado, nacionales e internacionales, que resulten conducentes para otorgar la protección de las personas.

Artículo 88. Las autoridades responsables del otorgamiento y ejecución de las medidas de protección de denunciantes, informantes y testigos de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, en el marco del principio de reciprocidad internacional y de conformidad con los tratados de los que el Estado es parte, considerarán solicitar y prestar facilidades a otros Estados que requieran de la aplicación de actos jurisdiccionales correspondientes a procesos penales.

CAPÍTULO III
De los Incentivos

Artículo 89. Las autoridades que desarrollen los procedimientos de investigación podrán autorizar el otorgamiento de incentivos cuando el denunciante proporcione información veraz, suficiente y relevante para la identificación y acreditación de la comisión de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción por el servidor público implicado.

Para los efectos del párrafo anterior, la persona que proporcione la información debe dar su nombre y una vía de contacto, en los datos generales requeridos por la fracción I del artículo 65.

En caso de incentivos económicos, los montos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal y a los lineamientos que para el efecto establezca el Sistema, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 90. El beneficio establecido, en el artículo anterior, no se aplicará si en el transcurso de las investigaciones se determina que el denunciante ha tenido algún grado de participación en faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción, que lo haya beneficiado directamente; pero podrá disminuir la sanción en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, siempre y cuando restituya el daño causado.

Artículo 91. No gozarán de los beneficios otorgados en este capítulo quienes generen las faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Sin embargo, aquellos que habiendo participado en las faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupcióndenuncien a los integrantes de la red que se ha generado, obtendrán una conmutación de la pena de acuerdo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 92. Cuando la información sea proporcionada por un servidor público, su colaboración en la identificación o acreditación de faltas administrativas, faltas administrativas graves o hechos de corrupción serán objetos de un reconocimiento de carácter no económico.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Sistema Nacional Anticorrupción, se instalará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Para ello, los integrantes del Comité Coordinador designados por esta Ley deberán designar a los integrantes del Comité Calificador en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

En la primera integración del Comité de Participación Ciudadana, se observará el procedimiento dispuesto en los artículos 15 y 16, salvo lo dispuesto por el párrafo anterior.

Para asegurar la renovación escalonada de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, el Colegio Calificador elegirá a los cinco Comisionados, determinando que uno durará en su encargo siete años, dos comisionados serán designados por cinco años y dos comisionados lo serán por tres años.

Una vez instalado el Comité de Participación Ciudadana elegirán a su presidente de entre sus integrantes.

Por única ocasión y en tanto se instalan los Sistemas Locales, la representación de las Entidades Federativas recaerá en un representante ciudadano nombrado por un Colegio Calificador designado por sus respectivos Congresos Locales.

Artículo Tercero. Con la finalidad de garantizar el establecimiento y el inicio de ejercicio de sus funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Locales darán suficiencia presupuestal.

Artículo Cuarto. El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente Decreto en un plazo no mayor a 180 días, contado a partir de su entrada en vigor.

Artículo Quinto. En los órdenes de gobierno, los poderes públicos, los órganos autónomos, así como las dependencias y entidades de la Administración Pública establecerán un Servicio Profesional de Carrera implementando medidas tendientes al cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.

El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán realizar las adecuaciones en sus respectivas leyes que regulen el Servicio Profesional de Carrera

Artículo Sexto. El Comité Coordinador, en un plazo no mayor a 30 días de haber iniciado su funcionamiento, deberá designar al Secretario Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo Séptimo. El Sistema Nacional Anticorrupción, dentro de los 90 días siguientes a su instalación, emitirá los lineamientos, protocolos, acuerdos y demás disposiciones reglamentarias a que hace referencia la presente ley.

Artículo Octavo. El Registro Nacional al que hace referencia el Título Tercero de la presente Ley, deberá entrar en operación dentro de los 180 días siguientes a la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo Noveno. Dentro de los treinta días siguientes a la instalación del Sistema, el Comité Coordinador, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, procurará la celebración de un acuerdo de colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a efecto de crear y establecer la competencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en México, con la finalidad de investigar todos los actos públicos de trascendencia social que puedan constituir hechos de corrupción, procurando la legalidad, legitimidad, justicia y transparencia de la función pública.

Artículo Décimo. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta Ley.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas, quedar como sigue:

Ley General de Responsabilidades Administrativas

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público y de observancia general en materia de responsabilidades por faltas administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos y las personas físicas y morales vinculadas.

Artículo 2.- Es objeto de la presente ley, establecer los principios, bases y procedimientos, para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción, así como garantizar el eficiente ejercicio de la función pública para proteger el patrimonio de la Nación.

Artículo 3.- Son objetivos de esta Ley:

I. Establecer los principios rectores que se deberán observar en el ejercicio de la función pública;
II. Distribuir competencias en materia de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos y particulares vinculados en faltas administrativas graves;
III. Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción;
IV. Determinar las conductas y supuestos que generan responsabilidad administrativa;
V. Establecer las sanciones que a cada caso correspondan y el órgano ante el que se seguirá el procedimiento respectivo;
VI. Determinar los medios y procedimientos para la denuncia de faltas administrativas o hechos de corrupción, la protección de denunciantes, testigos y afectados;
VII. Establecer las bases mínimas de funcionamiento del Registro de las declaraciones de ingresos, activos y pasivos, de intereses y fiscal del servidor público, así como los mecanismos para promover la investigación y determinación de responsabilidades en aquellos casos en que se detecten anomalías.
VIII. Fortalecer la rendición de cuentas de todos los sujetos obligados, y
IX. Definir los mecanismos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley.

Artículo ·4.- Para Efectos de Esta Ley se entenderá por:

I. Auditoría: La Auditoría Superior de la Federación;
II. Conflicto de Interés: Toda conducta, acción u omisión que implica el provecho de la función pública en beneficio de un interés particular propio o de un tercero o que afecte el desempeño imparcial del Servidor Público en su empleo, cargo o comisión.
III. Fiscalía: La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
IV. Función Pública: Cualquier acción u omisión que por motivo de su carácter de servidor público o del ejercicio de funciones, facultades y atribuciones conferidas por una norma jurídica, realice una persona a nombre del Estado.
V. Hecho de Corrupción: El resultado de las acciones u omisiones de Servidores Públicos o particulares, de carácter ilícito, que persiguiendo un provecho particular genera un daño al patrimonio federal, local o municipal

independientemente de su naturaleza penal o administrativa;

VI. Órganos Internos de Control: Los órganos internos de control de los entes públicos, independientemente de su denominación;

VII. Registro Nacional: El Registro Nacional de los Servidores Públicos a que hace Referencia la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

VIII. Secretaría: La Secretaría de Control Interno de la Administración Pública Federal;

IX. Servidor Público: Las personas así definidas por el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados y convenciones de los que sea parte el Estado mexicano;

X. Sistema: El sistema Nacional Anticorrupción;

XI. Sistemas locales: Los sistemas anticorrupción de las Entidades Federativas, y

XII. Tribunal: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Capítulo II.
De los Principios rectores de la Función Pública.

Artículo 5.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, así como sus servidores públicos, deberán observar los siguientes principios en el ejercicio de su Función Pública:

I. Austeridad: Ejercer sus funciones salvaguardando el patrimonio del Estado, aprovechando con racionalidad los recursos económicos y materiales que le sean asignados.

II. Disciplina: Cumplir con su deber ajustándose a las políticas y normas de la institución;

III. Eficiencia: Obligación del servidor público de ejercer sus facultades o atribuciones de manera efectiva, no sujeta a mayores condicionantes que las que establece la normatividad aplicable y absteniéndose de cualquier acción u omisión que cause la suspensión o deficiencia de la función que le sea encomendada o el aumento significativo de los costos proyectados;

IV. Honradez: El ejercicio de funciones observando una conducta ética y absteniéndose de obtener provechos indebidos o cualquier tipo de beneficio que no forme parte de su remuneración conforme a lo dispuesto por el artículo 127 constitucional y su legislación reglamentaria;

V. Imparcialidad: Obligación de mantenerse ajeno a los intereses de las partes que recurren a una función pública y adoptando sus resoluciones o actos conforme a criterios que de manera objetiva privilegien el mejor derecho;

VI. Integridad: El ejercicio de la función pública conforme a lo dispuesto en el Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses respectivo;

VII. Lealtad: Obligación de ejercer la función pública con el mayor empeño, absteniéndose de representar intereses contrarios al Estado o cualquiera de sus componentes, y cualquier acto u omisión que generen un daño a aquel;

VIII. Legalidad: Obligación del servidor público de fundar y motivar sus resoluciones y actos, conforme a la norma aplicable;

IX. Legitimidad: Capacidad para ejercer la función pública de manera válida, justa y eficaz, en congruencia con lo dispuesto por las normas jurídicas aplicables;

X. Rendición de Cuentas: Obligación de permanecer en capacidad de explicar el sentido de las decisiones tomadas en ejercicio de la función pública y sus resultados, presentando indicadores objetivos y adoptando las mejores prácticas en la materia;

XI. Responsabilidad: Obligación del Servidor Público de asumir el compromiso de cumplir con las tareas encomendadas;

XII. Pro Persona: Obligación de ejercer la función pública procurando la protección más amplia al interés legítimo del gobernado, haciendo una interpretación extensiva cuando protejan derechos y restringida, cuando se limite su ejercicio, y

XIII. Transparencia: Obligación de documentar la función pública ejercida y hacer accesible y pública la información generada, de conformidad con la legislación especial en la materia.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN DE AUTORIDADES

Capítulo I
De la Coordinación Federalista.

Artículo 6.- Las autoridades de la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley, y establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias las responsabilidades administrativas de conformidad con los principios, procedimientos y plazos establecidos en esta Ley.

El Sistema establecerá las bases y principio de concurrencia, colaboración y coordinación entre los organismos e instituciones que lo componen en la federación, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 7.- Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación la promoción ante el Tribunal, de las responsabilidades administrativas que advierta de su actividad fiscalizadora, respecto de la conducta de servidores públicos federales, de las Entidades Federativas o municipales y las personas físicas o morales involucradas.

Corresponde a la Secretaría la coordinación en el ejercicio de las funciones de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en los términos dispuestos por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Corresponde a los órganos internos de control de los entes federales la promoción ante el Tribunal, de las responsabilidades administrativas respecto de la conducta de servidores públicos adscritos al ente que integran y las personas físicas o morales involucradas.

Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría y a los órganos internos de control de los entes federales, la coordinación y coadyuvancia en la investigación, substanciación y promoción de responsabilidades ante el tribunal.

Artículo 8.- Corresponde a las entidades locales de fiscalización la promoción ante el Tribunal de la entidad federativa que corresponda, de las responsabilidades administrativas que advierta de su actividad fiscalizadora, respecto de la conducta de los servidores públicos de las Entidades Federativas o municipales y las personas físicas o morales involucradas.

Las entidades Locales de fiscalización darán vista a la Auditoría Superior de la Federación de las investigaciones relativas a recursos federales que administren o ejerzan los estados y los municipios, a efecto de que ésta determine la fiscalización directa o en coordinación.

Corresponde a los órganos internos de control de los entes locales o municipales, la promoción ante el Tribunal local que corresponda, de las responsabilidades administrativas respecto de la conducta de servidores públicos adscritos al ente que integran y las personas físicas o morales involucradas.

Corresponde a las entidades locales de fiscalización y a los órganos internos de control de los entes locales, la coordinación y coadyuvancia en su ámbito competencial, para la investigación, substanciación y promoción de responsabilidades ante el tribunal local que corresponda.

Artículo 9.- Es obligación de los órganos de fiscalización de la federación y las entidades federativas así como de los órganos internos de control de los entes federales y locales, proporcionar la información que se les solicite para el ejercicio de las facultades de evaluación, control y fiscalización de cualquiera de los mismos.

En la investigación y sustanciación de responsabilidades administrativas que sean competencia de autoridades federales y de las entidades federativas, la Auditoría, la Secretaría y los Órganos Internos de Control se coordinarán con los órganos locales de fiscalización y los órganos internos de control locales de conformidad con las bases que al efecto establezca el Sistema.

El Sistema establecerá los mecanismos de cooperación e intercambio de información para la investigación de responsabilidades de diversa naturaleza.

Artículo 10.- Las conductas que generan responsabilidad administrativa grave y los hechos de corrupción relacionados con el ejercicio de la función pública o la aplicación de recursos públicos federales, que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, serán sancionables incuso cuando se hayan verificado en territorio extranjero. Para tales efectos, el Sistema promoverá mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción.

La cooperación internacional se basará en los principios de cooperación, reciprocidad y rendición de cuentas, y se sujetará a los mecanismos de transparencia, control y evaluación establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.

La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría y el Tribunal mantendrán permanentemente informado al Sistema de la creación, vigencia, funcionamiento y resultados de los mecanismos de cooperación internacional para el combate a la corrupción.

Capítulo II
De la Coordinación Interinstitucional

Artículo 11.- En el cumplimiento del objeto y los objetivos de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría, celebrarán convenios generales de colaboración que permitan la coadyuvancia, cooperación e intercambio de información

Los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida por la Constitución mantendrán la coordinación técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación para el

ejercicio de su función fiscalizadora.

Artículo 12.- Los entes públicos federales coadyuvarán en la integración de las investigaciones por faltas administrativas a que se refiere esta Ley, así como en el ejercicio de las facultades de fiscalización y control de la auditoría y los órganos internos de control.

La auditoría y los órganos internos de control se dirigirán en queja al Sistema Nacional Anticorrupción en el caso de las solicitudes de coadyuvancia, coordinación y colaboración que no sean debidamente atendidas. El Comité Coordinador del Sistema adoptará las determinaciones que resulten conducentes de conformidad con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de las responsabilidades en que incurran los entes que no presten el debido auxilio al ejercicio de las funciones a que hace referencia este artículo.

Artículo 13.- La Secretaría coordinará las investigaciones de los órganos internos de control de la Administración Pública Federal que se refieran a hechos o actos coincidentes o conexos en función, circunstancias, o probables responsables, a efecto de identificar faltas administrativas sistemáticas.

Artículo 14.- El Tribunal, los tribunales locales, así como los órganos internos de control federales y locales remitirán a la fiscalía o a las fiscalías locales, según corresponda, copia del expediente en el que se advierta la probable comisión de un delito derivado de hechos de corrupción y darán seguimiento al procedimiento, ofreciendo todas las facilidades a la fiscalía en la integración de la carpeta de investigación y al juez de la causa en la conducción del proceso penal que en su caso se incoare.

La Fiscalía y las fiscalías locales remitirán al Sistema copia de las carpetas de investigación de delitos derivados de hechos de corrupción en que se advierta la probable comisión de faltas administrativas graves.

En el caso de que existan expedientes y carpetas de investigación que sean conocidos de manera simultánea por la Auditoría, las Auditorías locales, los órganos internos de control, la Fiscalía o las fiscalías locales; la coadyuvancia es obligatoria, por lo que las autoridades investigadoras deberán trabajar de manera conjunta y coordinada en la investigación y determinación de responsabilidades, ofreciendo cada uno dentro de su ámbito competencias, las mayores facilidades para contribuir al mejor ejercicio de las facultades del otro.

TÍTULO TERCERO
DEL RÉGIMEN DE RESPOSABILIDADES

Capítulo I
De la Conducta de los Sujetos Obligados.

Artículo 15.- Son sujetos obligados a la observancia de esta Ley:

I. Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno;
II. Los servidores públicos, y

III. Las personas físicas o morales, públicas o privadas a la que se le destinen o que ejerzan recursos públicos, o que se vean vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de corrupción.

Artículo 16.- Será responsabilidad de los sujetos obligados ajustarse en el desempeño de su función pública, a las obligaciones contenidas en este ordenamiento, la Política Nacional para el Combate a la Corrupción, los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y demás disposiciones jurídicas que les sean aplicables.

Artículo 17.- Los sujetos obligados ejercerán con probidad sus funciones y los recursos que reciban o ejerzan, procurando el cumplimiento de los objetivos de los programas y las políticas públicas y resguardando el patrimonio del Estado.

La normatividad aplicable a los sujetos obligados incorporará medidas preventivas y de control para procurar la oportuna detección de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Los órganos internos de control implementarán los mecanismos de fiscalización, control y evaluación que el Sistema determine, para tal efecto adoptarán indicadores objetivos y estandarizados de rendición de cuentas. Los entes públicos otorgarán las máximas facilidades para la investigación de los actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas o hechos de corrupción.

La falta de cooperación o el entorpecimiento deliberado de las investigaciones mencionadas en el párrafo anterior constituirán falta administrativa grave, en términos de la fracción IV del artículo 33 de esta Ley, independientemente de las demás responsabilidades a que haya lugar.

Artículo 18.- Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno adoptarán un Código de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto expida el Sistema y adecuado a sus particulares funciones.

Artículo 19.- A efecto de procurar la protección del patrimonio nacional, los servidores públicos no podrán gozar de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier otro beneficio adicional a su remuneración o salario; que no estén establecidos de manera cuantificable en disposiciones legales y administrativas de observancia general.

Los sujetos obligados reportarán al Registro Público, de manera desglosada, cualquier remuneración que perciba el servidor público, incluyendo los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo, los gastos de viaje en actividades oficiales o los recursos que le sean asignados para su aplicación directa.

La contravención a lo dispuesto en este artículo dará lugar a falta administrativa grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de esta ley.

Artículo 20.- Toda persona que tenga conocimiento de una falta administrativa grave o un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo ante la autoridad competente.

El Estado, por conducto del Sistema, garantizará la integridad de los denunciantes, testigos y

perjudicados por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, protegerá la identidad de aquellos que así lo requieran y brindará las demás protecciones necesarias, en términos de lo dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las comunicaciones a que se refiere el inciso e) de la fracción III del artículo 33 se guardarán con la debida secrecía y no se harán del conocimiento del servidor público que emitió la orden.

Capítulo II
De las Faltas Administrativas.

Sección I
Disposiciones Preliminares

Artículo 21.- El presente capítulo establece respecto de los servidores públicos y las personas físicas y morales que administran o ejercen recursos públicos, las conductas, acciones u omisiones que generan falta administrativa.

Incurrirá en falta administrativa la persona o el servidor público que teniendo el deber jurídico de evitar la consecuencia de actos o hechos, cuando lo mismos no deriven de su conducta pero los haya advertido o tenga obligación de hacerlo.

La responsabilidad administrativa es autónoma a las responsabilidades de diversa naturaleza que los mismos hechos den a lugar.

Artículo 22.- Las faltas administrativas darán lugar a la Responsabilidad que se determine y sancione de conformidad con esta Ley.

Las faltas administrativas se considerarán graves de conformidad con los criterios establecidos en la Sección III de este capítulo.

Las faltas administrativas constituirán Hechos de Corrupción cuando el resultado de la conducta o las conductas que generen responsabilidad actualice alguno de los siguientes supuestos:

I. Cause un daño patrimonial al Estado por una cantidad igual o mayor a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización;
II. Implique el enriquecimiento indebido de un servidor público o una persona física o moral por una cantidad igual o mayor a ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización;
III. Constituya violaciones sistemáticas a esta Ley o las disposiciones jurídicas que esté obligado a observar;
IV. Constituya violaciones a los Derechos Humanos;
V. Implique la colusión de servidores públicos de diversos entes, de un servidor público con una persona moral, o tres o más servidores públicos del mismo ente con diversa función;
VI. Obligue a un servidor público bajo su mando o a una persona con la que tenga relación laboral o poder de mando en el caso de las personas fiscas y morales, a cometer faltas administrativas, o lo induzca de manera dolosa al error, y
VII. Implique el aprovechamiento de la función pública a favor de intereses particulares no

económicos.

VIII.

La autoridad que investigue y sustancie faltas administrativas que constituyan hechos de corrupción informará al Sistema a efecto de que éste de aviso a las autoridades que puedan investigar responsabilidades de diversa naturaleza.

Artículo 23.- Las Faltas administrativas no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en ningún caso podrán prescribir antes de siete años o de diez, cuando se trate de faltas administrativas graves o impliquen hechos de corrupción.

Artículo 24.- Es sujeto activo de la falta administrativa el servidor público o la persona que con su conducta la configura de manera directa o por medio de cualquiera de las siguientes personas:

I. Su cónyuge, concubina o concubinario o cualquier otra figura de naturaleza análoga en términos de la legislación en materia civil;
II. Sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado,
III. Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o afectivas, y
IV. Personas Morales que integre o a las que se encuentre vinculado por cualquier medio legal el sujeto activo o las personas antes referidas.

Es también sujeto activo aquel que obtiene beneficio indebido de una falta administrativa de manera directa o por medio de cualquiera de las personas descritas en el párrafo anterior, su autor intelectual, quien tolere, induzca o trate de inducir a otro a cometer una falta administrativa, y quien teniendo el deber de evitarlo, permita por negligencia que los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad, incumplan con las obligaciones inherentes a su función.

Sección II.
Conductas que constituyen Faltas Administrativas.

Artículo 25.- Incurrirán en falta administrativa, los servidores públicos que mediante acciones u omisiones en el ejercicio de su función se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Incumpla con cualquiera de las obligaciones inherentes a su cargo;
II. De manera deliberada impida, entorpezca o demore el proceso de formulación y ejecución de los planes y programas correspondientes a su competencia;
III. Propicie o tolere situaciones de acoso, discriminación o conflicto en su lugar de trabajo
IV. Sin obtener beneficio, incumpla con la normatividad relativa al manejo de recursos económicos públicos;
V. Motive o tolere que los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad, incumplan con las obligaciones inherentes a su función;
VI. Imponga cargas innecesarias o desproporcionadas a los servidores públicos y personas bajo su mando o sobre las que ejerce autoridad;
VII. Sin mediar temor fundado, no denuncie o dé aviso por escrito a su superior jerárquico, de los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir responsabilidad administrativa, en los que se advierta algún hecho de corrupción o que puedan configurar un delito;

VIII. Disponga o autorice que un subordinado no asista sin causa justificada a sus labores,
IX. Otorgue indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones;
X. Sustraiga, distraiga o de manera deliberada deteriore o destruya recursos materiales que le fueren asignados cuyo valor no exceda de ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización;
XI. Aproveche de manera indebida o sin efectuar la comprobación respectiva, recursos públicos que le fueren asignados, y
XII. Incumpla con su obligación de presentar y mantener actualizadas, con oportunidad y veracidad, sus declaraciones de Situación Patrimonial, de intereses y fiscal.

Artículo 26.- Incurrirán en falta administrativa relativa al manejo y custodia de información, los servidores públicos que mediante acciones u omisiones en el ejercicio de su función se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Sin mediar causa justificada no ejercite sus facultades en los términos dispuestos por la normatividad aplicable, o falte a su obligación de documentar su ejercicio;
II. Sin mediar reserva, impida el acceso público a la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad;
III. Sustraiga, destruya, oculte, altere o inutilice la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad, y
IV. Incorpore de manera indebida documentación o información que tenga bajo su responsabilidad.

Artículo 27.- Incurrirán en falta administrativa relativa a la atención a la ciudadanía, los servidores públicos que mediante acciones u omisiones en el ejercicio de su función se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Contravenga los lineamientos de atención ciudadana contenidos en el Código de Ética del ente al que esté adscrito;
II. Sin mediar causa justificada, niegue o retarde la atención a los ciudadanos con las que tenga relación;
III. Sin mediar causa justificada, impida u obstaculice el acceso a un servicio público al que tenga derecho el ciudadano;
IV. Sin mediar causa justificada, se niegue a iniciar, deseche, suspenda o impida el adecuado curso de los procedimientos y tramitaciones de los ciudadanos con los que tenga relación;
V. Discrimine, falte al respeto, dé preferencia indebida o someta a trámites o procedimientos innecesarios a los ciudadanos con los que tenga relación, y
VI. independientemente de su valor económico, solicite o acepte dádivas, beneficios o presentes, en género o en especie, condicionadas al cumplimiento de su función o al curso de los trámites y procedimientos requeridos por los ciudadanos con los que tenga relación.

Sección III.
Conductas que constituyen Faltas Administrativas Graves.

Artículo 28.- Serán graves, las faltas administrativas establecidas en la presente sección, así como

las que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:

I. Las que generen a un ente público un daño patrimonial igual o superior a ciento ochenta Unidades de Medida y Actualización, o que impliquen al sujeto activo la obtención de beneficios económicos por la misma cantidad. Se considera que existe daño patrimonial cuando la hacienda pública o el patrimonio de un ente público sufran un daño estimable en dinero, así como cuando se genere gasto público o se pierdan ingresos que el Estado tenga derecho a percibir por acciones u omisiones que impliquen dolo, culpa o negligencia;
II. Las cometidas por el titular de un ente público, los servidores Públicos de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y los que de manera previa y general determine el Sistema, de conformidad con los tabuladores de Puestos;
III. Las cometidas por una Persona Moral, cuando obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios;
IV. Las cometidas por las personas físicas que actúen a nombre o representación de una persona moral y en beneficio de ella;
V. Las cometidas de manera sistemática. Se consideran sistemáticas las conductas que por su reiteración ocasionan un daño continuado o continuo al Estado, y aquellas en las que uno o varios sujetos activos concatenan sus conductas para producir un daño al Estado, y
VI. Las que generan daño social. Genera Daño social la conducta que en razón de las circunstancias en que se actualiza, lesiona o pone en peligro la vida, salud, seguridad o patrimonio de una persona o un grupo social en situación de vulnerabilidad, identificados o identificables.

Sección IV
Faltas Administrativas Graves de los Titulares de Secretarías de Estado

Artículo 29.- Los titulares de las secretarías de Estado incurren en hechos de corrupción cuando de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina o concubinario, o cualquier otra figura de naturaleza similar, o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado:

I. Obtenga un beneficio patrimonial proveniente de personas físicas o morales que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la Administración Pública Federal;
II. Solicite, acepte o reciba, bienes muebles o inmuebles, en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, en condiciones notoriamente favorables o precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, que procedan de cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos;
III. Adquiera en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, o
IV. Instruya tratos preferenciales, de exclusión, o cualquier distinción indebida, en los procesos de contratación de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, o prestación

de servicios, con la finalidad de favorecer o perjudicar a personas físicas o morales determinadas.

V.

Las conductas a que se hace referencia en el presente artículo se podrán actualizar desde el momento de realización del acto aun cuando esta ocurra en momento previo a la obtención de la calidad de Servidor Público, cuando se haya hecho ostentando la calidad efectivamente obtenida de titular de cualquiera de las Secretarías de Estado.

Artículo 30.- Las investigaciones que se inicien por conductas relacionadas con hechos de corrupción, de conformidad con lo previsto en esta sección y en la fracción I del artículo 33, serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría o el órgano interno de control que corresponda, pero este último dará vista a la Auditoría del expediente respectivo.

Cuando así lo determine la auditoría, el titular del ente público que corresponda será sujeto de las investigaciones que se inicien por conductas relacionadas con hechos de corrupción y podrá ser sancionado por su participación directa o por omisiones en la verificación del cumplimiento de la legalidad de los actos de su competencia.

Sección V.
Faltas Administrativas Graves de los miembros de los Poderes Legislativos.

Artículo 31.- Constituyen hechos de corrupción las conductas del diputado federal o local que en el marco del proceso de aprobación presupuestaria gestione o solicite:

I. La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo una comisión, dádiva o contraprestación indebida, en dinero o en especie; o
II. El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.

Artículo 32.- Los Senadores, los Diputados federales o locales incurren en hechos de corrupción en los siguientes casos:

I. Cuando formando parte de un órgano de gobierno del Poder Legislativo respectivo, aproveche indebidamente su carácter de representante de este último para promover ante cualquier ente público la resolución de un asunto en un sentido determinado;
II. Litigue o patrocine juicios o procedimientos de similar naturaleza, en contra del Estado o un ente público;
III. Se reúna, trate o acuerde con representantes de intereses privados, la presentación, desahogo, desechamiento o aprobación de instrumentos legislativos, obteniendo un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o falte a su obligación de reportar dichas reuniones o encuentros conforme a la normatividad parlamentaria, y
IV. Aproveche la información reservada a la que accede por motivo de su función obteniendo un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o una ventaja en los procesos de negociación.

Sección VI.
De las Faltas Administrativas Graves de los Servidores Públicos
y las Personas Físicas y Morales

Artículo 33.- Incurren en falta administrativa grave, los servidores públicos y las personas físicas y morales que por sus acciones u omisiones incurran en cualquiera de las siguientes conductas:

I. Conductas relativas a Hechos de Corrupción:

a) Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, condone, exente o exima a una persona física o moral del pago de cuotas, derechos, contraprestaciones, sanciones económicas, impuestos, aprovechamientos o cualquier otra figura que implique la liberación de una carga económica al particular en detrimento de la capacidad del Estado o el ente público para obtenerla;
b) Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, condone, exente o exima a una persona física o moral de la observancia de obligaciones, requisitos, trámites o procedimientos para generar derechos o consecuencias jurídicas relativas al ejercicio de su función, acceder a cualquier servicio público, entablar relaciones contractuales o adquirir la calidad de servidor público;
c) Sin mediar causa debidamente fundamentada y motivada, genere condiciones favorables a una persona física o moral, en detrimento de otras en igual o similar condición o que afecten la naturaleza de alguna función del Estado;
d) Pretender u obtener beneficios por cualquiera de las conductas a que se refieren las tres fracciones anteriores, en el caso de las personas físicas o morales a las que se destinen recursos públicos o las que por cualquier mecanismo pretendan su obtención;
e) En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que forme parte.
f) Celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien se encuentre inhabilitado o tenga impedimento legal;
g) Incitar o tratar de incitar a un servidor público a realizar una conducta o coludirse en la realización de conductas que constituyan falta administrativa, mediante inducción al error ofrecimientos en dinero o especie, promesas de beneficios indebidos, chantaje, amenazas o aprovechando su relación jerárquica;
h) Adquirir la calidad de servidor público o la capacidad de manejar recursos públicos como particular, estando inhabilitado para ello, y
i) Proponer, tolerar o permitir que quien esté inhabilitado para adquirir la calidad de servidor público o la capacidad de manejar recursos públicos, lo haga.

II. Conductas relativas a conflictos de intereses:

a) Contravenir lo dispuesto en el artículo 34;
b) Abstenerse de presentar en tiempo y forma su declaración de intereses y sus

actualizaciones, en términos de los dispuesto por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y demás disposiciones jurídicas aplicables.

c) Ocultar u omitir relaciones o cualquier otra información relevante en su declaración de intereses o presentar información imprecisa o que induzca al error;
d) Aprovechar su influencia, el carácter de servidor público presente o pasado, su relación con quien detente esa calidad, o motivos de identidad, para obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba, de la de un ente o servidor público;
e) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio privado;
f) Aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja propios;
g) Inducir o tratar de inducir a un servidor público a ocultar, sesgar u omitir información en su declaración de intereses;
h) Acordar con servidores públicos o personas el ocultamiento, sesgo, imprecisión, error u omisiones en sus declaraciones de intereses, de manera coordinada, a efecto de ocultar una relación. Esta conducta será en todo caso dolosa, y
i) Intervenir por motivo de su encargo en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, los que involucren a personas con quienes tenga afinidad o enemistad.

   El servidor público que no pueda abstenerse de intervenir en los asuntos referidos en el párrafo anterior, informará por escrito al jefe inmediato y observará sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución.

   Los órganos de gobierno los centros públicos de investigación, previa autorización de su órgano interno de control, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en este inciso, tratándose de los conflictos de intereses aparentes del personal que participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología.

III. Conductas relativas al desvío de funciones:

a) Distraer los recursos que tenga asignados o ejercer las facultades que le hayan sido atribuidas con fines distintos a los están afectos o los correspondientes a su empleo, cargo o comisión;
b) Ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión, habiendo concluido el período para el cual se le designó, o teniendo impedimento legal para ello;
c) Instruir a las personas sobre las que ejerce mando a realizar cualquier acto u omisión que implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
d) Abstenerse injustificadamente de vigilar, teniendo el deber de hacerlo por su función o nivel jerárquico, al servidor público que incurre en faltas administrativas o hechos de corrupción, por acción o por omisión, o que al hacerlo no se ajusten a

las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables.

e) Infringir, por acción u omisión, las disposiciones en materia electoral, de propaganda gubernamental y de aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, y
f) No comunicar por escrito al titular del ente público de su adscripción o al Órgano Interno de Control, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que pudiesen implicar violaciones a la Ley o a cualquier otra disposición jurídica o administrativa.

IV. Conductas relativas a la Fiscalización y el resguardo de información:

a) Inhibir por cualquier medio, de manera directa o por interpósita persona, a los posibles quejosos o denunciantes con el fin de evitar la presentación de denuncias o influir en su contenido
b) No atender de manera oportuna los requerimientos de Información del Sistema, la Auditoría, la Secretaría o los órganos internos de Control,
c) Entorpecer o causar dilaciones innecesarias en las investigaciones por faltas administrativas;
d) Ocultar, desvanecer, destruir o alterar información que le sea requerida en las investigaciones por faltas administrativas;
e) Quebrantar el principio de secrecía de las investigaciones, en cuyo caso el sujeto activo de esta conducta se considerará participe de las correspondientes a la investigación afectada;
f) Negar o demorar, el acceso a los recintos, instalaciones, expedientes o documentación que la autoridad investigadora debidamente facultada considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones, o para corroborar el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;
g) Eludir su obligación de Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y de coadyuvar en la rendición de cuentas de la gestión pública, proporcionando la documentación e información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
h) No atender de manera oportuna los mandatos de cualquier autoridad investigadora con facultades para solicitarle información, o su auxilio y colaboración;
i) Sin mediar causa plenamente justificada y debidamente fundada y motivada no responda las recomendaciones que les presente el Comité Coordinador del Sistema y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola, y
j) No atender los llamados de a comparecer a efecto de explicar el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

V. Conductas relativas al enriquecimiento indebido:

a) Solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier

persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto.

b) Aceptar u ofrecer donativos en dinero o especie con la promesa de un beneficio indebido, derivado del aprovechamiento indebido de una función pública que se ostente o pretenda;
c) Obtener o pretender obtener beneficios económicos adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, cuando estos sean indebidos;
d) Adquirir bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;
e) La realización por parte de un sujeto obligado o persona física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero;
f) Aprovechar u ocultar de forma dolosa de bienes provenientes de cualesquiera de las conductas a las que se refiere el presente artículo;
g) El incremento del patrimonio de un de sujeto obligado con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones, sin que pueda ser plenamente justificado su origen lícito;
h) La desviación ajena a su objeto que, para beneficio propio o de terceros, haga un sujeto obligado o persona física o moral, pública o privada que ejerza recursos públicos, o asuma funciones o mandatos de naturaleza pública, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado, a un organismo descentralizado o a un particular, que los hubieran percibido por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa;
i) La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo, y
j) El ofrecimiento u otorgamiento a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial.

Las conductas descritas en el presente artículo configurarán Falta Administrativa Grave hasta tres años después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, o la persona física o moral haya dejado de recibir o ejercer recursos públicos.

Serán también falta administrativa grave, las determinadas por los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y las que resulten de su interpretación conforme al principio de convencionalidad.

Artículo 34.- Toda conducta, acción u omisión que implica el provecho de la función pública en

beneficio de un interés particular propio o de un tercero o que afecte el desempeño imparcial del Servidor Público en su empleo, cargo o comisión, constituye conflicto de interés.

Todo ente público y sus funcionarios observarán cuando menos las siguientes reglas para evitar conflictos de intereses:

I. Todo superior jerárquico conocerá las declaraciones de intereses de los servidores públicos adscritos a su área y evitará hacer de la competencia de cualquiera de estos, asuntos que puedan generar conflictos de intereses;

II. Todo servidor público se excusará de conocer o participar del procedimiento o las decisiones de los asuntos en los que considere o deba considerar que existe posibilidad de generar conflictos de intereses;

III. Ante la duda fundada, el servidor público, su superior jerárquico o su subordinado consultará al Órgano Interno de Control sobre los casos en que pueda existir conflicto de intereses;

IV. Establecer mecanismos efectivos para evitar que dar tratamiento preferencial a personas u organizaciones por razón de su afinidad o identificación con entes o servidores públicos, o personas u organizaciones;

V. Establecer mecanismos efectivos para evitar el uso en provecho privado de la información o documentación que no sea del dominio público;

VI. Ningún servidor público aceptará regalos de particulares u otros servidores con quienes se haya relacionado con razón de su función. Tampoco aceptará regalos cuya cuantía exceda de treinta Unidades de Medida y Actualización;

VII. Todo ente público adoptará, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema, las reglas y excepciones a lo dispuesto en la fracción anterior, considerando cuando menos lo siguiente:

a) Los regalos recibidos en oficinas públicas, se entienden como dados en virtud de la calidad de servidor;

b) El Servidor Público reportará a los Órganos Internos de Control los regalos que reciba y en caso de contravenir lo dispuesto en los lineamientos a que hace referencia esta fracción podrá optar por devolverlos o ponerlos a disposición del Sistema, para su enajenación, y

c) Los recursos obtenidos según lo dispuesto en el inciso anterior serán destinados al cumplimiento de los fines del sistema;

VIII. Ningún servidor público aconsejará, integrará o mantendrá inversiones con personas morales con las que se relacione en razón de su función, y

IX. Ningún servidor público realizará gestiones privadas ni litigará, promoverá o patrocinará juicios o procedimientos de similar naturaleza, en contra del Estado o un ente público, con excepción de los que correspondan a su legítimo interés, a los cuales comparecerá por medio de abogado y se deberán hacer del conocimiento del Órgano Interno de Control.

Las reglas dispuestas en el numeral anterior serán observadas por el servidor público hasta tres años después de haber concluido sus funciones

Si un servidor público se abstiene de invocar un conflicto de intereses real o aparente, los ciudadanos tienen el derecho de denunciar el presunto conflicto. Los Órganos Internos de Control tomarán conocimiento de estas denuncias, iniciarán la investigación conducente, conforme al procedimiento administrativo descrito en esta ley y en su caso, determinarán la responsabilidad

que corresponda o turnarán el expediente al Tribunal o a la Fiscalía, atendiendo a la naturaleza del caso;

Los servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de Dirección en el Instituto Nacional Electoral, sus Consejeros, y los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se abstendrán de participar en cualquier encargo público de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que ellos organizaron o calificaron.

TÍTULO CUARTO
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

Capítulo I
De los Órganos Internos de Control.

Artículo 35.- Los órganos Internos de Control son los órganos dependientes de la Secretaría en el caso de las dependencias y entidades de la Administración Pública que corresponda, o autónomos en el caso de los organismos con autonomía constitucional, los poderes legislativo y judicial y los demás entes públicos.

Son funciones de los órganos Internos de Control:

I. La evaluación y fiscalización de los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos del ente al que están integrados;
II. La prevención, corrección e investigación de los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;
III. La investigación y substanciación de las faltas administrativas graves de los servidores públicos y los particulares involucrados, y
IV. La promoción de responsabilidades administrativas graves ante el Tribunal que por su competencia corresponda y de las responsabilidades de naturaleza diversa ante el órgano competente.

Artículo 36.- Los órganos internos de control contarán con los siguientes procedimientos para el ejercicio de sus funciones:

I. Verificación;
II. Auditoría;
III. Investigación, y
IV. Evaluación

El Sistema Establecerá las bases generales para el ejercicio de los procedimientos dispuestos en el párrafo anterior.

La Secretaría establecerá mediante disposiciones reglamentarias congruentes con las bases a que hace referencia el artículo anterior las disposiciones relativas a la implementación de dichos procedimientos en la Administración Pública Federal.

Los órganos Internos de Control establecerán manuales administrativos para la implementación de cada procedimiento, adecuados a las particularidades del ente que integran.

Artículo 37.- La verificación y la auditoría son los procedimientos mediante los que los órganos Internos de Control ejercen sus facultades de supervisión, control y evaluación de los entes fiscalizados. Ambos procedimientos pueden iniciarse de manera oficiosa o por queja y denuncia.

Mediante la Auditoría, los órganos internos de Control evalúan el cumplimiento de objetivos específicos dispuestos por la normatividad aplicable al ente fiscalizado y la aplicación adecuada de los recursos públicos, analizando y reportando los resultados en términos cualitativos y cuantitativos

La verificación consiste en la revisión documental y operativa para comprobar los resultados reportados por los entes fiscalizados, comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos o atender las quejas y denuncias, así como en la inspección de recursos, actividades y procedimientos.

El sistema establecerá las estrategias operativas para la conducción de las verificaciones, incluyendo la operación encubierta de servidores públicos, prestadores de servicios y ciudadanos, los medios de registro y acreditación de hechos y los mecanismos de notificación de las diligencias como actos de autoridad.

Toda operación encubierta constará por escrito con firma autógrafa del titular del Órgano Interno de Control, en el que se manifiesten el lugar o zona, y en su caso, los actos, servicios, servidores públicos o personas a inspeccionar, los hechos que la motivan, el objeto de la visita y las disposiciones jurídicas que lo fundamenten, limitándose la diligencia a los rubros y objeto ahí anotados. En el momento procesal oportuno se notificará a los servidores y personas involucradas. Serán nulas de pleno derecho las operaciones encubiertas que tengan por objetivo incitar al servidor público a cometer un acto ilegal o un hecho de corrupción.

Artículo 38.- Los Órganos Internos de Control recibirán y darán curso a las quejas y denuncias que reciban de la ciudadanía, los servidores públicos, el sistema o cualquier autoridad competente o de manera anónima, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

La recepción de denuncias se llevará a cabo a través de los siguientes medios:

I. Por escrito que se presenta ante los Órganos Internos de Control;
II. Por comparecencia: Con la presencia física del quejoso o denunciante ante los Órganos Internos de Control, lo que se hará constar en un acta;
III. Vía telefónica o medio electrónico: al número telefónico o enlace directo al centro de recepción de denuncias del Sistema establecido en la página de internet de la dependencia de que se trate.
IV. En todas las áreas de las dependencias, entidades, órganos o instituciones, donde se brinde atención al público, deberá colocarse en una zona visible, el número telefónico y correo electrónico para la recepción de quejas o denuncias;
V. Por remisión o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
VI. Por hechos públicos notorios que causen impacto social.

En todos los casos, la denuncia deberá contener una narración detallada de los hechos con referencias de tiempo, lugar y modo, así como datos que permitan la identificación de la o las

personas involucradas. Si dentro de la denuncia se aportan documentos u otro medio que pueda ayudar a la investigación de los hechos, serán recibidos y se hará constar esta circunstancia.

Los denunciantes tendrán derecho a la protección del Estado de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Es potestad de los denunciantes coadyuvar con los Órganos Internos de Control en la conducción de los procedimientos que deriven de los actos y hechos denunciados.

Artículo 39.- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones investigadas por los órganos internos de control de la Administración Pública Federal, la Secretaría estime que ella debe instruir el procedimiento disciplinario, requerirá el envío del expediente respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes.

La Auditoría solicitará el envío de los expedientes de los Órganos Internos de Control de entes públicos no pertenecientes a la Administración Pública Federal, cuando así lo determine, considerando la naturaleza de los hechos denunciados o la gravedad de las presuntas infracciones investigadas.

La Secretaría impondrá las sanciones correspondientes a los titulares de los órganos internos de control, cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

Artículo 40.- El Órgano Interno de Control contará con personal capacitado para brindar asesoría en la formulación de quejas y denuncias a los ciudadanos.

Los datos personales de los denunciantes o quejosos serán tratados con confidencialidad en los términos de la ley de protección de datos aplicable.

Las denuncias que se formulen de manera anónima deberán contener en lo posible, una narración detallada de los hechos y datos que permitan la identificación de la o las personas involucradas.

Todo servidor público tendrá la obligación de denunciar las acciones u omisiones que en el ejercicio de sus funciones tuviere conocimiento y que pudieren constituir faltas administrativas. También tendrá la obligación de fungir como testigo cuando se le solicite. El Sistema garantizará el anonimato de las denuncias y la protección del servidor público denunciante, en los términos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo 41.- Los servidores públicos que denuncien hechos que puedan constituir una responsabilidad administrativa grave, o sean testigos en el procedimiento, podrán solicitar protección, reubicación de su encargo, así como el resguardo de su anonimato. La solicitud deberá ser evaluada y atendida de manera oportuna por la dependencia, entidad, órgano o institución donde presta sus servicios el denunciante.

Cuando se trate de un denunciante o testigo que pretende mantener el anonimato, las autoridades encargadas de la investigación, así como los Tribunales de Justicia competentes, tendrán facultades para solicitar la reubicación del servidor público denunciante o testigo.

Las autoridades encargadas de la investigación, así como los Tribunales de Justicia Administrativa competentes, tendrán facultades para solicitar la reubicación del servidor público denunciante o testigo.

Artículo 42.- Una vez recibida denuncia, el personal del Órgano Interno de Control dentro de las 48 horas siguientes a su recepción, analizará los hechos y procederá a emitir, de manera fundamentada y motivada, uno de los siguientes acuerdos:

I. De inicio de la investigación, estableciendo su competencia para conocer de los hechos, la probable existencia de faltas administrativas.

II. De prevención, en el caso de que los datos aportados no sean lo suficientemente claros o precisos para dar inicio a la investigación y el Órgano Interno de Control no tenga la posibilidad de allegarse por otros medios de más elementos, por lo que dicho acuerdo será notificado al denunciante por el medio que al efecto señale, para que en el término de cinco días hábiles desahogue la prevención, si transcurre el plazo señalado y no se desahoga la prevención se tendrá por no presentada la queja o denuncia y se procederá a emitir un acuerdo de desechamiento. Y en el caso de que sea desahogada la prevención, se procederá a emitir el acuerdo respectivo dentro de los dos días siguientes a su desahogo.

III. De incompetencia. Cuando los hechos materia de la queja o denuncia no sean de su competencia, en este caso hará la remisión correspondiente a la autoridad competente.

IV. De desechamiento. Cuando de los hechos narrados y las indagatorias previas no se advierta la probable existencia de faltas administrativas

Artículo 43.- El Acuerdo respectivo, deberá contener:

I. Lugar y fecha de elaboración;
II. Nombre del quejoso o denunciante;
III. Nombre y cargo del servidor público involucrado;
IV. Resumen de los hechos motivo de la queja o denuncia, en el que se destaquen los aspectos más relevantes;
V. Fundamento jurídico en el que se sustenta la competencia del Órgano Interno de Control para conocer del asunto;
VI. Determinación correspondiente, de inicio, prevención, incompetencia o desechamiento.
VII. Orden de registro del mismo en el control interno; y
VIII. Firma del Contralor.

Artículo 44-.- En los casos en que derivado del ejercicio de sus facultades, se advierta la probable existencia de responsabilidades administrativas graves o de diversa naturaleza, los Órganos Internos de Control darán vista a las autoridades competentes de las actuaciones que componen su investigación y solicitarán su coadyuvancia para el desarrollo de la misma.

En los casos de responsabilidad administrativa grave en que la Auditoría promueva la responsabilidad ante el Tribunal, los Órganos Internos de Control podrán acompañar la acusación o turnar el expediente a la auditoría y declinar su competencia.

Artículo 45.- Cuando los hechos investigados sean de impacto social y por faltas administrativas graves, el Órgano Interno de Control tiene la obligación de informar al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción sobre los avances de la investigación.

Capítulo II
De la Investigación por los Órganos Internos de Control.

Artículo 46.- La investigación es el procedimiento que da inicio al proceso administrativo sancionador.

Las quejas, denuncias, auditorías y verificaciones darán inicio a una investigación cuando se adviertan hechos de corrupción o la realización de conductas que puedan constituir alguna de las responsabilidades administrativas que establece esta Ley.

Las actuaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento administrativo, se regirán por los principios de: objetividad, debido proceso, oportunidad, exhaustividad, integralidad, profesionalismo, eficacia y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.

Artículo 47.- Los órganos Internos de Control iniciarán sus investigaciones o auditorías por denuncia o queja o de manera oficiosa.

Una iniciada la investigación, el órgano interno de control deberá sustanciar de oficio hasta su conclusión.

Una vez emitido el acuerdo de inicio el Órgano Interno de Control deberá realizar todo tipo de actos y diligencias a efecto de allegarse de los elementos necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos que le fueron descritos en las quejas o denuncias.

Artículo 48.- Durante la investigación el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente estará facultado para realizar las siguientes diligencias:

I.- El requerimiento de información o documentos;
II.- La verificación e inspección de archivos, lugares, obras públicas, vehículos y objetos;
III.- El aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de almacenamiento de información a que se refiere el artículo 50 de esta Ley; y
IV.-Todas aquellas tendientes a investigar la presunta responsabilidad del servidor público investigado en los términos establecidos en el presente Título.

Artículo 49.- La dependencia, entidad, Poder u Órgano Constitucional Autónomo estará obligado a proporcionar la información y la documentación que les sean requeridas por su Órgano Interno de Control, en un plazo no mayor de 5 días.

En caso de que los mismos no sean proporcionados después del primer requerimiento, el Titular del ente fiscalizado será responsable en términos de lo dispuesto por esta Ley y la legislación penal

aplicable. Los órganos internos de control se dirigirán en queja al Sistema Nacional Anticorrupción. El Comité Coordinador del Sistema adoptará las determinaciones que resulten conducentes de conformidad con la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de las responsabilidades en que incurran los entes que no presten el debido auxilio al ejercicio de las funciones a que hace referencia este artículo.

Artículo 50.- El titular del Órgano Interno de Control respectivo será responsable de que la investigación se realice con la secrecía necesaria para garantizar su eficaz desarrollo y evitar que se oculte, destruya o altere información relacionada con la misma. La violación de la secrecía se sancionará en términos de la legislación penal aplicable. Al efecto, hará los apercibimientos correspondientes a autoridades y personas morales a las que requiera información.

El titular del Órgano Interno de Control podrá ordenar, de manera fundada y motivada, el aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de almacenamiento de información, que estén relacionados con las conductas objeto de la investigación.

El titular de la dependencia, entidad, Poder u Órgano Constitucional Autónomo estará obligado a dictar las medidas y ordenes necesarias para hacer efectivo el aseguramiento a que se refiere el párrafo anterior. En caso incumplimiento de esta obligación, será responsable en los mismos términos a que se refiere el artículo 49de esta Ley.

Artículo 51.- En el cumplimiento de sus atribuciones de investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, los órganos internos de control no estarán limitados por los secretos bancario, fiduciario, bursátil y fiscal. No serán oponibles tampoco las reservas de información conforme a lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

Las autoridades federales y locales, las instituciones crediticias y financieras nacionales y los particulares en posesión de información pública están obligados, cuando el Órgano Interno de Control respectivo lo requiera de manera fundada y motivada, a entregar la información relacionada con el servidor público o persona física o moral sujetos a investigación.

La información deberá ser remitida al Órgano Interno de Control en un plazo no mayor de 10 días. En caso de incumplimiento se le impondrán al servidor público o al particular requerido las sanciones a que hace referencia esta Ley, sin perjuicio de responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar en caso de incumplimiento de dos requerimientos.

El Órgano Interno de Control respectivo informará a las autoridades, instituciones o personas requeridas sobre la secrecía que debe guardarse sobre el requerimiento y cualquier dato de la investigación, apercibiendo al servidor público al que se le requiera la información sobre las penas en que incurre el que viole este deber de secreto.

Artículo 52.- El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente realizará la investigación de manera exhaustiva, la cual deberá realizarse en un plazo no mayor a seis meses. Cuando considere que la investigación está concluida y que no quedan diligencias por practicar, deberá determinar la inexistencia o probable existencia de la falta administrativa.

Artículo 53.- Cuando el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente emita un acuerdo en el que determine la inexistencia de la falta administrativa deberá:

I.- Notificarlo de manera personal o por medio electrónico al quejoso o denunciante si los hubiera;
II.- Hacerlo del conocimiento del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; y
III.- Decretar el cese de las medidas de aseguramiento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 50 de esta Ley.

El quejoso, el denunciante o cualquier integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción podrán impugnar el acuerdo de inexistencia de la falta administrativa únicamente por medio del juicio de amparo indirecto.

Cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido por algún integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el mismo deberá ser patrocinado por un defensor público asignado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

Artículo 54.- Cuando el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente emita un acuerdo en el que determine la probable existencia de la falta administrativa pondrá el expediente en estado de sustanciación, el cual se tramitará conforme a lo dispuesto en la siguiente Sección.

Sección Segunda
De la Sustanciación

Artículo 55.- En el acuerdo de probable existencia de la falta administrativa el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente declarará abierta la etapa de sustanciación del procedimiento sancionador y dictará de manera fundada y motivada las siguientes medidas:

I.- Citará al o a los presuntos responsables a una audiencia inicial, sean éstos sólo servidores públicos o también particulares, en su caso, notificándoles que deberán comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los hechos que se les imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables.

Cuando el particular presuntamente responsable sea una persona moral, comparecerá por medio de un representante el cual deberá contar con facultades suficientes para actuar debidamente dentro de este procedimiento a nombre de su representada. En este caso, la personalidad del representante se analizará de oficio.

En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público o al particular y el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor.

II.- Ratificará las medidas de aseguramiento de documentos, archivos electrónicos, de voz, video, equipo de cómputo y de cualquier dispositivo de almacenamiento de información, que estén relacionados con las conductas probablemente constitutivas de falta administrativa;

III.- El señalamiento de los beneficios establecidos en el siguiente artículo para los servidores públicos y personas físicas o morales que aporten datos ciertos sobre la participación de otros

servidores públicos y personas físicas o morales en los hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes o que confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les formule; y

IV.- La calificación de la falta administrativa como grave o no grave en los términos de esta Ley, así como las consideraciones de hecho y de derecho que consideró para realizar tal calificación.

El servidor público o la persona física o moral probablemente responsables podrán interponer el recurso de inconformidad en contra de la calificación de la falta administrativa como grave. Este recurso será conocido y resuelto por la Sección respectiva de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Cuando la calificación de la falta administrativa sea calificada como no grave, el quejoso, el denunciante o cualquier integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción podrán impugnar el presente acuerdo únicamente por medio del juicio de amparo indirecto.

Artículo 56.- El servidor público o la persona física o moral que haya realizado o participado en la comisión de alguna de las faltas administrativas previstas en esta Ley, o bien, que se encuentre participando en su realización, podrá aportar datos ciertos sobre la participación de otros servidores públicos y personas físicas o morales en los hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes, o confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de sanciones establecido en este artículo.

La aplicación del beneficio a que hace referencia el párrafo anterior, tendrá por efecto una reducción de entre el cincuenta y el setenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan al responsable, conmutar la destitución por inhabilitación en los casos de servidores públicos o reducir los plazos de ésta y conmutar la disolución de personas morales por suspensión de actividades.

Para su procedencia será necesario que adicionalmente se cumplan los siguientes requisitos:

I. Que no se haya notificado a ninguno de los presuntos infractores el inicio del procedimiento administrativo sancionador;

II. Que la persona que pretende acogerse a este beneficio, sea entre los sujetos involucrados en la infracción, la primera en aportar los elementos de convicción suficientes y que a juicio de las autoridades competentes permitan comprobar la existencia de la infracción;

III. Que la persona que pretende acogerse al beneficio coopere en forma plena y continua con la autoridad competente que lleve a cabo la investigación y, en su caso, con la que substancie el procedimiento administrativo sancionador conducente, y

IV. Que la persona interesada suspenda de inmediato su participación en la infracción. Las personas que soliciten este beneficio serán sujetas del procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, en el cual se constatará el cumplimiento de los requisitos a que hace referencia este artículo, así como la veracidad y validez de la confesión realizada y se resolverá

sobre la procedencia de dicho beneficio.

Artículo 57.- Una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador a que se refiere esta Ley, si el presunto infractor confiesa su responsabilidad sobre los actos que se le imputan, se le aplicará una reducción del cincuenta por ciento del monto de las sanciones que se impongan, siempre que lo haga dentro del plazo de 10 días posteriores al de la realización de la audiencia inicial.

Artículo 58.- En todo caso, el plazo que debe mediar entre la audiencia inicial y el ejercicio de la acción por responsabilidad administrativa, no debe ser mayor a 60 días.

Artículo 59.- La defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo servidor público o persona involucrada dentro de un procedimiento sancionador, la cual podrá ejercer de manera personal o con la asistencia de un defensor, el cual deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional.

Artículo 60.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicarán en días y horas hábiles. La autoridad podrá, de oficio o a petición de parte interesada, habilitar días inhábiles, cuando así lo requiera el desahogo del procedimiento.

Artículo 61.- Los Órganos Internos de Control, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:

I. Multa hasta por la cantidad equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin cumplimentarse lo ordenado por el propio Órgano Interno de Control;
II. El auxilio de la fuerza pública para expulsar personas de oficinas donde se realice una diligencia o audiencia y alteren el desarrollo de las mismas así como para lograr la comparecencia de personas que no concurran a un citatorio a ellas dirigido; y
III. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Artículo 62.- Para garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, podrá solicitar a la Sección Especializada del Tribunal las siguientes providencias precautorias:

I. El embargo de bienes, y
II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero.

La Sección Especializada del Tribunal decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba recabados por el Órgano Interno de Control o su equivalente, se desprenda la posible existencia de daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, así como la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo.

Decretada la providencia precautoria, la misma no podrá extenderse por más de 90 días hábiles, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del servidor público, la persona física o moral probablemente responsables o de terceros interesados, debiéndose dar vista y escuchar al quejoso, al denunciante y al Comité de Participación Ciudadana, quienes deberán manifestar ante la Sección Especializada del Tribunal lo que a su interés convenga en un plazo no mayor a 3 días.

Las providencias precautorias serán canceladas si el servidor público, la persona física o moral probablemente responsables garantizan o pagan la reparación del daño y los perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales; si se declara fundada por la Sección Especializada la solicitud de cancelación de embargo planteada por el servidor público, la persona física o moral probablemente responsables en contra de la cual se decretó o de un tercero, o si se dicta sentencia absolutoria, se decreta el sobreseimiento o se absuelve de la reparación del daño y perjuicio.

La providencia precautoria se hará efectiva a favor de la Hacienda Pública o de los entes públicos federales, locales o municipales cuando la sentencia que condene a reparar el daño cause ejecutoria. El embargo se regirá en lo conducente por las reglas generales del embargo previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 63.- En cualquier momento durante la etapa de sustanciación, el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, podrá solicitar a la Sección Especializada del Tribunal las siguientes medidas cautelares:

I. La suspensión temporal en su empleo, cargo o comisión del servidor público probablemente responsable;
II. La suspensión temporal del pago a personas físicas o morales probablemente responsables de faltas administrativas graves, de contratos de servicios, de obra pública o de suministro de bienes. La suspensión temporal del pago se realizará sobre todo contrato que la persona física o moral tenga celebrado con la entidad, dependencia, poder u órgano constitucional autónomo del nivel de gobierno respectivo que presuntamente haya sido afectado por la falta administrativa grave materia del procedimiento sancionador.
III. Todas aquellas necesarias para evitar que se afecte el destino, aplicación y uso de recursos federales, de alguna entidad federativa o municipales, así como cualquier daño y/o perjuicio patrimonial que se esté ocasionando al patrimonio del Estado, erario público, hacienda pública, o interés social, de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Al solicitar las medidas cautelares, el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, también ordenará correr traslado al presunto responsable con las constancias que acrediten la necesidad de la medida decretada, pidiéndole un informe que deberá rendir en un plazo de tres días ante la Sala Especializada del Tribunal. Si no se rinde el informe o si éste no se refiere específicamente a los hechos que se le imputan, dichos hechos se tendrán por ciertos.

Dentro del plazo de cinco días contados a partir que haya recibido el informe del presunto responsable o que haya vencido el término para presentarlo, la Sección Especializada dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas.

Las medidas cautelares sólo se levantarán cuando el presunto responsable otorgue garantía suficiente de la reparación del daño y los perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales o si se declara fundada por la Sección Especializada del Tribunal la solicitud de su cancelación realizada por el propio probable responsable. La solicitud deberá acompañarse de elementos que acrediten que se han modificado de modo superveniente las circunstancias que motivaron el dictado de las medidas.

Mientras no se dicte sentencia definitiva por la Sección Especializada del Tribunal, ésta podrá modificar o revocar la resolución que haya negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique y lo solicite el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente.

Artículo 64.- La notificación a que se refiere la fracción I del artículo 55 se practicará de manera personal al presunto responsable. Realizada la notificación, si el servidor público, la persona física, la persona moral por medio de representante debidamente acreditado dejan de comparecer sin causa justificada, se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se les imputan.

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia inicial deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.

Artículo 65.- Practicada la audiencia inicial, se concederá al o a los presuntos responsables un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le atribuyen.

Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

Artículo 66.- En la sustanciación que se tramite ante el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, serán admisibles durante el plazo establecido en el artículo anterior toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de que el Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente ejercite la acción de responsabilidad administrativa ante la Sección Especializada del Tribunal. En este caso dicho Órgano Interno de Control o su equivalente tendrá un plazo de cinco días para expresar lo que a su interés convenga.

Artículo 67.- La prueba pericial se sujetará a lo siguiente:

I. En el acuerdo admisorio que recaiga al escrito de ofrecimiento de pruebas y en caso de que haya sido ofertado el medio de convicción a que se refiere este artículo, se requerirá a los presuntos responsables para que dentro del plazo de cinco días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolos de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, la prueba se tendrá por desechada.

Desde el escrito de ofrecimiento, el oferente deberá señalar la materia sobre la versará el dictamen así como las preguntas que debe responder el perito.

II. En el acuerdo donde se tenga por aceptado y protestado el cargo de perito, se concederá al mismo un mínimo de cinco días y un máximo de diez, según la complejidad de la materia de que se trate, para que en audiencia señalada para tal efecto rinda y ratifique el dictamen respectivo, apercibiéndolo que de no hacerlo en dicha audiencia se tendrá por no presentado. Estos plazos se podrán ampliar, de oficio o a petición fundada del perito, hasta por cinco días más cuando así lo requiera el volumen de información o la cantidad de documentos que deban ser analizados para la emisión del dictamen.

III. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, el funcionario del Órgano Interno de Control que conduzca la diligencia o el propio Titular del mismo, si estuviera presente, podrán pedir a los peritos todas las aclaraciones y explicaciones que estime conducentes, así como exigirles la práctica de nuevas diligencias.

Artículo 68.- La prueba testimonial se ofrecerá, preparará y desahogará conforme a lo siguiente:

I. El ofrecimiento de la testimonial se hará acompañado del interrogatorio que deberán responder los testigos. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

II. El oferente deberá presentar a sus testigos. En caso de estar imposibilitado para ello, deberá manifestarlo así, proporcionando el domicilio completo de los mismos y solicitar al Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente que los cite el día y hora para la audiencia respectiva. El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente podrá utilizar las medidas de apremio correspondientes en caso de que el o los testigos no comparecen al primer citatorio. Si el o los testigos no comparecen a este segundo citatorio, se hará efectivo el apercibimiento y se desechara la prueba solo para aquel o aquellos que no comparecieron.

III. Los interrogatorios se desahogarán en una audiencia en la que los testigos serán apercibidos de conducirse con verdad y se les haga saber las penas en que incurren quienes declaran falsamente. El oferente podrá formular preguntas directas y verbales demás de las exhibidas en el escrito de ofrecimiento.

IV. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, el funcionario del Órgano Interno de Control que conduzca la diligencia o el propio Titular del mismo, si estuviera presente, podrán formular al o a los testigos las preguntas que estimen conducentes y solicitarles todas las aclaraciones y explicaciones que consideren pertinentes.

V. Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la entidad federativa donde se encuentre la oficina del Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente que este sustanciando el procedimiento, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el Titular del Órgano Interno de Control del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto, en términos del artículo 55 de esta Ley.

Artículo 69.- La inspección ocular se ofrecerá, preparará y desahogará de conformidad con lo

siguiente:

I. Desde el escrito de ofrecimiento, el oferente señalará el lugar o los objetos a inspeccionar, así como los hechos y circunstancias que se pretenden hacer constar;
II. El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente fijará el día y hora para la realización de la inspección dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de admisión de la prueba.
III. El Titular del Órgano Interno de Control podrá delegar en el funcionario que él determine el desahogo de la inspección. Las observaciones y hallazgos de este funcionario gozarán de presunción de validez.
IV. Los probables responsables, sus representantes o abogados podrán concurrir a la inspección, y hacer las observaciones que estimen oportunas.
V. De la inspección se levantará un acta circunstanciada que deberá contener:

a) Su objeto de la diligencia;
b) Hora, día, mes y año en que inicia y finaliza;
c) Precisión del lugar donde se realizó, señalando de ser posible calle, número, código postal, demarcación, municipio y entidad federativa;
d) Los resultados y hallazgos resultantes de la diligencia;
e) Las manifestaciones que en su caso realicen los participantes en la diligencia; y
f) La firma de quienes participaron en ella; la negativa de firmar por alguno de éstos no afecta la validez del acta siempre y cuando se haga constar dicha negativa.

Artículo 70.- Las cuestiones incidentales sólo podrán plantearse durante la realización de la audiencia inicial o alguna audiencia de desahogo de pruebas.

El Titular del Órgano Interno de Control respectivo, si estuviera presente, o el funcionario que conduzca la audiencia escuchará el planteamiento de quien promueve la cuestión incidental y resolverá de plano la petición.

Artículo 71.- El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente podrá ordenar diligencias para mejor proveer y solicitar información en términos de la Sección anterior con el objetivo de que se arribe a la verdad material de los hechos y conductas objeto del procedimiento.

Artículo 72.- El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, cuando no existiere ninguna diligencia, actuación o medio de prueba por practicar, notificará por lista a los presuntos responsables que tienen un término de tres días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados por la autoridad competente al dictar la resolución.

Al vencer el plazo de tres días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, se emitirá el acuerdo correspondiente en el que se declare cerrada la etapa de sustanciación.

Artículo 73.- El Órgano Interno de Control respectivo o su equivalente, determinará en el acuerdo que declara cerrada la etapa de sustanciación lo siguiente:

a) Si la falta administrativa fue clasificada como no grave, ordenará poner el expediente en estado de resolución, la cual se dictará conforme a lo establecido en la Sección siguiente.

b) Si la falta administrativa fue clasificada como grave, deberá preparar el pliego de responsabilidad respectivo con base en las pruebas obtenidas y aportadas durante las etapas de investigación y sustanciación, el cual deberá ser presentado en ejercicio de la acción de responsabilidad administrativa ante la Sección Especializada del Tribunal, cuya resolución se dictará conforme a lo establecido en el Capítulo II del presente Título.

Artículo 74.- El pliego de responsabilidades a que se refiere el inciso b) del artículo anterior deberá contener, de manera clara y precisa:

I. La individualización del o los probables responsables y de su Defensor;
II. La identificación de los entes públicos federales, locales o municipales que hayan sido afectados por la comisión de la falta administrativa grave;
III. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica;
IV. La autoría o participación concreta que se atribuye al o a los probables responsables;
V. La expresión de los preceptos legales aplicables;
VI. La relación de los medios de prueba que hayan sido ofrecidos y desahogados durante las etapas de investigación y sustanciación, así como la adminiculación lógica entre ellos que permita concluir de probable responsabilidad del servidor público y de las personas físicas y morales respectivas;
VII. El monto de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, así como los medios de prueba que ofrece para probarlo;
VIII. La sanción cuya aplicación se solicita, la cual puede consistir en:

a) Tratándose de servidores públicos, en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, las cuales deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;
b) En el caso de particulares, en sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales.
c) Cuando se trate de personas morales podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves.

IX. Los medios de prueba que sustenten la individualización de la sanción;
X. La solicitud de embargo o que sean aplicados tanto los bienes ya embargados como el circulante depositado en cuentas inmovilizadas a causa de una medida cautelaren los términos de la presente Ley; y
XI. La propuesta de beneficios para los presuntos responsables que aporten datos ciertos sobre la participación de otros servidores públicos y personas físicas o morales en los

hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes o que confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les formule.

La acusación sólo podrá formularse por los hechos, servidores públicos y particulares señalados en el acuerdo de probable responsabilidad.

Sección Tercera
De la Resolución de los Órganos Internos de Control

Artículo 75.- Las resoluciones y acuerdos de la Secretaría o de los órganos internos de control durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el Registro Nacional.

En caso de que se difunda por cualquier medio masivo de comunicación, la suspensión del servidor público, y la resolución definitiva del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia deberá hacerse pública por la dependencia en la que estuviere adscrito el servidor.

Artículo 76.- La ejecución de las sanciones administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por la Secretaría o el órgano interno de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva

Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular de la dependencia o entidad correspondiente, conforme a las causales de suspensión, cesación del cargo o rescisión de la relación de trabajo y de acuerdo a los procedimientos previstos en la legislación aplicable.

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del Erario Federal, se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, la Secretaría o los Órganos Internos de Control, podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I. Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y
II. Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Capítulo II
Del Procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sección I
Disposiciones generales

Artículo 77.- Las resoluciones de la Sección Especializada serán:

I. Definitivas, las que resuelven sobre el pliego que remite el Órgano Interno de Control o su equivalente en ejercicio de la acción por responsabilidad administrativa;

II. Interlocutorias, las que resuelven sobre el otorgamiento, modificación o cancelación de providencias precautorias y medidas cautelares o sobre la impugnación de la calificación de una falta administrativa como grave por el Órgano Interno de Control; y

III. Autos, los que se refieran a cuestiones mero de trámite.

Sección II
De la Resolución

Artículo 78.- La Sección Especializa en Materia de Responsabilidades de Servidores Públicos y Particulares de la Sala Superior emitirá resolución definitiva en un plazo que no excederá de treinta días hábiles siguientes a aquél en que haya recibido el pliego por el que Órgano Interno de Control o su equivalente ejercitan la acción de responsabilidad Administrativa. Dentro de los primeros veinte días hábiles, el Magistrado Ponente deberá elaborar el proyecto respectivo.

Artículo 79.- La resolución definitiva se aprobará por unanimidad o por mayoría de votos de los Magistrados que integran la Sección.

En caso de que la resolución definitiva no sea aprobada por la mayoría, el magistrado ponente tendrá un plazo de cinco días hábiles para engrosar el fallo con los argumentos de la mayoría y el proyecto original podrá quedar como voto particular.

Cuando la mayoría de los magistrados estén de acuerdo con el proyecto, el magistrado disidente podrá limitarse a expresar que vota total o parcialmente en contra del proyecto o formular voto particular razonado, el que deberá presentar en un plazo que no exceda de cinco días hábiles.

En el supuesto de no recibirse el voto particular en este plazo, se entenderá que no se emitirá.

Artículo 80.- La resolución definitiva expresará al menos lo siguiente:

I. Los antecedes del caso;
II. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos;
III. Las consideraciones lógico – jurídicas, la fundamentación y motivación, la valoración de las pruebas y de los alegatos;
IV. El reconocimiento de que sí se realizaron o no, los hechos;
V. La calificación de los hechos;
VI. La determinación de la existencia de responsabilidad o de la inexistencia de responsabilidad;
VII. Los beneficios para los presuntos responsables que hayan datos ciertos sobre la participación de otros servidores públicos y personas físicas o morales en los hechos objeto del procedimiento sancionador, los cuales permitan la imposición de las sanciones correspondientes o que confiesen su responsabilidad sobre la imputación que se les

formule.

VIII. La imposición de sanciones administrativas y en su caso de las económicas a los responsables o de un resarcimiento;

IX. Los puntos resolutivos, incluyendo la forma en que debe cumplirse la sentencia.

Artículo 81.- La resolución a la que se refiere el artículo anterior, se notificará a las partes en un plazo no mayor de diez días hábiles. Cuando se determinen sanciones económicas se notificará a la Tesorería de la Federación, para el registro y cobro correspondiente.

Artículo 82.- Las sanciones que impondrá el Tribunal al determinar las responsabilidades administrativas serán:

I. Amonestación privada y pública
II. Resarcimiento
III. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión;
IV. Sanciones económicas;
V. Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público;
VI. Inhabilitación para participar en contrataciones públicas de carácter federal;
VII. Suspensión de actividades,
VIII. Disolución de sociedades,
IX. Intervención de sociedades y
X. Las demás que establezcan otras leyes anticorrupción.

Par la determinación de la sanción correspondiente y sus alcances, la Sección Especializada del Tribunal estará a lo dispuesto en la ley.

Toda sanción se registrará en el Registro de Sanciones del Tribunal y se publicará en la página web del mismo.

Artículo 83.- Para la individualización de las sanciones se tomarán en cuenta lo elementos que señalan a continuación:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
II. Las circunstancias socioeconómicas del responsable;
III. El nivel jerárquico y antigüedad en el servicio, en el caso de servidores públicos;
IV. Los antecedentes del responsable;
V. El grado de participación;
VI. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
VII. La reincidencia;
VIII. El monto del beneficio o lucro obtenido, o el daño o perjuicio causado;
IX. La existencia de elementos atenuantes.

Las pruebas se valorarán conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, considerando que la resolución debe basarse en la verdad material de los hechos y en el principio pro persona. Se impondrá una sanción por cada conducta respecto de la que se encuentre culpable al presunto responsable.

Las sanciones que se impongan serán proporcionales a la falta administrativa cometida, al daño y/o perjuicio y al daño o perjuicio patrimonial causado al servicio, al interés público y/o a la hacienda pública.

Artículo 84.- Las resoluciones definitivas de la Sección Especializada del Tribunal solo podrán impugnarse por medio del juicio de amparo directo.

Artículo 85.- Las resoluciones definitivas o interlocutorias dictadas por la Sección Especializada del Tribunal serán ejecutadas con la mayor celeridad posible y en los términos que disponga la propia resolución.

Asimismo, la resolución definitiva será notificada a la autoridad que presentó el pliego de responsabilidades, para efectos del seguimiento de su ejecución y, en su caso, de la inscripción en el registro a que se refiere el título sexto de esta Ley o bien, su publicación en el Diario Oficial de la Federación para su difusión.

Artículo 86.- Los resarcimientos y las sanciones económicas impuestas por la Sección Especializada del Tribunal constituirán créditos fiscales a favor del Erario del nivel de gobierno afectado por la falta administrativa grave, los cuales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la autoridad competente, a la que será notificada la resolución definitiva dictada por la propia la Sección Especializada del Tribunal.

Artículo 87.- Si el servidor público presunto responsable confesare su responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al servidor público dos tercios de la sanción aplicable, si es de naturaleza económica, pero en lo que respecta a indemnización, ésta en todo caso deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios causados, y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelve disponer o no la suspensión, destitución o inhabilitación.

Artículo 88.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley, los Órganos Internos de Control podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I. Multa de hasta treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, y
II. Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Artículo 89.- Las facultades de los Órganos Internos de Control para imponer las sanciones que la Ley prevé prescribirán en siete años, contados a partir del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieren cesado si fueren de carácter continuo y de diez años tratándose de faltas administrativas Graves.

Tratándose de infracciones graves o hechos de corrupción, el plazo de prescripción será de diez años, que se contará en los términos del párrafo anterior.

Los actos de corrupción relacionados con obra pública, infraestructura y las actividades de las empresas productivas del Estado no prescribirán mientras sus efectos continúen vigentes y en

ningún caso podrán prescribir antes de diez años. En estos casos, no se admitirá señalamiento de reserva de información, secreto fiscal, bancario, fiduciario o bursátil.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción.

Artículo 90.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento administrativo sancionador, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y del Código Federal de Procedimientos Civiles en lo que no se oponga.

Artículo 91.- El Tribunal y los tribunales locales, en el ámbito de su competencia, serán responsables poner en estado de resolver las faltas administrativas graves o que deriven de hechos de corrupción.

Artículo 92.- Las resoluciones del el Tribunal y los Tribunales locales serán definitivas, y solo podrán ser recurridas por juicio de amparo.

Artículo 93.- El Tribunal conocerá en vía de atracción de aquellos hechos competencia de las entidades federativas y los municipios que deriven de los hechos de corrupción y que por su cuantía mayor o gravedad se justifique, de conformidad con el siguiente procedimiento:

I. Cuando el Tribunal ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicará por escrito al correspondiente órgano local responsable de combatir la corrupción, el cual en el término de quince días hábiles remitirá los autos originales al Tribunal, notificando personalmente a las partes dicha remisión;

II. Si un tribunal local decidiera solicitar al Tribunal que ejercite la facultad de atracción, expresará las razones en que funde su petición y remitirá el expediente original al Tribunal el cual, dentro de los treinta días siguientes al recibo del expediente, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos de la fracción anterior, y

III. Una vez decidido que el Tribunal se avoca al conocimiento del procedimiento administrativo sancionador, se emitirá resolución dentro de los treinta días siguientes.

IV. Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el Tribunal estime que no sea bastante el plazo de treinta días para emitir resolución, determinará la ampliación de dicho término por el tiempo que sea necesario.

Capítulo III
Del Control Ciudadano.

Artículo 94.- Cuando el Órgano Interno de Control emita un acuerdo en el que determine la inexistencia de la falta administrativa o su calificación como no grave, cualquier integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema podrán impugnar el acuerdo o la resolución respectivas, por medio del juicio de amparo indirecto.

Cuando el juicio de amparo indirecto sea promovido por algún integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el mismo deberá ser patrocinado por un defensor público asignado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

TÍTULO QUINTO
SANCIONES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 95.- La Auditoría, la Secretaría, los órganos Internos de Control y el Tribunal reportarán al Registro Nacional

Toda sanción administrativa impuesta a los servidores públicos y a las personas físicas y morales, será inscrita con el carácter de público.

Artículo 96.- Las sanciones de destitución e inhabilitación impuestas a los servidores públicos federales y a las personas físicas y morales por causa de faltas administrativas graves, por la Secretaría, los órganos Internos de Control y el Tribunal, surtirán efectos en los entes públicos de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios.

Ningún ente público federal, de las entidades federativas o municipal podrá celebrar contratos o convenios de naturaleza contractual o de cualquier naturaleza que implique la asignación, transferencia o pago de recursos públicos, con quienes fueren impuestos de inhabilitación por autoridades federales.

Artículo 97.- El Tribunal, los tribunales locales y las demás autoridades que investiguen o sustancien faltas administrativas, deberán considerar la imposición previa de sanciones a nivel federal o de las entidades federativas, como elemento de valoración en sus investigaciones o resoluciones.

Capítulo II
Sanciones por faltas Administrativas

Artículo 98.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada y pública
II. Resarcimiento
III. Sanciones económicas;
IV. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión, y
V. Inhabilitación de hasta siete años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

2. Las sanciones por falta administrativa grave consistirán en:

I. Resarcimiento;
II. Sanciones económicas;
III. Destitución del puesto, empleo, cargo o comisión;

IV. Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en contrataciones públicas de carácter federal, y
V. Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

3. Las sanciones por falta administrativa grave cometida por persona física o moral consistirán en:

I. Resarcimiento
II. Sanciones económicas;
III. Denuncia, Revocación o nulidad de contrato o convenio;
IV. Inhabilitación de hasta treinta años para desempeñar puestos, empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en contrataciones públicas de carácter federal;
V. Suspensión de actividades,
VI. Disolución de sociedades,
VII. Intervención de sociedades y
VIII. Decomiso y privación de la propiedad los bienes cuya procedencia lícita no se pudiese justificar, obtenidos durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona como consecuencia de un acto, omisión o de tolerar determinada conducta.

Artículo 99.- Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se impondrán de tres meses a un año de inhabilitación.

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de ciento ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por conductas graves o hechos de corrupción de los servidores públicos, así como la destitución.

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, deberá consultar el Registro Nacional de Responsabilidades y Sanciones, así como dar aviso al órgano que determine la Ley General del Sistema Nacional anticorrupción, en forma razonada y justificada, de tal circunstancia.

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

Artículo 100.- Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir

prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones, y
VII. Retención de Percepciones.

Se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable de alguna de las faltas administrativas a que se refiere esta Ley, o las leyes de responsabilidades en materia administrativa incurra posteriormente en cualquiera de éstas. El Sistema mantendrá el registro de servidores públicos sancionados.

Artículo 101.- Procede la imposición de sanciones económicas cuando las faltas administrativas produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos.

Para los efectos de la imposición de sanciones económicas, se considerará la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 102.- Para la imposición de las sanciones a que hace referencia el título -- se observarán las siguientes reglas:

I. La amonestación pública o privada a los servidores públicos será impuesta por el órgano interno de Control y ejecutada por el jefe inmediato;
II. La suspensión o la destitución del puesto de los servidores públicos, serán impuestas por el órgano interno de Control o el Tribunal y ejecutadas por el titular de la dependencia o entidad correspondiente;
III. La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por los Órganos Internos de Control o el tribunal, y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y
IV. Las sanciones económicas serán impuestas por la los Órganos Internos de Control o el tribunal, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación.

Cuando los presuntos responsables desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, la Auditoría o los Órganos Internos de Control, se solicitará a la Tesorería de la Federación, en cualquier fase del procedimiento administrativo, proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las

sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos del tercer párrafo del artículo 62 de esta Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo por parte del jefe inmediato, del titular de la dependencia o entidad correspondiente o de los servidores públicos de la Tesorería de la Federación, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Artículo 103.- El Tribunal impondrá las sanciones correspondientes a los Servidores Públicos que integren los órganos internos de control cuando se abstengan injustificadamente de investigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o administrativas aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

Artículo 104.- Los Órganos Internos de Control podrán abstenerse de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 38 de esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que se actualiza la siguiente hipótesis:

I. Que por una sola vez en un período de un año, la actuación del servidor público en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, está referida a una cuestión de criterio o arbitrio en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones;
II. Que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad;
III. Que obren constancias de los elementos que sustentan la decisión adoptada;
IV. Que el acto u omisión se haya corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público, y
V. Implique error manifiesto y en cualquiera de los supuestos mencionados en los incisos anteriores, hubieren desaparecieron o se hayan resarcido.

Artículo 105.- La retención de percepciones del Servidor Público que se ha sometido a un procedimiento por una falta administrativa grave, el órgano competente, deberá determinar en todos los casos la cantidad o porcentaje, de ingresos, que debe recibir para su subsistencia, mientras se desahoga el procedimiento.

Artículo 106.- Tratándose de sanciones graves impuestas a los servidores públicos que cuenten con base dentro de la institución en la que cometieron la falta, procederá la sanción en términos de esta ley pero para los efectos de derechos adquiridos por la relación de trabajo, se estará a lo dispuesto por a la leyes laborables aplicables.

El crédito fiscal no sea exigible, pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo precautorio hasta por un monto equivalente al de la contribución o contribuciones determinadas, incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciera dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se levantará el embargo.

TÍTULO SEXTO

DEL REGISTRO NACIONAL DE DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE INTERESES Y FISCAL, Y DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

Artículo 107.- El Sistema implementará el Registro Nacional de los Servidores Públicos con la finalidad de publicitar y actualizar las declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal de los servidores públicos, así como de las responsabilidades y las sanciones a las que sean sujetos.

En el Registro Nacional se inscribirán además los datos, declaraciones y en su caso sanciones, que correspondan o fueren impuestas a las personas físicas y morales que manejen, apliquen, administren o ejerzan recursos públicos.

Toda inscripción ante el Registro Nacional tendrá el carácter de pública y no podrá ser reservado su acceso.

El Registro Nacional se mantendrá permanentemente actualizado, para tales efectos los servidores públicos y las personas a que hace referencia este artículo actualizarán anualmente su información personal.

Artículo 108.- En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, las relaciones que pueden constituir conflictos de intereses a efecto de prevenirlos, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las sanciones impuestas o la constancia de inexistencia de sanción administrativa, así como sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones.

El Sistema establecerá de manera precisa los mecanismos de inscripción de información ante el Registro Nacional, debiendo contener cuando menos:

I. La información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos desde que se adquirió la calidad de servidor público o le fueron asignados recursos públicos en el caso de las personas físicas y morales, incluyendo II. Los bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos;

II. Copia de la declaración anual a la que hace referencia la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y

II. Los procedimientos administrativos instaurados y las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.

Artículo 109.- El Sistema expedirá las normas para la operación del registro y las constancias de sanciones, en todo caso la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específica de las personas que, en su caso, las requieran.

Las dependencias y entidades invariablemente obtendrán la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, previo al nombramiento o contratación respectivos. Dichas constancias podrán obtenerse del sistema electrónico que establezca la Secretaría.

La información relativa a la situación patrimonial estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, tendrá valor probatorio pleno.

Artículo 110.- La declaración patrimonial incluirá, conforme a lo dispuesto en los lineamientos generales en la materia, los montos de ingresos y sus fuentes, el valor y tipo de bienes muebles e inmuebles; el valor de inversiones que posea y su naturaleza; los saldos de cuentas bancarias; los derechos derivados de fideicomisos; los créditos, deudas, hipotecas o préstamos; los convenios o contratos referentes a servicios, uso, disfrute y usufructo de bienes o que generen derechos, excluyan obligaciones u otorguen beneficios y sus contraprestaciones, y en general cualquier derecho o carga de carácter patrimonial, observando lo dispuesto en el artículo 46.

Artículo 111.- La declaración de intereses incluirá aquellas actividades e ingresos ajenos a su función pública, para prevenir conflictos entre los intereses privados y el sector público, incluyendo actividades profesionales y económicas del servidor público, su pertenencia a mesas directivas, consejos o figuras análogas, señalando particularmente los casos en que se le confieran funciones de asesoría, administración y vigilancia; su participación en asociaciones y organizaciones sin fines de lucro o de asistencia privada y asociaciones religiosas; sus intereses económicos y financieros, actividades empresariales, mandatos o prestación de servicios de representación o asesoría, incluso en carácter honorario ante cualquier entidad con personalidad jurídica; las donaciones que realice; y otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y dependientes económicos con las particularidades y el horizonte temporal que se determinen en los lineamientos respectivos, observando lo dispuesto en el artículo 46.

Artículo 112.- La autoridades federales y de las Entidades Federativas están obligadas a reportar al Registro Nacional las sanciones administrativas que en el ámbito de sus competencias impongan, para tales efectos establecerán en coordinación con el Sistema, los módulos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente título

Artículo 113.- El Sistema y los Sistemas Locales promoverán la publicación de la información en datos abiertos y accesibles así como los principios de transparencia y acceso a la información, contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría emitirá las disposiciones reglamentarias relativas al funcionamiento y actuación de los órganos internos de control de la Administración Pública Federal, y demás normas observables por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, dentro de los noventa días siguientes a la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, contando con la opinión de éste. En el mismo plazo, los demás entes públicos federales emitirán las disposiciones reglamentarias relativas al funcionamiento y actuación de sus órganos internos de control.

Artículo Tercero. El Sistema Nacional Anticorrupción establecerá los lineamientos relativos al

contenido de los Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, dentro de los noventa días siguientes a su instalación.

Artículo Cuarto. Los entes públicos federales emitirán sus respectivos Códigos de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, dentro de los sesenta días siguientes a la emisión de los lineamientos a que hace referencia el artículo tercero transitorio. Los códigos de ética de cada ente público serán hechos del conocimiento de los funcionarios de su adscripción.

Artículo Quinto. El Congreso de la Unión expedirá en un plazo no mayor de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Ley reglamentaria del artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los Servidores Públicos.

Artículo Sexto. El Registro Nacional al que hace referencia el Título Tercero de la presente Ley, deberá entrar en operación dentro de los 180 días siguientes a la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción.

Artículo Séptimo. Los Servidores Públicos y las personas físicas y morales que administren, ejerzan o apliquen recursos públicos inscribirán o actualizarán sus datos, con carácter de públicos, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en operación del Registro Nacional.

Artículo Octavo. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias al objeto de esta Ley."

ARTÍCULO TERCERO: Se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para quedar como sigue:

LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 25 segundo párrafo, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización y rendición de cuentas, y tiene por objeto regular:

I. La organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación;

II. Los procedimientos de verificación, fiscalización e imposición de responsabilidades resarcitorias y aquellos derivados de la prevención y el combate a la corrupción;

III. La participación de la sociedad en los procesos de fiscalización;

IV. La evaluación de la gestión pública en la progresividad o regresividad de los derechos de las

personas o comunidadesy la estabilidad de las finanzas públicas;

V. El funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, y

VI. Las bases del Subsistema Nacional de Evaluación.

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación;

II. Auditorías sobre el desempeño: la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo de los resultados obtenidos en términos cualitativos o cuantitativos, o ambos;

III. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara;

V. Comisión de Presupuesto: la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara;

VI. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VII. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Gobierno Federal, Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales; Empresas Productivas del Estado; órganos reguladores coordinados en materia de energía y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

VIII. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con garantía del Gobierno Federal.

IX. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos;

X. Entes públicos federales: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XI. Entidades Federativas: los Estados y la Ciudad de México;

XII. Entidades fiscalizadas o sujetos obligados: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; los órganos constitucionalmente autónomos; los órganos reguladores coordinados en materia de energía; las empresas productivas del Estado; las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público; los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes,

fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, o que reciban aportaciones, acciones, títulos, certificados o cualquier instrumento de naturaleza análoga que le de derecho al aprovechamiento o usos de recursos públicos incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;

XIII. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

XIV. Fiscalización: la facultad de la Auditoría para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta Pública;

XV. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y demás disposiciones aplicables, así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto y las demás disposiciones aplicables;

XVI. Informe de Avance de Gestión Financiera: El informe que rinden los poderes de la unión y los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XVII. Informes Individuales: los Informes Individuales de Auditoría, conforme a lo establecido en el artículo 79 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XVIII. Informe General: el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública;

XIX. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes;

XX. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal en revisión;

XXI. Órganos internos de control: las áreas de fiscalización y control al interior de las entidades fiscalizadas o cualquier instancia que lleve a cabo funciones similares;

XXII. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en revisión;

XXIII. Programas: los señalados en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto, con base en los cuales las entidades fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto público federal;

XXIV.- Proyectos de Prestación de Servicios: Esquemas a largo plazo, existentes bajo un contrato de prestación de servicios suscrito con un inversionista,proveedor o contratista, cuyos pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten;

XXV. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como los considerados como tales por las constituciones y demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la administración o ejercicio de recursos públicos federales o ambos, así como los integrantes de los Consejos de Administración de las Empresas Productivas del Estado;

XXVI. Sistema: El Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General;

XXVII. Tribunal: El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y

XXVIII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión.

Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria serán aplicables a la presente Ley.

Artículo 3.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y el Presupuesto, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal.

La Auditoría deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 4.- Los sujetos obligados deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Cuando esta Ley no prevea plazo, la Auditoría podrá fijarlo y no será inferior a 10 días hábiles ni mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del requerimiento respectivo.

Los sujetos obligados deberán acompañar a la información solicitada, los anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación soporte relacionada con la solicitud.

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por parte de la Auditoría, se requiera un plazo mayor para ser atendidos, esta última, a propuesta de las entidades fiscalizadas, podrá determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de información, los cuales serán improrrogables.

Artículo 5.- Cuando los servidores públicos o los particulares que no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, los titulares de las áreas responsables de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo.

También se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran contratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación.

No se impondrán las multas a que se refiere este artículo, cuando el incumplimiento por parte de los servidores públicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad.

Artículo 6.- Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. La Tesorería de la Federación se encargará de hacer efectivo su cobro en términos de las disposiciones aplicables. En caso de que no se paguen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a su notificación, la Tesorería de la Federación ordenará se aplique el procedimiento administrativo de ejecución, para obtener su pago.

Artículo 7.- Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 8.- El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los poderes de la Unión y los entes públicos, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se ejerza el presupuesto de egresos de la Federación, y

II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación.

La Auditoría realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión.

TÍTULO SEGUNDO
De la Auditoría Superior de la Federación

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 9.- La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la Auditoría, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.

La Auditoría tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

Artículo 10.- La fiscalización que realiza la Auditoría y que incluye la evaluación de la gestión financiera y la auditoría de desempeño, tiene carácter externo y, por lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de revisión que realicen otras instancias de control competentes.

Artículo 11.- La Auditoría tendrá las atribuciones siguientes:

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas necesarios para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública;

II. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Archivos las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías;

III. Proponer al Consejo Nacional de armonización contable, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la prevista en dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes;

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas que cuenten con recursos federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos por el Subsistema Nacional de Evaluación; en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias;

V. Verificar documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

VI. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de

Ingresos y el Presupuesto y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de la Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes General de Deuda Pública, de Responsabilidades Administrativas, que establece las Bases del Sistema Nacional Anticorrupción, de Partidos Políticos; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Anticorrupción en Contrataciones Públicas; orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación; de Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y de disciplina fianciera y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de los programas;

VIII. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de ser requerido, el soporte documental;

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y, en general, a cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de la Cuenta Pública, a efecto de realizar las compulsas correspondientes.

El plazo para la entrega de documentación e información a que se refiere el párrafo anterior, será de un mínimo de 10 días hábiles a un máximo de 15 días hábiles;

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la información relativa a las operaciones de cualquier tipo proporcionada por las instituciones financieras, les será aplicable a todos los servidores públicos de la Auditoría, así como a los profesionales contratados para la práctica de auditorías, la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 75 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 24 de esta Ley.

La Auditoría tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, en poder de las entidades fiscalizadas, estando obligada a mantener la misma reserva o secrecía, hasta en tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades.

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría información de carácter reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicha información será conservada por la Auditoría en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada al Ministerio Público y al Tribunal, cuando se acompañe a una denuncia de hechos o a la aplicación de un procedimiento resarcitorio, en este último caso, a las partes que participen.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las

responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XII. Fiscalizar todo acto de los sujetos obligados, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XIII. Fiscalizar de manera directa las participaciones federales entregadas a entidades federativas y municipios;

XIV. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia, destino y aplicación de fondos y recursos federales, incluidas las participaciones federales, así como cualquier hecho de corrupción;

XV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus funciones;

XVI. Formular recomendaciones al desempeño para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia y economía de las acciones de cualquier orden de gobierno, a fin de elevar la calidad del desempeño gubernamental;

XVII. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención de los órganos internos de control, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de juicio político;

XVIII. Promover ante el Tribunal o los órganos internos de control acciones para determinar los daños o perjuicios, o ambos, que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, de las entidades paraestatales federales o de las empresas productivas del Estado; así como para determinar su responsabilidad de indemnizar y ser acreedor a las sanciones pecuniarias correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Para fincar las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior se deberá tramitar, substanciar y resolver el procedimiento de responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, de las entidades paraestatales federales o de las empresas productivas del Estado,conforme a los ordenamientos aplicables.

También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del fincar otras responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y querellas penales;

XIX. Promover las responsabilidades ante el Tribunal y la Fiscalía para la imposición que las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y los particulares;

XX. Imponer sanciones por el incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado tratándose de las situaciones excepcionales que determina esta Ley;

XXI. Interponer el recurso de revisión administrativa en contra de las resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas;

XXII. Practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría. Igualmente, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizadas, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente las mismas;

XXIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de los documentos originales que tengan a la vista y certificarlas, mediante cotejo con sus originales. Igualmente podrá expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos;

XXIV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública;

XXV. Fiscalizar la deuda pública en su contratación, registro, refinanciamiento, administración y pago; de conformidad al TítuloSéptimo;

XXVI. Emitir una opinión sobre la estabilidad de las finanzas públicas en materia del manejo, riesgo y administración de todos los instrumentos jurídicos reconocidos o contingentes que representen una carga financiera para el Estado.

XXVII. Fiscalizar los convenios suscritos con los Estados y Municipios para otorgar la Garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de Deuda Pública, las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos locales.

XXVIII. Solicitar, en los términos del artículo 77 de esta Ley, a los órganos internos de control competentes, en el ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellos practicadas;

XXIX. Solicitar la presencia de representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que

se les señale, para celebrar como mínimo dos reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, las observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron conforme a lo previsto en los artículos 72 y 73 de esta Ley;

XXX. Participar en el Comité Coordinador del Sistema en los términos que disponga la Ley;

XXXI. Promover la la implementación de autoevaluaciones en las entidades fiscalizadas.

XXXII. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;

XXXIII. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos;

XXXIV. Celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relación con sus atribuciones, en particular para el ejercicio de sus atribuciones en el extranjero y participar en foros nacionales e internacionales;

XXXV. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta Pública.

Capítulo II
Del Auditor Superior de la Federación

Artículo 12.- La persona titular de la Auditoría será designada conforme a lo previsto por el párrafo sexto del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara.

Artículo 13.- La designación de la persona titular de la Auditoría se sujetará al procedimiento siguiente:

I. Un mes antes de la conclusión del plazo para el que fue designado el Auditor, la Comisión deberá realizar una consulta pública entre organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Sistema, especialistas en auditoría e instituciones públicas de educación superior para conocer el perfil de la persona que ocupará la titularidad de la Auditoría.

II. A partir de la información recabada en la consulta pública, la Comisión someterá a consulta de quienes participaron en el proceso señalado en la fracción anterior, el proyecto de convocatoria, a efecto de recibir observaciones en un plazo no mayor de cinco días naturales.

III. Una vez incorporadas las observaciones, la Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, la cual deberá ser publicada en los sitios de internet de la Cámara, de la Auditoría y en dos diarios de circulación nacional.

IV. Durante un período de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la

convocatoria, la Comisión recibirá las solicitudes para ocupar el puesto de Titular de la Auditoría;

V. Las solicitudes recibidas deberán ser publicadas en los sitios de internet de la Auditoría y de la Cámara al día siguiente de la terminación del plazo señalado en la fracción anterior.

VI. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a programar la comparecencia de las personas postuladas;

VII. Las comparecencias deberán realizarse en horarios y días hábiles y permitirán la libre participación de las y los legisladores, y la Comisión establecerá los mecanismos de participación de la sociedad civil

VIII. Una vez realizadas las comparecencias, la Comisión deberá elaborar una terna que contenga a las personas que a su juicio considera idóneas. Este dictamen deberá ser fundado y motivado de manera exhaustiva y considerando el perfil propuesto elaborado conforme a lo señalado en la fracción I y deberá presentarse al Pleno en un plazo no mayor de diez días naturales.

IX. A solicitud del diez por ciento de las y los legisladores, se podrá realizar la comparecencia de las personas propuestas en la terna en el Pleno de la Cámara. Estas comparecencias deberán garantizar el libre intercambio de ideas entre diputadas, diputados y personas propuestas.

X. Terminada la discusión del dictamen, se procederá a la votación nominal, a fin de elegir al titular de la Auditoría.

XI. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno de la Cámara.

Artículo 14.- En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de Titular de la Auditoría, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. Ninguna persona propuesta en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección.

Artículo 15.- La persona titular de la Auditoría durará en el encargo ocho años y podrá ser nombrada nuevamente por una sola vez. Podrá ser removida por la Cámara por las causas graves a que se refiere el artículo 25 de esta Ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se presenta estando en receso la Cámara, la Comisión Permanente podrá convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción.

Artículo 16.- Durante el receso de la Cámara, quien ocupe el cargo de Auditor Especial que corresponda conforme al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, ejercerá el cargo hasta en tanto dicha Cámara designe a la persona titular de la Auditoría en el siguiente periodo de sesiones.

La persona titular de la Auditoría será suplida en sus ausencias temporales por las o los auditores especiales, por la persona Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y por la persona Titular de la

Unidad General de Administración en el orden que señale el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

En caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta a la Cámara para que designe, en términos del artículo 80 de esta Ley, a la persona que concluirá el encargo.

Artículo 17.- La persona titular de la Auditoría deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. Contar con ciudadanía mexicana por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena;

IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;

V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República; Senador, Diputado Federal; Titular del Ejecutivo de alguna entidad federativa; titular o en su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento;

VI. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos;

VII. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido de algún cargo del sector público o privado, y

IX. Presentar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial en formato público, respecto de los últimos dos años.

Artículo 18.- La persona titular de la Auditoría tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar a la Auditoría ante las entidades fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; ante el Sistema y demás personas físicas y morales, públicas o privadas;

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría atendiendo a las previsiones del

ingreso y del gasto público federal y las disposiciones aplicables;

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la entidad de fiscalización, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público de la Federación, afectos a su servicio;

IV. Aprobar el programa anual de actividades; así como el plan estratégico de la Auditoría por un plazo mínimo de 3 años, y el programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública respectiva;

V. Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del conocimiento de la Comisión, el Reglamento Interior de la Auditoría, en el que se distribuirán las atribuciones a sus unidades administrativas y sus titulares, además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el Diario Oficial de la Federación;

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría, los que deberán ser conocidos previamente por la Comisión y publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto de la Auditoría, ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como informando a la Comisión sobre el ejercicio de su presupuesto en términos del artículo 17, fracción XIX de esta Ley, y cuando la Comisión le requiera información adicional;

VII. Nombrar al personal de mando superior de la Auditoría;

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere a la Auditoría; así como establecer los elementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y las características propias de su operación;

IX. Ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión;

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se requiera;

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior;

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y del Reglamento Interior de la propia Auditoría;

XIII. Recibir de la Comisión la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización superior;

XIV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de febrero del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal;

XV Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, los informes individuales el último día hábil de los meses de junio y octubre, el 20 de febrero del año de la presentación de la Cuenta Pública Federal;

XVI. Desahogar el procedimiento preparatorio de responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley;

XVII. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades fiscalizadas, legislaturas locales, las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional;

XVIII. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones;

XIX. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a través de la Comisión, de la aplicación de su presupuesto aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;

XX. Solicitar ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se impongan en los términos de esta Ley;

XXI. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del personal de confianza de la Auditoría, observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XXII. Elaborar para su envío a la Comisión el plan estratégico de la Auditoria, y

XXIII. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones de responsabilidad resarcitoria que emita el Tribunal

XXIV. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III constitucionales respectivamente;

XXV. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, solicitudes y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;

XXVI. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;

XXVIII. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el Artículo 113 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley del Sistema;

XXIX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de corrupción, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XXX. Con base en el informe señalado en la fracción anterior, presentar en el ámbito de su competencia, proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de las causas que los generan y

XXXI. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

De las atribuciones previstas a favor de la persona titular de la Auditoría en esta Ley, sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII,XV, XVI, XIX, XX y XXII de este artículo son de ejercicio exclusivo de la persona titular de la Auditoría y, por tanto, no podrán ser delegadas.

Capítulo III
De la Organización de la Auditoría

Artículo 19.- La persona Titular de la Auditoría será auxiliada en sus funciones por las y los auditores especiales, así como por las y los titulares de unidades, directores generales, auditores y demás servidores públicos que al efecto señale el Reglamento Interior de la Auditoría, de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho Reglamento se asignarán las facultades y atribuciones previstas en esta Ley.

Artículo 20.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener por lo menos treinta y dos años cumplidos al día de su designación;

III. Cumplir los requisitos señalados en las fracciones III a V; VIII y IX del artículo 17 de esta Ley;

IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años, con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título y cédula profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de siete años en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos y

VI. Presentar versiones públicas de sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal.

Artículo 21.- Sin perjuicio de su ejercicio por la persona titular de la Auditoría o de cualquier otro servidor público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría, corresponde también a las y los auditores especiales las facultades siguientes:

I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor, las actividades relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación de los informes individuales y del Informe General para lo cual podrá solicitar información del ejercicio en curso;

II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en términos de esta Ley;

III. Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización;

IV. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por la persona titular de la Auditoría;

V. Designar a las y los auditores encargados de practicar las auditorías a su cargo o, en su caso, celebrar los contratos de prestación de servicios a que se refiere el artículo 73 de esta Ley;

VI. Revisar, analizar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta Pública;

VII. Solicitar la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les señale, para celebrar las reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda de los resultados y, en su caso, observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron;

VIII. Formular los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorías que se practiquen, incluyendo recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirá, según proceda, a las entidades fiscalizadas en los términos de esta Ley;

IX. Participar en los procedimientos de las responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría;

XI. Elaborar dictamen técnico que integre la documentación y comprobación necesaria para promover las acciones legales en el ámbito penal y del juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades que se detecten en la revisión o auditorías que se practiquen;

XII. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de responsabilidades en que incurran los servidores públicos de las entidades fiscalizadas;

XIII. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que determinen su conclusión conforme a las

disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la resolución definitiva que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos;

XIV. Formular el proyecto de los informes individuales y de Informe General, así como de los demás documentos que se le indique, y

XV. Las demás que señale la Ley, el Reglamento Interior de la Auditoría y demás disposiciones aplicables.

Artículo 22.- La Auditoría contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:

I. Asesorar en materia jurídica a la persona titular de la Auditoría y a las y los auditores especiales, así como actuar como su órgano de consulta;

II. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso de reconsideración previsto en esta Ley y someter el proyecto de resolución a consideración del servidor público que haya emitido el acto recurrido;

III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y contencioso-administrativas en los juicios en los que la Auditoría sea parte, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos de la propia Auditoría, dando el debido seguimiento a los procesos y juicios en que actúe;

IV. Representar a la Auditoría ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;

V. Presentar directamente o por conducto de la dirección general respectiva, conforme a lo que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría, las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas por las personas Titulares de las Unidades Administrativas Auditoras con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos elaborados por dichos Titulares;

VI. Asesorar a las Unidades Administrativas Auditoras en el levantamiento de las actas administrativas que procedan con motivo de las auditorías que practique la Auditoría;

VII. Participar en los procedimientos de responsabilidades resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría;

IX. Revisar los aspectos legales concretos, por conducto de la dirección general respectiva, conforme a lo que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría, que le soliciten las unidades administrativas auditoras, sobre los dictámenes técnicos que requieran para promover acciones derivadas de la fiscalización de la Cuenta Pública;

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por la persona titular de la Auditoría, y

XI. Las demás que señale la Ley y otras disposiciones aplicables.

Artículo 23.- La Auditoría contará con una Unidad General de Administración que le proveerá de servicios administrativos cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones:

I. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan y con las políticas y normas emitidas por la persona Titular de la Auditoría;

II. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en que se encuentre operando la propia Auditoría;

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría, ejercer y glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta comprobada de su aplicación, así como implantar y mantener un sistema de contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto de operaciones que requiera su propia administración;

IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría;

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los contratos que permitan suministrar los recursos materiales que solicitan sus unidades administrativas para su debido funcionamiento, y

VI. Las demás que le señale la persona titular de la Auditoría y las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Artículo 24.- La persona titular de la Auditoría y las y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido:

I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios de Profesionales en representación de la Auditoría, y

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta.

Artículo 25.- La persona titular de la Auditoría podrá ser removida de su cargo por las siguientes causas graves de responsabilidad:

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior;

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias;

III. Dejar, sin causa justificada, de promover cualquier tipo de responsabilidad o aplicar sanciones

pecuniarias, en el ámbito de su competencia y en los casos previstos en la Ley, cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus atribuciones realicen;

IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cámara;

V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe General;

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría, con motivo del ejercicio de sus atribuciones;

VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esta Ley, y

VIII. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión, durante dos ejercicios consecutivos.

Artículo 26.- La Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción de la persona titular de la Auditoría por causas graves de responsabilidad, y deberá dar derecho de audiencia al afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

Las y los auditores especiales podrán ser removidos por las causas graves a que se refiere el artículo anterior, por la persona titular de la Auditoría.

Artículo 27.- La persona titular de la Auditoría y las y los auditores especiales sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la Auditoría Superior de la Federación o en virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, misma que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.

Artículo 28.- La persona titular de la Auditoría podrá adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Auditoría. Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Capítulo IV
Del Régimen Laboral

Artículo 29.- La Auditoría contará con un servicio fiscalizador de carrera, debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que establezca como mínimo:

I. Incluirá como mínimo y sin excepción al personal que lleve a cabo las auditorías y demás plazas y categorías que la Auditoría Superior de la Federación determine;

II. La contratación del personal del servicio será mediante concurso público, sujeto a procedimientos y requisitos para la selección, ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones transparentes;

III. Los procedimientos y requisitos para la promoción de sus integrantes, que deberán tomar en cuenta, su capacidad, conocimientos, eficiencia, calidad y desempeño, así como la aplicación de los exámenes respectivos, y

IV. El personal del servicio tendrá garantizada su permanencia en la Auditoría siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempeño que se determinen y cumpla los planes de capacitación y actualización. Los procedimientos y requisitos para la permanencia y en su caso, para la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta su capacidad, nivel de especialización, conocimientos, eficiencia, capacitación, desempeño y resultados de los exámenes, entre otros.

Artículo 30.- La Auditoría elaborará su proyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por la persona titular de la Auditoría a la Comisión a más tardar el 15 de agosto, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. La Auditoría Superior de la Federación ejercerá autónomamente su presupuesto aprobado con sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente y las demás disposiciones que resulten aplicables.

La Auditoría publicará en el Diario Oficial de la Federación su normatividad interna conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 31.- Los servidores públicos de la Auditoría se clasifican en trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 32.- Son personas trabajadoras de confianza: la persona titular de la Auditoría, las y los auditores especiales, las y los titulares de las unidades previstas en esta Ley, las y los directores generales, las y los auditores, las y los mandos medios y las y los demás trabajadores que tengan tal carácter conforme a lo previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

Son personas trabajadoras de base las que desempeñan labores en puestos no incluidos en el párrafo anterior y que estén previstos con tal carácter en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Artículo 33.- La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Auditoría, a través de su Titular y las y los trabajadores a su servicio para todos los efectos.

Capítulo V
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

Artículo 34.- La persona titular de la Auditoría, las y los auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría en el desempeño de sus funciones, se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 35.- Para el efecto de apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones existirá la Unidad, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de las y los servidores públicos de la Auditoría, la cual formará parte de la estructura de la Comisión.

La Unidad podrá aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en el marco jurídico y proporcionar apoyo técnico a la Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría.

Artículo 36.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que las y los servidores públicos de la Auditoría se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;

II. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta con base en el programa anual de trabajo que aprueba la Comisión;

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoría, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la Comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

IV. Conocer y resolver, con la aprobación de la Comisión el recurso de revocación que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;

VI. Participar en los actos de entrega recepción de las y los servidores públicos de mando superior de la Auditoría;

VII. A instancia de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a las y los servidores públicos de la Auditoría;

VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de las y los servidores públicos adscritos a la Auditoría;

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

XI. Proponer a la Comisión los sistemas de evaluación del desempeño de la propia Unidad y los que utilice para evaluar a la Auditoría, así como los sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión;

XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones, y

XIII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja ante la Unidad sobre los actos de la persona titular de la Auditoría que contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo caso la Unidad sustanciará la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notificando al quejoso el dictamen correspondiente, previa aprobación de la Comisión.

Artículo 37.- El titular de la Unidad será propuesto por la propia Comisión y designado por la Cámara, mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión respectiva, debiendo cumplir los requisitos que esta Ley establece para el Auditor Superior de la Federación.

Artículo 38.- Para ser Titular de la Unidad se requieren los mismos requisitos que para ser titular de la Auditoría.

Artículo 39.- La persona titular de la Unidad será responsable administrativamente ante la propia Cámara, a la cual deberá rendir un informe anual de su gestión, con independencia de que pueda ser citado extraordinariamente por ésta, cuando así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones.

Artículo 40.- Son atribuciones de la persona titular de la Unidad:

I. Planear y programar auditorías a las diversas áreas que integran la Auditoría;

II. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría la información necesaria para cumplir con sus atribuciones;

III. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la Unidad, y

IV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 41.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la Unidad, contará con las y los servidores públicos, las unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Comisión apruebe la Cámara y se determinen en el presupuesto de la misma.

El reglamento de la Unidad que expida la Cámara establecerá la competencia de las áreas a que alude el párrafo anterior y aquellas otras unidades administrativas que sean indispensables para el debido funcionamiento de la misma.

Artículo 42.- Los servidores públicos de la Unidad deberán cumplir los perfiles académicos de

especialidad que se determinen en su Reglamento, preferentemente en materias de fiscalización, evaluación del desempeño y control.

El ingreso a la Unidad será mediante concurso público.

TÍTULO TERCERO
De la Participación Ciudadana

CAPÍTULO ÚNICO
Del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Artículo 43.- Además de las facultades que le confieren otras leyes, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

I. Conocer y opinar sobre el Programa General de Auditorías y el Programa Anual de Auditorías de la Auditoría;

II. Vigilar que las acciones de la auditoría se apeguen a los principios, criterios y disposiciones establecidos por este ordenamiento, procurando la vigencia de la participación ciudadana, el derecho de acceso a la información, la transparencia y la imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos;

III. Presentar denuncias cuando se detecten irregularidades en el uso de los recursos públicos;

IV. Proponer a la Auditoría, la práctica de revisiones a la información financiera gubernamental y auditorías específicas para que sean incluidas en el Programa Anual de Auditorías;

V. Turnar a la Comisión para su atención, las quejas y denuncias que reciba en contra de los servidores públicos de la Auditoría Superior;

VI. Opinar ante la Comisión sobre el desempeño del Auditor;

VII. Vigilar el cumplimiento de las atribuciones de la Auditoría; y

TÍTULO CUARTO
De la relación con la Cámara de Diputados

Capítulo Único
De la Comisión

Artículo 44.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II y en el último párrafo de la fracción VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara contará con la Comisión que tendrá las atribuciones de coordinar las relaciones entre aquélla y la Auditoría; evaluar el desempeño de esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, y solicitarle que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización.

Artículo 45.- Son atribuciones de la Comisión:

I. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la Auditoría;

II. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la Cuenta Pública y turnarla a la Auditoría;

III. Presentar ante el Pleno de la Cámara, los informes individuales y el Informe General, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara;

IV. Conocer los programas estratégico y anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría, así como sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento;

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, a la persona titular de la Auditoría para conocer en lo específico de los informes individuales y del Informe General;

VI. Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría y turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe anual de su ejercicio;

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías; proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y requerir informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización.

VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de las personas candidatas a ocupar el cargo de titular de la Auditoría, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo 79 constitucional;

IX. Proponer al Pleno de la Cámara al Titular de la Unidad y los recursos materiales, humanos y presupuestarios con los que debe contar la propia unidad;

X. Proponer al Pleno de la Cámara el Reglamento Interior de la Unidad;

XI. Aprobar el programa de actividades de la Unidad y requerirle todo tipo de información relativa a sus funciones; de igual forma, aprobar políticas, lineamientos y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;

XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a la Auditoría;

XIII. Aprobar los indicadores que utilizará la Unidad para la evaluación del desempeño de la Auditoría y, en su caso, los elementos metodológicos que sean necesarios para dicho efecto y los indicadores de la Unidad;

XIV. Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría, y

XV. Las demás que establezcan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 46.- La Comisión presentará directamente a la Auditoría un informe que contenga las observaciones y las recomendaciones que se deriven del ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere en materia de evaluación de su desempeño a más tardar el 30 de mayo del año en que presente el Informe General. La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta de su atención al presentar el Informe General del ejercicio siguiente.

TÍTULO QUINTO
Del Sistema Nacional de Fiscalización

Capítulo Único

Artículo 47. El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica que contempla el principio de progresividad de los derechos humanos, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.

Artículo 48. Son parte integrante del Sistema:

I. La Auditoría;

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema;

III. La Secretaría de la Función Pública;

IV. Las Contralorías Estatales;

V. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de las Entidades Federativas, y

V. Los Órganos Internos de control de la Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

Los Órganos Internos de Control a nivel municipal, así como las contralorías de dependencias municipales descentralizadas se integrarán al Sistema Nacional de Fiscalización de manera progresiva.

Artículo 49. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene como funciones:

a) Propiciar un ambiente de coordinación entre todos los integrantes del Subsistema;

b) Generar las condiciones para que los integrantes del Subsistema desempeñen sus funciones bajo los mismos estándares y con capacidades institucionales similares;

c) Establecer, revisar y actualizar las normas profesionales de auditoría gubernamental basadas en las normas internacionales de fiscalización superior de la INTOSAI;

d) Definir las estrategias, metodologías, políticas y directrices, para la planeación, programación y seguimiento de actividades propias de la auditoría gubernamental;

e) Promover la evaluación de los sistemas de control interno, así como la implementación de las mejores prácticas en la materia;

f) Determinar los mecanismos de creación de capacidades, intercambio de información y generación de conocimiento en materia de auditoría gubernamental entre sus integrantes;

g) Impulsar el cumplimiento de las Leyes Generalesde Contabilidad Gubernamental, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Archivos, así como de la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios;

h) Impulsar la homologación en la planeación, ejecución y reporte de auditorías, que abarca normas de auditoría, metodologías y procedimientos;

i) Impulsar la creación de capacidades, en la que se incluyen las acciones relativas a certificaciones profesionales, programas de capacitación y procesos de revisión entre pares;

j) Intercambiar información y realizar auditorías conjuntas o coordinadas y la promoción del control interno en los entes fiscalizados como parte de la fiscalización;

Artículo 50. El Sistema contará con un Comité Rector, conformado por los integrantes del mismo y estará encabezado por la persona titular de la Auditoría.

Artículo 51. El Comité Rector podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, entidades fiscalizadas y representantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistema. En todo caso, los sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones.

Artículo 52. El Comité Rector podrá funcionar en Pleno o en comisiones. El Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El convocante deberá integrar la agenda de los asuntos a tratar. El quórum para las reuniones del Comité Rector se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. Corresponderá al Presidente del Comité Rector, además, la facultad de promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema.

Artículo 53.-Los miembros del Comité Rector podrán formular propuestas de acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del Sistema.

Artículo 54.-El Presidente del Comité Rector contará con las siguientes atribuciones:

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Rector;

II. Informar periódicamente al Comité Rector de sus actividades;

III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios que se adopten por el Comité Rector;

IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Comité Rector, y

V. Colaborar con los integrantes del Sistema, para fortalecer y garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación.

TÍTULO SEXTO
De la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 55.-La fiscalización de la Cuenta Pública comprende la revisión de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídicaincluyendo los entregados a entidades federativas y municipios a través de participaciones y transferencias federales; el destino y ejercicio de los recursos que hayan realizado los gobiernos locales derivados de empréstitos que cuenten con la garantía de la Federación así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 56.-La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; la estabilidad de las finanzas públicas en el tiempo; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas, conforme a las normas y principios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad y progresividad de los derechos humanos.

Como parte de las auditorías de desempeño, la Auditoría podrá realizar entre otros, los siguientes tipos de auditorías:

a) forenses: con la finalidad de analizar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, para sustentar posibles fraudes y delitos perpetrados en el desarrollo de las funciones públicas y privadas;

b) de obra pública e inversiones físicas: buscan constatar que las obras públicas ejecutadas para o por las entidades fiscalizadas, se realizaron y ajustaron a los proyectos, programas, presupuestos, especificaciones y costos estipulados en los contratos correspondientes y de acuerdo con la normatividad contable y legal aplicable;

c) de riesgos: tienen como finalidad prever una situación que potencialmente pudiera ser desfavorable a la administración pública y a las finanzas de cualquier ente fiscalizado. Se revisaran los Informes de autoevaluación de integridad y riesgos que produzcan las agencias gubernamentales.;

d) de sistemas: busca evaluar que los sistemas y procedimientos utilizados sean adecuados y

confiables en su diseño y operación; examinar el desarrollo y uso de los sistemas computarizados, cotejando que cuenten con el suficiente control administrativo y organizacional que garantice la exactitud y confiabilidad en el procesamiento de la información;

e) de legalidad: para verificar el grado de cumplimiento de la reglamentación normativa a la que se encuentran sujetos los entes fiscalizados y en qué medida permite ésta que los programas del ente se cumplan de manera económica y eficiente;

f) de objetos compartidos: buscan verificar y constatar físicamente las acciones y gestiones realizadas por las entidades fiscalizadas, para atender en tiempo y forma las observaciones-acciones determinadas y promovidas por el ente de fiscalización superior, ya sea en la revisión al ejercicio correspondiente o a las revisiones efectuadas a ejercicios anteriores, y

g) de seguimiento: éstas verifican y constatan físicamente las acciones y gestiones realizadas por las entidades fiscalizadas, para atender en tiempo y forma las observaciones-acciones determinadas y promovidas por el ente de fiscalización superior, ya sea en la revisión al ejercicio correspondiente o a las revisiones efectuadas a ejercicios anteriores.

Artículo 57.- La Auditoría deberá iniciar el proceso de fiscalización, a partir del primer día hábil del año del ejercicio fiscal siguiente al que se va a auditar. Para ello deberá publicar un plan previo de auditorías, la última semana del ejercicio fiscal a auditar.

La Auditoría podrá solicitar información a los entes fiscalizados antes de que finalice el año fiscal correspondiente a la Cuenta Pública que se revisará, con el fin de obtener elementos para la planeación y programación de auditorías.

Artículo 58.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, conforme a lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;

b) Estado de variación en la hacienda pública;

c) Estado de cambios en la situación financiera;

d) Informes sobre pasivos contingentes;

e) Notas a los estados financieros;

f) Estado analítico del activo;

g) Estado analítico de la deuda, pasivos y otras obligaciones, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones:

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;

ii. Fuentes de financiamiento;

iii. Por moneda de contratación, y

iv. Por país acreedor;

h) Las garantías que otorgue el Gobierno Federal por los empréstitos de los Estados y Municipios, con la siguiente desagregación:

i. Destino;

ii. Ejercicio;

iii. Fuente o garantía de pago;

iv. Plazo pactado;

v. Por acreedor;

vi. Tasa de interés promedio ponderada

i) el estado de la deuda de las entidades federativas y de los municipios con el desglose que contempla la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios

II. Información Presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto;

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones:

i. Administrativa;

ii. Económica y por objeto del gasto, y

iii. Funcional-programática;

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen en interno y externo;

d) Intereses de la deuda;

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión, y

c) Indicadores de resultados;

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el programa económico anual:

a) Ingresos presupuestarios;

b) Gastos presupuestarios;

c) Postura Fiscal;

d) Deuda pública, incluida la relativa a las entidades federativas y a los municipios a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios y

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo Federal, suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales. En dicho supuesto, la Auditoría contará, consecuentemente, con el mismo tiempo adicional para presentar el Informe General.

Artículo 59.- A fin de integrar la Cuenta Pública, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos harán llegar con la debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, la información a que se refiere el artículo anterior conforme al Acuerdo General que emita la Auditoría.

Artículo 60.- Las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y comprobatorios, para efecto de destrucción, guarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente, serán determinadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en términos de lo que establece el artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley General de Archivos.

Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a que se refiere el párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables a las operaciones en que aquéllos se apliquen.

Artículo 61.- La Auditoría conservará en su poder la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal; los informes individuales y el Informe General correspondiente, mientras no prescriban sus facultades para fincar las responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se detecten en las operaciones objeto de revisión. También se conservarán las copias autógrafas de las resoluciones en las que se finquen responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas

penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.

La Auditoría emitirá reglas de carácter general para destruir la documentación que obre en sus archivos después de diez años, siempre y cuando ésta se haya microfilmado, digitalizado, escaneado o respaldado por algún otro medio.
Lo señalado en el párrafo anterior solamente se podrá dar en caso de que la información sea pública, confidencial o hayan transcurrido 2 años a partir de que dejó de ser reservada.

La documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de la Cuenta Pública, podrá destruirse después de 5 años, siempre que ésta no afecte el reconocimiento de los derechos de los trabajadores al servicio de la Auditoría Superior de la Federación.

Capítulo II
De la Fiscalización de la Cuenta Pública

Artículo 62.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público;

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos, de las empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales federales;

II. Revisar los convenios suscritos con los Estados y Municipios para otorgar la Garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de Deuda Pública, las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a Financiamientos de los Estados y Municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos locales.

III. Fiscalizar el destino y ejercicio de las participaciones federales entregadas a Estados y Municipios.

IV. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:

a) Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto;

c) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;

IV. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:

a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía de los mismos y su efecto o la consecuencia durante el periodo que se evalúe;

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y los establecidos en el Subsistema Nacional de Evaluación y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;

V. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de esta Ley, y

VI. Evaluar el efecto o consecuencia en la progresividad de los derechos de las personas o comunidades.

Artículo 63.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control competentes.

Artículo 64.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, podrán derivar en:

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de intervención del órgano interno de control, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía y denuncias de juicio político;

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al desempeño y

III. El ejercicio de la acción resarcitoria ante el Tribunal.

Artículo 65.- La Cuenta Pública será turnada a la Auditoría para su revisión y fiscalización superior, a través de la Comisión.

Artículo 66.- La Auditoría, una vez concluida la revisión de la Cuenta Pública, según lo establecido en el Artículo 74 fracción VI, párrafo tercero de la Constitución, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la misma, a efecto de que presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 días hábiles de anticipación, remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría les concederá un plazo de 7 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración del Informe General y los informes individuales.

Una vez que la Auditoría valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración de los informes individuales y definitiva del Informe General.

En caso de que la Auditoría considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los informes individuales y del Informe General, de manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

Artículo 67.- Lo previsto en el artículo anterior, se realizará sin perjuicio de que la Auditoría convoque a las reuniones de trabajo que estime necesarias durante las auditorías correspondientes, para la revisión de los resultados preliminares.

Artículo 68.- La Auditoría podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Artículo 69.- Para la elaboración del Plan Estratégico de la Auditoría y del Programa Anual de Auditorías, la Auditoría deberá considerar:

a) Las propuestas que realice la sociedad a través del Comité de Participación Ciudadana del Sistema y

b) Las observaciones que realicen los órganos constitucionalmente autónomos.

Artículo 70.- La Auditoría tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los objetivos de los programas de los entes públicos, así como a la demás información que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública siempre que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información.

Artículo 71.- Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control o las entidades de fiscalización locales deban colaborar con la Auditoría en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite la Auditoría sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera.

Artículo 72.- La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los dos artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta Ley.

Artículo 73.- Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría.

Artículo 74.- Durante sus actuaciones los comisionados que hubieren intervenido en las revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos, en las que harán constar hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas contenidos harán prueba en los términos de ley.

Artículo 75.- Los servidores públicos de la Auditoría deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.

Artículo 76.- Los servidores públicos de la Auditoría, cualesquiera que sea su categoría serán responsables en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información por violación a la reserva sobre la información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan.

Artículo 77.- La Auditoría será responsable solidaria de los daños y perjuicios que en términos de este capítulo, causen los servidores públicos de la misma, sin perjuicio de que la Auditoría promueva las acciones legales que correspondan en contra de los responsables.

Capítulo III
Del contenido de los informes individuales y del Informe General y su análisis

Artículo 78.-La Auditoría tendrá un plazo que vence el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o, en su caso, a la Comisión Permanente, para rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea.

Los informes individuales que hayan sido concluidos, deberán ser entregados el último día hábil de los meses de junio y octubre del año de presentación de la Cuenta Pública a la Cámara y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

A solicitud de la Comisión o de su mesa directiva, el Auditor y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido de los informes individuales y del Informe

General, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe General.

Artículo 79.- Los informes individuales y el Informe General contendrán los informes de las auditorías practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente:

I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de cada auditoría;

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño;

III. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;

IV. Los resultados de la gestión financiera;

V. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI. El análisis de las desviaciones, en su caso;

VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales, incluyendo las aportaciones federales y las participaciones federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México;

VIII.- Los resultados de la revisión y fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de Estados y Municipios;

IX. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas;

X. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones, y

XI. Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 80.- La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta a la Cámara en los informes individuales y el Informe General de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.

La Auditoría deberá entregar a la Cámara, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los informes individuales de auditoría que haya

presentado en los términos de esta fracción. En dicho informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal.

Artículo 81.- La persona titular de la Auditoría, una vez rendidos los informes individuales y el Informe General a la Cámara, y con independencia de las actuaciones, promociones y procedimientos iniciados a que se refiere el artículo anterior, enviará a las entidades fiscalizadas y, de ser procedente a otras autoridades competentes, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que sea entregados los informes individuales y el Informe General, las acciones promovidas y recomendaciones señaladas en el artículo 64 de esta Ley.

Los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, deberán formularse o emitirse durante los siguientes 90 días hábiles posteriores a la presentación de los informes individuales y del Informe General con la finalidad de evitar la prescripción de las acciones legales correspondientes.

En el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que se notifiquen a los órganos internos de control competentes, deberán remitirse acompañando copia certificada del expediente que sustente la promoción respectiva.

Las acciones promovidas a que se refiere el párrafo anterior, no serán formuladas o emitidas, cuando las entidades fiscalizadas aporten elementos que solventen las observaciones respectivas, situación que se hará del conocimiento de las mismas y de la Cámara por escrito.

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría cuando se cuente con los elementos que establezca la Ley.

Artículo 82.- Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, deberán presentar la información y las consideraciones que estimen pertinentes a la Auditoría para su solventación o atención, con excepción de los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria cuyo plazo se establece en el apartado correspondiente de esta Ley. En caso de no hacerlo, la Auditoría podrá aplicar a las personas titulares de las áreas administrativas auditadas una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 veces la Unidad de Medida y Actualización, además de promover las acciones legales que correspondan.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación de la recomendación correspondiente, deberán precisar ante la Auditoría las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

En caso de que la entidad fiscalizada no se pronuncie respecto de la recomendación o la justificación que dé no sea acorde a la solicitud, la Auditoría solicitará a la Comisión que cite a comparecer al titular de la entidad fiscalizada para que esta circunstancia sea explicada detalladamente.

Artículo 83.- La Auditoría deberá pronunciarse en un plazo máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas recibidas de las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En caso de que las entidades fiscalizadas no presenten los elementos necesarios para la solventación de las acciones determinadas, la Auditoría procederá a fincar el pliego de observaciones o promoverá las acciones que correspondan a que se refiere el artículo 100 de esta Ley.

Capítulo IV
De la revisión de la Cuenta Pública por la Cámara de Diputados

Artículo 84.- La Comisión realizará un análisis de los informes individuales y del Informe General y, una vez aprobado lo enviará a la Comisión de Presupuesto para su consideración en la elaboración del Presupuesto. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos de los informes individuales y del Informe General.

Para el análisis a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión deberá coordinarse con el Sistema Nacional Anticorrupción y realizar discusiones públicas.

El análisis de la Comisión podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue conveniente y que haya hecho la Auditoría, para modificar disposiciones legales que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 85.- En aquellos casos en que la Comisión detecte errores en los informes individuales y el Informe General o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar a la Auditoría la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia de la persona titular de la Auditoría o de otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe General.

La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre los informes individuales y el Informe General.

Artículo 86.- La Comisión someterá a consideración del Pleno el dictamen que realice respecto de los informes individuales, el Informe General y el contenido de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de abril del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión.

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta Ley.

TÍTULO SÉPTIMO
De la Estabilidad de las Finanzas Públicas

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 87.- Los sujetos obligados otorgarán todas las facilidades e información a la Auditoría Superior de la Federación que, en su caso, acudan a comprobar la debida negociación, contratación, administración, aplicación, destino específico de la deuda y todos sus accesorios.

Artículo 88.- La Auditoria ejercerá fiscalización directa sobre el destino, ejercicio y manejo de la deuda pública. En caso de que algún sujeto obligado se niegue a proporcionar la información necesaria y oportuna en el ejercicio de una investigación, se aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Ley.

Capítulo II
Del Informe sobre la Estabilidad de las Finanzas Públicas

Artículo 89.- La Auditoría fiscalizará el destino, ejercicio, estructura y el riesgo de la deuda pública, garantías, coberturas, derivados, obligaciones y cualquier figura jurídica que emitan los sujetos obligados por sí mismo o a través de terceros que represente un compromiso para las finanzas públicas de manera directa o contingente, con el objeto de determinar su impacto sobre la estabilidad de las finanzas públicas, la generación de crecimiento económico, empleo y bienestar social.

Sin excluir otros criterios, la Auditoría deberá:

I. Cuando el monto cualquier programa o proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Unidades de Inversión, verificar que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables.

II. Verificar que las operaciones de Financiamiento se contrataron bajo las mejores condiciones de mercado y de competencia económica de acuerdo con el tipo de Obligación, esto es, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta, y que éstas redunden en un beneficio para las finanzas del sector público.

Para este fin, la Auditoría deberá celebrar convenios con la Comisión Federal de Competencia Económica en los que se establezcan mecanismos de intercambio de información, mejores prácticas en oferentes de crédito y mecanismos que fomentan las mejores prácticas.

III. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través del mercado bursátil, verificar que la entidad fiscalizada fundamentó en el propio documento de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario y se precisaron todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público. Además, deberá verificar la información

Artículo 90.- El Informe deberá contener cuando menos:

a) Evolución de los compromisos financieros y contingentes en las finanzas públicas;

b) Identificación de riesgos potenciales para las finanzas públicas;

c) Clasificación y monto por niveles de gobierno y de manera individual;

d) Recomendaciones emitidas;

e) Acciones promovidas por los sujetos obligados;

f) Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, Entidades Federativas, Empresas Productivas del Estado, Municipios y al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, para contener riesgos para la estabilidad de las finanzas públicas;

Artículo 91.- El primero de septiembre, la Auditoría deberá emitir el Informe sobre la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en relación al manejo de sus compromisos financieros y su sostenibilidad en el tiempo, y será presentado al Congreso de la Unión previo a lo establecido en el artículo 42 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Capítulo III
Del Sistema de Alertas

Artículo 92.- La Auditoria elaborará un Sistema de Alertas que generé indicadores de solvencia, liquidez y riesgos a partir del registro, seguimiento y sistematización de las obligaciones, financiamiento, deuda contingente y todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas, con el fin de vigilar la capacidad de pago de los sujetos obligados y prevenir la materialización de riesgos sistémicos para el sistema financiero.

Artículo 93.- Se publicará de manera trimestral un informe sobre la capacidad de pago y los limites prudenciales de endeudamiento por nivel de gobierno y de manera individual, incluyendo en un apartado especial a las empresas productivas del Estado.

Capítulo IV
De los Convenios de colaboración

Artículo 94.- La Auditoría celebrará convenios de colaboración con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las Secretarías de Hacienda de las Entidades y Municipios, las instituciones financieras y con organismos financieros internacionales para la fiscalización de las deudas públicas.

Capítulo V
Del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones

Artículo 95.- Para los efectos de fiscalizar de los compromisos financieros de los sujetos obligados y evaluar su impacto en la estabilidad de las finanzas públicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá llevar un registro único, de manera enunciativa más no limitativa de los financiamientos y obligaciones contraídas o emitidas de los sujetos obligados por esta Ley:

a) Garantías otorgadas por aval;

b) Garantías para la previsión de servicios y productos y los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores;

c) Los pasivos netos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario;

d) Requerimientos de recursos financieros de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo;

e) Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto de la Comisión Federal de Electricidad;

f) Las obligaciones netas del Fondo Nacional de Infraestructura;

g) Las obligaciones generadas de los Programas de Apoyo a los Deudores de la banca;

h) Los requerimientos asociados al subsidio implícito en el "swap" de tasas de interés del esquema de reestructuración de créditos bancarios en Unidades de Inversión;

i) Los pasivos diferidos multianuales derivados de los proyectos público-privados y proyectos de prestación de servicios que afecten ejercicios presupuestales futuros;

j) En caso de las entidades federativas y municipios, los requerimientos para pago del servicio de luz eléctrica, retención de derechos e impuestos de la federación;

k) Requerimientos para el pago de pensiones;

l) Aquellos pasivos que puedan generarse potencialmente por las operaciones establecidas en el artículo 7º de la Ley del Banco de México;

m) Inversiones de alto impacto del Gobierno Federal;

n) Bonos de Infraestructura Educativa;

o) Instrumentos derivados;

p) Financiamiento;

q) Las Obligaciones que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas y

r) Cualquier instrumento o compromiso jurídico emitido por un sujeto obligado que se convierta en una obligación constitutiva de deuda pública.

Artículo 96.- La Auditoria podrá solicitar a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, a las Instituciones financieras nacionales, y por los conductos correspondientes a los organismos internacionales, y a los secretarias de finanzas y órganos de fiscalización de Estados y Municipios, la información correspondiente a las Obligaciones y Financiamientos de los sujetos obligados por esta Ley, con el fin de conciliar la información del Registro Público Único. En caso de detectar diferencias, deberán publicarse en el Registro Público Único.

Capítulo VI
De las Asociaciones Público Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios

Artículo 97.- Tratándose de obligaciones que se deriven de contratos de Asociaciones Público-Privadas y Proyectos de Prestación de Servicios, los sujetos obligados deberán presentar a la Auditoria la información relativa al monto de inversión del proyecto a valor presente y el pago mensual del servicio, identificando la parte correspondiente al pago de inversión, el plazo del contrato, proveedor, así como las erogaciones pendientes de pago.

Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las haciendas de los Estados y Municipios, deberán informar a la Auditoria de los montos máximos anuales de inversión por proyecto, a fin de atender la inversión requerida tanto de los nuevos proyectos que pretendan iniciar las dependencias o entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, en su caso, las actualizaciones de éstos últimos.

Artículo 98.- La Auditoria fiscalizará los proyectos de Asociación Público-Privada y Proyectos de Prestación de Servicios, con prioridad en su impacto en la estabilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o especial.

Además verificará que la estructura de la Asociación Público-Privada es menos cara y ofrece mayor rendimiento social que otra forma de inversión o proveeduría de servicios públicos.

TÍTULO OCTAVO
De la fiscalización de la Deuda Estatal Garantizada

Capítulo Único

Artículo 99.- La Auditoría fiscalizará las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; asimismo fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos derivados de dichos empréstitos.

Artículo 100.- La Auditoría revisará que el sistema de alertas a que se refiere el párrafo 3º de la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución se maneje de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la materia.

Artículo 101.- En la fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Federal la Auditoría revisará que el mecanismo jurídico empleado como fuente de pago de las obligaciones no genere gastos administrativos superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo que la contratación de los empréstitos se dé bajo las mejores condiciones de competencia y maximización de los recursos públicos.

Artículo 102.- Para la fiscalización del destino y ejercicio de los recursos derivados de los empréstitos garantizados por el Gobierno Federal, la Auditoría celebrará convenios de colaboración con las entidades superiores de fiscalización de los Estados.

En casos excepcionales podrá ejercer las facultades de fiscalización de manera directa cuando exista una denuncia sobre el destino y ejercicio de los recursos, o cuando la entidad de fiscalización del Estado se niegue a celebrar convenio de colaboración, en términos del Título siguiente.

Artículo 103.- Si del ejercicio de las facultades de fiscalización se encontrara alguna irregularidad será aplicable el régimen de responsabilidades administrativas, debiéndose accionar los procesos sancionatorios correspondientes.

TÍTULO NOVENO
De la Revisión a partir de denuncias

Capítulo Único

Artículo 104.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos, o de su desvío, en los supuestos previstos en el artículo 106 de esta Ley, y previa autorización de su Titular, la Auditoría podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como de ejercicios anteriores.

Las denuncias podrán presentarse ante la Cámara, la Comisión, el Sistema o directamente a la Auditoría. El Titular de la Auditoría deberá manifestarse respecto a su admisibilidad en un plazo no mayor a quince días hábiles. En caso de que no se exprese al respecto se entenderá por autorizada la revisión.

Artículo 105.- En caso de admitirse la denuncia, la Auditoría deberá fiscalizar directamente la situación denunciada, debiendo emitir un informe y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; o solicitar que el órgano interno de control profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los resultados obtenidos a la Auditoría.

Los resultados del informe a que se refiere este título y, en su caso, de las sanciones impuestas o promovidas, deberán incluirse en los informes individuales y el Informe General que se envíe a la Cámara.

Artículo 106.- Procederá la revisión a que se refiere este título cuando de la denuncia se deduzca alguna de las circunstancias siguientes:

I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública Federal, Estatal o Municipal, en su caso, al patrimonio de los entes públicos de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionales autónomos o de las entidades paraestatales federales, estatales o municipales; empresas productivas del estado, órganos reguladores coordinados en materia de energía, por un monto que resulte superior a cien mil veces la Unidad de Medida y Actualización;

II. Posibles hechos de corrupción o la posible existencia de redes de corrupción;

III. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados;

IV. La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía;

V. Por violaciones constantes de las entidades fiscalizadoras locales en los procesos de fiscalización, y

VI. El desabasto de productos de primera necesidad

Artículo 107.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a presentar la información que la Auditoría les requiera en un plazo de veinte días hábiles, sin que dicha solicitud implique interferencia u obstáculopara el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades y a los servidores públicos.

Artículo 108.- Si transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior de esta Ley, la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta la información, la Auditoría impondrá las multas a que se refieren los artículos 6 y 7 de esta Ley.

Artículo 109.- Cuando la Auditoría, además de imponer la sanción a que se refiere el artículo anterior, requiera al infractor para que en un plazo determinado, que nunca será mayor a treinta días hábiles, cumpla con la obligación omitida motivo de la sanción y éste incumpla, será sancionado como reincidente.

Artículo 110.- Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a ésta u otras leyes sean aplicables ni del fincamiento de otras responsabilidades.

TÍTULO DÉCIMO
De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Procedimiento de Responsabilidades Resarcitorias

Capítulo I
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales

Artículo 111.- Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos o de las entidades paraestatales, la Auditoría procederá a:

I. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, según corresponda, y ejercer la acción de responsabilidades resarcitorias ante el Tribunal;

II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

III. Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Presentar las denuncias y querellas penales, a que haya lugar, así comodar seguimiento a la integración y posterior consignación de la misma;

V. Dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por posibles violaciones a derechos humanos para que proceda conforme a la Ley y coadyuvar a las investigaciones necesarias, y

VI. Coadyuvar con el Ministerio Público en los procesos penales investigatorios y judiciales

correspondientes, aportando las pruebas con que cuente. En estos casos, el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

Capítulo II
De la acción de Responsabilidades Resarcitorias

Artículo 112.- La Auditoría podrá ejercitar la acción de responsabilidades resarcitorias en los siguientes casos:

I. Cuando derivado de las funciones de fiscalización y revisión se demuestre que los servidores públicos y los particulares, personas físicas o morales, por actos u omisiones causen un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero, a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales, y

II. Cuando derivado de la revisión de la Cuenta Pública, los servidores públicos de la Auditoría, no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley.

Esta acción tendrá por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos, empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales.

Artículo 113.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley se finquen, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado, a la Hacienda Pública, o en su caso, al patrimonio de los entes públicos, empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales.

Artículo 114.- Serán sujetos de la responsabilidad resarcitoria a que se refiere este Título:

I. El servidor público jerárquicamente inmediato que por la índole de sus funciones, haya omitido la revisión o autorizado tales actos, por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos;

II. El servidor público que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado y

III. Los particulares que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las hayan originado.

Serán responsables solidarios con los servidores públicos, los particulares, persona física o moral, en los casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria.

Artículo 115.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas y de la Auditoría, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva, total o parcialmente.

Artículo 116.- Las responsabilidades resarcitorias señaladas, se fincarán independientemente de las que procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal que imponga la autoridad judicial.

Capítulo III
De la preparación de la acción de responsabilidad resarcitoria

Artículo 117.- Previo al ejercicio de la acción de responsabilidades resarcitorias, la Auditoría, con base en las disposiciones de esta Ley, deberá formular a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública, en los que se determinará en cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores. Lo anterior se hará del conocimiento del Tribunal.

En los casos en que la irregularidad no exceda de cien veces la Unidad de Medida y Actualización en la fecha en que se cometa la infracción, no se formulará el pliego de observaciones respectivo.

Artículo 118.- Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría, misma que deberá dar vista al Tribunal.

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría para solventarlos, ésta promoverá ante el Tribunal la acción de responsabilidad resarcitoria, a través de la consignación del expediente; o en su caso, solicitará la intervención de los órganos internos de control competentes para que, en el ámbito de su competencia, investiguen e inicien, en su caso, el procedimiento sancionatorio por los actos u omisiones de los servidores públicos de las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran desprenderse otras responsabilidades administrativas.

Capítulo IV
Del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria

Artículo 119.- Una vez recibido el pliego de observaciones no atendidas, el Tribunal deberá revisar que el mismo se refiera a los supuestos contenidos en el artículo 112 de esta Ley.

Cuando del estudio del expediente se desprenda que no se trata de los supuestos referidos en el párrafo anterior, el Tribunal deberá señalar aquellos requisitos que a su juicio no se encuentren satisfechos, fundando y motivando su resolución, a fin de que la Auditoría subsane las deficientes referidas en un plazo no mayor de diez días naturales. De no subsanar las observaciones, se tendrá por no ejercitada la acción de responsabilidad resarcitoria.

Artículo 120.- Cuando del estudio que realiza el Tribunal se desprenda que sí se trata de los casos a que se refiere el artículo 112, el Tribunal citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que comparezcan personalmente o, tratándose de personas morales, a través de su representante legal; asimismo, para que manifiesten lo que a su interés convenga, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los hechos que se les imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo.

Artículo 121.- El citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con

una anticipación no menor de siete ni mayor de quince días naturales, a la fecha de celebración de la audiencia, donde se le señalará que podrá asistir acompañado de su abogado o persona de confianza.

Artículo 122.-En caso de que el presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatos y se resolverá con los elementos que obren en el expediente respectivo;

Artículo 123.- En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su representante podrá ofrecer las pruebas que a su derecho convengan.

Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable podrá por sí o a través de su defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral o escrita.

Artículo 124.- En el procedimiento no se admitirán ni desahogarán incidentes de previo y especial pronunciamiento ni la prueba confesional de las autoridades, así como tampoco aquellas pruebas que no fueren ofrecidas conforme a derecho, o sean contrarias a la moral o al derecho.

Artículo 125.- En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de la audiencia, ésta se acordará favorablemente por una sola vez, si el interesado acredita fehacientemente los motivos que la justifiquen, quedando subsistente en sus términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los quince días naturales siguientes, dejando constancia de la notificación respectiva en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado al promovente.

Artículo 126.- El Tribunal podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la audiencia, misma que se celebrará dentro de los siguientes diez días naturales, a fin de resolver sobre la admisión de pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su desahogo a partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio del Tribunal, el tiempo necesario para el mismo efecto.

Artículo 127.- Si durante el desahogo de la audiencia el Tribunal considera que no cuenta con elementos suficientes para resolver o advierte la existencia de elementos que impliquen una nueva responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas, deberá devolver el expediente a la Auditoría para la práctica de nuevas investigaciones.

Artículo 128.- Una vez concluida la audiencia, el Tribunal procederá a acordar el cierre de instrucción y resolverá dentro de los treinta días naturales siguientes, sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y emitirá una resolución en el que podrá confirmar o modificar el monto de la indemnización resarcitoria correspondiente, a las personas responsables y notificará a éstos y a la Auditoría, la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, según corresponda.

La Auditoría deberá dar seguimiento a la resolución e informar al respecto a la Comisión.

Los servidores públicos y particulares en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 136 de esta Ley, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que se les imputen y obtener a su costa copias certificadas de los documentos correspondientes, y

Artículo 129.- El importe del pliego definitivo de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales y locales; empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales federales y locales, y se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose de contribuciones.

Artículo 130.- El Tribunal deberá solicitar a la Tesorería de la Federación proceda al embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la responsabilidad resarcitoria respectiva.

El presunto o presuntos responsables podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal de la Federación, a satisfacción de la Tesorería de la Federación.

Artículo 131.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este Capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 132.- Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por el Tribunal, a propuesta de la Auditoría, haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable.

Artículo 133.- La Secretaría deberá informar semestralmente a la Auditoría, al Sistema y a la Comisión, de los trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado.

Artículo 134.- El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta Ley, deberá ser entregado, por la Secretaría a las respectivas tesorerías de las entidades fiscalizadas de la Federación que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 135.- El Tribunal podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando las causas de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de mil veces la Unidad de medida y actualización en la fecha en que cometa la infracción. Los infractores no podrán recibir este beneficio dos veces y se harán acreedores a un apercibimiento por escrito.

Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la resolución, a satisfacción de la Auditoría, el importe de los daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos, de las empresas productivas del Estado o de las entidades paraestatales, con su actualización correspondiente, la Auditoría podrá desistirse del procedimiento resarcitorio.

La Auditoría deberá inscribir en el Registro Nacional de Servidores Públicos del Sistema aquellas resoluciones firmes, dictadas en el procedimiento de responsabilidad resarcitoria a que se hace referencia en el presente Título y lo hará del conocimiento de los órganos internos de control competentes.

Capítulo V
Del Recurso de Revisión Administrativa

Artículo 136.- Las resoluciones en las que se imponga la responsabilidad resarcitoria, podrán ser impugnados por la Auditoría, las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o morales, mediante el recurso de revisión administrativa en los términos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Capítulo VI
De la Prescripción de Responsabilidades

Artículo 137.- La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones a que se refiere este Título prescribirán en diez años.

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la responsabilidad; a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o bien, a partir de que se tenga conocimiento de la irregularidad.

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del procedimiento establecido en el artículo 119 de esta Ley.

Artículo 138.- Las responsabilidades de carácter civil, administrativo y penal que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.

Artículo 139.- Cualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable, interrumpe la prescripción de la sanción impuesta, prescripción que, en su caso, comenzará a computarse a partir de dicha gestión.

TÍTULO UNDÉCIMO
De la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o Ejercidos por Órdenes de Gobierno Locales y por Particulares

Capítulo Único
De la coordinación

Artículo 140.- La Auditoría fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades fiscalizadas, incluyendo las transferencias y participaciones federales; también fiscalizará el destino y ejercicio de las garantías que otorgue el Gobierno Federal respecto a los empréstitos de las Entidades y Municipios asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en otras leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo anterior y en términos de la fracción XXI del artículo 10 de esta Ley, la Auditoría podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales y las entidades de fiscalización superior locales, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de los recursos federales recibidos por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de los recursos federales que ejerzan las entidades fiscalizadas y deberán precisar, cuando menos:

a) Las formas para la distribución de los recursos;

b) Las formas y tiempos de operación y ejecución;

c) El contenido de los informes que las entidades federativas, legislaturas locales y/o las entidades de fiscalización superior deberán entregar a la Auditoría Superior, así como los tiempos en que deberá hacerlo;

d) Las formas mínimas de publicidad, transparencia y rendición de cuentas;

e) Las garantías de participación ciudadana, y

f) Que la Auditoría podrá intervenir directamente en la fiscalización realizada por entidades de fiscalización superior locales derivada de convenios de coordinación;

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos que reciban las entidades fiscalizadas.

La Auditoría establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar sobre los recursos federales entregados a entidades fiscalizadas, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en la ley.

En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten irregularidades que afecten el patrimonio de la hacienda pública, deberán hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría, para que en términos de la presente Ley ejercite la acción de responsabilidad resarcitoria y promueva las responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas a las que haya lugar.

La Auditoría verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro contable,

patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Artículo 141.- El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado tendrá por objeto fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría al ejercicio de los recursos federales que se transfieren a las entidades federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México incluyendo las participaciones federales, conforme a lo siguiente:

I. A través de la celebración de convenios de coordinación, la Auditoría podrá entregar hasta el 50% de los recursos del Programa a las entidades de fiscalización superior de las legislaturas de las entidades federativas, a fin de que éstos fiscalicen los recursos federales que sean administrados o ejercidos por las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El resto de los recursos serán aplicados por la Auditoría para realizar auditorías de manera directa;

La operación de este recurso deberá ajustarse a los lineamientos referidos en el artículo 86de esta Ley.

II. La Auditoría enviará a la Comisión, a más tardar el 15 de febrero de cada año, las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dicha comisión deberá emitir su opinión a más tardar el 15 de marzo. La Auditoría publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de marzo, las reglas de operación del Programa, las cuales contendrán como mínimo, lo siguiente:

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en revisión, detallando los fondos y recursos a fiscalizar;

b) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías;

c) Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos federales;

d) La cobertura por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro del programa;

e) La asignación por entidad federativa;

f) En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar, y

g) La distribución que, en su caso, se realice de los subsidios del Programa Anual para la Fiscalización del Gasto Federalizado a las entidades de fiscalización superior locales, a fin de que los mismos realicen acciones de fiscalización de recursos públicos federales;

III. Las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, en los informes de las auditorías que realicen en términos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, deberán:

a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la Auditoría;

b) Alinear los resultados con los dictámenes de las auditorías;

c) Asegurar que todos los procedimientos de auditoría manifestados en el informe se expresen en resultados;

d) Incluir en el informe de auditoría todos los resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan observaciones o que se hayan solventado durante el desarrollo de las auditorías;

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las probables recuperaciones;

f) Incorporar en los informes de auditoría el apartado de cumplimiento de metas y objetivos;

g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento de objetivos y metas con los resultados de los informes individuales y del Informe General;

h) Precisar en los resultados la normativa que se incumple o a la que se da cumplimiento, e

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la información en general;

IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado deberá ser informado en el mes de septiembre a la Comisión, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento. Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de octubre, información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa, a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Dicho informe deberá contener, un reporte sobre los aspectos detallados en la fracción II de este artículo, y

V. Los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de recursos públicos federales. Los recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido devengados por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales o por la Auditoría, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.

La Auditoría y los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas locales deberán publicar, en sus respectivas páginas de Internet, informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, en los términos que establezcan las reglas de operación del mismo.

Artículo 142.- La Auditoría, con sujeción a los convenios celebrados, acordará la forma y términos en que, en su caso, el personal a su cargo realizará la fiscalización de los recursos de origen federal que ejerzan las entidades fiscalizadas, conservando en todo momento la facultad de revisar directamente.

Artículo 143.- Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, de las entidades paraestatales o de las empresas productivas del Estado atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o de las demarcaciones territoriales de

la Ciudad de México, la Auditoría procederá a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, promover la acción de responsabilidad resarcitoria conforme a la presente Ley y promoverá, en su caso, ante los órganos o autoridades competentes las responsabilidades administrativas, civiles, políticas y penales a que hubiere lugar.

TÍTULO DUODÉCIMO
Del Subsistema Nacional de Evaluación

Capítulo Único

Artículo 144.- La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con los organismos constitucionalmente autónomos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, deberá establecer las bases del Subsistema Nacional de Evaluación, el cual tendrá como finalidad evaluar el accionar del sector público, garantizar la rendición de cuentas y retroalimentar la toma de decisiones.

Artículo 145.-El Subsistema deberá facilitar la definición de prioridades, asignación de recursos de acuerdo con esas prioridades, dar seguimiento a las decisiones adoptadas, monitorear la ejecución de los programas y proyectos estratégicos y, fundamentalmente, para evaluar la calidad del desempeño público, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y se aplicará lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, con sus reformas y adiciones, sin perjuicio de que los asuntos que se encuentren en trámite o enproceso en la Auditoría Superior de la Federación al entrar en vigor la Ley materia del presente Decreto,se seguirán tramitando hasta su conclusión en términos de la referida Ley de Fiscalización Superior de laFederación.

TERCERO. Las fechas aplicables para la presentación de la Cuenta Pública y el Informe del Resultado, entrarán en vigor a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

CUARTO.- La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 120 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

QUINTO.- Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan derogadas.

SEXTO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días contados a partir de la publicación del presente Decreto.

NOVENO.- Los convenios de colaboración que se hubieren celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto, por la Auditoría Superior de la Federación con las entidades fiscalizadas y

demás personas físicas o morales y privadas, nacionales y extranjeras, conservarán su valor y eficacia.

DÉCIMO.- La Auditoría Superior de la Federación podrá ejercer las facultades que le otorga la presente Ley respecto al Ejercicio Fiscal en curso a partir de la entrada en vigor de la presente ley.

DÉCIMO PRIMERO.- El Subsistema Nacional de Evaluación deberá entrar en funcionamiento a los cien días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley.

DÉCIMO SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación dará suficiencia presupuestaria para el cumplimiento de las funciones de la Auditoría a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO CUARTO: Se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
De la Naturaleza e Integración del Tribunal

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena para:

a) Dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública Federal;

b) Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades;

c) Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que le soliciten en materia del combate a la corrupción, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles.

d) Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, y

e) Para emitir los actos y resoluciones, así como para substanciar los procedimientos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes señalen como de su competencia.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y está sujeto a las bases establecidas en el Artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General correspondiente y en el presente ordenamiento.

Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso.

Artículo 2.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de:

I. La Sala Superior, quese compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones. A una de las tres de estas Secciones le corresponderá la resolución de los procedimientos para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

II. Las Salas Regionales, que podrán tener el carácter de Salas Especializadas o Auxiliares.

III. Las Salas Especializadas conocerán de materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en su Reglamento Interior, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio. Dichas Salas observarán para su organización, integración y en su caso funcionamiento, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

IV. La Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 3.- El nombramiento de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se realizará conforme a lo siguiente:

I. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República serán ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

II. Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

En ambos casos de las fracciones anteriores, el titular del ejecutivo federal justificará ampliamente la idoneidad de su designación, tomando en consideración el perfil, la experiencia en la materia, la honorabilidad y trayectoria, lo cual será valorado estrictamente dentro del procedimiento de ratificación por parte del Senado, donde se realizarán, conforme a la normatividad que corresponda a este órgano legislativo, las debidas comparecencias, incluyendo en ellas la participación proactiva de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones Académicas, expertos

en la materia y de cualquier persona interesada en el mismo, garantizando la más amplia transparencia, constatando la idoneidad de la designación con base el elementos objetivos.

Las Comisiones legislativas correspondientes deberán solicitar información a las autoridades competentes relativa a antecedentes penales y/o administrativos por sanciones derivadas de algún procedimiento de responsabilidad administrativa, violaciones a derechos humanos o conductas delictivas.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señalen las disposiciones aplicables, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno de la Sala Superior.

Artículo 4.- Para ser Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;
II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;
IV. Contar con notoria buena conducta;
V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y;
VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Artículo 5.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendrá los servidores públicos siguientes:

I. Magistrados de Sala Superior;
II. Magistrados de Sala Regional;
III. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional;
IV. Secretario General de Acuerdos;
V. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones;
VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior;
VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional;
VIII. Actuarios;
IX. Oficiales Jurisdiccionales;
X. Contralor Interno;
XI. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares;
XII. Director del Instituto de Estudios sobre Justicia Administrativa, y
XIII. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza. El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.

Artículo 6.- Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo, público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión bajo cualquier causa.

Artículo 7.- El proyecto de presupuesto del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa será aprobado en el Pleno con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el ejecutivo federal y posteriormente, será enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública.

Autorizará sus adecuaciones presupuestarias sin requerir autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase el techo global aprobado por la Cámara de Diputados.

Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas, austeridad, racionalidad y bajo estos principios estará sujeto a la evaluación y control de los órganos correspondientes.

CAPÍTULO II
De la Competencia del Tribunal

Artículo 8.-El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado

con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se originen por licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, las empresas productivas del Estado, así como las que estén bajo la responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

VIII. Las que nieguen la indemnización o que, por su monto, no satisfagan al reclamante y las que impongan la obligación de resarcir los daños y perjuicios pagados con motivo de la reclamación, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado o de las leyes administrativas federales que contengan un régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, la Ciudad de México, los Estados o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

X. Las que traten las materias señaladas en el Artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que decidan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este Artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este Artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV. Las resoluciones de la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral que impongan sanciones administrativas no graves, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;

XVI. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

XVII. Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que le soliciten en materia del combate a la corrupción, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles.

XVIII. Imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves;

XIX. Imponer sanciones a los particulares que participen en actos vinculados con responsabilidades administrativas que la Ley determine como graves.

XX. Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

XXI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

XXII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que ésta sea definitiva.

Para los efectos del primer párrafo de este Artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

XXIII. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.

El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.

Artículo 9.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento.

CAPÍTULO III
De la Sala Superior

Artículo 10.- La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se compondrá de dieciséis Magistrados especialmente nombrados para integrarla, de los cuales trece ejercerán funciones jurisdiccionales y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración, durante los periodos que señala esta Ley.

La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en tres Secciones. Los dos Magistrados de Sala Superior que formen parte de la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal, no integrarán el Pleno ni las Secciones por el tiempo que dure su encargo en dicha Junta, salvo en los siguientes casos:

a) Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;

b) Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

c) Expedir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera;

d) Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto por el Artículo 40 de esta Ley;

e) Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración.

CAPÍTULO IV
Del Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Artículo 11.-Las atribuciones que tendrá el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán las siguientes:

I. Representar al Tribunal ante toda clase de autoridades y delegar las facultades que el ejercicio de esta función requiera en términos de las disposiciones aplicables;

II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en términos de lo dispuesto por el Artículo 113 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de corrupción, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

IV. Con base en el informe señalado en la fracción anterior, presentar desde su competencia proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan;

V. Despachar la correspondencia del Tribunal;

VI. Convocar a sesiones al Pleno de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

VII. Someter al conocimiento del Pleno de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

VIII. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

X. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

XI. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante el Pleno;

XII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del Pleno;

XIII. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

XIV. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

XV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en

dichos juicios;

XVI. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

XVII. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones;

XVIII. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
Del Pleno

Artículo 12.-El Pleno estará integrado por el Presidente del Tribunal y por trece Magistrados de Sala Superior.

Artículo 13.- Son facultades del Pleno, las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de Sala Superior al Presidente del Tribunal;

II. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal, en el que se deberán incluir, entre otros aspectos, las regiones, sede y número de Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción;

III. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere el Artículo 10;

IV. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que se integrarán a la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en esta Ley;

V. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración;

VI. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Secciones;

VII. Designar al Secretario General de Acuerdos y al Contralor Interno, a propuesta del Presidente del Tribunal;

VIII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos;

IX. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones

legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

X. Determinar las Salas Regionales o Especializadas que sean auxiliadas por las Salas, así como el número y cualidad de los asuntos que se enviarán a dichas Salas;

XI. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de las Secciones;

XII. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren involucrados Magistrados de Salas Regionales;

XIII. La ejecución de la sanción a Magistrados de Salas Regionales;

XIV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente del Tribunal para poner en estado de resolución un juicio competencia del Pleno, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por éste, así como resolver la aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

XV. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

XVI. Resolver sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal y respecto a los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar designar de entre los Secretarios a quienes deban sustituirlos;

XVII. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Magistrados del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XVIII. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias;

XIX. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la sala de origen, cuando se advierta una violación substancial al procedimiento o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;

XX. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el ejecutivo federal.

XXI. Autorizar el proyecto de adecuación presupuestaria presentado por la Junta de Gobierno y Administración, siempre y cuando no rebase el techo global aprobado por la Cámara de Diputados.

XXII. Podrá ejercer de oficio la facultad de atracción para la resolución de los recursos de

reclamación y revisión, en casos de trascendencia que así considere o para fijar jurisprudencia.

XXIII. Las demás que establezcan las leyes.

Artículo 14.- Para la validez de las sesiones del Pleno se requerirá, cuando menos, la presencia de siete Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal.

Artículo 15.- Las sesiones serán videograbadas, públicas y se transmitirán por los medios electrónicos que faciliten su seguimiento, resguardando los datos personales de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sólo en los casos que la Ley lo establezca, las sesiones podrán ser privadas, sin embargo, de estas se harán versiones públicas para la consulta ciudadana que, en su caso, sea requerida.

Artículo 16.- Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados presentes, quienes no podrán abstenerse de votar salvo algún impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la sesión en que asista la totalidad de sus miembros o tenga una composición impar. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.

Cuando se resuelva sobre el criterio de interpretación y aplicación de una ley, que deba asumir el carácter de precedente o de jurisprudencia, el Pleno aprobará la tesis y el rubro correspondientes para su publicación.

CAPÍTULO VI
De las Secciones

Artículo 17.- El Tribunal contará con tres secciones; dos de ellas estarán integradas por cinco Magistrados de Sala Superior, adscritos a cada una de ellas por el Pleno. La Tercera se integrará por tres Magistrados de Sala Superior.

El Presidente del Tribunal no integrará Sección, salvo cuando sea requerido para integrarla ante la falta de quórum, en cuyo caso presidirá las sesiones, o cuando la Sección se encuentre imposibilitada para elegir su Presidente, en cuyo caso el Presidente del Tribunal fungirá provisionalmente como Presidente de la Sección, hasta que se logre la elección.

Artículo 18.- Son facultades de las Secciones Primera y Segunda, las siguientes:

I. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el Artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;

II. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables;

III. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos emitidos en el procedimiento seguido ante el Presidente de la Sección para poner en

estado de resolución un asunto competencia de la propia Sección, inclusive cuando se controvierta la notificación de los actos emitidos por ésta, así como resolver la aclaración de sentencias, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes;

IV. Ordenar que se reabra la instrucción, cuando se amerite en términos de las disposiciones aplicables;

V. Establecer, suspender y modificar la jurisprudencia de la Sección y apartarse de ella, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y los rubros de los precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

VI. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

VII. Los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos. Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;

VIII. Designar al Secretario Adjunto de la Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de la Sección, y

IX. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

Artículo 19.- Son facultades de la Sección Tercera, las siguientes:

I. Dictar sentencia definitiva en los juicios promovidos por los Secretarios, Actuarios y demás personal del Tribunal, en contra de sanciones impuestas por la Junta de Gobierno y Administración, en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

II. Conocer de asuntos que le sean turnados para sancionar responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de servidores públicos y de los particulares que participen en dichos actos;

III. Conocer del recurso por medio del cual se califica como grave la falta administrativa que se investiga contra un servidor público;

IV. Imponer las providencias precautorias y medidas cautelares que se le soliciten en términos de los establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares, cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa días hábiles.

V. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

VI. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales, según corresponda.

VII. Sancionar a las personas morales cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la sanción sea definitiva.

VIII. Resolver los demás asuntos que establezcan las leyes.

Artículo 20.- Para la validez de las sesiones de la Secciones Primera y Segunda se requerirá la presencia de cuatro Magistrados y los debates serán dirigidos por el Presidente de la Sección.

En el caso de la Tercera Sección se requerirá la presencia de dos magistrados y sus debates serán dirigidos por el Presidente.

Artículo 21.- Las resoluciones de las Secciones se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados que la integran, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de Sección.

Las sesiones de las Secciones serán públicas, salvo aquellas en las que la ley exija que sean privadas, en estos casos se realizarán versiones públicas de las mismas para su consulta ciudadana.

Artículo 22.- Los Presidentes de las Secciones serán designados por los integrantes de la Sección correspondiente en la primera sesión de cada año. Durará en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales de los Presidentes, serán suplidos por los Magistrados de la Sección siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 23.- Compete a los Presidentes de las Secciones:

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma;

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones;

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección;

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección;

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección para su resolución, y

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO VII
De las Salas Regionales

Artículo 24.-El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada, integradas por tres Magistrados cada una. Las Salas Regionales conocerán de los juicios que se promuevan en los supuestos señalados en los Artículos 8 y 9 de esta Ley, con excepción de los que corresponda resolver al Pleno o a las Secciones de la Sala Superior.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 25.- Para los efectos del Artículo 24 de esta Ley, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia.

Artículo 26.- En cada una de las regiones a que se refiere el Artículo anterior habrá el número de Salas que establezca el Reglamento Interior del Tribunal, en el que también se determinará la sede, su circunscripción territorial, la distribución de expedientes y la fecha de inicio de funciones.

Artículo 27.- Las Salas Regionales conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

I. Se trate de personas morales que:

   a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
   b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario.

Artículo 28.- Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales serán instruidos por turno por los Magistrados que integren la Sala de que se trate. Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en que se designe al Presidente de la Sala, se ventilen cuestiones administrativas o que afecten la moral o el interés público, o la ley así lo exija.

Artículo 29.- Los Presidentes de las Salas Regionales serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado

faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 30.- Los Presidentes de las Salas Regionales o Especializadas tendrán las siguientes atribuciones:

I. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 31.- Los Magistrados instructores tendrán las siguientes atribuciones:

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero;

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del Artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento, y

XIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 32.- Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento Interior del Tribunal. Observarán para su organización, integración y funcionamiento, en lo conducente, las mismas disposiciones aplicables a las Salas Regionales, sin perjuicio de las adecuaciones que se requieran para su buen desempeño.

Estas Salas auxiliarán a las Salas Regionales y Especializadas en el dictado de las sentencias definitivas en aquellos juicios que hayan sido del conocimiento de aquéllas, ya sea que se hubieren

sustanciado en la vía tradicional, en línea o en vía sumaria, en términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

También auxiliarán a la Sección Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Pleno del Tribunal en el dictado de las sentencias definitivas dentro del proceso administrativo sancionador tramitado en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas o de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuestas. La Sala auxiliar que se constituya con la competencia establecida en este párrafo ejercerá jurisdicción material especializada y territorial en toda la República, y tendrán su sede en la Ciudad México.

CAPÍTULO VIII
De los Recursos

Artículo 33.- El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero. La reclamación se interpondrá ante la Sección respectiva.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de reclamación serán también impugnables ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Artículo 34.- Las resoluciones que concedan, nieguen, modifiquen o revoquen cualquiera de las providencias precautorias o medidas cautelares previstas en la Ley General de Responsabilidades, podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso de reclamación ante la sección que corresponda.

Contra la resolución que emita la Tercera Sección procederá la reclamación ante la Sala Superior.

Artículo 35.- Las resoluciones emitidas por el Pleno, las Secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión.

Artículo 36.-En los casos de clasificación de la falta administrativa que realicen los Órganos Internos de Control y la Auditoria Superior de la Federación, los afectados podrán interponer recurso de inconformidad ante la Tercera Sección.

CAPÍTULO IX
De la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 37.-La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 38.- La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos Magistrados de Sala Superior, y

III. Dos Magistrados de Sala Regional.

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta.
Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo en dicha Junta, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales, siempre y cuando estén en edad de desempeñarse como Magistrados.

Artículo 39.- Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:

I. Proponer, para aprobación del Pleno, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal y expedir, en el ámbito administrativo, los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

II. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados en el Artículo 7 de esta Ley;

III. Determinar los ajustes que correspondan al presupuesto del Tribunal en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, realizar los pagos, llevar la contabilidad y elaborar informes, a través de la tesorería, en los términos de las leyes aplicables.

IV. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que les requiera el Pleno, para los efectos del Artículo 18, fracción V, de esta Ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Adscribir a Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, y, en su caso, cambiar de adscripción a los Magistrados de Salas Regionales y demás servidores públicos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables;

VII. Elegir y adscribir, de entre los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, a los que habrán de suplir a los Magistrados de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y

Administración, así como los que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional, en términos de lo dispuesto por esta Ley;

VIII. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado;

IX. Proponer al Pleno, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera previsto en el Artículo 10, que contendrá:

a. Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;

b. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos, y

c. Las reglas sobre disciplina y un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales.

X. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos a que se refiere el párrafo tercero del Artículo 10;

XI. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para los servidores públicos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, que elabore el Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa;

XII. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, Especializadas y Auxiliares, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XIII. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio y supervisar su legal y adecuada aplicación;

XIV. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración;

XV. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán;

XVI. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;

XVII. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XIX. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones XV y XVI de este Artículo;

XX. Conceder licencias prepensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Contralor Interno, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;

XXI. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite;

XXII. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos;

XXIII. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las disposiciones legales;

XXIV. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan;

XXV. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Instituto de Estudios sobre Justicia Fiscal y Administrativa y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

XXVI. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y Secciones del Tribunal, según sea el caso;

XXVII. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

XXVIII. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente;

XXIX. Instruir y resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones I a X del Artículo 3 de esta Ley e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXX. Resolver el recurso de revocación interpuesto por los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, en contra de las resoluciones dictadas por ella misma en las que se finquen responsabilidades y se impongan sanciones, en términos de la Ley Federal de

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;

XXXI. Integrar y desarrollar, dentro del Sistema de Justicia en Línea, un subsistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal, del Pleno y de las Secciones de la Sala Superior, de las Salas Regionales y de las Salas Especializadas, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXXII. Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXIII. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXIV. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXV. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión;

XXXVI. Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal, y

XXXVII. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 40.- Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de cuatro de sus miembros, incluyendo la asistencia del Presidente de la misma.

Artículo 41.- Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de la Junta tendrá voto de calidad.

Artículo 42.- El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente, será suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de la Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Ante la falta definitiva de los Magistrados previstos en el Artículo 44 que integren la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente.

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala Regional que determine el Pleno de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley.

Artículo 43.- La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios.

CAPÍTULO X
De la conclusión del cargo, ausencias y suplencias

Artículo 44.-Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

Artículo 45.-En los casos en que los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, comunicará esta circunstancia al Presidente de la República y, en su caso, someterá a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno de la Sala Superior.
El presidente del Tribunal será suplido en sus faltas temporales por el Magistrado más antiguo de la Sala Superior, según el orden de su designación. De no poder precisarse dicho orden de designación, la suplencia se efectuará de acuerdo con el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta del Presidente es definitiva, ocupará la Presidencia provisionalmente el Magistrado más antiguo en la Sala Superior en los términos del párrafo anterior. El Presidente en funciones convocará a sesión extraordinaria a la Sala Superior en un período que no excederá de 30 días naturales, para que elija al que concluirá el año calendario de que se trate, al término del cual y en la primera sesión del año siguiente, en los términos de esta Ley.

Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno de la Sala Superior, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, Especializadas o Auxiliares, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este Artículo.

Las faltas temporales y las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, que sean asignadas por la Junta de Gobierno y Administración indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán, serán hasta por un mes en los casos de Magistrados en Salas Regionales, Magistrados Especializados o Auxiliares y se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta determine la conclusión anticipada de la misma.

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

Artículo 46.- El Tribunal contará con cinco Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de Sala Regional y de Sala Auxiliar, en los casos previstos en esta Ley, y sustituirán a los dos Magistrados de Sala Regional que se integren a la Junta de Gobierno y Administración, durante su encargo.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno de la Sala Superior.

CAPÍTULO XI

De los Servidores Públicos del Tribunal y el Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional

De los Servidores Públicos del Tribunal

Artículo 47.- el Tribunal contará con una Contraloría Interna a la que le corresponderá:

I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos establecidos en las fracciones XI a XIII y último párrafo del Artículo 3 de esta Ley, e imponer, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida la Junta de Gobierno y Administración;
III. Comprobar el cumplimiento por parte de los órganos administrativos del Tribunal de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos;
IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos del Tribunal;
V. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales del Tribunal, y
VI. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales correspondientes.

Artículo 48.- Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno;

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno;

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obran en lo expedientes que obran en la Sala Superior, y

IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 49.- Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones:

I. Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la misma;

II. Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, autorizándolas en unión del Presidente de la Sección;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no corresponda al Presidente de la Sección;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios o proyectos para las resoluciones de las Secciones;

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

Artículo 50.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior:

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior;

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

Artículo 51.- Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción;

IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados;

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 52.- Corresponde a los Actuarios:

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

II. Practicar las diligencias que se les encomienden, y

III. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior.

Artículo 53.- Corresponde a los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración:

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta;

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos en el libro de actas respectivo;

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas, y

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

Los Secretarios de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliarán de las unidades administrativas que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 54.-.- Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad;

II. Ser mayor de veinticinco años de edad;

III. Contar con reconocida buena conducta;

IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y

V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

Artículo 55.- El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Administrativo, Fiscal y de Responsabilidades. Al frente del mismo habrá un Director General el cual será nombrado por el Pleno, a propuesta del Presidente, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover la investigación jurídica en materia de Derecho Administrativo, Fiscal y de Responsabilidades;

II. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, con el fin de promover el estudio del Derecho Administrativo, Fiscal y de Responsabilidades, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla, y

III. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa.

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de Derecho Administrativo, Fiscal y de Responsabilidades, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes.

Artículo 56.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para la designación, aceptación del cargo y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

Sistema Profesional de Carrera Jurisdiccional

Artículo 57.- El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 5 de esta Ley.

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 5 de esta Ley.

CAPÍTULO XII
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos del Tribunal

Artículo 58.- Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos del Tribunal:

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurisdiccional, tales como aceptar consignas, presiones, encargos o comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de alguna persona, del mismo Tribunal, de cualquier otro órgano del Estado, o de particulares;

II. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Tribunal;

III. Tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deben realizar;

IV. Impedir en los procedimientos jurisdiccionales que las partes ejerzan los derechos que

legalmente les correspondan;

V. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

VI. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones generales correspondientes;

VII. No poner en conocimiento de la Junta de Gobierno y Administración o, en su caso, del Contralor del Tribunal, cualquier acto tendiente a vulnerar la independencia de la función jurisdiccional;

VIII. No preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo propios de la función jurisdiccional en el desempeño de sus funciones;

IX. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

X. Abandonar la residencia del órgano del Tribunal al que esté adscrito, o dejar de desempeñar las funciones o las labores que tenga a su cargo;

XI. Dar ventajas indebidas a las partes objeto de su competencia;

XII. Incumplir las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los Particulares, siempre que éstas no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional, y

XIII. Las demás que determinen las leyes.

CAPÍTULO XIII
De las Vacaciones y Días Inhábiles

Artículo 59.- El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno del Tribunal.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

Segundo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido nombrados a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el tiempo que fueron nombrados.

Tercero. El Contralor Interno que se encuentre en funciones a la entrada en vigor de la presente Ley, continuará en su encargo en los términos en los que fue nombrado.

Cuarto. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Quinto. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la presente ley, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Sexto. El Tribunal en un plazo no mayor a seis meses expedirá su Reglamento Interno.

Séptimo. Las Secciones que actualmente operan, mantendrán los asuntos que tengan asignados hasta su total conclusión, y a partir de entrada en vigor de la presente Ley la Sección encargada de responsabilidades asumirá por completo dicha materia en los casos subsecuentes.

ARTÍCULO QUINTO.-Se adiciona el artículo 37; se derogan las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXXI y XXXII, recorriéndose las actuales fracciones XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV, para pasar a ser XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 31; y se reforman los artículo 26, 31, en su fracción XIX, 44, en sus párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, y 50, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

> **Artículo 26.-** Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:
>
> Secretaría de Gobernación;
>
> Secretaría de Relaciones Exteriores;
>
> Secretaría de la Defensa Nacional;
>
> Secretaría de Marina;
>
> Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
>
> Secretaría de Desarrollo Social;
>
> Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo**;**

Secretaría de Control Interno, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a **XVIII**.- …

XIX.- Coordinar**, conjuntamente con la Secretaría deControl Interno,** la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XX.- …

XXI.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXII.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir

normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables**, y**

XXIV.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 37.- **La Secretaría de Control Interno es el órgano de la Administración Pública Federal encargado del control y auditoría de los recursos públicos, de la evaluación del desempeño en el ejercicio de la función pública, así como de la prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.**

Será encabezada por un Secretario nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado de la República mediante el voto de la mayoría de los miembros presentes. Para efecto de que la Secretaría asuma con plenitud las facultades de prevención y control interno que le atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá procurarse que el nombramiento recaiga en quien cuente con experiencia suficiente en actividades o funciones relacionadas con el control, la auditoría y la evaluación del gasto público, el desempeño y las políticas públicas.

Corresponde a la Secretaría de Control Interno el despacho de los siguientes asuntos:

I. Coordinar, **conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

III. Emitir y vigilar el cumplimiento de las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de gestión, control y evaluación de la Administración Pública Federal, para garantizar que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con legalidad y bajo criterios de eficiencia y simplificación administrativa.

IV. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de

adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; administrar el sistema COMPRANET; llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas, y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;

VI. Emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos;

VII. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;

VIII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

IX. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control y determinar los perfiles del personal que deberá cubrir las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría, así como emitir las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario;

X. Señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;

XI. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;

XIII. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal;

XIV. Formar parte, por conducto del Secretario, del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XV. **Observar en el ámbito de su competencia las bases de coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno que emita el Sistema Nacional Anticorrupción en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;**

XVI. **Instrumentar las políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan, que emita el Sistema Nacional Anticorrupción y realizar propuestas al seno de éste con respecto de dichas materias;**

XVII. **Instrumentar en el ámbito de su competencia los mecanismos que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en esas materias;**

XVIII. **Promover la adopción de instrumentos normativos para establecer mejores prácticas para el combate a la corrupción por conducto de los órganos internos de control y de acuerdo a las particularidades de cada dependencia o entidad;**

XIX. **Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación así como con los órganos internos de control de las entidades federativas y los municipios, conforme a las bases y principios que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para la implementación de acciones que permitan el mejor cumplimiento de los objetivos del Sistema y la ejecución eficaz de la Política Nacional Anticorrupción, las políticas integrales que de ella se desprendan, así como de sus respectivas responsabilidades;**

XX. **Investigar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la Administración Pública Federal que sean determinadas como graves por la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, substanciar los expedientes y someterlos a la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con excepción de los expedientes relativos a las faltas graves cuyo conocimiento reserve la Ley a la Auditoría Superior de la Federación, mismos que deberá remitir a ese órgano de fiscalización una vez integrados;**

XXI. **Investigar, resolver y sancionar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, que no sean determinadas como graves por la misma legislación;**

XXII. **Investigar, substanciar y someter a la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa las irregularidades en que puedan incurrir los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves;**

XXIII. **Presentar denuncias o promover las acciones correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las fiscalías homólogas en las entidades federativas u otras autoridades competentes, cuando de las investigaciones advierta la probable comisión de un delito;**

XXIV. Informar a los órganos internos de control de las entidades federativas y los municipios cuando advierta de probables faltas administrativas cuyo conocimiento corresponda a esos órdenes de gobierno;

XXV. Solicitar a las autoridades competentes, en el contexto de una investigación, la información que considere relevante en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, de conformidad con la legislación aplicable;

XXVI. Impugnar ante la autoridad judicial correspondiente, las omisiones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el ejercicio de la acción penal por delitos relacionados con la corrupción, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, así como interponer ante los Tribunales Colegiados de Circuito los recursos de revisión contra las resoluciones definitivas que dicte el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y

XXVII. Recibir las recomendaciones no vinculantes que le remita el Sistema Nacional Anticorrupción y direccionarlas a los órganos internos de control de las autoridades, para fomentar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional, la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno, y proponer al Comité Coordinador del Sistema proyectos de recomendaciones.

Artículo 44.-Para el desarrollo de las funciones de control interno y de gestión a cargo de la Secretaría de Control Interno en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se establecerán unidades de auditoría preventiva. Dicha Secretaría tendrá a su cargo el nombramiento de los auditores preventivos, quienes tendrán por función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.

Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la **Secretaría de Control Interno** respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.

…

En los meses de mayo y noviembre entregarán informes **al Secretario de Control Interno** sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, **la Secretaría de Control Interno** formulará las recomendaciones pertinentes **a las entidades o dependencias** para **la** mejora de la gestión.

Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca **la Secretaría de Control Interno**.

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y **de la Secretaría de Control Interno**, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta la Secretaría de la Función Pública, se transferirán a la Secretaría de Control Interno.

Artículo Tercero. El Presidente de la República deberá en un plazo no mayor a 30 posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberá someter a consideración del Senado la ratificación del Secretario de Control Interno.

Artículo Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones contrarias a este Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- Se derogan los artículos transitorios Segundo y Quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, para quedar como sigue:

Segundo.- Derogado.

Quinto.- Derogado.

TRANSITORIOS

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a 1º de marzo de 2016

SEN. MIGUEL BARBOSA HUERTA **Coordinador**
SEN. DOLORES PADIERNA LUNA **Vicecoordinadora**
SEN. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE
SEN. ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ
SEN. MARIO DELGADO CARRILLO
SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ
SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES
SEN. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL
SEN. IRIS VIANNEY MENDOZA MENDOZA
SEN. RAÚL MORÓN OROZCO
SEN. ISIDRO PEDRAZA CHÁVEZ

SEN. ARMANDO RÍOS PITER
SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO
SEN. BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
SEN. ADOLFO ROMERO LAINAS
SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO
SEN. LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

Los suscritos, ***SEN. PABLO ESCUDERO MORALES*** y ***SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA***, Senadores de la República de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República; sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que **SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN**, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad mexicana, como la de cualquier otra nación democrática, tiene el derecho a exigir y que se le garantice que el actuar de los servidores públicos se apegue a principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; el interés público, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, la igualdad de género, el entorno cultural y ecológico, la integridad, el liderazgo, la transparencia y la rendición de cuentas.

Bajo estos principios y valores, el Estado debe buscar una mejora continua en el funcionamiento de sus instituciones, garantizar que las acciones del gobierno y los servidores públicos se encuentren orientados al correcto uso de los recursos públicos y a la adecuada toma de decisiones dentro del estado de derecho, generando certeza sobre su actuar.

En México la corrupción es un factor que incide negativamente en el crecimiento social, cultural, económico y político; genera la pérdida de confianza en las instituciones, demora la solución de los problemas sociales y la lucha contra la desigualdad.

La OCDE señala que la corrupción en el sector público amenaza el buen gobierno, el desarrollo económico sostenible, los procesos democráticos y las prácticas comerciales justas y, como consecuencia, aumenta el costo de las transacciones públicas y disminuye la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.

De acuerdo al estudio realizado por KPMG en México, sobre las Perspectivas de la Alta Dirección 2015, los empresarios consideran que una de las variables que traban la competitividad y el mejor desempeño de las organizaciones es la corrupción; variable que ha se ha mantenido como la primera en los últimos cuatro años. [1]

Transparencia Internacional elabora anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), el cual muestra los niveles percibidos de corrupción del sector público en todo el mundo; si bien, como señalan, ningún país está libre de corrupción, este índice permite en una escala de cero (altamente corrupto) a cien (sin corrupción), observar de los 168 países enlistados, la situación de cada uno de ellos. En el caso de México, en el año 2015, se posicionó en el lugar 95 con 35 puntos.[2]

El Índice de Competitividad Global (ICG) del Foro Económico Mundial, que mide la competitividad a partir de datos microeconómicos y macroeconómicos, en su edición 2014-2015 ubicó a México en la posición 61, en comparación del lugar 55 obtenido en la edición anterior.[3]

---

[1] http://www.kpmg.com/mx/es/issuesandinsights/articlespublications/paginas/perspectivas-alta-direccion-mexico-2015.aspx
[2] http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
[3] http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/

El World Justice Project (WJP), proporciona un índice de percepción del Estado de Derecho en 102 países, con una serie de indicadores en ocho categorías: las limitaciones de los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, el gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, aplicación de regulaciones, justicia civil, y la justicia penal. En su edición 2015, México se encuentra en el lugar 79 de 102 países.[4]

Estos indicadores nos permiten enfocarnos en la realidad de nuestro país, y en la imperiosa necesidad de actuar, tomando como pilares la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas para la construcción de instituciones fuertes y resistentes a la corrupción.

El Estado mexicano, en la búsqueda de compartir las mejores prácticas internacionales y como parte de los compromisos para combatir la corrupción, ha firmado y ratificado tres importantes convenciones internacionales: la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).

Conscientes de esta realidad, nuestro País ha trazado ejes dirigidos a atender las demandas de los ciudadanos, fomentando una sociedad global e informada mediante la consolidación de políticas de transparencia, combate a la corrupción, el desarrollo de un Gobierno Abierto, el pleno respeto y efectiva protección de los derechos humanos.

Gracias al consenso en los trabajos legislativos, se lograron articular los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción con una visión de pesos y contrapesos que, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, representan un elemento fundamental para fortalecer la confianza de las personas en las

[4] http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/MEX

instituciones, dentro un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas.

El pasado 27 de mayo de 2015, fue publicada la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción; un avance de relevancia histórica para el País en la lucha contra la corrupción. Este Sistema se consolidará como eje central y pilar en las acciones que emprenda el Estado para prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Estas acciones ya no se harán de forma aislada o fragmentada, sino a través de un sistema integral y articulado con las diversas instituciones que lo componen entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para prevenir, detener y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción, así como optimizar la fiscalización y control de los recursos públicos.

La reforma constitucional articula el fortalecimiento de competencias de las instancias públicas y de la sociedad para prevenir y radicar de forma eficiente la corrupción.

El combate a la corrupción, el fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la legalidad, son metas irrenunciables para todos los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la acción constante del Estado, sino de la participación informada, activa y responsable de la ciudadanía. Es por ello que se asume a nivel constitucional un Sistema en el que participan servidores públicos y sociedad civil, factor determinante para alcanzar una adecuada cohesión comunitaria.

Es así, que la presente iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Segundo Transitorio del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, que a la letra establece:

Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente Decreto y en las leyes que derivan del mismo.

En tal virtud, la iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía tiene por objeto:

1. Expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
2. Expedir la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.
3. Reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
4. Reformar a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
5. Reformar la Ley de Coordinación Fiscal.
6. Reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
7. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La presentación de todos estos proyectos en una sola iniciativa responde al mandato constitucional ya referido, así como a la necesidad de que la discusión de las reformas en la materia, se dé en forma articulada, en el entendido de que todas las normas que deben reformarse encuentran relación entre sí y responden a la intención del Constituyente de generar un sistema nacional en la materia. Con ello se pretende garantizar su sistematicidad, armonía y coherencia.

I. LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN.

El Sistema Nacional Anticorrupción fue concebido por el Constituyente Permanente como el parteaguas en los esquemas de coordinación para combatir la corrupción y eficientar la prestación del servicio público. Se pensó y diseñó como la piedra angular que vendría a dar plena efectividad a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, a través de la coordinación entre los diferentes órdenes e instancias gubernamentales, y por supuesto, con una amplia participación de la sociedad civil.

La sinergia diseñada desde el ámbito constitucional funge como garantía para el pleno funcionamiento de la actividad gubernamental en sus diferentes ámbitos. Así, el Sistema permitirá combinar esfuerzos no sólo para señalar, combatir y sancionar los hechos de corrupción, sino, sobre todo, para actuar con anterioridad a su acontecimiento de manera eficiente a través de acciones preventivas, lo que resulta fundamental para erradicar el indebido ejercicio de la función pública.

En armonía con lo ya dicho, el Poder Reformador de la Constitución se pronunció durante el proceso legislativo sobre la factibilidad de hablar de un auténtico Sistema Nacional, en tanto su integración se compone, como ya fue apuntado, por diversos actores políticos y sociales.

La plural integración del Sistema Nacional Anticorrupción propicia la representación de los diversos sectores sociales involucrados en la vida pública de nuestro país. Estos sectores se han manifestado sumamente interesados en la correcta marcha del aparato estadual, razón por la cual, en la propuesta que aquí se presenta, se han recogido los llamados de la sociedad que entiende la trascendencia de la política en el desarrollo Nacional.

Con la finalidad de convocar a la sociedad civil a una mayor participación activa en la agenda pública es que se concibe la presente iniciativa de ley, se establecen las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, municipios y

alcaldías, que servirán para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción que a su vez se erige como el baluarte del combate a la corrupción.

Sin lugar a dudas, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción permeará positivamente en la actividad del Estado, pues facilitará el combate a la corrupción y a la temprana detección de actos que redunden en perjuicio para el servicio público.

Lo anterior, será posible gracias a las facultades otorgadas a los distintos órganos que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, mismos que se encontrarán esquemas eficientes de coordinación a través del Sistema.

Así, en el contexto de esta Ley se establecen las directrices básicas que definan los esquemas de coordinación para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción disuasión y combate a la corrupción. Por otra parte, se instituyen las bases y principios de una política nacional a partir del fomento de la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público, procurando en todo momento la cercanía del Gobierno con la sociedad, garantizando principalmente la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de recursos.

Lo señalado en los párrafos que anteceden propiciará una cultura de auténtica vocación por el servicio público, al mismo tiempo que tendrá el efecto de desalentar el indebido uso de facultades o influencias de quienes ostentan un cargo público, lo que consecuentemente se traducirá en un beneficio directo y palpable para la sociedad en su conjunto.

El Sistema Nacional Anticorrupción

a) Objetivos

Como se ha reiterado a lo largo de este documento, el objetivo primordial del Sistema Nacional Anticorrupción es la coordinación permanente entre todas las autoridades competentes en la materia, lo que las habilitará para un mejor y adecuado ejercicio de sus funciones.

b) Integración

Para el cumplimiento y ejercicio de las atribuciones correspondientes al Sistema Nacional Anticorrupción, este se compondrá por el denominado Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y por los sistemas anticorrupción de las entidades federativas. En su encomienda, el Sistema deberá perseguir las finalidades de Control interno de la gestión y de los recursos públicos, Fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos, Investigación de los hechos de corrupción e Impartición de justicia.

Corresponderá al Sistema generar los esquemas de coordinación necesarios para que las autoridades que lo integran cumplan con las referidas finalidades.

Así, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de la totalidad de los entes públicos se encargarán del control interno de la gestión y recursos público; la Auditoría Superior de la Federación –y las de las entidades federativas- tiene a su cargo la fiscalización superior de la gestión y recursos públicos.

Por su parte, la Fiscalía General de la República –y sus homólogas en las entidades federativas-, a través de su división especializada en combate a la corrupción tienen como asignación la investigación de los hechos de corrupción en los términos de la legislación aplicable.

Finalmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –y los que se especialicen en dicha materia en las entidades federativas-, tiene la encomienda de impartir justicia.

c) *Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción*

El Comité Coordinador funge como el ente rector del Sistema Nacional Anticorrupción. Su principal función es la coordinación permanente, necesaria para el pleno funcionamiento del Sistema. Otras de sus atribuciones consisten en establecer mecanismos de coordinación con los sistemas locales mediante la organización transversal de las autoridades competentes en materia de esta Ley.

Asimismo, debe fomentar las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización que permita la efectiva colaboración de las distintas autoridades encargadas de la fiscalización de recursos públicas, habilitándolas a través del diseño y promoción de políticas de prevención, detección, control, sanción y disuasión de la corrupción y sus causas generadoras.

Una de sus facultades más trascendentales para efectos de la efectividad del Sistema, es la relativa a definición de los mecanismos para el intercambio de información entre las autoridades coordinadas en términos de esta Ley. Para ello, debe sentar las bases para la operación adecuada de los registros ideados estratégicamente para la fácil detección de servidores públicos y particulares que, de algún modo, participen en contrataciones públicas, así como aquellos que han sido previamente sancionados por faltas administrativas o actuaciones vinculadas a éstas.

En esa tesitura el Comité Coordinador deberá establecer las bases de coordinación para la operación de los sistemas denominados:

i) Registro Público Especial de los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas y Declaración de Intereses;
ii) Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses; y,

iii) Registro Público de Servidores Públicos y Particulares sancionados en el ámbito administrativo o penal.

Por otra parte, el Comité Coordinador deberá elaborar informes anuales con los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y emitir recomendaciones no vinculantes en base a estos; podrá también proponer contenidos para las políticas y programas en materia de combate a la corrupción y; recibir, discutir y aprobar las medidas institucionales recomendadas por el Comité de Participación Ciudadana tendientes al fortalecimiento institucional de las autoridades integrantes del Sistema, entre otras funciones.

El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción se integrará por los titulares de:

- ✓ La Secretaría de la Función Pública;
- ✓ La Auditoría Superior de la Federación;
- ✓ La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;
- ✓ El Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
- ✓ El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y,
- ✓ Un representante del Consejo de la Judicatura Federal; y,
- ✓ Un representante del Comité de Participación Ciudadana.

La diversidad en la composición del Comité Coordinador genera una suerte de blindaje en la elaboración de políticas públicas, mismo que se obtiene al combinar la visión de cada autoridad que lo compone, producto de la especialización y naturaleza de sus respectivas funciones. Esta especial coyuntura combinada con las exigencias de la sociedad civil representada por el Comité de Participación Ciudadana, derivará en la creación de disposiciones robustas que ataquen a la corrupción desde muy distintas perspectivas.

La presidencia del Comité Coordinador tendrá la duración de un año y será rotativa entre sus integrantes que tengan el carácter de ente público.

Como atribuciones del Presidente del Comité Coordinador se establecen, entre otras:

- Presidir las sesiones del Comité y fungir como su representante;
- Celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación que estime necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;
- Verificar que se cumplan los objetivos de este;
- Informar a los integrantes del Comité respecto del seguimiento y recomendaciones adoptados e integrar, elaborar, publicar; y,
- Presentar el informe anual de resultados para su aprobación.

Se establece también un Secretario Técnico del Comité Coordinador que fungirá como el conducto por el que la presidencia ejercerá sus funciones; a quien, entre otras atribuciones, le corresponde:

- La ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones tomados por el pleno, incluidas todas aquellas acciones necesarias para su total eficacia;
- La realización de estudios especializados en prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas administrativas, fiscalización y control de recursos; y,
- Verificar el cumplimiento de las disposiciones y convenios celebrados en términos de la Ley.

d) *Sistema Nacional de Fiscalización*

El Sistema Nacional de Fiscalización se concibe como un subsistema dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, con la distinción de que el subsistema en mención se encargará de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de fiscalización de todos los órdenes de gobierno, con la

finalidad de homologar los criterios de revisión del manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

Asimismo, elaborará el diseño y promocionará políticas integrales en materia de fiscalización, mismas que se someterán a consideración y aprobación de los miembros del Comité Coordinador; instrumentará mecanismos de coordinación relacionado con el ejercicio de recursos y participaciones federales e; integrará e instrumentará los mecanismos de suministro de información en materia de fiscalización.

El Sistema Nacional de Fiscalización se integrará por:

- La Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior locales; y,
- La Secretaría de la Función Pública y las secretarías encargadas del control interno de las entidades federativas.

La participación de los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización correspondientes al ámbito local deberá ajustarse a los lineamientos que este emita para el cumplimiento de las acciones tomadas.

Asimismo, se prevé la obligación de sus integrantes de homologar procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas en materia de auditoría y fiscalización. Este mandato permitirá un fácil seguimiento y acceso a las bases de datos correspondientes, alentando la eficaz prevención, detección y sanción en los supuestos establecidos en la Ley y en demás legislación aplicable.

Para la actualización de los sistemas de información a los que se refiere la Ley, se prevé la constante comunicación entre el Sistema Nacional de Fiscalización y el Comité Coordinador, lo que permitirá su óptimo funcionamiento.

e) *Comité de Participación Ciudadana*

De acuerdo a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la creación del Sistema Nacional tiene como uno de sus principales objetivos la inclusión y participación de la sociedad civil en la transparencia, rendición de cuentas y coadyuvar con las autoridades en el combate a la corrupción, a través de la creación de un Comité de Participación Ciudadana.

> *"Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:*
>
> ...
>
> *II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y..."*

El Estado mexicano, convencido de la necesidad de cumplir con las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), o la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre otros; ha considerado que para fortalecer el Estado de Derecho Democrático, es indispensable implementar mecanismos que a través de la participación activa de la sociedad, canalicen esfuerzos al exacto cumplimiento y observancia de la norma y que a su vez permitan fortalecer las acciones orientadas a prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, como lo es el Comité de Participación Ciudadana; con la perspectiva de lograr que el desempeño en el servicio público se base en una cultura de transparencia, respeto por los derechos humanos, alcance objetivos dignos y valiosos, para la consecución del bien común; conforme lo establece el Dictamen de la Cámara de Diputados, emitido con fecha del 25 de febrero de 2015, que dice:

"No existen estrategias que eliminen por completo los actos de corrupción, pero sí aquellas que bajo los esquemas propuestos por la Alianza por el Gobierno Abierto, suscrita por el Estado Mexicano, logren fortalecer los canales de comunicación entre Estado y sociedad civil: mejora en los estándares de transparencia, rendición de cuentas y de respuesta hacia los ciudadanos.

Es así como deben fortalecerse los controles internos y externos para combatir a la corrupción bajo un esquema legal homogéneo y de coordinación en el actuar de las autoridades competentes. Los esfuerzos aislados seguirán siendo incapaces de alcanzar los mejores resultados, por lo que resulta indispensable transitar a un Sistema Nacional Anticorrupción."

El Comité de Participación Ciudadana será la instancia del Sistema Nacional Anticorrupción encargada de coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Se integrará por cinco ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, además de contar con otros requisitos establecidos en la Ley, y ocupará su cargo de manera honorífica por un periodo que no exceda de cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional.

Corresponderá al propio Sistema la elección de los integrantes del Comité Ciudadano. Ello, en razón de que la Constitución no dispuso la intervención de alguno de los Poderes de la Unión para la integración de este Comité.

Asimismo, el régimen transitorio de la iniciativa prevé que el procedimiento para la elección de los miembros del Comité de Participación Ciudadana que habrá de realizar el Comité Coordinador, se verifique de manera única a través de la Sesión Preparatoria de Instalación de dicho órgano, a efecto de que sus integrantes aprueben los lineamientos para la convocatoria de integración del Comité de Participación Ciudadana con las bases mínimas de esta Ley, y posteriormente elijan por medio de mayoría de votos a sus integrantes, incluido su Presidente; lo anterior dentro de un plazo de sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley.

Dentro de las atribuciones con las que cuenta el Comité de Participación Ciudadana, destaca la de diseñar los mecanismos y proponer las medidas institucionales y políticas públicas para que la sociedad civil colabore en el fortalecimiento de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, denuncia y detección de faltas administrativas y hechos de corrupción, en coordinación con el Comité; asimismo, elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones y de la aplicación de políticas públicas en la materia.

II. LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES

La presente iniciativa contempla la división de esta Ley General en dos libros. El primero refiere a aspectos sustantivos, a saber:

1. Disposiciones generales.
2. Mecanismos de prevención.
3. Faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como sus sanciones.

Por su parte, el Libro Segundo, contempla disposiciones de carácter procedimental o adjetivo:

1. Denuncias, etapa de investigación y de la calificación de faltas graves y no graves.
2. El procedimiento sancionador por faltas administrativas ante el órgano interno de control.
3. El juicio de responsabilidades administrativas.

DISPOSICIONES GENERALES

El Capítulo I de la Ley establece su objeto, los sujetos a los que ésta resulta aplicable, las autoridades competentes para su aplicación, así como los principios que rigen la actuación de los servidores públicos.

Objeto:

- Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos.

- Establecer las faltas administrativas, incluyendo aquéllas que son consideradas graves, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.

- Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas.

Sujetos:

De conformidad con lo previsto en los artículos 108 y 109 de la Constitución, son sujetos de esa Ley:

- Los Servidores Públicos;

- Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se la Ley.

- Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Es preciso advertir que de una revisión de nuestro orden jurídico vigente, se considera necesario hacer precisiones a efecto de garantizar la armonización de

esta ley, con otras que prevén regímenes especializados. Tal es el caso de los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado.

Tanto la Ley de Petróleos Mexicanos como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen que los consejeros independientes del Consejo de Administración de ambas empresas no serán considerados servidores públicos. La presente iniciativa retoma dicha precisión, a efecto de darle congruencia al marco normativo en la materia. Desde luego, los servidores públicos de dichas empresas quedan sujetos a la todas las disposiciones de esta ley.

Autoridades competentes

A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en la fracción XXIX-V del artículo 73 constitucional, la presente iniciativa establece el ámbito de competencia que corresponde a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno.

> *Artículo 73. Son facultades del Congreso de la Unión:*
>
> *XXIX-V. Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación.*

La presente iniciativa distribuye competencias a partir de una lectura y análisis integral de los artículos constitucionales que fueron objeto de modificaciones en la reforma constitucional que nos ocupa. Así, partiendo de la facultad establecida en la fracción XXIX-V y, en atención a lo dispuesto por las fracciones XXIV y XXIX- H del artículo 73, así como los artículos 79, 109, 116 y 122, se determina un régimen competencial, determinado como autoridades competentes para la aplicación de la Ley:

- Las Secretarías, entendidas éstas como la Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas.

- Los Órganos internos de control, es decir, las unidades administrativas a cargo del control interno en los Entes públicos.

- La Auditoría Superior de la Federación y sus equivalentes en las entidades federativas.

- El Tribunal Federal de Justicia Administrativas y sus homólogos en las entidades federativas.

- En atención a lo previsto en los artículo 94, 109, 116 y 122 de la Constitución, tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los Poderes Judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en sus Constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes.

- Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan. En este sentido es preciso advertir que en razón del régimen específico previsto en las leyes que regulan a las empresas productivas del Estado, la presente iniciativa de forma precisa regula las facultades que en la materia corresponderán a las unidades de responsabilidades.

Al respecto es preciso advertir que el Constituyente reconoció la subsistencia del régimen específico en materia de responsabilidades administrativas que regula a las Empresas Productivas del Estado. En el Dictamen del Senado de la República, de 16 de abril de 2015, se establece lo siguiente:

"En esta consideración de las Comisiones Unidas, deseamos reiterar que uno de los pilares de la minuta con proyecto de Decreto lo constituye la homologación de instancias de control interno. En específico, la obligación de todos los entes públicos de contar con órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, a fin de sancionar aquéllas distintas a las que son competencia de los tribunal es de justicia administrativa.

En congruencia con esta adición, se prevén reformas a los artículos 28 y 41 de la Constitución General de la República, a efecto de sustituir el concepto de "Contraloría Interna" por el de "Órgano Interno de Control".

Lo anterior, en ningún caso supone la modificación de la naturaleza jurídica de las instancias ya existentes y que tienen otra denominación. La referencia a órganos Internos de control no supone tampoco que los mismos deban ser colegiados o no, o bien que su adscripción o dependencia jerárquica deba ser modificada.

Tal es el caso de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, empresas productivas del Estado, las cuales cuentan con un régimen específico de control interno que no está sujeto a la Secretaría de la Función Pública, toda vez que en dichas empresas productivas las atribuciones en la materia se dividen entre un Comité de Auditoría, un Auditor Interno y una Unidad de Responsabilidades. Así, la homologación del concepto de "órganos internos de control", no modifica la naturaleza de las instancias ya existentes o de aquellas que pudieran eventualmente crearse. La norma constitucional tiene por objeto obligar a los entes públicos a contar con instancias facultadas en

términos de las leyes para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como sancionar aquéllas que no correspondan a los tribunales, sin que ello implique desconocer las particularidades específicas de algunos entes públicos, más aún cuando -como en los casos de PEMEX y la CFE- tienen un régimen particular establecido en la propia Constitución General de la República.

Es de destacarse que la H. Cámara de Diputados dispuso que los órganos internos de control de los entes públicos de los tres órdenes de gobierno contarán con las facultades que determine la ley para presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o ante las autoridades locales competentes, respectivamente.

Lo anterior cobra relevancia en la medida en que será la ley de la materia, aplicable a cada ente público, la que determine las facultades que asumirán los órganos internos de control, de acuerdo a la naturaleza y funciones propias del organismo de que se trate. Por ello, para el caso concreto de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, la reforma constitucional no tiene por objeto modificar orgánicamente el funcionamiento de las distintas áreas de auditoría con que cuenta; por el contrario, la reforma propone fortalecerlas. Tan es así, que se dispone que será la ley (de la materia de que se trate), la que otorgue las facultades específicas para dichas áreas, pero será la normatividad interna (Estatuto Orgánico o Reglamento Interior) la que determine la manera más efectiva para hacer cumplir el mandato constitucional."

- Competencia legislativa.

Mención especial debe hacerse a la competencia legislativa en materia de responsabilidades administrativas. Como ya se ha referido, con la adición de la fracción XXIX-V al artículo 73 constitucional, el Constituyente confirió al Congreso de la Unión una amplia facultad para distribuir competencias

entre los órdenes de gobierno en la materia. Dicha facultad contempla, desde luego, la de distribuir competencias en materia legislativa; esto es, la posibilidad de que en esta Ley se confieran o no, facultades para que el propio Congreso de la Unión en su carácter de autoridad del orden jurídico Federal, o los órganos legislativos de las entidades federativas, establezcan conductas que constituyan responsabilidades administrativas.

> *"Como ya se ha mencionado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido una distinción entre los diversos tipos de concurrencia que el Constituyente ha determinado en el texto constitucional. Partiendo de dichas categorías, a diferencia de lo que se busca con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la ley general que establece las responsabilidades de los servidores públicos y de particulares que se vinculen con faltas administrativas graves, tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para determinar aspectos subjetivos y adjetivos en materia de responsabilidades de servidores públicos y particulares"[5].*

En este sentido, la presente iniciativa reconoce la necesidad de establecer un marco jurídico homologado que permita determinar con claridad las conductas que ameritan una sanción por parte del Estado, sean graves, no graves y desde luego, aquéllas que correspondan a los particulares vinculados con faltas graves.

Así, el establecimiento de un catálogo taxativo en un solo cuerpo normativo de jerarquía normativa superior a las leyes federales y locales, evitará la dispersión normativa que en la actualidad ha generado un marco jurídico complejo y poco claro que ha tenido como consecuencia la deficiente sanción de los actos que agravian al servicio público.

---

[5] Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, página 43; aprobado por el Pleno Camara de Diputados el 26 de Febrero del 2014.

Por ello, la iniciativa que se somete a consideración de esta Soberanía, reserva de forma exclusiva al Congreso de la Unión, en su carácter de autoridad del orden jurídico constitucional, a través de la emisión de la ley general que nos ocupa, la determinación de las conductas que constituyen faltas administrativas –graves y no graves- así como aquellas que en que pueden incurrir los particulares. De forma tal que ni el Congreso de la Unión a través de la expedición de leyes del orden federal, ni las legislaturas de las entidades federativas, podrán ampliar ni variar las conductas que deban ser consideradas faltas administrativas.

Lo anterior abona de manera significativa a la consolidación de un Sistema Nacional en la materia, como lo mandata la Constitución. Adicionalmente, genera certidumbre para los servidores públicos, los particulares, así como para las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar responsabilidades administrativas.

La reserva de competencia legislativa prevista en esta iniciativa representará la derogación de todas aquellas faltas administrativas y sus sanciones previstas en leyes generales, federales y locales.

No pasa desapercibido que, por ejemplo, en el orden federal, algunas leyes establecen faltas administrativas adicionales a las previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. La incorporación de responsabilidades en las referidas leyes, responde la naturaleza de las funciones y circunstancias específicas de los servidores públicos encargados de aplicarlas. No obstante, se considera que el catálogo previsto en la presente iniciativa recoge todas esas conductas, aun cuando no se haga referencia específica a las materias objeto de dichas leyes.

Principios que rigen la actuación de los Servidores Públicos

De conformidad con lo previsto por el artículo 109 de la Constitución, la presente iniciativa establece como principios que deben regir la actuación de los servidores públicos, los de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

En este sentido, la iniciativa detalla en qué se traducen dichos principios, en el actuar de todo servidor público. Así se propone que éstos deben:

- Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización.

- Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

- Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva.

- Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.

- Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Mecanismos de Prevención

De acuerdo con lo establecido por el Constituyente, *"...el diseño legislativo de combate a la corrupción debe ser el idóneo para alcanzar mayores estándares de buen gobierno. Además, se asume que los esfuerzos ejecutivos deben estar concentrados en la prevención de los actos de corrupción y no en la sanción de los mismos, aunque este segundo aspecto debe modernizarse y, bajo un esquema garantista, ser efectivo en su aplicación".*

La presente iniciativa contempla mecanismos de prevención, tanto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, como en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Con el objeto de dar cumplimiento al mandato del Constituyente relativo a la prevención, así como a la obligación prevista en la propia Constitución para los servidores públicos de presentar ante las autoridades competentes sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, se regulan en la Ley General los aspectos sustantivos y adjetivos de ambas declaraciones.

Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos

Resulta necesario homologar los procedimientos y concentrar la información que todos los servidores públicos, por mandato constitucional, están obligados a presentar. Para tal efecto se propone la creación de un Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos con el objeto de mantener un control sobre la evolución patrimonial de los Servidores Públicos y fomentar la transparencia.

Para su efectivo funcionamiento corresponderá a la Secretaría llevar el Registro, en atención a las bases de coordinación que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del sistema electrónico que al efecto establezca y opere. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá, de conformidad con lo previsto en la Ley General que establece las Bases del

Sistema Nacional Anticorrupción, las bases y principios para la operación del Registro.

En el Registro se inscribirán los datos curriculares de los Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; su declaración de intereses, la información relativa a su situación patrimonial en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como las sanciones firmes impuestas a aquellos.

Asimismo, el Registro contendrá las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las Autoridades Investigadoras o el Tribunal.

Tratándose del Poder Legislativo, Judicial y de los Órganos Constitucionales Autónomos, la Secretaria y los Órganos internos de control llevarán el registro y seguimiento de la situación patrimonial de los servidores públicos que desempeñen sus funciones dentro de estos. Las normas de operación, formatos y mecanismos de registro serán emitidas por la Secretaría en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la emisión de constancias que acrediten la situación específica del servidor público.

Con las bases de datos del registro, los entes públicos estarán obligados, previo a cualquier contratación o nombramiento de quienes pretendan ingresar al servicio público, a consultar en el sistema electrónico si dichas personas se encuentran inhabilitadas. La información estará disponible hasta por un plazo de cinco años posteriores a que el servidor público concluya su empleo, cargo o comisión, esta tendrá valor probatorio dentro del procedimiento sancionador o ante el Ministerio Publico.

Tanto la Secretaria como el Órgano Interno de Control, estarán facultados para llevar a cabo las investigaciones o auditorias necesarias para verificar la veracidad del contenido de las declaraciones presentadas, así como para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos, estando obligados todos los entes públicos a proporcionar la información que les soliciten. Cuando existan datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior en relación con sus ingresos, podrán citarlo personalmente, señalando las incongruencias detectadas para que formule las aclaraciones pertinentes.

Sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de conflicto de interés

La Declaración patrimonial deberá presentarse atendiendo a los plazos previstos según el tipo de declaración de que se trate:

- La Declaración Inicial, deberá de presentarse cuando se ingresa por primera vez al servicio público, o bien, tratándose del reingreso del servidor público. En este caso se presentará si han transcurrido setenta días de la conclusión de su último encargo. En ambos casos tendrá sesenta días para presentarla a partir de la toma de posesión del encargo.

- La Declaración de Modificación Patrimonial deberá presentarse una vez al año.

- La Declaración de Conclusión del Encargo se presentara dentro de los sesenta días siguientes a la conclusión del empleo. El no presentarla tendrá como consecuencia que se inhabilite al servidor público de tres meses a un año.

Por otro lado, cuando el servidor público cambie de dependencia o entidad, bastará con dar aviso de su situación patrimonial y no tendrá que presentar la declaración de conclusión.

De igual manera, la Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de su Declaración de Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los Entes Públicos, la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. En caso de no ser entregada y no existiere causa justificada para esto, automáticamente se iniciara una investigación por presunta falta administrativa y se le amonestara públicamente.

Si después de esto el servidor público continua sin entregar la declaración correspondiente por un periodo de treinta días después de haber sido suspendido, la Secretaria o el Órgano interno de control podrán dejar si efectos el contrato o nombramiento de este, en cuyo caso deberá notificar al titular de la dependencia en la que desempeñaba sus funciones para que lo separe de su encargo, en caso de que no lo hiciera incurrirá en responsabilidad administrativa.

Cuando se advierta que lo declarado no resulta veraz, se suspenderá al servidor público, por un periodo no menor de tres días hábiles ni mayor de tres meses, salvo que se considere por su importancia amerite que sea destituido e inhabilitado de uno a cinco años, con la posibilidad de que las Secretarias formulen la denuncia correspondiente ante Ministerio Publico, así como en los casos en que no pueda explicarse el incremento patrimonial del servidor público, en cuyo caso el órgano interno de control podrá solicitar a este que lo declare y si no lo justifica procederá a integrar el expediente correspondiente.

Formatos y mecanismos de registro

Para el fácil manejo, control y presentación de las declaraciones patrimoniales, estas serán realizadas, por regla general, a través de medios electrónicos, salvo en el caso que los municipios no cuenten con tecnologías de la información o medios de comunicación necesarios para poder presentar la declaración, en estos caso podrá hacerse en formato escrito, en cualquiera de los medios que se utilicen deberá presentarse de conformidad con las normas, formatos y manuales de contenido que expida el Sistema Nacional Anticorrupción, observando los mínimos previstos en la presente iniciativa:

- En la declaración inicial y de conclusión del encargo, el servidor público deberá informar los bienes inmuebles que posee, así como la fecha y el valor de estos al momento de su adquisición;

- En las declaraciones de modificación patrimonial, como su nombre lo indica, únicamente se manifestará la modificación en específico del patrimonio, con fecha y valor de la adquisición.

Tratándose de bienes muebles se deberá atender a los parámetros que emita la Secretaria y sus homologas. Se dispone que para efectos de esta ley y la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los Servidores Públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

Declaración de intereses

La existencia de conflictos de interés supone la afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

La Secretaría en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, será la encargada de expedir las normas y formatos impresos, electrónicos y magnéticos que deberán usarse para presentar la declaración, así como los manuales de instrucciones que establezcan su contenido y la regularidad con la que deben presentarse, a no ser que el servidor público considere que dentro de sus funciones se pueda actualizar un posible Conflicto de Interés.

La declaración de intereses la deberán presentar todos los servidores públicos, en los mismos plazos previstos para la patrimonial y, adicionalmente en cualquier momento en que el servidor público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

Con el objetivo de verificar la veracidad de las declaraciones y la evolución del patrimonio de los servidores públicos, la Secretaría, sus homologas y los Órganos internos de control estarán facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorias que consideren pertinentes, además, cuando estos tengan elementos o datos suficientes para presumir que el patrimonio de un servidor público es notoriamente superior en relación con los ingresos lícitos que percibe, podrán citarlo personalmente para que se manifieste en su favor, señalando las incongruencias detectadas para que formule las aclaraciones pertinentes. Sólo los titulares de las Secretarías o los servidores públicos en quien deleguen esta facultad podrán solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios.

Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas

Se propone la creación de en un apartado específico dentro del Registro Nacional, con los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión,

licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente.

La información de los Servidores Públicos deberá ser puesta a disposición de todo público a través de un portal de internet.

Protocolo de Actuación en contrataciones

Se propone delimitar y regular la interacción entre los servidores públicos inscritos en el Registro y se aplicaran los formatos que formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia, a fin de garantizar el cumplimiento y observancia de los principios rectores del servicio público y su actuación conforme a legalidad.

Mecanismos Generales de Prevención

Con la finalidad de mejorar el control interno de los entes públicos, la presente iniciativa pretende facultar a las secretarias y órganos internos de control para implementar acciones orientadoras para el desempeño de las funciones del servidor público, las cuales resulten del diagnóstico que estos órganos hagan, considerando las bases que para tal efecto establezca el Sistema Nacional Anticorrupción.

Los servidores públicos deberán observar el Código de Ética emitido por la Secretaría y sus homólogas cuando desempeñen sus funciones dentro de la Administración Pública Centralizada, los Órganos descentralizados, las Empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas, y fideicomisos.

Tratándose de Órganos constitucionales autónomos, deberán de sujetar su actuación al Código que emita el órgano interno de control conforme a los lineamientos que para tal efecto emita el Sistema Nacional Anticorrupción, de tal forma que impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño, propiciando la vocación al servicio público.

En la idea de generar contrapesos y la participación ciudadana en este esquema de coordinación, la Secretaría, así como sus homólogos en las entidades federativas, podrán suscribir los convenios de colaboración con el sector privado, en materia de contrataciones públicas, así como con cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de controles internos y programas que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética dentro de su organización, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas y contengan herramientas de denuncia y protección de denunciantes.

Por otro lado los entes públicos deberán implementar las políticas que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y mantener informado a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan en el ejercicio de sus funciones, a través de sus Órganos internos de control. Estas no serán vinculantes.

Finalmente, para el nombramiento del titular del órgano interno de control y el efectivo funcionamiento de sus funciones, consideradas clave para el propio funcionamiento del nuevo régimen de responsabilidades administrativas, se propone garantizar la igualdad de oportunidades basado en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos.

Faltas administrativas

La regulación y desarrollo de las faltas administrativas en que pueden incurrir los servidores públicos, y de aquellos actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, se instituye como la piedra angular del nuevo esquema de responsabilidades que por mandato constitucional se establece en la presente Ley.

Las conductas establecidas, sea por acción u omisión, afectan la imagen de las instituciones estatales y entorpecen la prestación del servicio público, dañando por consecuencia a la sociedad en su conjunto.

En razón de lo anterior, se identificó la necesidad de crear tres catálogos de conductas en los que se distinguen las faltas administrativas de carácter no grave, las de carácter grave y los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Evidentemente, la ubicación de cada conducta en el catálogo al que corresponde se llevó a cabo al identificar la lesividad con que afecta a la imagen institucional y al servicio público. En ese sentido, en tanto la lesividad sea de grado mayor, esta deberá ubicarse en el catálogo de faltas graves, mientras que las conductas que afectan en menor medida deben ubicarse en el catálogo de no gravedad.

En esa tesitura, se establece la actualización de faltas administrativas no graves, cuando los servidores públicos incumplan, entre otras, las siguientes obligaciones:

- Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar.
- Denunciar ante los Órganos Internos de Control, los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas.

- Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.
- Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses.
- Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos.

Por su parte, el catálogo de faltas administrativas graves prevé que los servidores públicos deberán abstenerse de llevar a cabo determinadas conductas, de entre las cuales destacan:

- Obtener o pretender obtener a través de cualquier acción u omisión, por sí o a través de terceros, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público para sí o para las personas a las que se refiere la Ley, consistente en dinero, valores, bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos.
- Autorizar, solicitar o realizar actos para el uso, asignación, desvío o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere la Ley, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
- Causar daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de la realización de un acto u omisión que viole una disposición jurídica.
- Adquirir para sí o para las personas a que se refiere la Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

- Intervenir, por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés.
- Incurrir en falta de veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses.
- Utilizar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia.
- Cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas graves, realice alguna conducta tendiente a su ocultamiento.
- Tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, no dar respuesta alguna o proporcionar información falsa, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Finalmente, se establecen supuestos en los que la actuación de los particulares puede estar vinculada a una falta administrativa grave. De este modo se inhiben prácticas indeseadas por particulares por las que inciten a los servidores públicos a actuar de manera ilegal.

En ese sentido, se establecen los siguientes actos de particulares que se vinculan con faltas administrativas graves:

- Prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otro bien a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con

independencia de la aceptación o recepción del dinero o del bien o del resultado obtenido.

- Realicen actos u omisiones para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedidos para ello.
- Intervengan en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley.
- Promuevan o usen su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.
- Presenten documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr un beneficio o ventaja derivada de la función pública.
- Ejecuten con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebida en las contrataciones públicas de carácter federal o local.
- Cuando por cualquier circunstancia maneje, reciba, administre o tenga acceso a recursos públicos, realice actos mediante los cuales se apropie, haga uso indebido o desvíe del objeto para el que estén previstos dichos recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros.
- Acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos.

- Contraten a quien haya sido Servidor Público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, y permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores.

Sanciones por faltas administrativas

Resulta pertinente señalar que, en relación a las sanciones por faltas administrativas de los servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves, la determinación de éstas debe ser directamente proporcional a la gravedad de la conducta. De ahí que, mientras mayor sea la afectación a la Hacienda o servicio público, corresponderá una sanción más severa.

En esa tesitura, las sanciones aplicables a aquellos servidores públicos que incurran en faltas administrativas no graves, serán sancionados por las autoridades administrativas con:

- Amonestación pública o privada.
- Suspensión del empleo, cargo o comisión.
- Destitución de su empleo, cargo o comisión.
- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Según corresponda, se establece que la Secretaría y los órganos internos de control, y sus homólogos de las entidades federativas podrán imponer una o más de las sanciones administrativas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta.

Para la individualización de las sanciones, las autoridades competentes deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el

servidor público cuando incurrió en la falta. Asimismo, el nivel jerárquico y antecedentes, las condiciones en que haya ejecutado los actos y la reincidencia.

En relación con las faltas administrativas graves, es menester recordar que su sanción compete de manera exclusiva al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y a los órganos jurisdiccionales homólogos en las entidades federativas.

Las faltas administrativas graves de los servidores públicos se sancionarán con:

- Suspensión del empleo, cargo o comisión.
- Destitución del empleo, cargo o comisión.
- Sanción económica.
- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Al igual que tratándose de faltas no graves, a juicio del resolutor podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa. Además de los criterios de individualización establecidos para faltas no graves, el juzgador deberá considerar los daños o perjuicios causados y el monto del beneficio derivado de la infracción.

Por lo que hace a las sanciones que se impondrán a particulares por actos vinculados a faltas administrativas graves, se da un trato diferenciado dependiendo de si se trata de una persona física o moral.

En el primero de los casos, las personas físicas serán sancionados con:

- Sanción económica;
- Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal según corresponda.

- Indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Tratándose de personas morales:

- Sanción económica.
- Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal según corresponda.
- La suspensión de actividades, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios.
- Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional.
- Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.

Las sanciones para particulares, también podrán ser impuestas conjuntamente al infractor, tomando en cuenta su compatibilidad y la gravedad de los actos vinculados con faltas administrativas graves.

Adicionalmente, el juzgador deberá contemplar el grado de participación del o los sujetos en la falta administrativa, la reincidencia, la capacidad económica del particular, el daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado y el monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Con la finalidad de evitar la impunidad de las conductas aquí señaladas, se establece que el fincamiento de responsabilidad administrativa a particulares vinculados con faltas administrativas graves se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un servidor público.

Asimismo, las personas morales serán sancionadas cuando los actos atribuidos estén vinculados con faltas administrativas graves, independientemente de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

DISPOSICIONES ADJETIVAS

El Libro Segundo contempla el régimen procedimental de la Ley. En ese sentido, se prevén las disposiciones relativas al inicio de la investigación, la calificación de no gravedad o gravedad según corresponda, la substanciación de los procedimientos en sede administrativa y jurisdiccional, los recursos y las sanciones aplicables.

Es preciso advertir que en ejercicio de la atribución que el constituyente confirió al Poder Legislativo Federal para determinar los procedimientos para la investigación y sanción de faltas administrativas, la presente iniciativa establece procesos tanto en sede administrativa como jurisdiccional, exhaustivos, que deberán ser aplicados en todos los órdenes de gobierno. La existencia de procedimientos únicos fortalece el Sistema Nacional Anticorrupción, al homologar las reglas procesales en todo el país. Es decir, la presente iniciativa, por lo que hace a la ley General de Responsabilidades, no se constituye como una norma marco, sino como una norma procedimental única. Esto significa que ni el Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades en el orden federal, ni las entidades federativas en ejercicio de su autonomía normativa, podrán modificar los procedimientos, plazos y recursos que prevé esta Ley. En todo caso, habrán de armonizar las normas orgánicas administrativas y jurisdiccionales para garantizarla efectiva aplicación de la Ley General.

DENUNCIAS, ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y DE LA CALIFICACIÓN DE FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

Denuncias

Las investigaciones por parte de las Autoridades investigadoras de actos u omisiones que puedan constituir faltas administrativas de servidores públicos o particulares, podrá iniciar de oficio, por denuncia o derivado de las auditoras practicadas por la autoridad competente.

Con la finalidad de abatir la mayor cantidad de obstáculos posibles, así como de alentar la participación ciudadana, las Autoridades investigadoras deberán habilitar áreas de fácil acceso, para el efecto de que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias en los términos de la Ley, siempre que tenga conocimiento de hechos que sean posiblemente constitutivos de faltas administrativas, cuya consecuencia inmediata será el inicio de la investigación correspondiente.

Para ejercer el derecho a que se refiere el párrafo anterior, los ciudadanos que presenten denuncias deberán incluir en éstas los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público o particular. Este requisito se establece para evitar el uso indebido de los medios de acceso, protegiendo con ello la seguridad jurídica de los servidores públicos.

En el caso de denuncias se establece la figura del anonimato, para que de ser el caso, quien ocurra ante las autoridades solicite el resguardo de su nombre y demás datos personales. Las autoridades investigadoras deberán, en todo momento, velar por la secrecía de dicha información de conformidad con la legislación aplicable.

Etapa de investigación

Como se mencionó en el apartado anterior, la investigación puede iniciar derivado de las investigaciones o auditorías, o bien de las denuncias que reciban las Autoridades investigadoras. Para el efectivo ejercicio de sus atribuciones de investigación se prevén amplias facultades para las Autoridades investigadoras de

acceder a toda la información que estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

La información a que se refiere el párrafo que antecede incluye aquella que el orden jurídico nacional considere con carácter de reservada o confidencial. Desde luego, las Autoridades investigadoras deberán fundar y motivar la solicitud de la información y seguir los procedimientos que cada ley establezca. Aunado a ello, tendrán la obligación de guardar la reserva o secrecía conforme a lo dispuesto por la ley de que se trate.

Asimismo, se prevén amplias facultades para las Autoridades investigadoras para requerir a personas físicas o morales, públicas y privadas que sean sujetos de investigación, la información que consideren necesaria para lograr la investigación más exhaustiva para la integración del expediente correspondiente. Para el cumplimiento de los requerimientos, la Autoridad investigadora deberá fijar un plazo máximo, mismo que podrá ser ampliado cuando la complejidad de la información así lo requiera, lo que deberá ser justificado por parte del sujeto o sujetos requeridos.

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, promoverán ante los Tribunales, según su competencia, las Acciones de responsabilidad correspondientes cuando derivado de sus auditorías determinen que se han ocasionado daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.

En caso de que tengan conocimiento de la presunta comisión de faltas administrativas distintas a las señaladas en el párrafo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos Internos de Control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente.

Calificación de faltas administrativas

De conformidad con el texto constitucional, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas, tienen la facultad de calificar las faltas administrativas en no graves y graves. Dicha calificación deberá efectuarse en relación con la información recabada durante la etapa de investigación y estará sujeta a los catálogos de faltas administrativas establecidos en la Ley.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

> *Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*
>
> *I.-…*
> *II.-…*
> *III.- …*
> *Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.*

La consecuencia inmediata y natural de la calificación es la sede en que se seguirá el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades. En ese sentido, cuando la falta sea calificada como no grave, el procedimiento se substanciará en sede administrativa y, cuando la falta sea calificada como grave, se substanciará ante los tribunales de justicia administrativa por medio de un Informe de presunta responsabilidad administrativa, como se expondrá en apartados sucesivos.

Por otra parte, cuando no se encuentren los elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del servidor público o

particular, las Autoridades investigadoras emitirán un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. No obstante, cuando se presenten nuevos indicios o pruebas relacionadas con los hechos imputados a los servidores públicos o particulares, las Autoridades investigadoras podrán abrir nuevamente la investigación, siempre que no haya prescrito la facultad para hacerlo.

Impugnación de la calificación de faltas administrativas

Como mecanismo para garantizar la correcta investigación y destacadamente el correcto cause procesal que seguirá la substanciación de faltas administrativas, se establece el recurso de inconformidad en contra de su calificación. Este recurso, funge como una salvaguarda para el adecuado desempeño de las funciones de las Autoridades investigadoras.

En esa tesitura, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

> *Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*
>
> *I.-…*
> *II.-…*
> *III.- …*
> *…*
> *…*
> *La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.*

De conformidad con el texto constitucional, el recurso de inconformidad funge como un elemento para evitar la simulación o incorrecta determinación de gravedad por parte de las Autoridades investigadoras, al mismo tiempo que garantiza la seguridad jurídica y equidad procesal de las partes involucradas.

Ahora bien, la Constitución establece que el recurso procederá en contra de la calificación de no gravedad de las faltas administrativas graves.

Por lo que hace a los efectos de la resolución del recurso de inconformidad, esta podrá confirmar la calificación realizada por las Autoridades investigadoras, o bien, podrá dejarla sin efectos. En el segundo caso, la autoridad que resuelva el recurso podrá recalificar los actos y omisiones materia de la impugnación, debiendo incoar el procedimiento ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando recalifique como grave.

El procedimiento hasta aquí descrito, se resume en el siguiente diagrama:



Procedimiento sancionador por faltas administrativas

Cuando las Autoridades investigadoras determinen la no gravedad de las faltas administrativas se seguirá el proceso en sede administrativa de conformidad con las siguientes etapas:

- Las Secretaría de la Función Pública u órganos internos de control -y sus homólogos en las entidades federativas- citarán de manera personal al presunto responsable a una audiencia, en donde deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en relación con los actos que se le imputen.
- Concluida la audiencia se concederá al presunto responsable la oportunidad para ofrecer los medios probatorios relacionados con los actos u omisiones que se le atribuyen y que estime pertinentes para desvirtuar la imputación.
- Desahogado el universo probatorio, la Secretarías u órganos internos de control resolverán sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, y en su caso, impondrá las sanciones por faltas administrativas no graves que correspondan.

Se establecen las más amplias atribuciones para la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, y sus homólogos en las entidades federativas, para practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos, así como requerir información y documentación relacionada a este o a las dependencias, entidades u organismos involucrados.

Asimismo, para garantizar la eficacia de las investigaciones se dota a la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas, con la facultad de suspender temporalmente a los servidores públicos sujetos al procedimiento sancionador, lo cual en ningún caso prejuzgará sobre la responsabilidad de los servidores públicos.

No obstante lo anterior, cuando se determine la suspensión temporal del servidor público se deberá prever la remuneración por el tiempo que dure la suspensión, misma que será, por lo menos, suficiente para satisfacer sus necesidades mínimas vitales y las que de aquellas personas que dependan de él, ya sea por ley o por mandamiento judicial.

Sirven de sustento a lo anterior los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señalan:

> *"RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. En concordancia con los principios de presunción de inocencia y derecho al mínimo vital, previstos en los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 14, 16, 17, 27, 31 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que potencializan significativamente la protección de la dignidad humana, se llega a la convicción de que el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en cuanto permite la suspensión temporal en el empleo y la retención de las percepciones del servidor público que es investigado, resulta conforme con el texto de la Norma Fundamental, particularmente con su artículo 113, siempre y cuando se interprete en el sentido de que la autoridad administrativa sancionadora contemple en el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidades, el pago de una cantidad equivalente al salario o ingreso mínimo de subsistencia, esto es, desde el momento en que el servidor público es notificado del inicio del procedimiento de responsabilidad y suspendido en sus labores, así como en el pago de sus emolumentos, durante el periodo en que se lleven a cabo las*

investigaciones respectivas y hasta en tanto la autoridad no dicte resolución administrativa en la que determine su responsabilidad y destitución del cargo. En esa virtud, la autoridad instructora debe garantizar el derecho a un ingreso mínimo para la subsistencia del presunto responsable; de ahí que en forma simultánea, habrá de determinar la cantidad que le otorgará para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, salud, entre otras, cantidad que deberá ser equivalente al 30% de su ingreso real y nunca inferior al salario tabular más bajo que se cubra en la institución en la que laboraba el servidor público al decretarse la suspensión y que deberá cubrirse hasta en tanto se dicte resolución administrativa en el procedimiento de origen en el que se determine su responsabilidad y se le destituya del cargo de manera definitiva, momento en el cual, al haber sido desvinculado de la institución, puede buscar otra fuente de ingresos.

DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que desde una óptica tributaria, el derecho al mínimo vital tiene fundamento en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de los gobernados en lo general, independientemente de la manera en la que obtengan sus ingresos o de la prerrogativa establecida en el artículo 123 constitucional para la clase trabajadora, consistente en que se exceptúa de embargo, compensación o descuento el salario mínimo; pero también reconoce que el derecho al mínimo vital trasciende tanto a la materia fiscal como a la laboral, y abarca un conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y negativas) que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que ese derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte dogmática de la Constitución Federal, lo cual en términos de su artículo 1o., resulta concordante con los instrumentos internacionales que son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Suprema. En ese sentido, si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones en materia de

procura existencial o asistencia vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización política, económica, cultural y social del país.

DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO. El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado Democrático de Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean."

Adicionalmente, se prevé la posibilidad de levantar la suspensión cuando por las características específicas de cada caso, la reincorporación del servidor público ya no se considere como un obstáculo que retrase, impida o interfiera con la investigación. Asimismo, se establece la terminación de la suspensión como

consecuencia lógica y natural de la emisión de la resolución del procedimiento correspondiente.

Como medida de defensa de los derechos laborales, se establece la prohibición para la Secretaría, órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas, de difundir las suspensiones temporales que se dicten hasta en tanto no se resuelva en definitiva el procedimiento.

Aunado a ello, cuando el servidor público suspendido resultare inocente, la dependencia o entidad en donde preste sus servicios deberá restituirlo en el goce y ejercicio de sus derechos, teniendo la obligación de cubrir las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se encontraba suspendido.

Recurso de revocación

Una vez dictada la resolución, los servidores públicos a quienes se les determine la responsabilidad administrativa por faltas no graves, podrán recurrir tal determinación por medio del recurso de revocación ante la autoridad emisora, mismo que tendrá el efecto de suspender la resolución recurrida en tanto este se resuelve.

La suspensión de la resolución recurrida se actualizará en los siguientes supuestos:

- Cuando la solicite el recurrente siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

- Como requisito especial, únicamente en los casos en que la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, la misma se concederá si el quejoso otorga una garantía bastante y suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que en su caso se causen si no obtiene resolución favorable.

Los requisitos señalados con antelación, son un reflejo exacto de aquellos establecidos por la Ley de Amparo. Esto es así puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que para efectos de que el gobernado deba agotar la suspensión del acto reclamado en el juicio contencioso administrativo, dicha medida deberá de tener como supuesto de procedibilidad los mismos requisitos que la suspensión en el juicio de amparo.

En efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado:

> *"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo será procedente contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para conceder la provisional. De tal suerte que si en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 70, no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad que conoce del recurso se pronuncie respecto de la suspensión provisional solicitada, dejando a las partes en estado de inseguridad jurídica, y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de 24 horas que al efecto prevé la Ley de Amparo, no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto, de ahí que no se actualice el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo."*

En ese sentido, se homologa el texto legal con el mandato de nuestro Máximo Tribunal, evitando así requisitos que resulten excesivos y gravosos para los servidores públicos sancionados por faltas administrativas no graves. Asimismo, se establece el plazo para que la autoridad se pronuncie sobre la suspensión, mismo que será de veinticuatro horas.

Las resoluciones que se dicten en los recursos de revocación serán impugnables, como todo acto administrativo, vía juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas. Las sentencias firmes que deriven de los juicios contenciosos administrativos tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada.

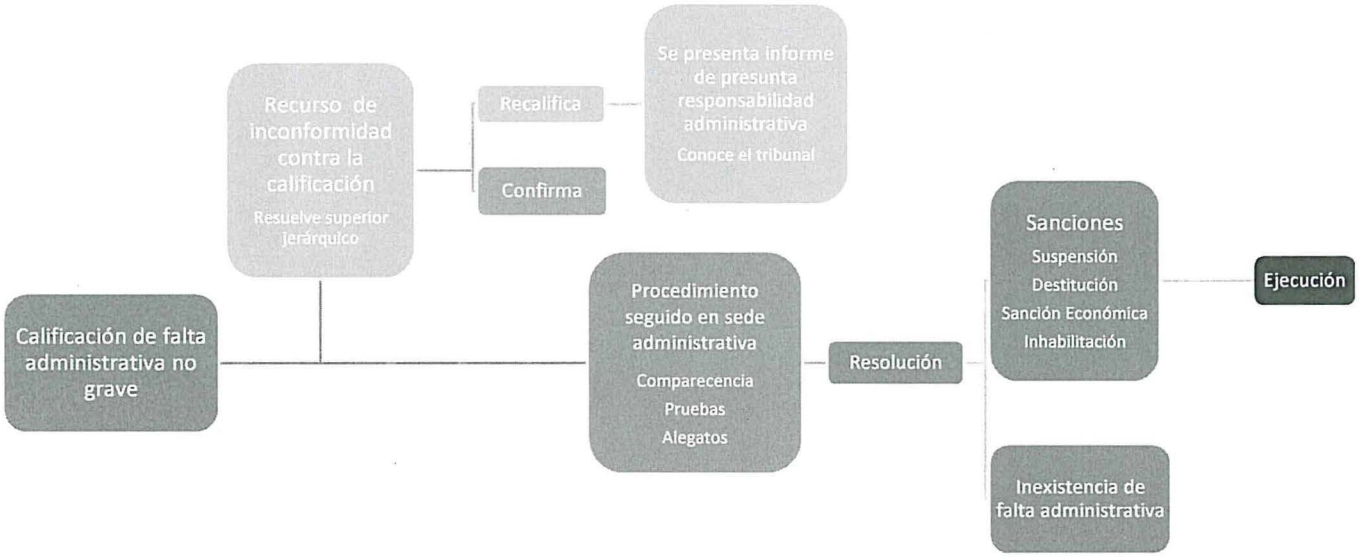
En caso de que los tribunales ordenen la revocación o que la modificación así lo disponga, se ordenará al ente público en el que el servidor público preste o haya prestado sus servicios, la restitución en el goce de los derechos de que hubiese sido privado el servidor público por la ejecución de las sanciones impugnadas. La suspensión de la resolución materia del juicio, tendrá los requisitos ya expuestos.

Cumplimiento y ejecución de sanciones

Las sanciones que hayan quedado firmes deberán ejecutarse de inmediato y en los términos que disponga la resolución.

Nuevamente, se dota a la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control y sus homólogos en las entidades federativas de amplias facultades para ejercer eficazmente las atribuciones que esta Ley les confiere, para lo cual podrán imponer multa o solicitar el auxilio de la fuerza pública, e incluso cuando haya resistencia a sus mandamientos podrán proceder en los términos que establezca la legislación penal.

El procedimiento hasta aquí descrito se resume en el siguiente diagrama:



JUICIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Disposiciones Generales

Como ya fue apuntado, el juicio de responsabilidades administrativas procede cuando de las investigaciones efectuadas por las Autoridades investigadoras, deriven actos u omisiones de servidores públicos que posiblemente constituyan faltas administrativas graves, o bien, los actos de particulares que se vinculen con estas.

Resulta pertinente señalar que el Juicio de responsabilidades administrativas iniciará cuando las Autoridades investigadoras presenten por escrito el Informe de

presunta responsabilidad administrativa, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus equivalentes en las entidades federativas.

A efecto de evitar eventuales lagunas, se establece la supletoriedad de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.

En el Juicio de responsabilidades administrativas pueden concurrir las siguientes partes:

- La Autoridad Investigadora.
- El servidor público a quien se le impute una falta administrativa grave.
- El particular, persona física o moral, vinculada con las faltas administrativas graves.
- Los terceros a quien pueda afectar la resolución.

Se mimetiza la figura de tercero interesado para el efecto de que la dependencia o entidades en donde preste sus servicios el servidor público, tenga la capacidad legal de hacer valer las manifestaciones que a su derecho convengan e incluso para fungir como un coadyuvante de las Autoridades investigadoras.

Substanciación y resolución del Juicio de responsabilidades administrativas

Para la tramitación del Juicio de responsabilidades administrativas se contempla un proceso jurisdiccional similar al procedimiento contencioso administrativo, con las modulaciones especiales que requiere el ámbito sancionador del derecho administrativo.

Sirven de referencia las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos -porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL SISTEMA DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULA LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DE LAS SANCIONES PENALES, DADA SU DIVERSA NATURALEZA. Del texto de los artículos 109 y 113 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del contenido de la exposición de motivos del decreto de reformas y adiciones al título cuarto de la propia Constitución, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, se advierte que la intención del Poder Revisor de aquélla fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar, por la autoridad administrativa competente, a quienes teniendo el carácter de servidores públicos incurran en actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de la función pública. En cambio, la redacción del artículo 21 de la Constitución Federal revela que su autor designó como penas a las sanciones derivadas de la comisión de ilícitos penales, cuya aplicación compete exclusivamente a la autoridad judicial, de donde deriva que su naturaleza y fines son distintos a los del sistema de imposición de sanciones administrativas, por ser diferentes las causas que les dan origen. En esa virtud, los parámetros o lineamientos que rigen las sanciones penales no pueden ser iguales a los del sistema sancionador de responsabilidades administrativas ni, por consiguiente, puede legalmente determinarse la inconstitucionalidad de los dispositivos que fijan las sanciones relativas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con base en esa diferencia, pues sería desconocer la intención del Poder Revisor de la Constitución -contenida en la exposición de motivos y en el texto de los artículos 109 y 113 citados-, que fue la de crear un sistema de normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo el carácter de servidores públicos, incurrieran en actos u omisiones que afecten los principios fundamentales que rigen el desempeño de sus funciones, por lo que el legislador secundario, congruente con esa naturaleza y finalidad, en la referida ley reglamentaria definió el núcleo básico calificado como infracción en cada una de las fracciones de su artículo 47, además de que en sus artículos 53 y 54 especificó las sanciones correspondientes a dichas faltas y fijó los elementos que debe tomar en cuenta la autoridad administrativa sancionadora para adecuarlas al caso concreto, de manera tal que se trata de sanciones de distinta naturaleza a las penales, en tanto que guardan relación con la afectación al eficaz desempeño de la función administrativa por los servidores públicos que la incumplen."

Causales de improcedencia y sobreseimiento

Como causales de improcedencia del Juicio de responsabilidades administrativas, se contemplan:

- Cuando de las constancias se desprenda notoriamente que los actos u omisiones que hayan sido calificados por la autoridad competente como graves, no lo sean.
- En los casos en que se omita acompañar al Informe de presunta responsabilidad administrativa el expediente que derive de las investigaciones realizadas por las Autoridades investigadoras en sede administrativa.
- Cuando las conductas calificadas como faltas administrativas graves sean materia de un juicio diverso pendiente de resolución.
- Cuando hayan prescrito las facultades de investigación de la autoridad.
- Contra conductas que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio por faltas administrativas graves.

Como causales de sobreseimiento del Juicio de responsabilidades administrativas, se contemplan:

- La muerte durante la tramitación del presunto infractor.
- Cuando de las constancias de autos se demuestre claramente que no existen los actos imputados al presunto infractor o cuando no se pruebe que fue este quien los cometió.
- Cuando durante la tramitación del juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia.

En el caso que durante la tramitación del juicio se suscite la muerte presunto infractor se sobreseerá el juicio en relación con el fincamiento de responsabilidades administrativas, salvo lo correspondiente al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal, de las entidades federativas o municipios, o bien al patrimonio de los entes públicos.

La previsión señalada en el párrafo que antecede obedece a causas de interés público, en tanto que la correcta aplicación de los recursos contenidos en la Hacienda Pública, así como el patrimonio de los entes públicos atañe a todos los mexicanos. En ese sentido, la acción deberá seguir su curso legal y las autoridades competentes para aplicar esta Ley deberán proceder de conformidad con la legislación aplicable para garantizar que, en caso de que se acredite que en efecto hubo un daño o perjuicio causado por el ahora difunto, este sea resarcido en su totalidad.

Medidas cautelares

Como complemento a las extensas facultades otorgadas a los juzgadores en esta Ley, se contempla el establecimiento, a petición de parte vía incidental, de las medidas cautelares necesarias con la finalidad de mantener la situación de hecho en el estado que se encuentre, evitando así que la resolución que ponga fin al Juicio de responsabilidades administrativas quede sin materia.

En relación con las medidas cautelares, el juzgador deberá de fundar y motivar su implementación, así como la idoneidad de cada una de las que decrete, en aras de evitar arbitrariedades o medidas excesivas. Dichas medidas podrán ser solicitadas por las Autoridades investigadoras en cualquier momento anterior a que se dicte sentencia.

Medidas de apremio

Para hacer cumplir sus determinaciones, los juzgadores a petición de parte o incluso de oficio, podrán hacer uso de las siguientes medidas de apremio:

- Amonestación.

- Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, misma que podrá duplicarse o triplicarse cada ocasión hasta llegar a dos mil veces el valor señalado.
- Arresto administrativo por hasta treinta y seis horas.
- Solicitud de auxilio de la fuerza pública.
- Cualquier otra medida que estime necesaria e idónea para la ejecución de sus fallos.

Cuando persista la causa por la que se dictó la medida de apremio, los juzgadores podrán proceder en los términos que establezca la legislación penal.

Informe de presunta responsabilidad administrativa y contestación

Una vez presentado y admitido el Informe de presunta responsabilidad administrativa el juzgador podrá determinar la suspensión temporal del servidor público en tanto se resuelve en definitiva el juicio. La suspensión temporal se regirá bajo las mismas reglas que en el procedimiento en sede administrativa por faltas administrativas no graves.

Al correr traslado al presunto infractor, se otorga un plazo de quince días para que emita contestación. En caso de exista tercero perjudicado, se otorga el mismo plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Pruebas

Se prevé la posibilidad de ofrecer todas las pruebas que sean conforme a la moral y al derecho, excepción hecha de la confesional a cargo de la autoridad por absolución de posiciones.

Asimismo, se dispone que en caso de existir pruebas supervenientes, serán admisibles hasta antes de dictar sentencia, lo que beneficia equitativamente a las

partes en el sentido de que pueden allegar al juzgador los medios de convicción pertinentes para que este tome una decisión informada y apegada a derecho.

Por otra parte, se otorgan las más amplias facultades a los juzgadores para decretar en todo tiempo, según consideren necesario y les permita arribar al conocimiento de la verdad, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de las diligencias, con la única condicionante que no sean contrarias a la moral o al derecho.

Alegatos

En cumplimiento al derecho fundamental a una justicia completa, se establece que los alegatos presentados por las partes dentro del plazo legal establecido para hacerlo, deberán ser considerados por el juzgador al pronunciar la sentencia que recaiga en el juicio de responsabilidades administrativas.

Lo anterior, es sumamente novedoso toda vez que en la práctica los jueces no están vinculados de ninguna manera para tomar en cuenta lo que las partes expresan en los alegatos. Esto es, la vinculación de los alegatos provee a las partes con una última oportunidad dentro del juicio para expresar hechos que se encuentren relacionados con las actuaciones que consten en autos.

No obstante, al transcurrir el plazo de cinco días para su presentación, recibidos los alegatos o no, se considerará cerrada la instrucción. Esta previsión se contempla con la finalidad de evitar la dilación innecesaria del procedimiento.

Sentencia

Una vez analizado el Informe de presunta responsabilidad administrativa, su contestación, el escrito por medio del cual se apersone el tercero interesado, desahogadas y analizadas las pruebas y, en su caso, alegatos, el juzgador procederá a dictar sentencia.

La sentencia deberá contener:

- Los antecedentes del caso.
- La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos.
- La valoración de las pruebas desahogadas.
- La explicación relativa a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como falta administrativa grave y, en su caso, la responsabilidad plena del servidor público o particular vinculado con dichas faltas.
- En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como falta administrativa grave y la lesión producida.
- La valoración del daño o perjuicio causado, así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación.
- La determinación de la sanción para el servidor público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la falta administrativa grave, misma que deberá decretarse de conformidad con los criterios de individualización que establece la Ley.
- Los puntos resolutivos, incluyendo la forma en que debe cumplirse la sentencia.

En caso de que la falta administrativa haya quedado plenamente comprobada y su responsabilidad atribuida al servidor público, pero de las constancias se desprenda que este no es constitutiva de una falta grave, el juzgador ordenará a la Secretaría de la Función Pública, órganos internos de control o sus homólogos en las entidades federativas, que continúen hasta su terminación el procedimiento en sede administrativa.

Lo anterior es posible debido a que la interposición del Informe de responsabilidad administrativa suspende el plazo para ejercer la acción de responsabilidades. En

ese sentido, mientras se tramite el procedimiento en sede jurisdiccional no es posible que ésta prescriba.

El reencause del procedimiento no debe entenderse sólo como una corrección competencial, sino como el ajuste procedimental frente al servidor público quien será sancionado en los términos que la propia Ley establece y conforme a los alcances que conlleva una falta administrativa no grave. Lo anterior no es óbice para considerar que también se protege el interés público al evitar que la falta administrativa, aunque no grave, quede impune.

Recurso de reclamación

Se prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del juzgador por medio de las cuales se admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de presunta responsabilidad administrativa, su contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento antes del cierre de instrucción y las que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.

Recurso de apelación

Las resoluciones que resuelvan el fondo de los juicios de responsabilidades administrativas, serán impugnables vía recurso de apelación. Para su promoción deberán formularse agravios en contra de las siguientes resoluciones:

- Las que determinen imponer las indemnizaciones a los Servidores Públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades;
- La que finque a los responsables el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos, y

- La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares.

El establecimiento de un recurso de apelación para las partes atiende a la naturaleza especial del derecho administrativo sancionador, que si bien se subsume en la materia administrativa, debe modularse, en tanto no es factible que los diferentes campos del derecho administrativo punitivo cuenten exactamente con los mismos componentes del principio de legalidad.

Sirve como referencia a lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala:

> *"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEBE MODULARSE EN ATENCIÓN A SUS ÁMBITOS DE INTEGRACIÓN. El ámbito constitucionalmente legítimo de participación de la autoridad administrativa en los procesos de producción jurídica en el derecho administrativo sancionador, debe determinarse por referencia a los imperativos de tres valores en juego, a saber: 1) el control democrático de la política punitiva (reserva de ley); 2) la previsibilidad con la que han de contar las personas sobre las consecuencias de sus actos; y, 3) la proscripción de la arbitrariedad de la autoridad (ambas vertientes del principio de tipicidad). Así, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suscribe la premisa de que los componentes del principio de legalidad no pueden tener un grado de exigencia idéntico en todos los ámbitos del derecho citado, sino que han de modularse de acuerdo con la función desempeñada por el Estado, por lo que para determinar el balance debido es necesario establecer en qué terreno se encuentra la materia de escrutinio constitucional y cuáles son los elementos diferenciados a considerar. Ahora bien, de una lectura íntegra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que, al menos, existen cinco ramas del derecho referido, sin que ello implique que no puedan aceptarse posteriormente nuevas manifestaciones: 1) las sanciones administrativas a los reglamentos de policía, del artículo 21 constitucional; 2) las sanciones a que están sujetos los servidores públicos, así como quienes tengan control de recursos públicos, en términos del Título Cuarto de la*

Constitución Federal; 3) las sanciones administrativas en materia electoral; 4) las sanciones a que están sujetos los agentes económicos y operadores de los mercados regulados en el contexto de la planificación económica y social del Estado; y, 5) una categoría residual, donde se prevén las sanciones a que están sujetos los particulares con motivo de una actividad de interés público regulado administrativamente (aduanero, inmigración, ambiental, entre otros). Este listado no tiene el fin de establecer los únicos ámbitos integrantes del derecho administrativo sancionador, pero sí evidencia los que han sido explorados en la jurisprudencia, en que se han fijado distintos balances de acuerdo a los elementos normativos y jurisprudenciales que definen una naturaleza propia que, por ejemplo, en el caso de las sanciones administrativas establecidas en los reglamentos, ha llevado a concluir que no es aplicable el principio de reserva de ley, pero sí el de tipicidad, a diferencia del ámbito donde el Estado se desempeña como policía, en el que los tres principios exigen una aplicación cercana a la exigida en materia penal. Entre ambos extremos, cabe reconocer ámbitos intermedios, donde el Estado desempeña un papel regulador en el que los tres valores adquieren una modulación menor al último pero mayor al primero, pues se permite la integración de los tipos administrativos con fuentes infralegales, pero siempre bajo los lineamientos generales establecidos en las leyes. Por tanto, el grado de exigencia del principio constitucional de legalidad exige un ejercicio previo de reconocimiento del ámbito donde se ubica la materia de estudio."

Aunado a lo anterior, el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga amplia facultad configurativa al Congreso de la Unión para regular los procedimientos a los que deberá de sujetarse el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En efecto el artículo 73, fracción XXIX-H dispone:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

...

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que

establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones."

..."

De la lectura de la porción normativa transcrita, se desprende fehacientemente la intención del Poder Reformador de la Constitución de otorgar una amplia libertad configurativa al Congreso de la Unión, para regular la organización, funcionamiento y los recursos para impugnar las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con la única condicionante de que dicho Tribunal esté dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.

En esa tesitura, se reitera que este Congreso de la Unión cuenta con amplia facultad configurativa para establecer los procedimientos –incluidos los recursos- que se seguirán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, es concordante con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el máximo tribunal establece las modulaciones que deben preverse por el Poder Legislativo al configurar el derecho administrativo en su vertiente punitiva.

Atendiendo a ambas disposiciones normativas es que se diseñó el Juicio de responsabilidades administrativas que si bien sigue siendo materia administrativa, ha sido adecuado para otorgar a los servidores públicos y particulares la presunción de inocencia que exige la Constitución, así como suficientes oportunidades procesales para que todas las partes en el juicio puedan impugnar las determinaciones de los tribunales.

Recurso de revisión y juicio de amparo directo

Conforme al texto constitucional, las resoluciones que emanen del Juicio de responsabilidades administrativas serán impugnables vía recurso de revisión, en caso de que el recurrente sea la Autoridad investigadora, o bien, vía amparo directo, en caso de que quien impugne sea el servidor público o particular a quien se le fincó una responsabilidad administrativa por faltas graves.

De ambos medios de impugnación conocerán, tratándose de procedimientos del orden federal, los Tribunales Colegiados de Circuito, bajo las reglas establecidas para la revisión del amparo indirecto.

De conformidad con lo anterior, el texto constitucional establece:

"Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

...

III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y la BASE PRIMERA, fracción V, inciso n) y BASE QUINTA del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;..."

Artículo 109. ...

...

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

Por lo que hace a al ámbito local, se establece la prevención de que las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales.

Ejecución

Se establece que la sentencia causará ejecutoria cuando:

- Admitiendo recurso o juicio en contra, no fuere impugnada, o cuando habiéndolo sido, este haya sido desechado, sobreseído o fuera infundado.

- Se consienta expresamente por las partes.

- Se resuelva el recurso de revisión o amparo directo sea resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito.

Para efectos de la ejecución, las sanciones económicas impuestas por los tribunales constituirán créditos fiscales. Dicha situación se prevé con la finalidad de resarcir plenamente los recursos de la Hacienda Pública o patrimonio de los entes públicos, al mismo tiempo que habilita a las autoridades competentes para que en caso de que se omita el pago, hagan efectivos los créditos por medio del procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando se haya decretado la plena responsabilidad de un servidor público los tribunales girarán oficio con la resolución correspondiente a quien deberá ejecutar la sanción en los siguientes términos:

- En caso de que se haya suspendido, destituido o inhabilitado al servidor público se dará vista a la Secretaría de la Función Pública o su homóloga en las entidades federativas.

- Cuando se haya impuesto una indemnización o sanción económica, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o sus homólogos de las entidades federativas.

Cuando se determine que un particular en efecto tiene vinculación con faltas administrativas graves, los tribunales deberán girar oficio con la resolución correspondiente, bajo las siguientes reglas:

- Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas.

- Cuando el particular haya sido inhabilitado para intervenir con cualquier carácter en contrataciones, adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas.

- Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

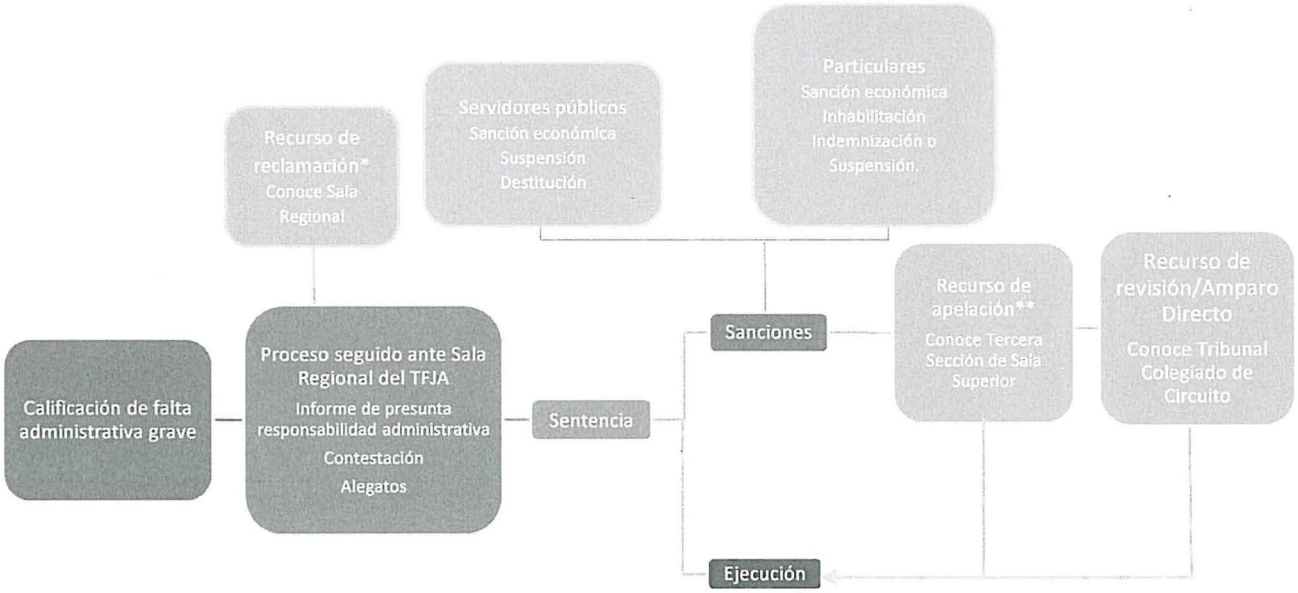
Cuando el particular sancionado tenga el carácter de persona moral, se sujetará a las siguientes reglas:

- Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal el particular.

- Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de conformidad con la Ley General de

Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables.

El Juicio descrito se refleja de forma gráfica en la siguiente diagrama por lo que hace a los procedimientos federales y, que de forma análoga, deberá aplicarse en las entidades federativas, de conformidad con las modificaciones orgánicas que se realicen a los tribunales locales:



III. MODIFICACIONES LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El transitorio Segundo de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, mandata al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones a la Ley

Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal (Secretaría de la Función Pública), asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la propia reforma y en las leyes que deriven de la misma.

Es preciso advertir que el referido mandato constitucional obedece a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, por el que se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federa y en el que se preveía la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una vez que que se concretara la reforma constitucional, que pretende reglamentar la presente la presente iniciativa.

La reforma legal referida, aunque derecho positivo, no puede considerarse derecho vigente, pues la condición prevista para su vigencia no se actualizó. Por el contrario, el Constituyente Permanente, partiendo del diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción, dotó de existencia orgánica y de competencia funcional a la Secretaría de la Función Pública.

Así, es tarea de este Congreso de la Unión reestablecer y fortalecer las atribuciones de dicha Secretaría, a partir de las disposiciones constitucionales en la materia.

> *Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:*
> *(...)*
>
> *III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u*

omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

(...)

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Contenido

La presente iniciativa contempla el fortalecimiento de la Secretaria de la Función Pública con las atribuciones necesarias para estar al frente del control interno de los entes públicos del Poder Ejecutivo Federal.

En esencia, la iniciativa contempla nuevas atribuciones para la Secretaría de la Función Pública, la reasignación de otras respecto de aquellas que en su

momento se propuso otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y facultades intrínsecas de los órganos internos de control, así como otras coordinadas.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal representará el eje rector de las atribuciones de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ya que se propone que sean responsables del buen funcionamiento del sistema de control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos, para lo cual les encomienda apoyar la política de control interno y la toma de decisiones para el debido cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, el óptimo desempeño de las instituciones y sus servidores públicos y la modernización y desarrollo de la gestión administrativa, así como para el correcto manejo de los recursos, conforme a su experiencia y el ejercicio de sus funciones.

Conforme al nuevo régimen de responsabilidades, se pretende sentar las bases para transitar hacia una profesionalización de los servidores públicos que desempeñen funciones de control interno, lo cual resultará en una mejora en los índices de eficiencia y mejora de la gestión pública, así como en mejores prácticas de prevención de responsabilidades administrativas. Las funciones de investigación deben ser desempeñadas por personas con la correcta capacitación académica y técnica, así como la experiencia profesional que les permita detectar las conductas que la sociedad considera más dañinas respecto a la función pública y perseguirlas conforme a derecho.

En ese sentido, debe tomarse en cuenta el hecho que dicho modelo debe tener excepciones debido a las diversas figuras y modalidades institucionales que se han creado en los últimos tiempos, por lo que se propone reconocer los regímenes específicos con el propósito de fortalecer el control y rendición de cuentas de todos los entes públicos, haciendo hincapié en la operación de algunas entidades paraestatales cuyos objetos atienden a situaciones muy específicas, al operar con fines comerciales y que por lo tanto requieren prácticas modernas para controlar

su función y por ende no resulta idóneo aplicarles la política de control propia de instituciones de carácter gubernamental. Tal es el caso de las instituciones de banca de desarrollo y empresas productivas del Estado.

Para las primeras, en la reforma en materia financiera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, el Poder Legislativo estableció en el artículo 44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito que la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito (Nacional Financiera, Sociedad Hipotecaria Federal, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero serían los competentes para llevar el control, evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas en materia de presupuesto y responsabilidad hacendaria; contrataciones públicas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de servidores públicos, y transparencia y acceso a la información pública, conforme a la ley de la materia.

La modificación del régimen ha permitido que los órganos internos de control concentren sus esfuerzos en tan relevantes tareas, y que la función de realizar auditorías o investigaciones encaminadas a revisar aspectos como el desempeño de la entidad y el cumplimiento de sus objetivos y políticas institucionales sean desempeñadas por un Comité de Auditoría de cada Consejo Directivo, conforme a las disposiciones generales que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en atención a las necesidades y prácticas técnicas que el sector financiero acarrea.

La reforma financiera mejoró el gobierno corporativo de la banca de desarrollo, conforme a las tendencias más avanzadas, introduciendo la figura de dos comisarios como integrantes de la junta directiva de cada banco de desarrollo con importantes atribuciones: evaluar el desempeño de los bancos de desarrollo y

combatir la corrupción sistémica de fraude controlado y los conflictos de interés en las instituciones de la banca de desarrollo.

En forma similar, en el caso de las empresas productivas del Estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias), el Constituyente Permanente, y posteriormente el Poder Legislativo, estableció un régimen especial en materia de responsabilidades administrativas de los servidores público, en el cual la vigilancia y auditoría es ejercida por el Consejo de Administración, a través de su Comité de Auditoría, quien a su vez se apoya de la Auditoría Interna, así como en el Auditor Externo. Al primero de dichos órganos le corresponde la evaluación del desempeño financiero y operativo, general y por funciones, de la empresa; verificar el cumplimiento de las metas, objetivos, planes, programas y proyectos prioritarios, y dar seguimiento e informar al Consejo de Administración del estado que guarda el sistema de control interno, entre otras. Asimismo, dicho régimen especial prevé que la atención a quejas y denuncias, así como la investigación y sanción de faltas administrativas, será exclusivo de la Unidad de Responsabilidades, sin que ésta pueda conocer de cuestiones relacionadas con auditoría y control interno.

En cuanto al régimen de responsabilidades para empresas productivas del Estado, el Poder Legislativo decidió que la aplicación de la ley en materia de responsabilidades administrativas se realiza a través de la Unidad de Responsabilidades por lo que es competente para recibir y dar atención a quejas y denuncias y realizar investigaciones con motivo de las mismas, así como tramitar los procedimientos de responsabilidad administrativa e imponer las sanciones respectivas, en términos de las leyes aplicables.

Cabe señalar, que dichas entidades cuentan con un régimen especial en materia de control interno, entre otros, toda vez que existe un órgano o instancia especializada en la materia, la cual lleva a cabo las funciones de control y vigilancia sobre el desempeño de los servidores públicos, la eficiente gestión administrativa y el correcto manejo de los recursos públicos.

Los regímenes especiales atienden a la necesidad de establecer un sistema de control y vigilancia, acorde con la naturaleza y funciones de cada una de las entidades, así como con las mejores prácticas en la materia, que evite duplicidad de funciones y cargas administrativas innecesarias.

Es por estos regímenes específicos, así como aquellos que en el futuro se diseñen por parte del Legislador, que debe actualizarse el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para aclarar expresamente que en dichos casos la labor de los órganos internos de control se sujetará a aquellas leyes especializadas que establecen dichos regímenes acordes a la naturaleza, objetivos y funcionamiento de ciertas entidades, puesto que estas deberán tener preeminencia respecto del contenido del artículo señalado.

En relación con la adición de un segundo párrafo al artículo 50, debe destacarse que las entidades paraestatales surgieron como una herramienta del Estado para el desarrollo de ciertas actividades de naturaleza diversa, tales como económicas, culturales, institucionales o incluso para, en su momento, desarrollar áreas estratégicas y prioritarias. La administración pública paraestatal justamente se vincula con actividades que requieren una especialización técnica mayor y cuya atención podría implicar una carga importante tanto en la operación del Estado como en el destino de recursos públicos.

Es por ello que el Poder Legislativo, a partir de la emisión de la Ley para el Control de Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, en 1947, reguló la figura de la entidad paraestatal, principalmente caracterizada por su personalidad jurídica y patrimonio propios, los cuales se conceptualizaron como elementos fundamentales para el desarrollo de actividades que implicaban un gran riesgo para el Ejecutivo Federal y que, debido al grado de especialización que requerían, resultaba idónea la formación de entes administrativos capaces de gestionar sus asuntos, así como de administrar y desarrollar su patrimonio y personal.

El eje rector del marco jurídico vigente que regula a las entidades paraestatales es la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la cual se promulgó en 1986 y la cual significó un gran avance al reglamentar a gran profundidad las características orgánicas de dichas instituciones.

Sin embargo, tal regulación no agota su régimen jurídico, pues debido a la diversidad de funciones que se les ha encomendado a las entidades paraestatales, es necesario que el marco normativo de nuevo rompa con paradigmas, como lo hizo en 1986, y permita establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente la organización, funcionamiento, control y evaluación de las entidades atendiendo, principalmente, en atención a los objetivos para los cuales fueron creadas.

Resulta imperante para el desarrollo de la función administrativa y el eficiente ejercicio de la gestión pública que el Legislador actualice el marco jurídico para distinguir entre las entidades paraestatales que cumplen una función de carácter gubernamental y las que se crearon para realizar fines comerciales.

Es evidente que el control que debe ejercer el Estado sobre los servidores públicos de las entidades, respecto a las responsabilidades administrativas, debe de ser el mismo al responder a la necesidad de vigilar que el desempeño de dichos servidores sea en cumplimiento a los principios que pacta nuestra carta magna y bajo ningún motivo se omita sancionar las conductas que así lo ameriten.

Asimismo, el marco normativo debe reconocer, en materia del ejercicio eficiente de la gestión pública, que la naturaleza de las funciones de las entidades paraestatales varía mucho de aquellas meramente institucionales a aquéllas con fines comerciales y, por ello, debe atender a tal diferencia y clasificarlas de acorde a la misma. Esto permitirá que el Ejecutivo Federal y los órganos fiscalizadores ejecuten las tareas que les han sido encomendadas respecto de las entidades

paraestatales atendiendo, no sólo a su tipo legal, sino también a su objeto y razón de ser.

Es por ello que la iniciativa que se presenta contempla reformar el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a efecto de que las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública estén facultadas para emitir criterios que clasifiquen a las entidades paraestatales en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales.

Al respecto es importante señalar que debe entenderse por Entidades Paraestatales Institucionales aquellas tendientes a cumplir una función preponderantemente gubernamental o social, ya sea mediante la prestación de servicios públicos, la realización de actividades de promoción del desarrollo, de investigación, salud y educación, el cumplimiento de una función de regulación del mercado, distribución del ingreso o bien de desarrollo social o regional; mientras que por Entidades Paraestatales Comerciales, aquellas que se dedican a la producción de bienes o prestación de servicios con objetivos preponderantemente económicos o que la consecución de sus objetos la realizan mediante la ejecución preponderante de actos de comercio, en términos de la legislación mercantil.

Lo anterior responde a la necesidad de que el Estado ejerza un control efectivo sobre sus empresas con fines comerciales, a través de la implementación de prácticas de gobierno corporativo en las mismas. Dichas prácticas permiten hacer eficiente su operación y que su control, evaluación, fiscalización y rendición de cuentas se flexibilice de tal forma que las beneficie en obtener mejores resultados al desplegar prácticas propias de la libre empresa.

Dentro de las prácticas de gobierno corporativo que se considera tendrían un efecto positivo en dichas entidades con fines comerciales, se encuentra la integración de consejeros independientes a los órganos de gobierno de dichas instituciones, los cuales constituyen un contrapeso necesario a la presencia de la Administración Pública en dichos órganos colegiados, y pueden ayudar, a través

de su presencia en el mismo y de los comités de que formen parte (por ejemplo, de inversiones, auditoría y recursos humanos) a encausar la actividad de la entidad hacía las mejores prácticas comerciales internacionales.

Bajo estas consideraciones es que se propone reformar las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el objetivo de actualizar la regulación de las entidades paraestatales, dejando atrás esquemas rígidos que no guardan congruencia con las necesidades operativas y de control que actualmente requieren dichas instituciones. Lo anterior, sin que se pretenda de manera alguna que dichas entidades paraestatales dejen de sujetarse a todas las disposiciones en materia presupuestaria, de contrataciones públicas, de fiscalización y de responsabilidades administrativas, entre otras, que rigen a todo el sector paraestatal.

IV. A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN, LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

Uno de los pilares la reforma constitucional que nos ocupa fue el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Las reformas a los artículos 79 y 109 de la Constitución implicaron el cambio de la denominación de la "entidad de fiscalización superior de la Federación" por el de Auditoría Superior de la Federación" (ASF) y se el fortalecimiento de sus facultades:

Facultad de revisión durante el ejercicio fiscal ("auditoría en tiempo real") y sobre actos realizados en ejercicios fiscales anteriores. Actualmente sólo puede realizar este tipo de investigaciones a través de los órganos internos de control.

- Al eliminar los principios de anualidad y posterioridad, como sucede actualmente, la Auditoría podrá realizar directamente auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias y con la autorización del

titular de la Auditoría, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.

- Asimismo, se ha facultado a la Auditoría, a realizar auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, en donde además podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública en revisión.

- Lo anterior, con el objeto de asegurar que las irregularidades cometidas en años distintos a los de la revisión de la Cuenta Pública o al del ejercicio fiscal en curso, no queden impunes. Estas nuevas facultades de la ASF son independientes de la revisión de la Cuenta Pública.

Mayor plazo para que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice la Cuenta Pública.

- Con el objeto de fortalecer a la Auditoría, se prevé que ésta podrá iniciar su proceso de fiscalización, a partir del primer día del siguiente ejercicio fiscal al que se va a auditar. Adicionalmente, se prevé que la Auditoría podrá solicitar la información que requiera durante el ejercicio fiscal para poder planear sus auditorías.

  Esto es, se están otorgando a la Auditoría cuatro meses adicionales para el desarrollo de sus auditorías, lo cual redundará en la realización de más auditorías y, por ende, el fortalecimiento de la fiscalización.

- La ampliación de los plazos para la realización de auditorías y para la planeación de las mismas, se acompaña de un nuevo procedimiento para la presentación oportuna de sus resultados.

- Con ello, la Auditoría no tendrá que esperar hasta la presentación del Informe del resultado de su revisión (un solo informe), para presentar a la Cámara de

Diputados los hallazgos de sus auditorías. Lo anterior, con el objeto de que la Auditoría presente a las comisiones de la Cámara de Diputados los informes de sus auditorías de manera más oportuna, lo cual permitirá a ésta realizar el análisis que corresponda.

- Así, se prevén tres fechas para la entrega de informes individuales de auditoría: el último día hábil de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

- El 20 de febrero del año siguiente a la presentación de la Cuenta Pública, la Auditoría deberá entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, para que con base en las conclusiones técnicas del mismo se concluya el proceso de revisión de la Cuenta Pública.

- También, se fortalecen los informes de la Auditoría sobre el estatus de sus observaciones y recomendaciones. En este sentido, dichos informes deberán incluir los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

- Con dichos informes, que deberá presentar los días primero de los meses de mayo y noviembre, se sujetará también a la propia Auditoría a un esquema de rendición de cuentas.

Facultades para recurrir resoluciones en materia penal y administrativa.

- La Auditoría podrá recurrir el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa, relacionado con las investigaciones que realice la propia Auditoría y que someta a resolución de dichas autoridades.

Ampliación de las materias objeto de fiscalización.

- Una exigencia reiterada en materia de fiscalización es la posibilidad de que la Auditoría revise la totalidad de recursos que son transferidos a otros órdenes de gobierno. Por ello, se propone fortalecer y ampliar el ámbito de competencia de la Auditoría Superior de la Federación para que sea efectiva en su tarea de revisión y tenga mayor efectividad.

- Así, se ha facultado a la Auditoría a que, en los términos que establezca la ley fiscalice, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales.

- La Auditoría realizará directamente la fiscalización de los recursos federales transferidos y, primordialmente a través de la coordinación, fiscalizará las participaciones federales. Con ello, se establece un verdadero Sistema Nacional de Fiscalización, al permitir que de manera coordinada o directa, se fiscalice todo el gasto público, con el objetivo final de garantizar de que el gasto público se destine en todos los casos a los destinos aprobados en los tres órdenes de gobierno y, en caso de no hacerlo, se investigue y sancione de manera efectiva, atacando decididamente con ello la impunidad.

Promoción de responsabilidades.

- Derivado de sus investigaciones, la Auditoría podrá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción o cualquier otra autoridad que resulte competente, para la imposición de las sanciones respectivas. Cabe precisar que esta atribución se encuentra debidamente regulada también, en el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

Fiscalización de Fideicomisos

- La reforma constitucional faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados. En estos casos no aplicará el secreto fiduciario a las labores de fiscalización sobre recursos públicos, llevadas a cabo por la Auditoría Superior de la Federación.

En atención a lo anterior, la presente iniciativa propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, con el objeto de regular:

- La organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación (art. 73, fracción XXIV).

- La coordinación y evaluación, por parte de la Cámara de Diputados, del desempeño de las funciones de la Auditoría (art. 74, fracción II).

- Las funciones de revisión y fiscalización de la Auditoría (arts. 74, fracción VI y 79).

Las principales modificaciones a la ley consisten en lo siguiente:

1. *División de las facultades de la Auditoria Superior de la Federación*

La presente iniciativa propone dividir las facultades de la Auditoria Superior de la Federación conforme a lo plasmado por el Constituyente en la Reforma de 27 de mayo de 2015, por una parte se precisa el contenido de la revisión y fiscalización de la Cuenta Publica la cual incluye la fiscalización de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de

recursos públicos federales, de la información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, así como la revisión de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas y comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos , la Ley de Ingresos de la Federación y las metas previstas en los programas federales como medio de control y vigilancia a las y los servidores públicos, los procedimientos mencionados deberán ser realizados conforme a los principios de de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Por otro lado se propone incorporar la atribución que a raíz de la reforma tiene la Auditoria Superior de la Federación para revisar y fiscalizar en caso que se denuncien irregularidades respecto al ejercicio fiscal en curso o anteriores al que se encuentre en revisión de Cuenta Pública; las participaciones federales y el destino de los recursos que provengan de empréstitos contraídos por los estados y municipios en los que cuenten con la garantía de la Federación. Es importante precisar que la función fiscalizadora de la Auditoria Superior de la Federación es de carácter externo, es decir, es independiente y autónoma de cualquier otro medio o forma de control y revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales a cargo del Órgano interno de control.

Así, se dividen las facultades de la ASF, conforme a la reforma constitucional, y se ajustan los Títulos de la Ley para regular cada una de las atribuciones de fiscalización:

a) Fiscalización de la Cuenta Pública;

b) Fiscalización "en tiempo real". Esta función no es parte de la revisión de la Cuenta Pública puesto que se refiere a otros ejercicios fiscales distintos a la revisión de la Cuenta Pública. Esta facultad esta condicionada a la

presentación de una denuncia y a la autorización del Auditor, y sólo será procedente cuando se deduzca la existencia de:

- Un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos
- Posibles actos de corrupción;
- Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados;
- La afectación de áreas estratégicas o prioritarias de la economía;
- El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, y
- El desabasto de productos de primera necesidad.

c) La fiscalización de participaciones tampoco forma parte de la Cuenta Pública, toda vez que lo que se fiscalizará es el ejercicio de las mismas por parte de las entidades federativas y municipios, lo cual no corresponde a la Cuenta Pública federal.

d) La revisión del destino y ejercicio de los recursos provenientes de la deuda estatal garantizada por la Federación, tampoco forma parte de la Cuenta Pública federal (la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, otorgó a la Auditoría la facultad de fiscalizar tanto el otorgamiento de la garantía federal al financiamiento de estados y municipios, como el destino de los recursos locales provenientes de dicho financiamiento).

2. Dado que la Auditoría ya no tiene la atribución de fincar directamente las responsabilidades resarcitorias, se eliminan las disposiciones que regulaban ese procedimiento y se ajustan diversos artículos para prever la facultad de la Auditoría de promover la imposición de sanciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (conforme al procedimiento previsto en la Ley General

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves).

La Auditoría ahora debe promover:

a) El fincamiento de responsabilidades administrativas graves, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

b) Las denuncias cuando advierta la posible comisión de delitos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

c) Dar vista a otras autoridades para el fincamiento de otras responsabilidades.

3. La fiscalización a entidades federativas se ajusta conforme a la reforma constitucional. En términos del art. 79, fracción I, corresponde a la Auditoría fiscalizar: i) directamente los recursos federales transferidos a los órdenes de gobierno local, y ii) en coordinación con las entidades federativas o de manera directa, las participaciones federales.

4. Se prevé que la fiscalización de recursos federales que ejerzan las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, así como los particulares, podrá realizarse tanto en la revisión de la Cuenta Pública como a través de las auditorías "en tiempo real".

5. Se modifica el "Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado" dado que la reforma constitucional otorgó la atribución de fiscalizar las participaciones, originariamente a la Auditoría y le da a ésta la posibilidad de convenir con las auditorías locales que participen en dicha fiscalización. El Programa ya solo puede abarcar Participaciones porque la Constitución señala que la fiscalización de recursos federales debe ser "directamente" por la Auditoría.

6. En términos de la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, los daños y perjuicios al erario público siempre son considerados como una falta grave. Lo anterior, dado que en términos de la reforma constitucional, la competencia para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de daños y perjuicios, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o sus equivalentes en las entidades federativas (arts. 73, fracción XXIX-H; 116, fracción V y 122). En este sentido la Auditoría Superior de la Federación deberá promover la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No obstante, la Ley General del Procedimiento y del Juicio de Responsabilidades Administrativas, reconociendo que existen casos en que se ocasionan daños y perjuicios al erario público pero sin que el servidor público haya actuado dolosamente, es decir, sin intención de obtener un beneficio indebido, prevé la posibilidad de que dichos servidores públicos no sean sancionados, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos siguientes: que sea un daño menor a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (140 mil pesos aproximadamente); que no haya dolo; que sea la primera vez que el servidor público comete la falta; y que se hayan reparado los daños y perjuicios. Este beneficio podrá ser solicitado por el servidor público en cualquier momento del procedimiento ante el Tribunal para concluir el mismo.

7. Se establece una coordinación entre la Auditoría y CONEVAL para que no dupliquen las evaluaciones de desempeño. Si se ha creado un órgano constitucional autónomo específicamente para realizar evaluaciones de desempeño a las políticas y programas de desarrollo social), se estima que el mismo debe ser el responsable de llevar a cabo dichas evaluaciones y coordinarse con la Auditoría para el resto de las evaluaciones.

8. Se incluye la regulación de los informes individuales de auditoría y del Informe General Ejecutivo conforme a la reforma constitucional.

9. Se incluye la atribución de la Auditoría como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción.

10. Se modifica en congruencia con la reforma constitucional de la Ciudad de México.

11. Se modifica el cálculo de las sanciones económicas con base en la Unidad de Medida y Actualización (con un régimen transitorio que mantiene los salarios mínimos en tanto no se expida la ley en la materia).

12. Finalmente, derivado de estas modificaciones, se hace ajustes a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Reforma al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal

La reforma al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, en sus párrafos segundo y último, así como en las fracciones III y IV, tiene por objeto adecuar dicha disposición a la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, así como a las modificaciones que la presente Iniciativa incluye a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que anteriormente fueron expuestas.

En este orden de ideas, el artículo 79, fracción I, párrafo segundo constitucional dispone que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar, directamente, los recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México:

> "*También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.*"

Al respecto, actualmente el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que la fiscalización del ejercicio de las aportaciones federales a entidades federativas y municipios corresponde a las entidades de fiscalización locales, sin perjuicio de que el propio artículo, en su párrafo cuarto, de manera expresa señala que los recursos de los Fondos de Aportaciones son de naturaleza federal y se

sujetan a las reglas de control, evaluación y fiscalización establecidas en dicho artículo.

Por lo anterior, en virtud de la reforma constitucional es necesario modificar el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal para prever que será la Auditoría Superior de la Federación la responsable de fiscalizar directamente los recursos de los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios. En el mismo orden de ideas, se incluyen ajustes al propio artículo para establecer que al tratarse de recursos federales que serán fiscalizados directamente por las autoridades federales, la regulación para su ejercicio podrá seguir siendo la legislación local pero siempre y cuando no contravenga las disposiciones federales. Asimismo, se prevé que se seguirán registrando dichos recursos en las leyes de ingresos locales para dar plena transparencia sobre su ejercicio a nivel local pero enfatizando que, por su carácter federal, quedan sujetos a la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. Finalmente, se especifica que las sanciones por las responsabilidades administrativas que, en su caso se finquen derivado de la fiscalización, se impondrán en términos de la legislación federal por las autoridades federales.

Reforma al artículo 70, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Tal como se expuso anteriormente en el caso de la reforma al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, en términos de la Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar, directamente, los recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, entre ellos, los que integran los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Actualmente, el artículo 70, fracción V, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental dispone que los gobiernos de las entidades federativas, de los

municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos, deben coadyuvar con la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización de las entidades federativas, en la revisión de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, dicha disposición señala que las entidades de fiscalización de las entidades federativas tienen atribuciones en materia de fiscalización de los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades federativas y Municipios.

Conforme se señaló anteriormente, es indispensable reformar la fracción V del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental para ajustarla a la Reforma Constitucional y a la reforma planteada en la presente iniciativa al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

V. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

Antecedentes

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa por mandato constitucional, tiene a su cargo dirimir controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares. Erigido como un órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, el Tribunal se ha destacado desde su creación por tener a su cargo asuntos que son de trascendental importancia para el orden jurídico mexicano, esto es, el análisis y resolución respecto de actos de autoridad que día a día crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de los gobernados.

La amplitud del derecho administrativo ha impulsado la suma de novedosas competencias a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así, la propia evolución del derecho ha encomendado al Tribunal con la tarea de dirimir

controversias, que si bien no exceden la materia administrativa *lato sensu*, es innegable que requieren un grado de especialización.

El pasado 27 de mayo de 2015, como resultado del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el Poder Reformador de la Constitución tuvo a bien instituir una Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que se especializará en dicha materia.

Esta nueva facultad del Tribunal, se traduce en la imposición de sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, así como a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, y en el fincamiento del pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias a quienes resulten responsables de los daños y/o perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos.

Tomando en consideración lo apuntado con antelación, particularmente lo relativo a la creación de una Tercera Sección, es que se estima necesaria la reconfiguración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en aras de proveerlo con los elementos necesarios para la adecuada tramitación y resolución de los juicios de referencia.

Disposiciones Generales

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa contará con plena autonomía e independencia para dictar sus fallos y determinar su organización y presupuesto, el cual deberá ser aprobado con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal.

El Tribunal ejercerá directamente su presupuesto con total autonomía de conformidad con la presente iniciativa y las demás disposiciones aplicables,

guardando en todo momento los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad, responsabilidad y transparencia, el cual será aprobado por la Cámara de Diputados.

De conformidad con el artículo Tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el Tribunal deberá estar en posibilidad de autorizar las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global previamente aprobado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, podrá determinar los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal.

Finalmente, el Tribunal realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería, en los términos de las leyes aplicables. Su administración deberá ser eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.

Todo lo anterior sujetándose, desde luego, a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por otro lado, el Tribunal conserva su jurisdicción contenciosa consistente en resolver las controversias entre la Administración Pública Federal y los particulares, al igual que las reclamaciones a los entes públicos por responsabilidad patrimonial del Estado. Así como con jurisdicción sancionatoria, que le permitirá determinar las responsabilidades administrativas e imponer sanciones a los servidores públicos por faltas graves que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, así como a los particulares vinculados con estas, y fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias en caso de la

existencia de daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, de conformidad con lo establecido por el Constituyente Permanente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales.

La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo tercero de la presente fracción.

Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de

la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser considerados para nuevos nombramientos.

Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley."

Estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Sala Superior

La iniciativa, atendiendo al texto constitucional, establece que la Sala Superior se compone por dieciséis Magistrados, de entre los cuales uno preside el Tribunal. De los restantes, cinco integran la Sección Primera; cinco integran la Sección Segunda; tres integran la Sección Tercera; y finalmente, dos integran la Junta de Gobierno y Administración.

Para la efectiva distribución de labores se propone la creación de dos plenos. Uno de ellos encargado de la función jurisdiccional. El otro encargado de cuestiones administrativas del Tribunal (Pleno).

El Pleno Jurisdiccional es dirigido por el Presidente del Tribunal y se integra además por los cinco integrantes de la Sección Primera, los cinco integrantes de la Sección Segunda. La ausencia de los integrantes de la Sección Tercera en el Pleno Jurisdiccional, se justifica en razón de la materia especializada de la que conoce esta última.

Por su parte, el Pleno General se compone de la totalidad de los Magistrados de la Sala Superior –incluida la Sección Tercera-, y sus atribuciones consisten, entre otras, en elegir a quien presidirá el Tribunal, aprobar su presupuesto y aprobar y expedir el reglamento interior.

Debido a la especialización de los asuntos del conocimiento de la Sección Tercera, no se prevé la posibilidad para el Pleno Jurisdiccional de ejercer la

facultad de atracción de aquellos asuntos que sean de la competencia de aquella. Sin embargo, se dota a la Sección Tercera de facultades para ejercer las mismas atribuciones que el Pleno de la Sala Superior, pero únicamente respecto de los asuntos del conocimiento de las Salas Regionales en materia de su competencia.

Por lo que hace a las Secciones Primera y Segunda de la Sala Superior, no se modifica su competencia. No obstante, como ya se ha mencionado, se dota a la Tercera Sección de competencia para conocer de los juicios en materia de responsabilidades administrativas, entre otras vinculadas con actividades sensibles con las conductas materia de la reforma constitucional.

Sección Tercera

En cumplimiento con lo establecido por el Constituyente, la presente iniciativa atribuye al Tribunal Federal de Justicia Administrativa competencia para conocer de los procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, para imponer sanciones a los servidores públicos de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, a los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación de recursos federales, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, al igual que a particulares que se encuentren vinculados con faltas administrativas graves conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

En atención a lo anterior se propone la creación de una Tercera Sección al Tribunal de Justicia Administrativa, la cual será especializada en responsabilidades y estará compuesta por tres magistrados de los dieciséis que conformen el Tribunal. En razón a la especialización de la materia y en protección a la imparcialidad de su función, los integrantes de la Tercera Sección no podrán integrar la Junta de Gobierno y Administración ni el Pleno jurisdiccional.

Dicha sección adoptara resoluciones por unanimidad o mayoría de votos, por lo que para sesionar deberán encontrarse presentes los tres integrantes, que estarán obligados a permanecer presentes al momento de la sesión y discusión del asunto, la cual será presidida por su presidente. Podrán abstenerse de votar, únicamente, cuando tengan algún impedimento legal. Cuando uno de los magistrados no este conforme con el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas podrá formular su voto particular dentro de los siguientes cinco días, en este deberá expresar las razones que lo fundamentan.

En el supuesto en que el proyecto de resolución el Magistrado ponente aceptara las adiciones o reformas propuestas en la sesión y procederá a redactar una nueva resolución tomando los argumentos expuestos en la sesión. Cuando la mayoría de los votos sean en contra del proyecto, el proyecto de resolución deberá ser redactado por uno de los magistrados que se oponga.

En caso de ausencia de alguno de los magistrados de esta sección, ya sea por impedimento o causa de fuerza mayor, el presidente del Tribunal solicitara a cualquiera de los presidentes de las otras secciones, en materia fiscal o administrativa, que participe en la sección. A falta de estos, el presidente del Tribunal o cualquier otro magistrado de la Sala Superior deberá suplirlo.

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Tercera Sección podrá elegir su propio presidente de entre los magistrados que la integran, así como a un Secretario Adjunto; resolver el recurso de apelación en contra de las resoluciones dictadas por las Salas Regionales en materia de responsabilidades administrativas y establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de las Salas Regionales que conozcan asuntos materia de su competencia, aprobar las tesis, sus precedentes y ordenar su publicación en la Revista del Tribunal.

Salas Regionales

Se establece que, entre otros, los juicios de responsabilidades administrativas se seguirán en primera instancia ante las Salas Regionales, y como ya fue apuntado, corresponderá a la Tercera Sección de la Sala Superior su resolución en segunda instancia, vía recurso de apelación.

Tal distribución de competencias se determina en base de la gran cantidad de asuntos en materia de responsabilidades administrativas. Esto es, la substanciación de todos los juicios en materia de responsabilidades por faltas administrativas graves, que inicien a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, corresponderán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que haría imposible su resolución por parte de la Tercera Sección, si se pretende que sólo esta resuelva.

Con ello no sólo se garantiza la justicia pronta y expedita, así como el buen funcionamiento del Tribunal, sino que se cumple cabalmente con el mandato constitucional que establece que a una de las Secciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, corresponderá la resolución de los asuntos que aquí se han mencionado. En ese sentido, la Tercera Sección, resolverá los juicios de responsabilidades administrativas por faltas graves en segunda instancia.

VI. RÉGIMEN TRANSITORIO

La reforma constitucional que nos ocupa distinguió de forma precisa el régimen transitorio para su entrada en vigor, partiendo de la naturaleza jurídica de las leyes que habrán de reglamentarla.

Así, el Decreto dispone que las leyes generales y reformas del orden federal que prevé esta iniciativa, deben ser aprobadas por el Congreso de la Unión dentro del año siguiente a su publicación.

A partir de la aprobación de las leyes referidas, el Constituyente dispuso de un plazo de 180 días para que todos los órdenes de gobierno ajustaran sus leyes a lo

dispuesto por aquellas que se insertan el orden jurídico constitucional. Esto, en el entendido de que el Sistema resultará inoperante si no se otorga al propio Congreso de la Unión en ejercicio de sus atribuciones del orden federal y a las entidades federativas en el orden local, ajustar sus leyes a lo dispuesto por las leyes generales.

Tomando en consideración los plazos previstos por el propio Constituyente Permanente, y la necesidad de que todo el Sistema en su conjunto funcione en armonía y de forma sincrónica, la presente iniciativa propone un régimen transitorio diferenciado, de forma tal que el Sistema entre en vigor lo antes posible.

Se requiere prever u régimen transitorio diferenciado, de otra forma, diversas disposiciones de las leyes que así se proponen no tendrían eficacia plena, por no existir en las entidades federativas, las disposiciones legales que permitan su aplicación.

Así, se prevé lo siguiente:

- El Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el resto de los transitorio del Decreto.

- Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

- La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

- En tanto entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

- Con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley.

- Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

- A la fecha de entrada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

- La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del Decreto, sin perjuicio de la entrada en vigor de la General de Responsabilidades Administrativas.

- La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

- Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, salvo en el caso de la fiscalización de la Cuenta Pública a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la misma Ley, la cual se llevará a cabo en los términos previstos en este Decreto, a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

- Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entrarán en vigor a partir de la fiscalización la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

- Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de la entrada en vigor de la General de Responsabilidades Administrativas.

- En tanto entra en vigor la legislación secundaria a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, las referencias contenidas en el

presente Decreto a la Unidad de Medida y Actualización se entenderán hechas al salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México.

En razón de todo lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato constitucional en materia de combate a la corrupción, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y su injerencia efectiva en la vigilancia de las funciones públicas; así como los mecanismos contundentes para la prevención, control e imposición de sanciones a quienes violenten los principios que rigen el ejercicio de la función pública. Todo ello, sin dejar de tomar en cuenta que las leyes que regulan la actividad pública, deben de conciliar, bajo parámetros de racionalidad y proporcionalidad constitucional, la rendición de cuentas y la responsabilidad, con el ágil y efectivo ejercicio de la función que por mandato social y en beneficio de todas las personas, tenemos encomendados todos los servidores públicos.

Por lo expuesto y fundado anteriormente, sometemos a consideración de este Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA; Y SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, Y DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley:

I. Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la determinación de mecanismos de coordinación entre los diversos órganos que lo integran, tanto en la Federación, como en las entidades federativas los municipios y las alcaldías;

II. Determinar los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los tres órdenes de gobierno y de los Órganos Constitucionales Autónomos, federales y locales, facultados para la prevención, detección, control, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;

III. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en

materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

IV. Instituir las bases y los principios de una política nacional para la creación, difusión, promoción y fomento de una cultura de legalidad e integridad en el servicio público, sustentada en el combate a la corrupción a través de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de los recursos públicos, y

V. Establecer las reglas para la integración y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Comité: El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Comité de Participación Ciudadana: El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Dependencias: Las definidas como tales en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo a sus órganos desconcentrados, la Oficina de la Presidencia de la República, así como aquéllas que integran la Administración Pública Centralizada de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo sus respectivos órganos desconcentrados;

IV. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no

formen parte de los poderes judiciales, las empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;

V. Falta administrativa: Las faltas administrativas en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VI. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas catalogadas como graves en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

VII. Hechos de corrupción: Todo acto u omisión que las leyes federales y estatales señalen como delito competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y sus homólogas en las entidades federativas;

VIII. Informe: El informe anual que elabora el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

IX. Ley: La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;

X. Órgano interno de control: Las unidades administrativas a cargo del control interno en los Entes públicos;

XI. Registro Nacional: El Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, que contendrá toda la información que deberán registrar los Entes Públicos respecto a los Servidores Públicos a su cargo, en términos de los establecido por esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XII. Secretaría Técnica: El órgano permanente encargado de coadyuvar en el ejercicio de las funciones técnicas y administrativas que corresponden al Presidente del Comité, a cargo de un Secretario Técnico;

XIII. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Sistema: El Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la instancia de coordinación permanente entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;

XV. Sistemas Locales: Los Sistemas Anticorrupción de las entidades federativas;

XVI. Tribunales: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas regionales que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Capítulo II
De los sujetos y de la competencia de la ley

Artículo 4. Son sujetos obligados a la observancia de la presente Ley:

I. Los integrantes del Comité, así como de los comités que formen parte de los Sistemas Locales;

II. Los Servidores Públicos;

III. Los particulares que tengan vinculación con el funcionamiento del servicio público, y

IV. El Comité de Participación Ciudadana.

Lo anterior, sin perjuicio de los demás instrumentos para la eficiencia y operatividad del Sistema, así como los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas.

TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Capítulo I
Objetivo

Artículo 5. El objetivo del Sistema es la coordinación permanente entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Las entidades federativas establecerán Sistemas Locales, en cuyo diseño deberán adoptar de manera análoga los principios y bases generales establecidas en la presente Ley, con la finalidad de coordinarse efectivamente con el Sistema.

Artículo 6. Para cumplir con el objetivo a que se refiere el artículo anterior, el Sistema se integrará por los siguientes órganos:

I. El Comité;

II. El Comité de Participación Ciudadana, y

III. Los Sistemas Locales.

Capítulo II
Finalidades del Sistema

Artículo 7. Las funciones de coordinación del Sistema estarán orientadas a las siguientes finalidades:

I. De control interno de la gestión y de los recursos públicos, garantizado por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control y sus equivalentes en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en los Órganos constitucionales autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas;

II. De la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos, garantizado por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización superior de las Legislaturas de las entidades federativas, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas, mediante un Subsistema previsto en el Sistema de esta Ley;

III. De investigación de los hechos de corrupción, garantizado por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y sus homólogos en las entidades federativas, y

IV. De la impartición de justicia, garantizado por los Tribunales, al resolver los procedimientos para la imposición de sanciones a Servidores Públicos que incurran en faltas graves y particulares vinculados con la comisión de las mismas; así como por los Juzgados y Tribunales

competentes en materia penal, federales y locales, para la imposición de penas por hechos de corrupción.

TÍTULO TERCERO
DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA

Capítulo I
Integración del Comité

Artículo 8. El Comité estará integrado por:

I. El titular de la Secretaría de la Función Pública;

II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción;

IV. El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

V. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales;

VI. Un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y

VII. El presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 9. La presidencia del Comité durará un año, la cual será rotativa entre sus integrantes que tengan el carácter de ente público, en el orden que determine el propio Comité.

Artículo 10. Son atribuciones del Presidente del Comité:

I. Presidir y dar seguimiento a las sesiones del Comité;

II. Fungir como representante del Comité;

III. Convocar por medio de la Secretaria Técnica a las sesiones;

IV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema;

V. Informar a los integrantes del Comité del seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados en las sesiones;

VI. Vigilar que los objetivos del Sistema sean cumplidos;

VII. Proponer al Comité al Secretario Técnico;

VIII. Integrar, elaborar, publicar y presentar para su aprobación, el informe anual de Resultados del Comité;

IX. Proponer al Comité los lineamientos respectivos para la convocatoria y designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

X. Realizar las demás actividades para el funcionamiento del Sistema, y

XI. Aquellas que prevean las reglas de funcionamiento y organización interna del Comité.

Artículo 11. El Comité sesionará por lo menos una vez cada cuatro meses, pudiendo convocarse a sesión extraordinaria cuando alguno de sus miembros lo solicite y sea aprobado por la mayoría de los integrantes de dicho órgano.

Para que el Comité pueda sesionar es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes.

Toda determinación del Comité se tomará por mayoría de votos, excepto aquellas relativas al diseño y promoción de políticas públicas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las que deberán ser aprobadas por unanimidad de sus integrantes.

Capítulo II
Competencia del Comité

Artículo 12. Corresponde al Comité la coordinación permanente para la eficacia del Sistema, y tendrá las siguientes atribuciones:

I. Establecer mecanismos de coordinación con los Sistemas Locales, mediante la organización especializada y transversal de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en el cumplimiento de los objetivos del Sistema, para la mejora institucional;

II. Fomentar las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno, a través del diseño y promoción de políticas integrales en materia de:

a) Fiscalización y control de recursos públicos, y
b) Prevención, detección, control, sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

III. Determinar los mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que los Entes

Públicos deban de integrar al Registro Nacional, el cual contará con los siguientes apartados específicos:

a) De los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas: En su función de sistematización de información a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el Comité determinará los mecanismos para el suministro de información por parte de los Entes Públicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

b) De Servidores Públicos y Particulares sancionados en el ámbito administrativo o penal: El Sistema deberá establecer una base de datos con la información de los Servidores Públicos y los particulares que sean sancionados o inhabilitados por los órganos internos de control y los Tribunales, respecto de aquellas sanciones que hubieren causado ejecutoria en sus ámbitos respectivos.

Este apartado deberá contener las constancias de sanciones, y en su caso, las de inhabilitación o, en su caso, la mención de no existencia de estas sanciones.

La información contenida en el Registro Nacional a que se refiere esta fracción, se regirá por lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones que resulten aplicables.

IV. Elaborar el Informe que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia;

V. Emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, derivado del Informe a que se refiere el inciso anterior, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y de control interno;

VI. Elaborar propuestas relativas al contenido de las políticas y programas en materia de combate a la corrupción, en donde se fijen las bases para que las autoridades competentes puedan prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción, faltas administrativas, así como la fiscalización y control de los recursos públicos;

VII. Determinar los lineamientos de cooperación del Sistema con el Sistema Nacional de Transparencia, a efecto de cumplir con sus finalidades en la materia;

VIII. Proponer lineamientos de conducta que deberán observar los Servidores Públicos, para efectos de su incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, sin perjuicio de aquellas que emitan los Sistemas Locales;

IX. Recibir, discutir y en su caso aprobar las medidas institucionales que recomiende el Comité de Participación Ciudadana dirigidas al fortalecimiento institucional de las autoridades del Sistema para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y de control interno, como parte de su Informe;

X. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, la presente Ley, los lineamientos y demás instrumentos derivados de la misma;

XI. Emitir las reglas para su funcionamiento y organización interna;

XII. Expedir los lineamientos respectivos para la convocatoria y designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana;

XIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema, y

XIV. Todas aquellas que sean necesarias para el buen funcionamiento del Sistema.

Capítulo III
Del Informe Anual y las Recomendaciones del Comité

Artículo 13. El Comité deberá elaborar un informe anual, el cual contendrá como mínimo los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

El Presidente del Comité, por conducto del Secretario Técnico, solicitará a sus miembros toda aquella información que estime necesaria para la integración del contenido del Informe, incluidos los proyectos de recomendaciones. Asimismo, solicitará a los Órganos Internos de Control de los Entes Públicos presenten un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Los informes serán integrados al Informe del Comité como anexos.

Una vez culminada la elaboración del Informe, se someterá para su aprobación ante el Comité.

El Informe deberá ser aprobado como máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual de la presidencia del Comité.

Artículo 14. En los casos en los que del Informe se desprenda una recomendación, el Presidente del Comité instruirá al Secretario Técnico para que a más tardar a los quince días hábiles posteriores a que haya sido aprobado el Informe, la haga del conocimiento de las autoridades a las que se dirige la recomendación, para que, de ser el caso, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades soliciten las aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en relación con el contenido de la recomendación.

Artículo 15. Las recomendaciones que realice el Comité tendrán el carácter de no vinculantes, y podrán dirigirse a todas las autoridades del Estado mexicano que de acuerdo al Informe elaborado por el Comité requieran mejorar su funcionamiento institucional en beneficio de los objetivos del Sistema.

Artículo 16. Las recomendaciones a que se refiere el artículo anterior, tendrán por objeto que las autoridades destinatarias revisen la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno.

Artículo 17. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones, una vez que hayan cumplido con el requerimiento a que se refiere el artículo 16 de la presente Ley, contarán con un plazo de noventa días naturales para informar al Comité sobre la atención que brinden a las mismas, precisando las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

Capítulo IV
Del Secretario Técnico del Comité

Artículo 18. La presidencia del Comité ejercerá sus funciones técnicas y administrativas a través de un Secretario Técnico que durará en su encargo cuatro años.

Artículo 19. Corresponderá al Secretario Técnico:

I. Actuar como secretario en las sesiones del Comité;

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité;

III. Certificar los acuerdos que tomen el Comité y su Presidente, así como llevar el archivo general de los acuerdos y otros instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo;

IV. Emprender las acciones necesarias para la debida ejecución y seguimientos de los acuerdos del Comité;

V. Preparar las reuniones y emitir, por instrucción del Presidente, las convocatorias para las sesiones del Comité, así como para la elaboración de documentos que se presenten como propuestas de Acuerdo de parte este órgano;

VI. Preparar el orden del día de las sesiones del Comité;

VII. Elaborar los informes de actividades que ordene el Comité;

VIII. Administrar, controlar, vigilar y sistematizar los instrumentos y redes de información que se generen dentro del Comité;

IX. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité;

X. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos, así como respecto de las mejoras para los instrumentos de información del Sistema y los Sistemas Locales por acuerdo expreso del Presidente del Comité;

XI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los convenios generales y específicos en la materia, así como las demás disposiciones aplicables;

XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las políticas, estrategias, recomendaciones y demás acciones emitidas por el Comité;

XIII. Las demás que le encomienden el Presidente del Comité y que sean útiles para el buen funcionamiento del Sistema, y

XIV. Las demás que señalen las reglas del Comité.

TÍTULO CUARTO
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Capítulo I
Objeto

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana es la instancia del Sistema cuyo objetivo es coordinar y encauzar de manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, con las atribuciones previstas en esta Ley.

Capítulo II
Integración y Designación

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos que gocen de reconocido prestigio por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

Los comisionados del Comité de Participación Ciudadana ocuparán su cargo de manera honorífica y por un plazo que no excederá los cuatro años, y serán renovados de manera escalonada, pudiendo ser reelegidos para un periodo adicional.

Artículo 22. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que deseen ser ratificados para un segundo periodo, deberán manifestar su interés por escrito al Comité, a efecto de ser considerados en los mismos términos de los demás participantes. Dicha manifestación de interés deberá antes de que concluya el periodo de inscripción de candidaturas que haya determinado la convocatoria respectiva, a través de los lineamientos que expida el Comité.

Artículo 23. Para ser miembro del Comité de Participación Ciudadana se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles;

II. No ser servidor público;

III. No ser adherente o afiliado a algún partido político, y

IV. Haberse destacado por su contribución a las materias afines al Sistema.

Artículo 24. Los miembros del Comité de Participación Ciudadana serán elegidos por mayoría de votos del Comité, expidiendo, para tal efecto, los lineamientos respectivos para la convocatoria y designación de sus integrantes, incluido su Presidente.

Capítulo III
De la Presidencia del Comité de Participación Ciudadana

Artículo 325. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana será el representante de ésta instancia ante el Comité, sin embargo, no gozará de mayores atribuciones respecto a los demás miembros que no sean las de representación, convocatoria y voto de calidad que señala la presente Ley. El Presidente será elegido por el Comité.

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana convocará a reunión de dicha instancia cuando menos cada cuatro meses, y de forma extraordinaria, cuando así sea requerido por solicitud de la mayoría de los miembros de éste.

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación de persistir el empate, el Presidente podrá emitir un voto de calidad.

Capítulo IV
Atribuciones del Comité de Participación Ciudadana

Artículo 26. Son atribuciones del Comité de Participación Ciudadana:

I. Aprobar sus normas de carácter interno;

II. Diseñar los mecanismos para que la sociedad civil colabore con propuestas para la prevención, denuncia y detección de faltas

administrativas y hechos de corrupción, en coordinación con el Comité;

III. Proponer al Comité indicadores para la evaluación y supervisión en el desempeño del Sistema;

IV. Proponer al Comité medidas institucionales y políticas públicas para el fortalecimiento de las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos;

V. Emitir opinión respecto de los informes que formulen los integrantes del Comité a los poderes, órganos, entidades, dependencias o cualquier otro sujeto obligado al cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley;

VI. Llevar un registro de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Comité para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;

VII. Celebrar convenios de colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de faltas administrativas y hechos de corrupción;

VIII. Elaborar un informe anual de carácter público que contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus atribuciones el cual será integrado como anexo del Informe del Comité, y

IX. Fungir como vía de interlocución entre la sociedad civil y el Comité.

TÍTULO QUINTO
DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Capítulo Único
Del Sistema Nacional de Fiscalización

Artículo 27. El Sistema Nacional de Fiscalización deriva de los objetivos y fines generales del Sistema, encargado de establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los órganos de fiscalización federales, locales y municipales, con el fin de homologar criterios para la eficiente revisión del manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.

Artículo 28. Además de las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, para el ejercicio de las competencias del Comité en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, el Sistema Nacional de Fiscalización ejecutará las siguientes acciones:

I. El diseño y promoción de políticas integrales en la materia, las cuales serán sometidas a la aprobación de los miembros del Comité;

II. La instrumentación de mecanismos de coordinación entre el órgano de fiscalización federal y los órganos de fiscalización locales, en relación al ejercicio de recursos y participaciones federales, y

III. La integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias.

Artículo 29. Las autoridades de fiscalización y control interno de las entidades federativas se organizarán conforme a los lineamientos emitidos por los Sistemas Locales, los cuales deberán establecer las bases para que dichas autoridades participen y cumplan con las acciones tomadas por el Sistema Nacional de Fiscalización.

Artículo 30. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de auditoría y fiscalización.

Artículo 31. Conforme a los lineamientos que emita el Comité para la mejora institucional en materia de fiscalización, así como derivado de las reglas específicas contenidas en los Códigos de Ética y demás lineamientos de conducta, el Sistema Nacional de Fiscalización implementará medidas para el fortalecimiento y profesionalización del personal de los órganos de fiscalización.

Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización fomentará el establecimiento de un programa de capacitación coordinado, que permita incrementar la calidad profesional del personal auditor y mejorar los resultados de la auditoría y fiscalización.

Artículo 32. El Sistema Nacional de Fiscalización establecerá comunicación con el Comité, con el fin de proporcionar la información necesaria para conformar los sistemas de información a que se refiere la presente Ley.

Artículo 33. Son integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización:

I. La Auditoría Superior de la Federación;

II. La Secretaría de la Función Pública;

III. Las entidades de fiscalización superior locales, y

IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

Artículo 34. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

I. Identificar áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera coordinada;

II. Revisar los ordenamientos legales que regulan su actuación, para que, en su caso, realicen propuestas al Comité de mejora a los mismos y que permita un mayor impacto en el combate a la corrupción, y

III. Elaborar y adoptar un marco de referencia que contenga criterios generales para la prevención, detección, disuasión y aplicación en su caso, de sanciones que correspondan a hechos de corrupción e incorporar las mejores prácticas para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en la gestión gubernamental.

Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes celebrarán reuniones ordinarias cada seis meses, y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y demás legislación aplicable. Corresponderá al Sistema emitir las normas que regulen su funcionamiento.

El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un comité rector conformado por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete miembros rotatorios de entre las instituciones referidas en las fracciones III y IV del artículo 33 de esta Ley, renovables cada dos años y que serán elegidos por

consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación.

El comité rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la Función Pública, o por los representantes que de manera respectiva designen para estos efectos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS GRAVES

LIBRO PRIMERO
DISPOSICIONES SUSTANTIVAS

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Objeto y sujetos de la Ley

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República en materia de responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos y particulares vinculados con faltas administrativas graves, de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Son objeto de la presente Ley:

I. Establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los Servidores Públicos;

II. Establecer las faltas administrativas, incluyendo aquéllas que son consideradas graves, las sanciones aplicables a las mismas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto, y

III. Determinar los mecanismos para la prevención, corrección e investigación de responsabilidades administrativas.

Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Acción de responsabilidad: La potestad jurídica de las Secretarías o de los Órganos internos de control, de la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades de fiscalización de las entidades federativas, así como de las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, para solicitar el inicio de la actividad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas, en materia de faltas administrativas graves;

II. Autoridad Investigadora: Las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado;

III. Conflicto de Interés: La afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

V. Denunciante: La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las Autoridades Investigadoras a que se refiere la presente Ley, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas, en términos de los artículos 59 y 61 de esta Ley;

VI. Dependencias: Las definidas como tales en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo a sus órganos desconcentrados, la Oficina de la Presidencia de la República, así como aquéllas que integran la Administración Pública Centralizada de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo sus respectivos órganos desconcentrados;

VII. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las Empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes de gobierno;

VIII. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sus correlativas en las entidades federativas y municipios;

IX. Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas: Los órganos a los que hacen referencian el sexto párrafo de la fracción

segunda del artículo 116 y el sexto párrafo de la fracción II del Apartado A del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Expediente de presunta responsabilidad administrativa: El expediente derivado de la investigación que las Autoridades Investigadoras realizan en sede administrativa, al tener conocimiento de un acto u omisión posiblemente constitutivo de faltas administrativas;

XI. Falta administrativa: Las faltas administrativas en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde a las Secretarías y a los Órganos internos de control;

XII. Falta administrativa grave: Las faltas administrativas catalogadas como graves en los términos de la presente Ley, cuya sanción corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus homólogos en las entidades federativas;

XIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en el que las Autoridades Investigadoras describen los hechos relacionados con alguna de las faltas graves señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada con las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor Público y/o particular vinculado con faltas administrativas graves en su comisión;

XIV. Magistrado: El Titular o integrante de la Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o de las salas regionales que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas;

XV. Órganos constitucionales autónomos: .Organismos a los que la Constitución otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las Constituciones de las entidades federativas;

XVI. Órganos internos de control: Las unidades administrativas a cargo del control interno en los Entes públicos;

XVII. Registro: El Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, que contendrá toda la información que deben registrar los Entes públicos respecto a los Servidores Públicos a su cargo, en términos de lo establecido por esta Ley y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

XVIII. Secretaría: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal;

XIX. Secretarías: La Secretaría de la Función Pública en el Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas;

XX. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los Entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

XXI. Sistema Nacional Anticorrupción: La instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, y

XXII. Tribunal: La Sección competente en materia de responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas regionales que, en su caso, se establezcan en dicha materia, así como sus homólogos en las entidades federativas.

Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:

I. Los Servidores Públicos;

II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en los supuestos a que se refiere la presente Ley, y

III. Los particulares vinculados con faltas administrativas graves.

Artículo 5. No se considerarán Servidores Públicos los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las Empresas productivas del Estado.

Tampoco tendrán el carácter de Servidores Públicos aquellos que así lo establezcan las leyes federales, así como los consejeros independientes que, en su caso, integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, conforme a lo establecido en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, quienes podrán ser contratados como consejeros, siempre y cuando:

I. No tengan una relación laboral con las entidades;

II. No tengan un empleo, cargo o comisión en cualquier otro Ente público, ni en entes privados con los que tenga Conflicto de Interés;

III. No pertenezcan simultáneamente a más de cuatro juntas directivas u órganos de administración de distintas personas morales, públicas o

privadas, con fines de lucro, incluido el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;

IV. El monto de los honorarios que se cubran por su participación en los órganos de gobierno no sean superiores a los que se paguen en empresas que realicen actividades similares en la República Mexicana, y

V. Cuenten, al menos, con los mismos deberes de diligencia y lealtad aplicables a los consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. En todo caso, serán responsables por los daños y perjuicios que llegaren a causar a la entidad, derivados de los actos, hechos u omisiones en que incurran, incluyendo el incumplimiento a dichos deberes.

Capítulo II
Principios que rigen la actuación de los Servidores Públicos

Artículo 6. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones,

prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

IV. Dar a las personas en general el mismo trato, por lo que no concederán privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva;

V. Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades, y

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Capítulo III
Autoridades competentes para aplicar la presente Ley

Artículo 7. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley:

I. Las Secretarías;

II. Los Órganos internos de control;

III. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas;

IV. Los Tribunales;

V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme al régimen establecido en los artículos 94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente; y los Poderes Judiciales de los Estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus Constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes. Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las Entidades de fiscalización de las entidades federativas, en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con el manejo, custodia y aplicación de recursos públicos, las cuales serán investigadas y sancionadas en términos de la presente Ley, y

VI. Las unidades de responsabilidades de las empresas productivas del Estado, de conformidad con las leyes que las regulan. Para tal efecto, contarán exclusivamente con las siguientes atribuciones:

a. Las que esta Ley prevé para las Autoridades Investigadoras;

b. Las necesarias para imponer sanciones por faltas administrativas no graves, y

c. Las relacionadas con el Registro, en los términos que establece el Capítulo I, II, III y IV, del Título Segundo del Libro Primero de esta Ley.

Artículo 8. Las Secretarías y los Órganos internos de control tendrán a su cargo la investigación y calificación de las faltas administrativas de los Servidores Públicos, así como la investigación de las faltas administrativas graves en las que estén involucrados los particulares.

Tratándose de faltas administrativas que sean calificadas como no graves en la etapa de investigación, estos órganos serán competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta Ley.

En el supuesto de que las Secretarías o los Órganos internos de control determinen en su calificación la existencia de hechos que la Ley señale como faltas administrativas graves, así como la presunta responsabilidad del infractor, deberán presentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante los Tribunales competentes para que inicien el juicio de responsabilidades administrativas correspondiente.

Además de las atribuciones señaladas con anterioridad, los Órganos internos de control serán competentes para:

I. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, en los términos establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción;

II. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales, así como de recursos públicos locales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y

III. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o en su caso ante sus homólogos en el ámbito local.

Artículo 9. La Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para promover la Acción de responsabilidad cuando, derivado de sus auditorías, detecten daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten posibles responsabilidades administrativas, que no involucren a la mencionada en el párrafo anterior, darán cuenta al respecto a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.

En los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma la presunta comisión de delitos, la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.

Artículo 10. Los Tribunales además de las facultades y atribuciones conferidas en su legislación orgánica y demás normatividad aplicable, estarán facultados para resolver la imposición de sanciones a los Servidores Públicos por las responsabilidades administrativas que esta Ley determina como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, conforme a los procedimientos previstos en esta Ley.

Artículo 11. Cuando las Autoridades Investigadoras determinen que de los actos u omisiones investigados se desprenden tanto la comisión de faltas graves como de faltas no graves por el mismo Servidor Público, promoverán la Acción de

responsabilidad ante el Tribunal para que éste imponga la sanción que corresponda a la falta grave. Si el Tribunal determina que se cometieron tanto faltas administrativas graves, como no graves, al graduar la sanción que proceda tomará en cuenta la comisión de las faltas administrativas no graves.

Artículo 12. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 6 de esta Ley turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de esta ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable, por actos u omisiones que no estén vinculados con faltas administrativas graves.

TÍTULO SEGUNDO
MECANISMOS DE PREVENCIÓN

Capítulo I
Registro Nacional Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses

Artículo 13. La Secretaría, en atención a las bases de coordinación que emita el Sistema Nacional Anticorrupción llevará el Registro, a través del sistema electrónico que al efecto establezca y opere. El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción expedirá, de conformidad con lo previsto en la Ley General que establece las Bases del Sistema Nacional Anticorrupción, las bases y principios para la operación del Registro.

En el Registro se inscribirán los datos curriculares de los Servidores Públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial y de intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; su declaración de intereses, la información relativa a su situación patrimonial en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, así como las sanciones firmes impuestas a aquellos. Asimismo, el Registro contendrá las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los Servidores Públicos, así como la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las Autoridades Investigadoras o el Tribunal, en términos de los artículos 48 y 51 de esta Ley.

La publicación de la información relativa a la situación patrimonial y de intereses se hará en términos de lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los Entes públicos, previo al nombramiento, designación o contratación de quienes pretendan ingresar al servicio público, consultarán el Registro, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones de dichas personas.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos, podrá ser solicitada y utilizada por el Ministerio Público, los Tribunales o las autoridades judiciales en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, el Servidor Público interesado o bien, cuando las Secretarías, o las Autoridades Investigadoras lo requieran con motivo de la sustanciación de procedimientos administrativos de responsabilidades.

Artículo 14. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los Entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el Registro la información correspondiente a los Servidores Públicos a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de Conflicto de Interés declarados, llevarán el seguimiento de la evolución y la

verificación de la situación patrimonial de dichos Servidores Públicos, en los términos de la presente Ley.

Capítulo II
De los sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de Intereses

Artículo 15. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, a través del Registro, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley.

Capítulo III
Plazos

Artículo 16. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

I. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:

   a) Ingreso al servicio público por primera vez;
   b) Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;

II. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y

III. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

En el caso de cambio de Dependencia o Entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y no será necesario presentar la declaración de conclusión.

La Secretaría o los Órganos internos de control, según corresponda, podrán solicitar a los Servidores Públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a presentarla o, en su caso, de la constancia de percepciones y retenciones que les hubieren emitido alguno de los Entes públicos la cual deberá ser remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud.

Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I de este artículo, no se hubiese presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, se iniciará inmediatamente la investigación por presunta responsabilidad de faltas administrativas correspondiente y se amonestará públicamente al presunto infractor por dicha omisión, sin perjuicio de las sanciones que deriven de la investigación correspondiente.

En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la fecha en que hubiere sido amonestado al Servidor Público, las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos, debiendo notificar lo anterior al titular de los Entes públicos correspondientes para separar del cargo al Servidor Público. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la fracción II de este artículo.

El incumplimiento por no separar del cargo al Servidor Público por parte del titular de alguno de los Entes públicos, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley.

Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción III de este artículo, se inhabilitará al infractor de tres meses a un año.

Para la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento administrativo sancionador por faltas administrativas previsto en el Título Segundo del Libro Segundo de esta Ley.

Capítulo IV
Formatos y mecanismos de registro

Artículo 17. Las declaraciones de situación patrimonial deberán ser presentadas a través de medios electrónicos, empleándose medios de identificación electrónica. En el caso de municipios que no cuenten con las tecnologías de la información y comunicación necesarias para cumplir lo anterior, podrán emplearse formatos impresos, siendo responsabilidad de los Órganos internos de control y las Secretarías verificar que dichos formatos sean digitalizados e incluidos en el Registro.

Las Secretarías tendrán a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los Servidores Públicos, y llevarán el control de dichos medios.

Asimismo la Secretaría emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Servidores Públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar.

Para los efectos de los procedimientos penales que se deriven de la aplicación de las disposiciones del presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados como medios de prueba, en los cuales se

contenga la información que obre en sus archivos documentales y electrónicos sobre las declaraciones de situación patrimonial de los Servidores Públicos.

Las Secretarías expedirán, dentro del ámbito de sus competencias, las normas necesarias para determinar cuáles de sus Servidores Públicos tendrán acceso a las declaraciones de situación patrimonial y su contenido. Dichos Servidores Públicos deberán resguardar la información a la que accedan observando lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Artículo 18. En la declaración inicial y de conclusión del encargo se manifestarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

En las declaraciones de modificación patrimonial se manifestarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las características que deba tener la declaración.

Artículo 19. Las Secretarías y los Órganos Internos de Control, estarán facultadas para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos.

Artículo 20. En los casos en que la declaración de situación patrimonial del Servidor Público refleje un incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como Servidor Público, las Secretarías y los Órganos Internos de Control inmediatamente solicitarán sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento. De no justificarse la procedencia de dicho enriquecimiento, las Secretarías y los Órganos Internos de Control procederá a integrar el Expediente correspondiente para darle trámite conforme a lo

establecido en esta Ley, y formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Los Servidores Públicos de los centros públicos de investigación, instituciones de educación y las entidades de la Administración Pública Federal a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán realizar actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, y recibir beneficios, en los términos que para ello establezcan los órganos de gobierno de dichos centros, instituciones y entidades, con la previa opinión de la Secretaría, sin que dichos beneficios se consideren como tales para efectos de lo contenido en la fracción I, del artículo 42 de esta Ley.

Las actividades de vinculación a las que hace referencia el párrafo anterior, además de las previstas en el citado artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, incluirán la participación de investigación científica y desarrollo tecnológico con terceros; transferencia de conocimiento; licenciamientos; participación como socios accionistas de empresas privadas de base tecnológica o como colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro derivadas de cualquier figura de propiedad intelectual perteneciente a la propia institución, centro o entidad, según corresponda. Dichos servidores públicos incurrirán en conflicto de intereses cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto en contravención a las disposiciones aplicables en la Institución.

Artículo 21. Los Servidores Públicos estarán obligados a proporcionar a las Secretarías y los Órganos internos de control, la información que se requiera para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos.

Sólo los titulares de las Secretarías o los servidores públicos en quien deleguen esta facultad podrán solicitar a las autoridades competentes, en los términos de

las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal, o la relacionada con operaciones de depósito, ahorro, administración o inversión de recursos monetarios.

Artículo 22. Para los efectos de la presente Ley y de la legislación penal, se computarán entre los bienes que adquieran los Servidores Públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge, concubina o concubinario y sus dependientes económicos directos, salvo que se acredite que éstos los obtuvieron por sí mismos.

Artículo 23. En caso de que los Servidores Públicos, sin haberlo solicitado, reciban de un particular de manera gratuita la transmisión de la propiedad o el ofrecimiento para el uso de cualquier bien, con motivo del ejercicio de sus funciones, deberán informarlo inmediatamente a las Secretarías o al Órgano Interno de control. En el caso de recepción de bienes, los Servidores Públicos procederán a poner los mismos a disposición de las autoridades competentes en materia de administración y enajenación de bienes públicos.

Artículo 24. Las Secretarías y los Órganos internos de control, según corresponda, tendrán la potestad de formular la denuncia al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la verificación de la evolución de su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento notoriamente desproporcionado de éste, representado por sus bienes, o de aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su empleo, cargo o comisión.

Artículo 25. Cuando las Autoridades Investigadoras, en el ámbito de sus competencias, llegaren a formular denuncias ante el Ministerio Público correspondiente, éstas serán coadyuvantes del mismo en el procedimiento penal respectivo.

Capítulo V
De los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas

Sección Primera
De los Servidores Públicos que participan en Contrataciones Públicas

Artículo 26. El Registro incluirá, en un apartado específico, los nombres y adscripción de los Servidores Públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente.

Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por la Secretaría.

La información de los Servidores Públicos a que se refiere el párrafo anterior deberá ser puesta a disposición de todo público a través de un portal de internet.

Sección Segunda
Del Protocolo de Actuación en contrataciones

Artículo 27. La Secretaría expedirá el Protocolo de Actuación que las Secretarías y los Órganos de internos de control implementarán.

Dicho Protocolo de Actuación deberá ser cumplido por los Servidores Públicos inscritos en el apartado específico del Registro a que se refiere el presente Capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles Conflictos de Interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.

El apartado específico del Registro a que se refiere el presente Capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los Entes públicos.

Artículo 28. Las Secretarías o los Órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías.

Sección Tercera
De la Declaración Intereses

Artículo 29. Se encuentran obligados a presentar Declaración de Intereses todos los Servidores Públicos que deban presentar la Declaración Patrimonial en términos de esta Ley.

Al efecto, las Secretarías y los Órganos internos de control se encargarán de que las declaraciones sean integradas al Registro.

Artículo 30. Para efectos del artículo anterior habrá Conflicto de Interés en los casos a los que se refiere la fracción III del artículo 3 de esta Ley.

Artículo 31. La Secretaría expedirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los Servidores Públicos deberán presentar la Declaración de Intereses, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que será obligatorio declarar y la periodicidad con la que las declaraciones deberán actualizarse.

Artículo 32. La Declaración de Intereses deberá presentarse en los plazos a que se refiere el artículo 16 de esta Ley y de la misma manera le serán aplicables los procedimientos establecidos en dicho artículo para el incumplimiento de dichos

plazos. También deberá presentar la declaración en cualquier momento en que el Servidor Público, en el ejercicio de sus funciones, considere que se puede actualizar un posible Conflicto de Interés.

Capítulo VI
De los Mecanismos Generales de Prevención

Artículo 33. Para prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, las Secretarías y los Órganos internos de control, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones específicas deberán observar los Servidores Públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

En la implementación de las acciones referidas, los Órganos internos de control deberán atender los lineamientos generales que emitan las Secretarías.

Artículo 34. Los Servidores Públicos deberán observar el Código de Ética que al efecto sea emitido por las Secretarías o los Órganos internos de control, conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.

El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los Servidores Públicos de la Dependencia o Entidad de que se trate.

Artículo 35. Los Órganos internos de control deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan implementado conforme a este Capítulo y proponer, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la Secretaría en los términos que ésta establezca.

Artículo 36. Los Órganos internos de control deberán valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a las autoridades, con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento institucional en su desempeño y control interno y con ello la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. Deberán informar a dicho órgano de la atención que se dé a éstas y, en su caso, sus avances y resultados.

Artículo 37. Los Entes públicos deberán implementar las políticas de coordinación que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar a dicho órgano de los avances y resultados que estos tengan, a través de sus Órganos internos de control.

Artículo 38. Para la selección de los integrantes de los Órganos internos de control se deberán observar, además de los requisitos establecidos para su nombramiento, un sistema que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes para su adecuada profesionalización atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos.

Artículo 39. Las Secretarías podrán suscribir convenios de colaboración con las personas físicas o morales que participen en contrataciones públicas, así como con las cámaras empresariales u organizaciones industriales o de comercio, con la finalidad de orientarlas en el establecimiento de mecanismos de autorregulación que incluyan la instrumentación de controles internos y un programa de integridad que les permita asegurar el desarrollo de una cultura ética en su organización.

Artículo 40. En el diseño y supervisión de los mecanismos a que se refiere el artículo anterior, se considerarán las mejores prácticas internacionales sobre

controles, ética e integridad en los negocios, además de incluir medidas que inhiban la práctica de conductas irregulares, que orienten a los socios, directivos y empleados de las empresas sobre el cumplimiento del programa de integridad y que contengan herramientas de denuncia y de protección a Denunciantes.

TÍTULO TERCERO

DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y ACTOS DE PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES

Capítulo I
De las faltas administrativas de los Servidores Públicos

Artículo 41. Incurrirá en falta administrativa el Servidor Público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere el artículo 34 de esta Ley;

II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir, que puedan constituir faltas administrativas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en términos del artículo 59 de la Ley;

III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.

En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá denunciar esta circunstancia en términos del artículo 59 de la Ley;

IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de Intereses, en los términos establecidos por esta Ley;

V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;

VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo, y

VII. Cerciorarse, antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés. Las manifestaciones respectivas deberán constar por escrito y hacerse del conocimiento del Órgano interno de control, previo a la celebración del acto en cuestión. En caso de que el contratista sea persona moral, dichas manifestaciones deberán presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad.

Para efectos de esta Ley se entiende que un socio o accionista ejerce control sobre un sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer

el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

Capítulo II
De las Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos

Artículo 42. Todo Servidor Público deberá abstenerse de llevar a cabo las siguientes conductas que se consideran faltas administrativas graves:

I. Obtener o pretender obtener a través de cualquier acción u omisión, por sí o a través de terceros, con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como Servidor Público, consistente en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

II. Autorizar, solicitar o realizar actos para el uso, asignación, desvío o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere la fracción I de este artículo, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables;

III. Causar daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, como consecuencia de la realización de un acto u omisión que viole una disposición jurídica;

IV. Adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción I de este artículo, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.

Se considera información privilegiada la que obtenga el Servidor Público con motivo de sus funciones y que no sea del dominio público.

Esta restricción será aplicable inclusive cuando el Servidor Público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, hasta por un plazo de un año;

V. Ejercer atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere la fracción I de este artículo, para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público;

VI. Intervenir, por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el Servidor Público informará tal situación al jefe inmediato, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al Servidor Público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos;

VII. Autorizar cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los Entes Públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización éstas se encuentren inscritas en el Registro;

VIII. Incurrir en falta de veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio que no sea explicable o justificable o un Conflicto de Interés;

IX. Utilizar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro Servidor Público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción I de este artículo;

X. Cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento, y

XI. Tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de

defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcionar información falsa, así como no dar respuesta alguna a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 43. Para el caso de los Servidores Públicos responsables de la investigación de las faltas administrativas, además de las hipótesis previstas en el artículo anterior, incurrirán en falta administrativa grave cuando:

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de cualquier conducta que pudiera constituir una falta administrativa grave o un acto de corrupción, y

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley.

Capítulo III
De los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves

Artículo 44. Para efectos de la presente Ley incurren en actos vinculados con faltas administrativas graves, los particulares que en el ámbito federal o local:

I. Prometan, ofrezcan o entreguen cualquier beneficio indebido a que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro Servidor Público, o

abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido;

II. Realicen actos u omisiones para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, no obstante que por disposición de ley o resolución de autoridad competente se encuentren impedidos o inhabilitados para ello;

III. Intervengan en nombre propio pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos administrativos federales, locales o municipales, con la finalidad de que ésta o éstas últimas obtengan, total o parcialmente, los beneficios derivados de dichos procedimientos. Ambos particulares serán sancionados en términos de esta Ley;

IV. Usen su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier Servidor Público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido;

V. Presenten documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el propósito de lograr una autorización, un beneficio o ventaja;

VI. Ejecuten con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Las faltas referidas en la presente fracción resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a un Estado Extranjero la información que requiera para la investigación y sustanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos Estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de esta fracción se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un Estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana;

VII. Realicen actos mediante los cuales se apropien, hagan uso indebido o desvíen del objeto para el que estén previstos los recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, cuando por cualquier circunstancia manejen, reciban, administren o tengan acceso a estos recursos.

También se sancionará la omisión de rendir cuentas que comprueben el destino que se otorgó a dichos recursos;

VIII. Acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes Públicos, y

IX. Contraten a quien haya sido Servidor Público durante el año previo, que posea información privilegiada que directamente haya adquirido con motivo de su empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, y directamente permita que el contratante se beneficie en el mercado o se coloque en situación ventajosa frente a sus competidores. En este supuesto también será sancionado el ex Servidor Público contratado.

Capítulo IV
De la prescripción de la responsabilidad administrativa

Artículo 45. Para el caso de faltas administrativas, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.

Cuando se trate de faltas consideradas como graves, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior.

La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley. Si se dejare de actuar en ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el último acto procedimental o realizado la última promoción. Los plazos a que se refiere el presente artículo y los subsecuentes se computarán en días hábiles.

En ningún caso, en los procedimientos podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará la caducidad de la instancia.

TÍTULO CUARTO
SANCIONES

Capítulo I
Sanciones por Faltas Administrativas

Artículo 46. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:

I. Amonestación pública o privada;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

Las Secretarías y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la trascendencia de la falta administrativa.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

Artículo 47. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el Servidor Público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos, la antigüedad en el servicio;

II. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones.

En caso de reincidencia de faltas administrativas no graves, la sanción que imponga el Órgano interno de control no podrá ser igual o menor a la impuesta con anterioridad.

Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y hubiere causado ejecutoria, cometa otra del mismo tipo.

Artículo 48. Corresponde a las Secretarías o a los Órganos internos de control imponer las sanciones por faltas administrativas, y ejecutarlas. Los Órganos internos de control podrán abstenerse de imponer la sanción que corresponda siempre que el Servidor Público:

I. No haya sido sancionado previamente por la misma falta administrativa, y

II. No haya actuado de forma dolosa.

Capítulo II
Sanciones para los Servidores Públicos por Faltas Graves

Artículo 49. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores Públicos, derivado de los procedimientos por faltas administrativas graves, consistirán en:

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

A juicio del resolutor, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la falta grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.

Artículo 50. En el caso de que la falta administrativa cometida por el Servidor Público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 42, fracción I de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor

o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la falta administrativa a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos. En dichos casos, el Servidor Público estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.

En el caso de faltas administrativas que provoquen daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos, por negligencia o culpa del Servidor Público, pero sin que éste ni las personas a las que se refiere la fracción I, del artículo 42 de esta Ley hayan obtenido un beneficio económico, deberán imponerse alguna o algunas de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, dependiendo de la gravedad de los daños y perjuicios, sin incluir la indemnización. Los daños y perjuicios ocasionados serán resarcidos por quien, sin tener derecho a dichos recursos los haya recibido o, en su caso, a través de las cauciones o seguros correspondientes.

Artículo 51. Para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 49 de esta Ley se deberán considerar los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el Servidor Público cuando incurrió en la falta, así como los siguientes:

I. Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

II. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;

III. Las circunstancias socioeconómicas del Servidor Público;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio derivado de la infracción que haya obtenido el responsable.

El Tribunal podrá abstenerse de imponer la sanción que corresponda cuando, además de cumplir con lo previsto en las fracciones del artículo 48 de esta Ley, el Servidor Público no haya obtenido algún beneficio para él ni para las personas a las que se refiere la fracción I del artículo 42 de esta Ley, y el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes públicos no exceda de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Los daños y perjuicios ocasionados serán resarcidos por quien, sin tener derecho a dichos recursos los haya recibido o, en su caso, a través de las cauciones o seguros correspondientes. La abstención en la imposición de la sanción quedará condicionada a que se cubran los daños y perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de los Entes públicos; en caso de no cubrirse se estará a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de esta Ley.

Capítulo III
Sanciones a particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves

Artículo 52. Las sanciones administrativas que deban imponerse a los particulares por actos vinculados a las faltas administrativas graves a que se refiere la presente Ley, consistirán en:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos o, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de cien hasta ciento cincuenta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 8 años;

c) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

II. Tratándose de personas morales:

a) Sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos, en caso de no haberlos obtenido, por el equivalente a la cantidad de mil hasta un millón quinientas mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;

b) Inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en el ámbito federal, local o municipal según corresponda, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de 8 años;

c) La suspensión de actividades, por un periodo que no será menor de tres meses ni mayor de tres años, la cual consistirá en detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales o de negocios por estar vinculados a faltas administrativas graves previstas en esta Ley;

d) Disolución de la sociedad respectiva, la cual consistirá en la pérdida de la capacidad legal de una persona moral, para el cumplimiento del fin por el que fue creada por orden jurisdiccional

y como consecuencia de la comisión, vinculación, participación y relación con una falta administrativa grave prevista en esta Ley;

e) Indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos.

Las sanciones previstas en los incisos c) y d) de esta fracción, sólo serán procedentes cuando la sociedad obtenga un beneficio económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves

A juicio del resolutor, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre que sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa.

Artículo 53. Para la imposición de las sanciones a los particulares por actos vinculados con faltas administrativas graves se deberán considerar los siguientes elementos:

I. El grado de participación del o los sujetos en la falta administrativa;

II. La reincidencia en la comisión de las infracciones previstas en esta Ley;

III. La capacidad económica del infractor;

IV. El daño o puesta en peligro del adecuado desarrollo de la actividad administrativa del Estado, y

V. El monto del beneficio, lucro, o del daño o perjuicio derivado de la infracción, cuando éstos se hubieren causado.

Artículo 54. El fincamiento de responsabilidad administrativa a particulares vinculados con faltas administrativas graves se determinará de manera autónoma e independiente de la participación de un Servidor Público.

Las personas morales serán sancionadas cuando los actos atribuidos estén vinculados con faltas administrativas graves, independientemente de la responsabilidad a la que sean sujetos a este tipo de procedimientos las personas físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral o en beneficio de ella.

Capítulo IV
Disposiciones comunes para la imposición de sanciones por faltas graves

Artículo 55. Para la imposición de las sanciones por faltas graves, tanto las cometidas por Servidores Públicos como por particulares vinculados a ellas, se observarán las siguientes reglas:

I. La suspensión o la destitución del puesto de los Servidores Públicos, serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el titular o Servidor Público competente del Ente público correspondiente;

II. La inhabilitación del Servidor Público para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada, y

III. Las sanciones económicas serán impuestas por el Tribunal y ejecutadas por el Servicio de Administración Tributaria en términos del Código Fiscal de la Federación o por la autoridad competente de la entidad federativa correspondiente.

Artículo 56. En los casos de sanción económica, el Tribunal ordenará a los responsables el pago que corresponda y, en el caso de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes públicos, adicionalmente el pago de las indemnizaciones correspondientes. Dichas sanciones económicas tendrán el carácter de créditos fiscales.

Las cantidades que se cobren con motivo de las indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios formarán parte de la Hacienda Pública o del patrimonio de los Entes públicos afectados.

Artículo 57. El monto de la sanción económica impuesta se actualizará, para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación, en tratándose de contribuciones y aprovechamientos, o de la legislación aplicable en el ámbito local.

Artículo 58. Cuando el Servidor Público o los particulares presuntamente responsables de estar vinculados con una falta administrativa grave, desaparezcan o exista riesgo inminente de que oculten, enajenen o dilapiden sus bienes a juicio del Tribunal, se solicitará al Servicio de Administración Tributaria o la autoridad competente en el ámbito local, en cualquier fase del procedimiento proceda al embargo precautorio de sus bienes, a fin de garantizar el cobro de las sanciones económicas que llegaren a imponerse con motivo de la infracción cometida. Impuesta la sanción económica, el embargo precautorio se convertirá en definitivo y se procederá en los términos de la legislación aplicable.

LIBRO SEGUNDO
DISPOSICIONES ADJETIVAS

TÍTULO PRIMERO
DE LA INVESTIGACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS GRAVES Y NO GRAVES

Capítulo I
Inicio de la investigación

Artículo 59. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas de Servidores Públicos o de particulares, iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.

Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las Autoridades Investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

Artículo 60. Las Autoridades Investigadoras establecerán áreas de fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar denuncias por presuntas faltas administrativas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley.

Artículo 61. La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad del Servidor Público o del particular vinculado con faltas administrativas graves, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades Investigadoras.

Capítulo II
De la Investigación

Artículo 62. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades Investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias previstas en el capítulo anterior.

Artículo 63. Las Autoridades Investigadoras tendrán acceso a la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquélla que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de infracciones a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes.

Artículo 64. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados, les formulen las Autoridades Investigadoras.

La Autoridad Investigadora otorgará un plazo de cinco hasta quince días hábiles para la atención de sus requerimientos, sin perjuicio de poder ampliarlo por causas debidamente justificadas, cuando así lo soliciten los interesados. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente.

Los Entes Públicos a los que se les formule requerimiento de información, tendrán la obligación de proporcionarla en el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de que la notificación surta sus efectos.

Cuando los Entes Públicos, derivado de la complejidad de la información solicitada, requieran de un plazo mayor para su atención, deberán solicitar la prórroga debidamente justificada ante la Autoridad Investigadora; de concederse la prórroga en los términos solicitados, el plazo que se otorgue será improrrogable. Esta ampliación no podrá exceder en ningún caso la mitad del plazo previsto originalmente

Además de las atribuciones a las que se refiere la presente Ley, durante la investigación las Autoridades Investigadoras podrán llevar a cabo las diligencias que para mejor proveer se estimen necesarias, incluyendo la solicitud de

información o documentación a cualquier persona física o moral con el objeto de comprobar las presuntas infracciones.

Artículo 65. La Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, promoverán ante los Tribunales, según su competencia, las Acciones de responsabilidad correspondientes cuando derivado de sus auditorías determinen que se han ocasionado daños y/o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.

En caso de que tengan conocimiento de la presunta comisión de faltas administrativas distintas a las señaladas en el párrafo anterior, darán vista a las Secretarías o a los Órganos Internos de Control que correspondan, a efecto de que procedan a realizar la investigación correspondiente.

Capítulo III
De la Calificación de faltas graves y no graves

Artículo 66. Concluidas las diligencias de investigación, las Autoridades Investigadoras procederán al análisis de la información recabada y hechos, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificar la presunta falta administrativa y determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo sancionador, ya sea ante las Secretarías o los Órganos internos de control o el Juicio de Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal, según corresponda.

Para el caso de que la autoridad investigadora califique la conducta como grave, se hará del conocimiento del Tribunal, en un término no mayor a treinta días, mediante el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para el juicio previsto en el Título Tercero del Libro Segundo de la presente Ley, y en los demás

casos, las Secretarías o los Órganos internos de control iniciarán el procedimiento correspondiente.

Si no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar. Dicha determinación, en su caso, se notificará a los Servidores Públicos y particulares sujetos a la investigación, únicamente para su conocimiento, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.

Artículo 67. Las Secretarías o los Órganos internos de control, según corresponda, se abstendrán de iniciar el procedimiento administrativo previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un Servidor Público, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes Públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis:

I. Que por una sola vez, por un mismo acto u omisión y en un período de un año, la actuación del Servidor Público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o

II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el Servidor Público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron.

Capítulo IV
Impugnación de la calificación de faltas no graves

Artículo 68. La calificación de faltas administrativas no graves que realicen las Secretarías o los Órganos internos de control, será notificada al Denunciante. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado pueda acceder al Expediente de Presunta Responsabilidad administrativa.

La calificación podrá ser impugnada, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento sancionador hasta en tanto este sea resuelto.

Artículo 69. El plazo para la presentación del recurso será de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución impugnada.

Artículo 70. El escrito de impugnación deberá presentarse ante el titular del Órgano interno de control o, en su caso, ante las Secretarías, quienes deberán resolverlo en un plazo no mayor a treinta días hábiles.

Artículo 71. Al recibir el recurso de inconformidad, las Secretarías o los Órganos internos de control lo tendrán por interpuesto y se dará vista al presunto infractor y al Denunciante, para que en un término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga. En el caso de reunir los requisitos previstos en el artículo 73, la autoridad debe admitirlo o, en su caso, requerir al promovente para que lo aclare, concediéndole al efecto un término de cinco días hábiles.

Artículo 72. La sustanciación del recurso deberá hacerse tomando en consideración la investigación que conste en el Expediente de Presunta Responsabilidad administrativa y los elementos que aporten el Denunciante o el presunto infractor.

Artículo 73. El escrito por el cual se interponga el recurso de inconformidad deberá contener los siguientes requisitos:

I. Nombre y domicilio del recurrente;

II. Los hechos objeto del recurso;

III. La fecha en que se le notificó la calificación en términos de este capítulo, y

IV. Las razones y fundamentos, por los que a juicio del recurrente, la calificación del acto es indebida.

Asimismo, el recurrente acompañará su escrito con los documentos que estime pertinentes para argumentar las razones y fundamentos mencionados.

Artículo 74. La resolución del recurso consistirá en:

I. Confirmar la calificación, o

II. Dejar sin efectos la calificación, para lo cual la autoridad resolutora del recurso estará facultada para recalificar el acto u omisión administrativa.

TÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR POR FALTAS ADMINISTRATIVAS ANTE LAS SECRETARÍAS Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

Capítulo I
Procedimiento sancionador por faltas administrativas

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas que se consideren faltas no graves en los términos de la Ley, las Secretarías o los Órganos internos

de control impondrán las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, notificándole que deberá comparecer personalmente a rendir su declaración en torno a los actos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se deberá acompañar el Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa para efecto de que el Servidor Público prepare su defensa.

   En la notificación deberá expresarse el lugar, día y hora en que tendrá verificativo la audiencia, así como los términos y criterios según los cuales se llevó a cabo la calificación de los actos realizados u omisiones incurridas en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión; la autoridad ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al Servidor Público, el derecho de éste a comparecer asistido de un defensor, a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, sin menoscabo de la oportunidad que tendrá de hacerlo en los momentos oportunos dentro del procedimiento.

   A la audiencia también asistirá un representante del Ente público en donde labore el Servidor Público.

   La notificación a que se refiere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable y ante dos testigos.

   Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, pero deberá celebrarse como máximo

dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha originalmente establecida;

II. Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que ofrezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los actos u omisiones que se le atribuyen;

III. Desahogadas las pruebas, las Secretarías o los Órganos internos de control resolverán dentro de los treinta días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la resolución dentro de los tres días hábiles siguientes. Dicha resolución, en su caso, se notificará a los Denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un plazo no mayor de diez días hábiles.

Las Secretarías o los Órganos internos de control podrán ampliar el plazo para dictar la resolución a que se refiere el párrafo anterior, por única vez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, cuando lo considere oportuno para efectuar un adecuado análisis de las pruebas aportadas. La ampliación del plazo deberá motivarse y ser notificada al presunto infractor, dentro de los tres días hábiles siguientes.

IV. Durante la sustanciación del procedimiento las Secretarías o los Órganos internos de control podrán practicar todas las diligencias tendentes a investigar la presunta responsabilidad del Servidor Público denunciado, así como requerir a éste y a las Dependencias, Entidades u organismos involucrados la información y documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a proporcionarlas de manera oportuna.

Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o advirtieran datos o información que impliquen nueva responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de otros Servidores Públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o investigaciones, y citar para otra u otras audiencias, y

V. Previa o posteriormente al citatorio del presunto responsable, las Secretarías o los Órganos internos de control podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute, sin menoscabo además de que la autoridad determine el pago del mínimo vital para la subsistencia del Servidor Público, el cual deberá establecerse de acuerdo a las características particulares de éste. La determinación de las Secretarías o de los Órganos internos de control hará constar expresamente esta salvedad.

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior suspenderá los efectos del acto que haya dado origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al interesado.

La suspensión cesará cuando así lo resuelvan las Secretarías o los Órganos internos de control, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del Servidor Público. En todos los casos, la suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente.

En el supuesto de que el Servidor Público suspendido temporalmente no resultare responsable de los actos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos

y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.

Las Secretarías o los Órganos internos de control, no podrán difundir la suspensión del Servidor Público, hasta en tanto no exista resolución definitiva del procedimiento.

Artículo 76. En los lugares en los que no residan los titulares de los Órganos internos de control, los Servidores Públicos de las Dependencias o Entidades que residan en dichos lugares, practicarán las notificaciones o citaciones que en su auxilio aquéllos les encomienden mediante comunicación escrita.

En dicha comunicación deberá señalarse expresamente la diligencia cuya práctica se solicita; los datos de identificación y localización del Servidor Público respectivo, y el plazo en el cual deberá efectuarse aquélla, así como acompañarse de la documentación correspondiente.

El incumplimiento de lo anterior por parte de los Servidores Públicos de las Dependencias o Entidades a los que se les solicite el auxilio a que se refiere este artículo, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Artículo 77. Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad.

Artículo 78. Las resoluciones y acuerdos de las Secretarías o los Órganos internos de control durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo constarán por escrito. Las sanciones impuestas se asentarán en el registro a que refiere esta Ley.

Capítulo II
Del Recurso de Revocación

Artículo 79. Los Servidores Públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones administrativas que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título, podrán interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación respectiva.

Las resoluciones que se dicten en el recurso de revocación serán impugnables ante los Tribunales, vía el juicio contencioso administrativo para el caso del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o el juicio que dispongan las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas según corresponda.

Artículo 80. La tramitación del recurso de revocación se sujetará a las normas siguientes:

I. Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del Servidor Público le cause la resolución, así como el ofrecimiento de las pruebas que considere necesario rendir;

II. La autoridad acordará sobre la prevención, admisión o desechamiento del recurso en un término de 3 días hábiles; en caso de admitirse, tendrá que acordar sobre las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución;

III. Si el escrito de interposición del recurso de revocación no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la fracción I de este artículo y la autoridad no cuenta con elementos para subsanarlos se prevendrá al recurrente, por una sola ocasión, con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no podrá exceder de tres días contados a partir del día siguiente de la notificación de la prevención, con el

apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el recurso de revocación.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene la autoridad para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo, y

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, las Secretarías, el titular del Órgano interno de control o el Servidor Público en quien delegue esta facultad, dictará resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, notificándolo al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas.

Artículo 81. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, conforme a estas reglas:

I. En tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga el Código Fiscal de la Federación, y los correlativos de las entidades federativas, y

II. En tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos:

a) Que la solicite el recurrente, y

b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.

En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere resolución favorable.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, la autoridad que resuelva el recurso fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La autoridad deberá de acordar en un plazo no mayor de 24 horas respecto a la suspensión que solicite el recurrente.

Artículo 82. En los procedimientos ante el Tribunal, en los que se impugnen las resoluciones administrativas recaídas a los recursos de revocación, dictadas conforme a este Título, las sentencias firmes que se pronuncien tendrán el efecto de revocar, confirmar o modificar la resolución impugnada. En el caso de ser revocada o de que la modificación así lo disponga, se ordenará al Ente público en el que el Servidor Público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

El Tribunal podrá otorgar la suspensión cumpliendo los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

Capítulo III
Cumplimiento y Ejecución de sanciones por faltas administrativas

Artículo 83. La ejecución de las sanciones por faltas administrativas se llevará a cabo de inmediato, una vez que sean impuestas por las Secretarías o los Órganos internos de control, y conforme se disponga en la resolución respectiva.

Tratándose de los Servidores Públicos de base, la suspensión y la destitución se ejecutarán por el titular del Ente público correspondiente.

Artículo 84. Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública federal, local o municipal o del Ente público

que corresponda, y se harán efectivas mediante el correspondiente procedimiento administrativo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 85. Si el Servidor Público presunto responsable confesare su responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas que se le atribuyen, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se impondrá al Servidor Público dos tercios de la sanción económica aplicable.

Artículo 86. Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere la presente Ley, las Secretarías o los Órganos Internos de Control podrán emplear los siguientes medios de apremio:

I. Multa de veinte hasta ochenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y

II. Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal.

Artículo 87. En todas las cuestiones relativas a los procedimientos diferentes al Juicio de Responsabilidad Administrativa incluyendo la apreciación de las pruebas, se observarán de manera supletoria las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles o de los Códigos de Procedimientos Civiles de las entidades federativas, según sea el caso.

TÍTULO TERCERO
DEL JUICIO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

Capítulo I
Disposiciones generales del Juicio, Partes, Impedimentos y Excusas

Sección Primera
Disposiciones Generales del Juicio

Artículo 88. El juicio a que se refiere el presente Título se regirá bajo los principios de legalidad, justicia completa, pronta y expedita, presunción de inocencia, razonabilidad, debido proceso, verdad material, eficacia, transparencia, buena fe, exhaustividad, calificación jurisdiccional, amplia facultad de mejor proveer, imparcialidad y respeto a los derechos humanos, y será aplicable para la imposición de sanciones respecto de las faltas graves previstas en esta Ley.

Artículo 89. El juicio se iniciará cuando las Autoridades Investigadoras, en el ámbito de sus competencias, presenten el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa ante el Tribunal competente y tendrá como objeto el esclarecimiento de los actos u omisiones calificados como faltas administrativas graves por las autoridades referidas, cuya presunta responsabilidad se le impute a un Servidor Público o particular.

Artículo 90. Para todo lo no previsto en este Título y en lo que no se oponga a lo dispuesto por el mismo, se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 91. Cuando la Autoridad Investigadora tenga su domicilio fuera de la población donde se encuentre el Tribunal competente, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa podrá enviarse a través del Servicio Postal Mexicano, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en donde tenga su domicilio.

Sección Segunda
Partes en el Juicio

Artículo 92. Son parte en el juicio de responsabilidades administrativas:

I. La Autoridad Investigadora;

II. El Servidor Público al que se le determine un Informe de Presunta Responsabilidad administrativa que sirva de base para el ejercicio de la Acción de responsabilidades en su contra;

III. El particular, persona física o moral, presunto responsable de la vinculación con las faltas administrativas graves, y

IV. Los terceros a los que pueda afectar la determinación de responsabilidades y sanciones administrativas.

Artículo 93. Las partes a que se refieren las fracciones II a IV del artículo anterior podrán autorizar a profesionales legitimados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, para que en su nombre y representación reciban notificaciones u otro tipo de documentos, para imponerse en autos, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias y realizar otra clase de actos que resulten indispensables en defensa de los derechos de su representada.

Tratándose de personas morales, éstas deberán comparecer en todo momento a través de sus representantes legales o por las personas que éstos designen.

Sección Tercera
De los Impedimentos y Excusas

Artículo 94. Los Magistrados y los peritos deberán excusarse en los casos en los que se determine por las leyes orgánicas de los Tribunales.

Artículo 95. Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales. Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos. En el escrito de recusación deberán manifestarse, bajo protesta de decir verdad, los hechos que la fundamentan.

El Presidente del Tribunal, resolverá sobre la excusa o de la recusación en los términos de la ley orgánica respectiva.

Sección Cuarta
Causales de Improcedencia y Sobreseimiento

Artículo 96. El juicio por faltas administrativas graves a que se refiere este Título será improcedente:

I. Cuando de las constancias se desprenda notoriamente que los actos u omisiones que hayan sido calificados por la autoridad competente como graves, no lo sean;

II. En los casos en que se omita acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

III. Contra conductas calificadas como faltas administrativas graves que sean materia de un juicio diverso pendiente de resolución;

IV. Cuando hayan prescrito las facultades de investigación de la autoridad, y

V. Contra conductas que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio por faltas administrativas graves.

Para los casos en que se declare la improcedencia por la causal contenida en la fracción I, quedarán a salvo las facultades de la Secretaría o el Órgano interno de control para iniciar con el procedimiento administrativo sancionador.

Artículo 97. Procede el sobreseimiento cuando:

I. El presunto infractor muera durante la tramitación del juicio.

Lo anterior, independientemente de las facultades del Estado para solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados, en la vía correspondiente;

II. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existen los actos u omisiones imputados al presunto infractor o cuando no se probare que fue este quien los cometió, y

III. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 98. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Artículo 99. Al estudiar las causales de improcedencia, el Magistrado determinará de oficio si las conductas imputadas a los presuntos infractores constituyen faltas administrativas graves.

Cuando de las constancias se desprende notoriamente que las conductas imputadas al Servidor Público o particular no constituyen faltas administrativas graves, el Informe de Presunta Responsabilidad se desechará de plano. En todos los demás casos la determinación acerca de la gravedad de las conductas será materia de la sentencia.

Artículo 100. En caso de que el Magistrado deseche de plano por considerar que las conductas imputadas al Servidor Público o particular no constituyen faltas administrativas graves, las Autoridades investigadoras podrán iniciar el procedimiento en sede administrativa por faltas administrativas a que se refiere el Título Tercero del Libro Primero de esta Ley, siempre que no haya prescrito la acción.

Sección Quinta
De las Medidas Cautelares

Artículo 101. Una vez iniciado el juicio, podrán decretarse todas las medidas cautelares previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda, necesarias para mantener la situación de hecho existente, que impidan que la resolución impugnada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable a la Hacienda Pública Federal, de las entidades federativas, municipal, o al patrimonio de los Entes Públicos, salvo en los casos en que se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público.

Artículo 102. Las medidas cautelares se tramitarán con el incidente respectivo. La promoción en donde se soliciten las medidas cautelares señaladas, deberá contener los siguientes requisitos:

I. El nombre del titular de la Autoridad Investigadora y su domicilio para recibir notificaciones;
II. Los actos u omisiones que se le imputan al presunto infractor;
III. Los hechos que se pretenden resguardar con la medida cautelar;
IV. La expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar;
V. Acreditar la necesidad para gestionar la medida cautelar, y

VI. Adjuntar copia de la solicitud, para cada una de las partes, a fin de correrles traslado.

En caso de no cumplir con los requisitos previstos en este artículo, se tendrá por no interpuesto el incidente.

La solicitud de las medidas cautelares, se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva.

Artículo 103. En el acuerdo que admita el incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado ordenará correr traslado a quien se le impute el acto u omisión calificada como falta administrativa grave, para que manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de diez días hábiles.

Si vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se recibe manifestación alguna o si no se refiere específicamente a los hechos que le impute el promovente, dichos hechos se tendrán por ciertos.

En el acuerdo de admisión del incidente de petición de medidas cautelares, el Magistrado resolverá sobre las medidas cautelares previas que se le hayan solicitado.

Dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que haya recibido las manifestaciones o que haya vencido el término para presentarlas, el Magistrado dictará la resolución en la que, de manera definitiva, decrete o niegue las medidas cautelares solicitadas.

Para los casos en que se trate de un presunto responsable que sea persona moral, el Magistrado podrá ordenar la Intervención de la sociedad, la cual consistirá en la designación temporal de una o más personas para que se encarguen de la administración provisional de la sociedad ya sea para disolver la sociedad, preservar la empresa, los derechos de trabajadores y acreedores y/o

garantizar el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública federal, local o municipal, o al patrimonio de los Entes Públicos;

Sección Sexta
Medidas de apremio

Artículo 104. El Magistrado de oficio o a petición de parte, para hacer cumplir sus determinaciones podrá hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:

I. Amonestación;

II. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la cual podrá duplicarse o triplicarse cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización como máximo, en caso de renuencia al mandato respectivo;

III. Arresto hasta por treinta y seis horas, y

IV. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier nivel de gobierno, los que deberán de atender de inmediato el requerimiento.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de la autoridad, se estará a lo que prevenga al respecto la legislación penal.

El Tribunal podrá facultar funcionarios para realizar diligencias, trámites y cualquier actuación en los lugares donde se realizan las funciones públicas.

Capítulo II
De la Substanciación y Resolución del Juicio

Sección Primera
Del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa

Artículo 105. El Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se presentará por escrito ante el Tribunal competente y será elaborado con los resultados de la atención a denuncias, investigaciones y auditorías que realicen las Autoridades Investigadoras, con las pruebas suficientes, para que con base en éstos se solicite la determinación de responsabilidades graves y la aplicación de sanciones a los Servidores Públicos y/o particulares involucrados. Asimismo, irá acompañado del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa.

Además de lo señalado en el párrafo que antecede, el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa deberá indicar:

I. El nombre del titular y de los delegados autorizados del Órgano interno de control adscrito al Ente público en el que labore el presunto infractor;

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones;

III. El nombre y domicilio del Servidor Público presunto responsable, el Ente público al que se encuentre adscrito y el cargo que ostente;

IV. Los hechos que dan motivo al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

V. Las pretensiones tendentes a resarcir los daños o perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos;

VI. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y

señalarán los nombres y domicilios del perito y, en su caso, de los testigos;

VII. El nombre y domicilio del tercero interesado, o la mención de que no existe, y

VIII. La solicitud que formulen al Tribunal las Autoridades Investigadoras, para que autorice la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, sin menoscabo además de que la autoridad determine el pago del mínimo vital para la subsistencia del Servidor Público, la que se determinará de acuerdo a las características particulares de cada caso.

IX. En su caso, el expediente del recurso de inconformidad contenido en la presente Ley.

Cuando el presunto infractor tenga el carácter de particular, se deberá señalar su nombre y domicilio, así como las obras, servicios o cualquier otro acto u omisión en el que participó y de la que se desprende su vinculación con la conducta calificada como falta administrativa grave; cuando se trate de una persona moral se deberá señalar la razón social, así como el domicilio fiscal o convencional indistintamente, para efectos del emplazamiento y, en su caso, ejecución de la resolución correspondiente.

En caso de que se omitan los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, VI VII, VIII y IX de este artículo el Magistrado requerirá al promovente para que subsane dentro del término de tres días hábiles, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no ofrecidas las pruebas o por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, según corresponda. Cuando se omita el requisito señalado en las fracciones IV y V, se tendrá por no interpuesto dicho informe.

Si el Tribunal tiene por no interpuesto el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, las autoridades competentes podrán presentar uno nuevo posteriormente, siempre que la acción no haya prescrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de esta Ley.

El Tribunal podrá determinar la suspensión temporal prevista en la fracción VIII del presente artículo, si a su juicio así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga sobre la presunta responsabilidad que se le impute sin menoscabo además de que la autoridad determine el pago del mínimo vital para la subsistencia del Servidor Público, el cual deberá establecerse de acuerdo a las características particulares de este. La determinación del pago deberá responder a principios de proporcionalidad y en ningún caso será menor al cuarenta por ciento de las percepciones que reciba con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta medida deberá notificarse al superior jerárquico del presunto infractor, quien la turnará a la instancia competente del Ente público para ejecutarla.

Artículo 106. Las Secretarías, los Órganos internos de control, o el Tribunal no podrán difundir la suspensión del Servidor Público, hasta en tanto no exista resolución definitiva del procedimiento.

Artículo 107. La Autoridad Investigadora deberá acompañar el Informe de Presunto Responsabilidad Administrativa con:

I. Una copia del mismo y de los documentos anexos para cada una de las partes;

II. El documento con el que acredite su personalidad;

III. El Expediente del Informe de presunta responsabilidad administrativa;

IV. En caso de que ofrezca prueba pericial o testimonial, el cuestionario que debe desahogar el perito y el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial respectivamente, mismos que deberán ir firmados por el oferente y el perito o los testigos, según sea el caso, y

V. Las pruebas documentales que ofrezca.

Cuando el presunto infractor tenga el carácter de particular, se deberá acompañar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, con los contratos, documentación originada en el procedimiento licitatorio, asignaciones o cualquier otro documento con el que se compruebe la participación de la persona física o moral en la conducta calificada como falta administrativa grave.

Artículo 108. Las autoridades competentes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que se encuentren clasificados como reservados. El Tribunal solicitará los documentos antes del inicio de la Audiencia.

Artículo 109. El tercero interesado, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se le corra traslado del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa o de la contestación, podrá apersonarse en juicio mediante escrito que contendrá los requisitos señalados en la fracción VI del artículo 105 y fracciones I, II, IV y V del artículo 107 de esta Ley, según sea el caso, así como la justificación de su derecho para intervenir en el asunto.

Artículo 110. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa haya sido presentado, el Tribunal deberá resolver respecto la admisión, prevención o desechamiento en términos del presente Título.

Sección Segunda
De la Contestación

Artículo 111. Admitido el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa se correrá traslado del mismo al presunto infractor, emplazándolo para que emita su contestación dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación.

Artículo 112. El presunto infractor en su contestación del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, expresará:

I. Las causales de improcedencia o sobreseimiento que advierta;

II. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar;

III. Se referirá concretamente a cada uno de los hechos que la autoridad competente le impute de manera expresa, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso;

IV. Los argumentos por medio de los cuales, se demuestra la ineficacia de los razonamientos vertidos y de las pruebas ofrecidas en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

V. Las pruebas que ofrezca. En caso de que se ofrezca prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos, y

VI. El nombre y domicilio del tercero interesado, o la mención de que no tiene conocimiento de su existencia, bajo protesta de decir verdad.

Artículo 113. El presunto infractor deberá acompañar a su contestación:

I. Copias de la misma y de los documentos que acompañen para la autoridad competente y para el tercero interesado;

II. El documento con el que acredite su personalidad cuando se trate de un particular y no gestione en nombre propio;

III. En caso de que ofrezca prueba pericial o testimonial, el cuestionario que debe desahogar el perito y el interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, mismo que deberá ir firmado por el oferente;

IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la prueba pericial ofrecida por la Autoridad Investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, y

V. Las pruebas documentales que ofrezca.

El presunto infractor deberá señalar, sin acompañar, los documentos que hayan sido clasificados como reservados conforme a la ley aplicable en materia de transparencia ya acceso a la información. El Tribunal solicitará los documentos antes del inicio de la Audiencia.

Si no se produce la contestación dentro del plazo señalado, se tendrá por contestada en sentido negativo, teniendo las autoridades competentes la carga de probar los hechos que le imputa al presunto infractor. En caso de que se omitan los requisitos previstos en las fracciones I, II y III de este artículo el Magistrado requerirá al promovente para que subsane dentro del término de tres días hábiles, apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo se tendrá por no ofrecidas las pruebas o por no presentada la contestación.

Admitida la contestación o declarado su desechamiento o no presentación, se citará a las partes a audiencia, la que se realizará dentro de los quince días hábiles siguientes, señalando el lugar de su celebración, el día y hora, la autoridad jurisdiccional que la presidirá, los hechos respecto de los cuales se preguntará e

indagará al presunto responsable y su derecho a ser asistido por un defensor particular.

La audiencia se verificará en el lugar, hora y día indicados en el citatorio y ante la presencia del Magistrado; las partes podrán presentar las pruebas que consideren convenientes y realizar sus manifestaciones verbales, contestando las preguntas que el Magistrado juzgue pertinentes para esclarecer todos los hechos o determinar si existen más respecto del expediente.

Si el presunto infractor considera que se encuentra dentro del supuesto contenido en el último párrafo del artículo 51 de la presente Ley, podrá solicitar al Tribunal la aplicación del mismo desde el escrito de contestación. El Tribunal procederá a la revisión de la solicitud y de cumplirse con las condiciones contenidas en dicha disposición, procederá a dictar la sentencia correspondiente obviando el procedimiento correspondiente y decretará la obligación de resarcir el daño a quien corresponda en términos de dicho artículo.

Sección Tercera
De las Pruebas

Artículo 114. En el juicio de responsabilidad administrativa son admisibles toda clase de pruebas, excepto las que sean contrarias a la moral y al derecho. Las partes podrán ofrecer cualquier prueba reconocida por las leyes, las que deberán admitirse, siempre que conduzcan a dilucidar los hechos que se investigan.

La petición de informes será admitida aunque no se encuentre relacionada con hechos consignados en autos, siempre que se relacione con los actos u omisiones imputados.

La confesión de la autoridad por absolución de posiciones no será admitida, sin embargo, cuando se trate de la testimonial que deba desahogar una autoridad, ésta podrá desahogarse a través de interrogatorio mediante oficio.

Las pruebas supervinientes serán admitidas hasta antes de que se dicte la sentencia. El Magistrado dará vista de las mismas a las partes, para que en el término de tres días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga.

Artículo 115. El Magistrado, hasta antes de dictar sentencia, podrá decretar la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que lo estime necesario, sirva para un mejor conocimiento de los hechos imputados al presunto infractor y sea conducente para el conocimiento de la verdad, y no sean contrarias a la moral o al derecho. Al efecto, podrá requerir al presunto infractor y a las autoridades competentes, la información, y demás documentación que se relaciona con los actos u omisiones materia del juicio, o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes en los términos previstos por esta Ley.

Los sujetos a que se refiere el párrafo anterior estarán obligados a proporcionar la información y documentación requerida de manera oportuna.

Artículo 116. Para todo lo relativo al ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas, se estará a lo dispuesto en las reglas establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.

Artículo 117. Cualquier situación procesal que se presente o que no esté prevista en el juicio de responsabilidad administrativa, deberá valorarse por el Magistrado para su trámite, mismo que requerirá una amplia justificación fundada y motivada. Los incidentes se tramitarán conforme a las reglas que para tal efecto dispone la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo o las leyes que rijan en esa materia en las entidades federativas, según corresponda.

Sección Cuarta
Alegatos

Artículo 118. El Magistrado Instructor, una vez desahogadas las pruebas y al no existir ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, concederá a las partes un término de cinco días hábiles para formular alegatos por escrito, sólo respecto de los hechos sobre los que verse el proceso. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al pronunciarse la sentencia correspondiente.

Artículo 119. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, recibidos o no los alegatos, se considerará cerrada la instrucción y se emitirá el acuerdo que haga constar el cierre.

Sección Octava
De la Sentencia

Artículo 120. La sentencia deberá dictarse dentro de los quince días hábiles siguientes a que se hubieren desahogado la totalidad de las pruebas y formulado los alegatos por las partes, las cuales quedarán notificadas en la audiencia que el juicio queda en estado de sentencia sin mayor formalidad requerida.

Artículo 121. El Tribunal, con independencia de que de las constancias se acredite la plena responsabilidad del Servidor Público o particular, deberá resolver en definitiva si los hechos constitutivos de faltas administrativas encuadran en el catálogo de conductas, actos u omisiones a las que esta Ley otorga el carácter de graves.

En caso que de las constancias se desprenda fehacientemente que los hechos en cuestión no se constituyen faltas administrativas graves, el Tribunal ordenará a las Secretarías o los Órganos internos de control para que den inicio al procedimiento sancionador por faltas administrativas contenido en esta ley.

Artículo 122. Al dictar las sentencias, el Tribunal deberá velar por los principios de exhaustividad, completitud y congruencia, siguiendo las normas que al efecto establezca la ley orgánica del respectivo Tribunal.

Artículo 123. Las sentencias que dicte el Tribunal con motivo de los juicios a que se refiere este Título, deberán contener:

I. Los antecedentes del caso;

II. La fijación clara y precisa de los hechos controvertidos;

III. La valoración de las pruebas desahogadas;

IV. El relativo a la existencia o inexistencia de los hechos que la ley señale como falta administrativa grave y, en su caso, la responsabilidad plena del Servidor Público o particular vinculado con dichas faltas;

V. En el caso de que se hayan ocasionado daños y perjuicios a la Hacienda Pública federal, local o municipal o al patrimonio de los Entes Públicos, la existencia de la relación de causalidad entre la conducta calificada como falta administrativa grave y la lesión producida; la valoración del daño o perjuicio causado; así como la determinación del monto de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación;

VI. La determinación de la sanción para el Servidor Público que haya sido declarado plenamente responsable o particular vinculado en la comisión de la falta administrativa grave, y

VII. Los puntos resolutivos, incluyendo la forma en que debe cumplirse la sentencia.

Artículo 124. Las sanciones que impondrá el Tribunal al determinar las responsabilidades administrativas graves de Servidores Públicos y Particulares serán en los términos y conforme a los criterios de individualización previstos en esta Ley.

Artículo 125. La resolución a la que se refiere la presente Sección, se notificará a las partes en un plazo no mayor de diez días hábiles; y en su caso, se notificará a los Denunciantes únicamente para su conocimiento.

Artículo 126. La parte que estime contradictoria, ambigua u obscura una sentencia definitiva del Tribunal, podrá promover por una sola vez su aclaración dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación. La parte deberá señalar el apartado de la sentencia cuya aclaración se solicita e interponerse ante el Tribunal que dictó la sentencia, el que deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que fue interpuesto, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia.

La aclaración no admite recurso alguno y se reputará que forma parte de la sentencia recurrida y su interposición interrumpe el término para su impugnación.

Capítulo III
De Los Recursos

Sección Primera
De la Reclamación

Artículo 127. El recurso de reclamación procederá en contra de las resoluciones del Tribunal que admitan, desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado.

Artículo 128. La reclamación se interpondrá ante el Tribunal que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate.

Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga, sin más trámite, se dará cuenta al Tribunal para que resuelva en el término de cinco días hábiles.

De la reclamación conocerá el Tribunal que haya emitido el auto recurrido y el Magistrado que haya instruido el juicio no podrá excusarse.

La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno.

Sección Segunda
De la Apelación

Artículo 129. Las resoluciones emitidas por los Tribunales, podrán ser impugnadas por las partes mediante el recurso de apelación, ante la instancia y conforme a los medios que determinen las leyes orgánicas de los Tribunales.

El recurso de apelación se promoverá mediante escrito ante el Tribunal que emitió la resolución, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre

En el escrito deberán formularse los agravios que consideren las partes se les hayan causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de las partes.

Artículo 130. Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes:

I. La que determine imponer las sanciones a los Servidores Públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, y

II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares.

Artículo 131. La instancia que conozca de la apelación deberá resolver en el plazo de tres días hábiles si admite el recurso, o lo desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 129 de esta Ley, se señalará al promovente en un plazo que no excederá de tres días hábiles, para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa.

El Tribunal, dará vista a las partes para que en el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este término se procederá a resolver con los elementos que obren en autos.

Artículo 132. El Tribunal procederá al estudio de los conceptos de apelación, atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos, se privilegiará el estudio de los conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del Servidor Público o del particular, o de ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad Investigadora, las violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los involucrados.

En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera derivarse la extinción de la Acción de responsabilidad, la inocencia del

recurrente, o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio.

Artículo 133. En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo disponga, cuando el recurrente sea el Servidor Público o el particular, se ordenará al Ente público en el que el Servidor Público preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen otras leyes.

Se exceptúan del párrafo anterior, los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y miembros de las instituciones policiales; casos en los que la Procuraduría General de la República, las procuradurías de justicia de las entidades federativas y las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o municipales, sólo estarán obligadas a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el apartado B, fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución.

Sección Tercera
De la Revisión

Artículo 134. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de los Entes Públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva.

La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la revisión en amparo

indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no procederá juicio ni recurso alguno.

Artículo 135. Las sentencias definitivas que emitan los Tribunales de las entidades federativas, podrán ser impugnadas por las Secretarías, los Órganos internos del control o las entidades de fiscalización locales competentes, en los términos que lo prevean las leyes locales.

Capítulo IV
De la Ejecución

Artículo 136. La sentencia definitiva causará ejecutoria cuando:

I. Admitiendo recurso o juicio, no fuere impugnada, o cuando, habiéndolo sido, el recurso o juicio de que se trate haya sido desechado o sobreseído o hubiere resultado infundado;

II. Sea consentida expresamente por las partes o sus representantes legítimos, y

III. El Tribunal Colegiado de Circuito o la instancia local competente resuelva sobre la revisión.

Artículo 137. Las sanciones económicas impuestas por los Tribunales constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública federal, local o municipal, o del patrimonio de los Entes Públicos, según corresponda. Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por el Servicio de Administración Tributaria o la autoridad local competente, a la que será notificada la resolución emitida por el Tribunal respectivo.

Artículo 138. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la plena responsabilidad de un Servidor Público por faltas

administrativas graves, el Magistrado, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Cuando el Servidor Público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará vista a su superior jerárquico y a la Secretaría, y

II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

En el oficio respectivo, el Tribunal prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la fracción II, el Servicio de Administración Tributaria informará al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la sanción económica que corresponda.

Artículo 139. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la vinculación de un particular con faltas administrativas graves, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, el Tribunal ordenará su publicación al Director del Diario Oficial de la Federación, así como a los directores de los periódicos oficiales de las entidades federativas, y

II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al responsable, se dará vista al Servicio de Administración Tributaria o a las autoridades locales competentes en las entidades federativas.

Artículo 140. Cuando el particular tenga carácter de persona moral, sin perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, el Tribunal girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas:

I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará vista a la Secretaría de Economía, y al Servicio de Administración Tributaria, se inscribirá en el Registro Público de Comercio y se hará publicar un extracto de la sentencia que decrete esta medida, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde tenga su domicilio fiscal el particular, y

II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a los Códigos sustantivos en materia civil federal o de las entidades federativas, según corresponda, y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 141. Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que no existe responsabilidad administrativa grave a cargo del Servidor Público o la no vinculación de un particular con faltas administrativas graves, el Tribunal, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de esta para su cumplimiento. En los casos en que haya decretado la suspensión del Servidor Público en su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata del mismo.

Artículo 142. El incumplimiento de las medidas cautelares previstas en el artículo 101 de la presente Ley por parte del jefe inmediato, del titular del Ente público correspondiente o de cualquier otra autoridad obligada a cumplir con dicha disposición, será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley.

Mientras no se dicte sentencia definitiva el Magistrado que hubiere conocido del incidente, podrá modificar o revocar la resolución que haya decretado o negado las medidas cautelares, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique.

ARTÍCULO TERCERO.- Se REFORMAN el artículo 19; el artículo 26; las fracciones XXI y XXIV del artículo 31; el artículo 37; el artículo 44 y el artículo 50, y se DEROGAN las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 31, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de

estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;
Secretaría de Relaciones Exteriores;
Secretaría de la Defensa Nacional;
Secretaría de Marina;
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Secretaría de Desarrollo Social;
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;
Secretaría de Energía;
Secretaría de Economía;
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
Secretaría de la Función Pública;
Secretaría de Educación Pública;
Secretaría de Salud;
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
Secretaría de Cultura;
Secretaría de Turismo, y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- ...

I. a XX. ...

XXI. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y desincorporación de

activos, servicios y ejecución de obras públicas de la Administración Pública Federal;

XXII. (Se deroga)

XXIII. ...

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. (Se deroga)

XXX. (Se deroga)

XXXI. (Se deroga)

XXXII. (Se deroga)

XXXIII. (Se deroga)

XXXIV. ...

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la

República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de

bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

XIV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la

evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la

Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XIX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XX. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXII. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando su administración no esté a cargo de una dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal correspondiente;

XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino, afectación y transferencia, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación y actualización de inventarios, para la realización y actualización, bajo estándares internacionales, de los avalúos que realice la propia Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los inmuebles federales;

XXIV. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables;

XXV. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXVI. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXVII. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXVIII. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXIX. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y

XXX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 44.- Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y

desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XVIII del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones

correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.

Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

ARTÍCULO CUARTO.- Se Reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue:

> Artículo 70. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:
>
> I. a IV. ...
>
> V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables

ARTÍCULO QUINTO.- Se Reforma el artículo 49, párrafos segundo y último, así como las fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

> Artículo 49. ...
>
> Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que las reciban,

conforme a sus propias leyes en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se observará lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

...

...

I. ...

II. ...

III. La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Capítulo corresponde a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales;

V. ...

...

...

...

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables.

ARTÍCULO SEXTO.- Se Reforman los artículos 1; 2 fracciones I, VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV, XVIII y XIX; 4; 5, párrafo primero; 6, párrafos primero, cuarto, y séptimo; 7, primer párrafo; 8, segundo párrafo; 9; 11; 12, fracciones I, inciso b), III, inciso b) y IV; 13, fracción I; 15, fracciones IV, X, XI, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII y XXVI; 16; 18; 20; 22; 28; 29; 30; 31; 32;33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42, párrafo primero y fracción I; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 69; 70, fracción II, párrafo segundo; 71; 72; 73, párrafos primero y tercero; 77, fracciones III, V y VII, párrafo segundo; 78; 84, fracción V; 85, fracciones I, III, X, XIII, XV, XVI, XVII y XIX y párrafo último; 88 fracciones I, IX, X, XIII y XIV; 89, fracción VII; 92, fracción V; 103, fracción X, y 109, así como las denominaciones y ubicaciones de los Títulos Segundo, en sus Capítulos III y IV; Tercero; Cuarto y Quinto, Capítulos I, II y IV ; se Adicionan los artículos 2, con las fracciones XV Bis, XV Ter y XX; 15, fracción XXI Bis; así como los Capítulos IV del Título Segundo; I, II y III del Título Cuarto; se Derogan los artículos 64; 65; 66; 67 y 68, así como el Capítulo III del Título Quinto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, fracción XXIV; 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública, que comprende:

a) La fiscalización de los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables;

b) La revisión de los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, y

c) La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. Las participaciones federales, y

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de empréstitos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Artículo 2. ...

I. Auditoría Superior de la Federación: el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a que se refieren los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. a VII. ...

VII. Entes públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial, las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y

alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, empresas productivas del Estado, así como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;

VIII. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México;

IX. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales por la ley de la materia y aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines;

X. Fiscalización o fiscalización superior: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para revisar lo previsto en las fracciones I a IV del artículo 1 de esta Ley;

XI. ...

XII. Informe de Avance de Gestión Financiera: El informe que rinden los entes públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara sobre los avances físicos y financieros de los programas federales aprobados para el análisis correspondiente de dicha Cámara, presentado como

un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio correspondiente al que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XIII. Informe General Ejecutivo: Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública;

XIV. Informes individuales de auditoría: los informes individuales de las auditorías realizadas a las entidades fiscalizadas;

XV. ...

XV Bis. Órgano constitucional autónomo: los órganos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga expresamente autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluidos aquellos creados con tal carácter en las constituciones de las entidades federativas;

XV Ter. Órgano interno de control: la unidad administrativa a cargo de la fiscalización y el control al interior de los entes públicos;

XVI. a XVII. ...

XVIII. Servidores públicos: los señalados como tales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves;

XIX. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión, y

XX. Unidad de Medida y Actualización: el valor establecido por el Instituto de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en la

materia, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 4 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, serán aplicables a la presente Ley.

Artículo 4. La fiscalización de la Cuenta Pública a que se refiere el artículo 1, fracción I de esta Ley, se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal en los términos y plazos señalados en los Títulos Segundo y Cuarto de esta Ley.

La fiscalización respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión, a que se refiere el artículo 1, fracción II, de esta Ley, se llevará a cabo en términos del Título Tercero de la misma. Tratándose de la fiscalización de las participaciones a que se refiere la fracción III de dicho artículo, así como sobre el destino y ejercicio de los recursos provenientes de empréstitos contratados por los estados y municipios que tengan garantía de la Federación, a que se refiere la fracción IV, se llevará a cabo en términos del Título Cuarto de esta Ley.

La fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas

Graves, y el Presupuesto, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal.

...

Artículo 6. Los servidores públicos y las personas físicas o morales, públicas o privadas, que capten, reciban, recauden, administren, manejen, ejerzan y custodien los recursos públicos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, deberán atender los requerimientos que les formule la Auditoría Superior de la Federación durante la planeación, desarrollo de las auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

...

...

Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requerimientos a que se refiere este artículo, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los impida, los titulares de las áreas responsables de la práctica de las auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la Federación podrán imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el requerimiento respectivo.

...

...

Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida. El Servicio de Administración Tributaria se encargará de hacer efectivo su cobro en términos del Código Fiscal de la Federación y de las demás disposiciones aplicables.

Artículo 7. El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá:

I. a II. ...

...

Artículo 8. ...

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo Federal, suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario de Hacienda y Crédito Público a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de treinta días naturales. En dicho supuesto, la Auditoría Superior de la Federación contará, consecuentemente, con el mismo tiempo adicional para presentar el Informe General Ejecutivo.

Artículo 9. A fin de integrar la Cuenta Pública, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionales autónomos de la Federación harán llegar con la debida anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, la información que el mismo les solicite.

Artículo 11. La Auditoría Superior de la Federación conservará en su poder la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal y el Informe General Ejecutivo correspondiente, en los términos de la Ley Federal de Archivos. También se

conservarán las copias autógrafas de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en las que se finquen responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren formulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión.

Artículo 12. ...

I. ...

a) ...

b) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos federales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público federal, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso, del patrimonio de los entes públicos de la Federación;

II. ...

III. ...

a) ...

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

En todo caso, la Auditoría Superior de la Federación celebrará, a más tardar el último día hábil de diciembre de cada año, un convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el objeto de evitar la duplicidad en la evaluación de los programas que le corresponde a dicho Consejo efectuar en el año siguiente;

IV. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales que procedan por los daños o perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos de la Federación, que se determinen derivado de sus auditorías, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte posibles responsabilidades que no involucren dichos daños o perjuicios , para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan;

Artículo 13. ...

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa y presentación de denuncias penales y de juicio político, y

II. ...

Artículo 15. ...

I. a III. ...

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan

Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos. En todo caso, en los términos del artículo 12, fracción III, inciso b) de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación deberá coordinarse con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el objeto de evitar la duplicidad en la evaluación de los programas que le corresponden a éste;

V. a IX. ...

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de conformidad con lo previsto en esta Ley.

A la Auditoría Superior de la Federación no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con las operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios, sin perjuicio de que quienes tengan acceso a dicha información tendrán la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 25 y la prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 91 de esta Ley.

La información a que se refiere el párrafo anterior solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de manera indelegable por el Titular de la Auditoría y los auditores especiales a que se refiere esta Ley. Quienes deban entregar dicha información tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para hacerlo.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la información que las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos federales y la deuda pública, estando obligada a

mantener la misma reserva, hasta en tanto no se derive de su revisión el fincamiento de responsabilidades.

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoría Superior de la Federación información de carácter reservado o confidencial, ésta deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica. Dicha información será conservada por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada en los términos previstos en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública.

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación hayan otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, municipios, y alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado;

XII. a XIV. ...

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa y presentación de denuncias penales y de juicio político;

XVI. Promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa las acciones de responsabilidad para la imposición de sanciones por los daños o perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales, incluyendo en todos los casos las indemnizaciones correspondientes.

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará la acción de responsabilidad que inicie el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades por las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daño o perjuicio, o ambos, estimable en dinero que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, tramitará la acción de responsabilidad que inicie el procedimiento para imponer las sanciones correspondientes a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.

También dará vista a los órganos internos de control, así como a las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, cuando detecte posibles responsabilidades, que no involucren dichos daños y perjuicios mencionados en el primer párrafo de esta fracción, para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan;

XVII. Recurrir las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las multas que imponga;

XIX. Concertar y celebrar, en el caso de las participaciones federales, convenios con los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas locales y las entidades de fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa;

XX. ...

XXI. Participar en el Sistema Nacional Anticorrupción en los términos de la ley general en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en foros nacionales e internacionales;

XXI. Bis. Solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la revisión de la Cuenta Pública;

XXII. Practicar, a partir del primer día hábil del año siguiente al ejercicio fiscal en revisión, las auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitando información y documentación durante el desarrollo de las mismas para ser revisada en las instalaciones de las propias entidades fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación;

XXIII. a XXV. ...

XXVI. Solicitar, en los términos del artículo 20 de esta Ley, a los órganos internos de control, en el ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las auditorías por ellos practicadas;

XXVII. a XXVIII. ...

Artículo 16. La Auditoría Superior de la Federación, de manera previa a la fecha de presentación de los Informes individuales de auditoría, dará a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

A las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 días hábiles de anticipación, remitiendo con la misma anticipación a las entidades fiscalizadas los resultados y las observaciones preliminares de las auditorías practicadas. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría Superior de la Federación les concederá un plazo de 5 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser valoradas por esta última para la elaboración de los Informes individuales de auditoría.

Una vez que la Auditoría Superior de la Federación valore las justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva de los Informes individuales de auditoría.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado específico de los Informes individuales de auditoría, de manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.

Artículo 18. La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño. Las observaciones, incluyendo las acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

Artículo 20. Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control deban colaborar con la Auditoría Superior de la Federación en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública, deberá establecerse una coordinación entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al efecto se requiera, y otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les solicite la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera.

Artículo 22. Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se practicarán por el personal expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría Superior de la Federación o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, así como tratándose de investigaciones relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales serán realizadas directamente por la Auditoría Superior de la Federación.

Capítulo III
Del Informe General Ejecutivo y los Informes individuales de auditoría

Artículo 28. La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el último día hábil de los meses de junio y octubre del año en que sea presentada la Cuenta Pública, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la misma, los Informes individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo.

Artículo 29. La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el Informe General Ejecutivo correspondiente, mismo que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea.

A solicitud de la Comisión o de su mesa directiva, el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General Ejecutivo, en sesiones de la Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe General Ejecutivo.

Artículo 30. Los Informes individuales de auditoría contendrán los reportes de las auditorías practicadas e incluirán como mínimo lo siguiente:

I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de cada auditoría;

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño;

III. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental y de las disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;

IV. Los resultados de la gestión financiera;

V. La comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI. El análisis de las desviaciones, en su caso;

VII. Los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

VIII. Las observaciones, incluyendo las acciones promovidas y recomendaciones, y

IX. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones.

Artículo 31. El Informe General Ejecutivo incluirá, por lo menos, lo siguiente:

I. Un resumen de las auditorías realizadas, los principales hallazgos y las observaciones realizadas;

II. Un resumen de los resultados de la fiscalización del manejo de los recursos por parte de las entidades federativas, los municipios y las

alcaldías de la Ciudad de México, así como los principales hallazgos y las observaciones realizadas, y

III. Derivado de las auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 32. La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta a la Cámara en el Informe General Ejecutivo de las observaciones, incluyendo las acciones promovidas y recomendaciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.

Artículo 33. La Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes individuales de auditoría que se deriven de las funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 1 de esta Ley.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días primero de los meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del año, respectivamente.

El informe semestral se elaborará con base en los formatos que al efecto establezca la Comisión e incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones al desempeño, así como el estado que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo deberá publicarse en

la página de Internet de la Auditoría Superior de la Federación en la misma fecha en que sea presentado.

Capítulo IV
De las acciones promovidas y recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública

Artículo 34. El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, una vez rendidos a la Cámara los Informes individuales de auditoría, enviará las observaciones definitivas correspondientes a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la fecha en que sea entregado el respectivo informe, incluyendo:

I. Las acciones promovidas que resulten de las auditorías sobre la gestión financiera.

Los pliegos de observaciones, las promociones de responsabilidades y la presentación de denuncias se sujetarán a lo establecido en el Título Quinto de esta Ley, y

II. Las recomendaciones que resulten de las auditorías sobre el desempeño.

Artículo 35. Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciban las acciones promovidas y recomendaciones, deberán presentar la información y las consideraciones que estimen pertinentes a la Auditoría Superior de la Federación para su solventación o atención. En caso de no hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación podrá aplicar a los titulares de las áreas administrativas auditadas una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, además de promover la imposición de las sanciones administrativas que correspondan.

En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la notificación de la recomendación correspondiente, deberán precisar ante la Auditoría Superior de la Federación las mejoras efectuadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.

Artículo 36. La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas recibidas de las entidades fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones promovidas y recomendaciones.

En caso de que las entidades fiscalizadas no presenten los elementos necesarios para la solventación de las acciones promovidas, la Auditoría Superior de la Federación procederá en términos del Título Quinto de esta Ley.

Capítulo V
De la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública

Artículo 37. La Comisión realizará un análisis del Informe General Ejecutivo y lo enviará a la Comisión de Presupuesto. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la Cámara una opinión sobre aspectos o contenidos específicos del Informe General Ejecutivo.

El análisis de la Comisión podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue conveniente y que haya hecho la Auditoría Superior de la Federación, para modificar disposiciones legales que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 38. En aquellos casos en que la Comisión detecte errores en el Informe General Ejecutivo o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido

del mismo, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del Auditor Superior o de otros servidores públicos de la misma, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe General Ejecutivo.

La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el Informe General Ejecutivo.

Artículo 39. La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe General Ejecutivo, el análisis de la Comisión a que se refiere el artículo 37 de esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, someterá a votación del Pleno el dictamen correspondiente al Informe General Ejecutivo a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el Título Quinto de esta Ley, mismas que seguirán el procedimiento previsto en las disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO
De la fiscalización durante el ejercicio fiscal en curso o respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión

Capítulo Único

Artículo 40. Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en el artículo 42 de esta Ley,

la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión

Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente a la Auditoría Superior de la Federación.

Artículo 41. Las entidades fiscalizadas deberán rendir a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo que no excederá de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento, un informe relativo a los hechos descritos en la denuncia.

Con base en el informe, la Auditoría Superior de la Federación realizará las auditorías que correspondan y, derivado de sus resultados, procederá a realizar las observaciones que, en su caso, procedan en los términos del Capítulo IV del Título Segundo de esta Ley. Asimismo, en caso de detectar probables responsabilidades procederá en términos del Título Quinto de esta Ley.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones señaladas en los artículos 15 a 17 y 19 a 27 de esta Ley para la realización de sus auditorías, exclusivamente respecto a la fiscalización de la gestión financiera.

Artículo 42. Los casos en los cuales procederá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión, serán cuando se deduzca alguna de las circunstancias siguientes:

I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos;

II. a VI. ...

La Auditoría Superior de la Federación informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.

Artículo 43. La Auditoría Superior de la Federación realizará la revisión que corresponda, sin que interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las entidades fiscalizadas y a los servidores públicos.

Artículo 44. Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 41 de esta Ley, la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe, la Auditoría Superior de la Federación impondrá a los servidores públicos responsables una multa mínima de quinientos a una máxima de dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, sin perjuicio de la promoción de otras responsabilidades ante las autoridades competentes ni del ejercicio de otras facultades que esta Ley le confiere. La reincidencia se podrá castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, además de que podrá promover la destitución de los servidores públicos responsables ante las autoridades competentes.

Artículo 45. Para imponer la multa que corresponda, la Auditoría Superior de la Federación debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley.

Artículo 46.- La Auditoría Superior de la Federación deberá enviar a la Cámara, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría efectuada en términos de este artículo, el respectivo Informe individual de auditoría. Asimismo, deberá reportar en los informes a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, sobre el estado que guarden las observaciones, detallando las acciones promovidas relativas a dichas auditorías, así como la relación que contenga la totalidad de denuncias recibidas.

Artículo 47. Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves procedan ni del fincamiento de otras responsabilidades.

TÍTULO CUARTO
De la Fiscalización de Recursos Públicos Administrados o Ejercidos por Órdenes de Gobierno Locales y por Particulares
Capítulo I
De la Fiscalización de Recursos Federales

Artículo 48. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México; asimismo, fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

Artículo 49. La Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo las auditorías a que se refiere este Capítulo como parte de la revisión de la Cuenta Pública, con base en lo establecido en el Título Segundo de esta Ley. Asimismo, podrá fiscalizar los recursos federales a que se refiere el artículo anterior, correspondientes al ejercicio fiscal en curso o a años anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley.

Artículo 50. Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de observaciones y,

en caso de que no sea solventado, promover las acciones que correspondan en términos del Título Quinto de esta Ley.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación promoverá la imposición de las sanciones correspondientes a los particulares que hayan intervenido en actos vinculados con faltas administrativas graves.

Capítulo II
De la Fiscalización de las Participaciones Federales

Artículo 51. Para la fiscalización de las participaciones federales, la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, con el objeto de que colaboren con aquélla en la verificación de la aplicación correcta de las participaciones federales por dichos órdenes de gobierno, conforme a los lineamientos técnicos que señale la Auditoría Superior de la Federación, sin perjuicio de que podrá llevar a cabo la fiscalización directamente. Dichos lineamientos tendrán por objeto mejorar la fiscalización de las participaciones que ejerzan las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo a todas las entidades fiscalizadas de dichos órdenes de gobierno.

Los lineamientos comprenderán además, la verificación del desempeño y la comprobación de la aplicación adecuada de los recursos públicos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en concepto de subsidios, donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México.

La Auditoría Superior de la Federación establecerá los sujetos, objetivos, alcance y procedimientos de las auditorías y estructura de los informes de auditoría a practicar a las entidades fiscalizadas de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, para asegurar una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente. El conjunto de los términos acordados

con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrán ser inferiores a los determinados en esta Ley.

La Auditoría Superior de la Federación, a través de los citados convenios, verificará que las entidades fiscalizadas a que se refiere este artículo lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que, en su caso, les sean transferidos y asignados, de acuerdo con el artículo siguiente.

Sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, la Auditoría Superior de la Federación podrá, en los términos previstos en el Título Tercero de esta Ley, fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto a años anteriores.

Artículo 52. El Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales tendrá por objeto fortalecer el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de las participaciones federales de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

I. A través de la celebración de convenios de coordinación, la Auditoría Superior de la Federación podrá entregar hasta el 50% de los recursos del Programa a las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, a fin de que éstas fiscalicen las participaciones federales. El resto de los recursos serán aplicados por la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías de manera directa;

II. La Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el 15 de enero de cada año, las reglas de operación del Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dichas comisiones deberán emitir su opinión a más tardar el

15 de febrero. La Auditoría Superior de la Federación publicará en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el último día hábil de febrero, las reglas de operación del Programa, las cuales contendrán como mínimo, lo siguiente:

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en revisión;

b) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías;

c) Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de las participaciones federales;

d) La cobertura por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro del programa;

e) La asignación por entidad federativa;

f) En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar, y

g) La distribución que, en su caso, se realice de los subsidios del Programa Anual para la Fiscalización de las Participaciones Federales a las entidades de fiscalización superior locales, a fin de que los mismos realicen acciones de fiscalización;

III. Las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales, en los informes de las auditorías que realicen en términos del Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales, deberán:

a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la Auditoría Superior de la Federación;

b) Alinear los resultados con los dictámenes de las auditorías;

c) Asegurar que todos los procedimientos de auditoría manifestados en el informe se expresen en resultados;

d) Incluir en el informe de auditoría todos los resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan observaciones o que se hayan solventado durante el desarrollo de las auditorías;

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las probables recuperaciones;

f) Incorporar en los informes de auditoría el apartado de cumplimiento de metas y objetivos;

g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento de objetivos y metas con los resultados del Informe General Ejecutivo;

h) Precisar en los resultados la normativa que se incumple o a la que se da cumplimiento, e

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la información en general;

IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales deberá ser informado en el mes de septiembre a la Comisión, a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una evaluación sobre su cumplimiento. Asimismo, la Comisión deberá remitir a la Comisión de Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de octubre, información relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del Programa, a fin de considerarla para la aprobación del Programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Dicho informe deberá contener, un reporte sobre los aspectos detallados en la fracción II de este artículo, y

V. Los recursos del Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales se deberán destinar exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la revisión y fiscalización de las participaciones federales. Los recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido devengados por las entidades de fiscalización superior de las legislaturas locales o por la Auditoría Superior de la Federación, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación.

La Auditoría Superior de la Federación y los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas locales deberán publicar, en sus respectivas páginas de Internet, informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización de las Participaciones Federales, en los términos que establezcan las reglas de operación del mismo.

Artículo 53. Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos locales, atribuibles a servidores públicos de las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México, las entidades superiores de fiscalización locales procederán a formularles el pliego de observaciones y, en caso de que no sea solventado, promoverán la imposición de sanciones por las responsabilidades administrativas y políticas a que hubiere lugar, en los términos de la legislación aplicable. Asimismo, promoverán las denuncias y querellas penales que procedan, cuando en cualquier momento cuenten con los elementos establecidos en la legislación en la materia.

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación haya realizado la fiscalización directamente, dará vista a las autoridades locales competentes para que promuevan la imposición de las sanciones que correspondan.

En el informe a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación incluirá el reporte correspondiente a lo establecido en este Capítulo.

Capítulo III
De la Fiscalización de Recursos Provenientes de Empréstitos de los Estados y Municipios que cuenten con la garantía de la Federación

Artículo 54. La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las garantías que, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, otorgue el Gobierno Federal sobre los financiamientos contratados por los Estados y Municipios, deberá fiscalizar:

I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal, y

II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos estatales y municipales.

Para el caso previsto en la fracción I, la Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo la fiscalización como parte de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública.

Tratándose de la fiscalización de los recursos a que se refiere la fracción II de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación realizará las auditorías en los mismos términos de los procedimientos establecidos en el Capítulo II del presente Título. En todo caso, la Auditoría Superior tendrá las atribuciones señaladas en los artículos 15 a 17 y 19 a 27 de esta Ley para la realización de sus auditorías, exclusivamente respecto a la gestión financiera, cuando las realice directamente.

TÍTULO QUINTO
Del Fincamiento de Responsabilidades
Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 55. Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de

responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:

I. Determinar en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos, y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la acción de responsabilidad para la imposición de las sanciones administrativas que correspondan a los responsables;

II. Dar vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas que no involucren los daños o perjuicios mencionados en la fracción anterior, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente;

III. Presentar las denuncias y querellas penales que correspondan ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por los probables delitos que se detecten derivado de sus auditorías.

Para la presentación de las denuncias y querellas no se requerirá agotar el procedimiento establecido en el Capítulo II del presente Título;

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en los procesos penales investigatorios y judiciales correspondientes. En estos casos, la Fiscalía recabará previamente la opinión de la Auditoría Superior de la Federación, respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, y

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara de Diputados que, en su caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 56. La Auditoría Superior de la Federación promoverá las acciones de responsabilidad para la imposición de sanciones administrativas en términos de la fracción I y, en su caso, penales en términos de la fracción III del artículo anterior a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, cuando derivado de las auditorías a cargo de ésta, no formulen las observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de información en los casos previstos en esta Ley.

Artículo 57. Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas materias.

Artículo 58. Las acciones de responsabilidad administrativa que la Auditoría Superior de la Federación promueva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tienen por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa imponga a los responsables.

Artículo 59. Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de los entes públicos y de la Auditoría Superior de la Federación, no eximen a éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.

Artículo 60. Las sanciones que imponga el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se fincarán independientemente de las demás sanciones que impongan otras autoridades competentes.

Capítulo II
Del Fincamiento de Responsabilidades Administrativas

Artículo 61. La Auditoría Superior de la Federación, con base en los resultados del Informe individual de auditoría, formulará a las entidades fiscalizadas los pliegos de observaciones derivados de la fiscalización, en los que se determinará en cantidad líquida, la responsabilidad de los presuntos infractores.

El monto que se determine conforme al párrafo anterior en ningún caso podrá ser inferior a los daños y perjuicios ocasionados y se actualizará en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratándose de contribuciones.

Artículo 62. Las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones, deberán solventar los mismos ante la Auditoría Superior de la Federación.

Los servidores públicos y las personas señaladas como presuntos responsables, podrán optar por hacer valer dentro del mismo plazo, las manifestaciones que a su derecho convenga y entregar la documentación que estimen pertinente a la Auditoría Superior de la Federación para solventar los pliegos de observaciones. Para tal efecto, la entidad fiscalizada notificará por escrito al presunto responsable en su lugar de trabajo, la recepción del pliego de observaciones, dentro de los 5 días hábiles posteriores a su recepción.

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, o bien, la documentación y argumentos no sean suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para solventarlos, ésta promoverá la acción de responsabilidad para imponer sanciones administrativas a los presuntos infractores ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 63. La Auditoría Superior de la Federación a través de su página de Internet, llevará un registro público actualizado de los servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución definitiva firme, a través del procedimiento administrativo a que se hace referencia en el presente Capítulo y lo hará del conocimiento de los órganos internos de control.

El registro al que se hace referencia en el párrafo anterior será actualizado cada tres meses.

Artículo 64.- SE DEROGA

Artículo 65.- SE DEROGA

Artículo 66.- SE DEROGA

Artículo 67.- SE DEROGA

Artículo 68.- SE DEROGA

Capítulo III
Del Recurso de Reconsideración

Artículo 69. Las multas que imponga y demás resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación conforme a esta Ley, podrán ser impugnados por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las mismas o por los particulares, personas físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior de la Federación, mediante el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El recurso de reconsideración se interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la multa o la resolución recurrida.

Artículo 70. ...

I. ...

II. ...

Una vez desahogada la prevención, la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo que no excederá de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el desechamiento del recurso. En este último caso, cuando se ubique en los siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el acto no sea definitivo; el escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no acompañe cualquiera de los documentos a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente; no se exprese agravio alguno; o si se encuentra en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la resolución o sanción recurrida;

III. a IV ...

...

Artículo 71. La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la multa o la resolución impugnada.

Artículo 72. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa o resolución recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice en cualesquiera de las formas establecidas por el Código Fiscal de la Federación el pago de la multa.

Artículo 73. Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover la acción de responsabilidad para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere este Título prescribirán en siete años.

...

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al momento que inicie el juicio de responsabilidades en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 77. ...

I. a II. ...

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe General Ejecutivo, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cámara;

IV. ...

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al Auditor Superior de la Federación para conocer en lo específico el Informe d General Ejecutivo;

VI. ...

VII. ...

La evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la Auditoría Superior de la Federación cumple con las atribuciones que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley le corresponden; el efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeño de los entes públicos, en los resultados

de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto, y en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan;

VI. a XV. ...

Artículo 78.- La Comisión presentará directamente a la Auditoría Superior de la Federación un informe que contenga las observaciones y las recomendaciones que se deriven del ejercicio de las atribuciones que esta Ley le confiere en materia de evaluación de su desempeño a más tardar el 30 de mayo del año en que presente el Informe General Ejecutivo. La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta de su atención al presentar el Informe General Ejecutivo del ejercicio siguiente.

Artículo 84. ...

I. a IV. ...

V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento;

VI. a VIII. ...

Artículo 85. ...

I. Representar a la Auditoría Superior de la Federación ante las entidades fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México y demás personas físicas y morales, públicas o privadas;

II. ...

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios de la misma, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley General de Bienes Nacionales, así como gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público de la Federación, afectos a su servicio;

IV. a IX. ...

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, sean éstos personas físicas o morales, la información que con motivo de la fiscalización se requiera;

XI. a XII. ...

XIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas que imponga conforme a esta Ley;

XIV. ...

XV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General Ejecutivo a más tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación de la Cuenta Pública Federal;

XVI. Autorizar que se lleven a cabo auditorías respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

XVII. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las entidades fiscalizadas y las entidades de fiscalización superior de

las entidades federativas, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio de carácter multinacional;

XVIII. ...

XIX. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria el cobro de las multas que se impongan en los términos de esta Ley;

XX. a XXII. ...

De las atribuciones previstas a favor del Auditor Superior de la Federación en esta Ley, sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX y XXI de este artículo son de ejercicio exclusivo del Auditor Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas.

Artículo 88. ...

I. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior de la Federación, las actividades relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis temáticos que sirvan de insumos para la preparación del Informe General Ejecutivo;

II. a VIII. ...

IX. Participar en los procedimientos que promueva ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la

Auditoría Superior de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las multas que imponga y resoluciones que emita la Auditoría Superior de la Federación conforme a esta Ley;

XI. a XII. ...

XIII. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el caso de las promociones de responsabilidades administrativas, denuncias penales y de juicio político, independientemente de que determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables, solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la resolución definitiva que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos;

XIV. Formular el proyecto de Informe General Ejecutivo, así como de los demás documentos que se le indique, y

XV. ...

Artículo 89. ...

I. a VI. ...

VII. Participar en los procedimientos que promueva para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

VIII. a XI. ...

Artículo 92. ...

I. a IV. ...

V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, el Informe General Ejecutivo;

VI. a VIII. ...

Artículo 103. ...

I. a IX. ...

X. Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones del Informe General Ejecutivo y demás documentos que le envíe la Auditoría Superior de la Federación;

XI. a XIII. ...

...

Artículo 109. La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Superior de la Federación en el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán ser considerados en el Informe General Ejecutivo.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se expide la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Artículo 1. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un órgano jurisdiccional con plena autonomía e independencia para dictar sus fallos, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.

El Tribunal cuenta con jurisdicción contenciosa administrativa para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares.

Asimismo, tiene jurisdicción sancionatoria para, en los términos la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, determinar responsabilidades administrativas e imponer sanciones a los servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y a particulares que participen en actos vinculados con éstas, incluyendo el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se ejercerá con autonomía y conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las disposiciones legales aplicables, bajo los principios de legalidad, certeza, independencia, honestidad,

responsabilidad y transparencia. Su administración será eficiente para lograr la eficacia de la justicia administrativa bajo el principio de rendición de cuentas.

Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, y de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal se sujetará a las siguientes reglas:

I. Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

II. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública;

III. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara de Diputados;

IV. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal, y

V. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia tesorería.

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entenderá, por:

I. Junta: La Junta de Gobierno y Administración

II. Ley: La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

III. Ley de Responsabilidades: la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves;

IV. Presidente del Tribunal: el Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y

V. Tribunal: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Capítulo II
De la competencia del Tribunal

Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;

II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;

III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;

IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;

V. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército,

de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones.

Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración;

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

VII. Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal, y las empresas productivas del Estado; así como, las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos federales cuando las leyes señalen expresamente la competencia del tribunal;

VIII. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición,

impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la Ley de la materia;

IX. Las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación, las entidades federativas o los Municipios, así como de sus entidades paraestatales y las empresas productivas del Estado;

X. Las que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior;

XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

XII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo;

XIII. Las que se funden en un tratado o acuerdo internacional para evitar la doble tributación o en materia comercial, suscritos por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado en su favor alguno de los referidos tratados o acuerdos;

XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias.

No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa;

XV. Las resoluciones dictadas en los recursos de revocación emitidas por la Secretaría de la Función Pública o los Órganos Internos de Control, en materia de sanciones por faltas administrativas no graves, y

XVI. Las señaladas en otras leyes como competencia del Tribunal.

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa.

Artículo 4. El Tribunal conocerá, además de los juicios que se promuevan contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación.

Artículo 5. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que sean de las materias señaladas en las fracciones del artículo 3 de esta Ley.

Artículo 6. El Tribunal conocerá de las acciones de responsabilidad promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones a los servidores públicos por actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y a los particulares vinculados con dichas faltas, en términos de lo dispuesto por la Ley General Responsabilidades Administrativas.

Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier Ente Público posea para imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.

TÍTULO SEGUNDO
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Capítulo I
De la estructura

Artículo 7. El Tribunal se integra por los órganos colegiados siguientes:

I. La Sala Superior;

II. La Junta de Gobierno y Administración, y

III. Las Salas Regionales.

Capítulo II
De la Sala superior

Artículo 8. La Sala Superior se integrará por dieciséis Magistrados. Funcionará en un Pleno General, en Pleno Jurisdiccional, y en tres Secciones. De los Magistrados de la Sala Superior, catorce ejercerán funciones jurisdiccionales, uno de los cuales presidirá el Tribunal de conformidad con las reglas establecidas en la presente Ley, y dos formarán parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 9. La Sala Superior tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día

hábil de la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.

Capítulo III
De los Plenos y Secciones de la Sala Superior

Artículo 10. El Pleno General se conformará por el Presidente del Tribunal, por los trece Magistrados que integran las Secciones de la Sala Superior y por los dos Magistrados de la Sala Superior que forman parte de la Junta de Gobierno y Administración.

Las sesiones del Pleno General serán públicas, excepto cuando la mayoría de los Magistrados presentes acuerden su privacidad, y sus determinaciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

Los debates serán dirigidos por el Presidente del Tribunal, bastará la mayoría simple de los presentes para la validez de la votación y en caso de empate el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Artículo 11. El Pleno Jurisdiccional estará integrado por el Presidente del Tribunal y por los diez Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Secciones de la Sala Superior, y bastará la presencia de siete de sus miembros para que se pueda tomar la votación respectiva.

Sus resoluciones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos. El Presidente del Tribunal dirigirá los debates.

Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se retirará el proyecto y el Presidente del Tribunal designará a otro Magistrado para que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto.

Si en dicha sesión persistiera el empate, el Presidente del Tribunal tendrá voto de calidad.

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.

Artículo 12. Las resoluciones de la Sección Tercera se tomarán por mayoría de votos, por lo que para la validez de las sesiones se requerirá siempre de la presencia de tres Magistrados.

Los Magistrados integrantes sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal. Tienen la obligación de estar presentes en la sesión y en la discusión del asunto. Los debates serán dirigidos por su Presidente.

En caso de impedimento o en ausencia por causa mayor; el Presidente del Tribunal solicitará a cualquiera de los Presidentes de las otras Secciones para que uno de ellos participe en las sesiones de la Tercera Sección en orden de turno. En caso de que ninguno de los dos se encuentre presente, podrá participar el Presidente del Tribunal o cualquier Magistrado de Sala Superior.

Siempre que un Magistrado disintiere de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la sesión.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado ponente aceptare las adiciones o reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los Magistrados fuera en sentido distinto al del proyecto, uno de ellos redactará la resolución correspondiente.

En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de cinco días hábiles. Las resoluciones emitidas de forma colegiada por el Pleno de esta Sección deberán ser firmadas por los tres Magistrados y por el Secretario Adjunto dela Sección.

Artículo 13. Las sesiones ordinarias de los Plenos se celebrarán dentro de los períodos a que alude el artículo 9 de esta Ley, en los días y horas que fijen cada uno. También podrán sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes, la que deberá ser presentada al Presidente del Tribunal a fin de que emita la convocatoria correspondiente.

Artículo 14. La Sala Superior del Tribunal estará integrada por tres secciones. La Primera y la Segunda con competencia administrativa y fiscal respectivamente, y la Tercera con competencia en responsabilidades administrativas.

Artículo 15. Las Secciones Primera y Segunda estarán integradas cada una por cinco Magistrados de Sala Superior.

La Sección Tercera se compondrá de tres Magistrados de Sala Superior, quienes por la naturaleza de su especialización no integrarán el Pleno Jurisdiccional, ni podrán ser designados como integrantes de la Junta de Gobierno y Administración, sin embargo, sí integrarán Pleno General.

Artículo 16. Las Secciones sesionarán públicamente, de las cuales se levantará Acta y se tomará versión estenográfica, excepto cuando se designe a su Presidente, o la mayoría de los Magistrados presentes acuerden su privacidad por la trascendencia y los efectos que pudieran ocasionar su publicidad. De las sesiones privadas sólo se levantará Acta.

Capítulo IV
De las atribuciones del Pleno General

Artículo 17. Son facultades del Pleno General las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de la Sala Superior al Presidente del Tribunal;

II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y enviarlo a través del Presidente del Tribunal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en los términos de los criterios generales de política económica y conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

III. Aprobar y expedir el Reglamento Interior del Tribunal y las reformas que le proponga la Junta de Gobierno y Administración;

IV. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente Ley;

V. Elegir a los Magistrados de Sala Superior y de las Salas Regionales, y a los que se integrarán la Junta de Gobierno y Administración conforme a lo previsto en la presente Ley; en su caso, sustituirlos por razones debidamente fundadas;

VI. Aprobar y someter a consideración del Presidente de la República la propuesta para el nombramiento de Magistrados del Tribunal para otros periodos, previa evaluación de la Junta de Gobierno y Administración; o en su caso, para nuevos nombramientos;

VII. Asignar la adscripción de los Magistrados de las Secciones de Sala Superior;

VIII. Designar al Secretario General de Acuerdos a propuesta del Presidente del Tribunal;

IX. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o acordar cuál de éstos corresponde atenderlas;

X. Ejecutar las sanciones a Magistrados de Salas Regionales;

XI. Determinar las Salas Regionales que recibirán apoyo de las Salas Auxiliares, y

XII. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Pleno General.

Capítulo V
De las atribuciones del Pleno jurisdiccional

Artículo 18. Son facultades del Pleno Jurisdiccional las siguientes:

I. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y

precedentes del Pleno Jurisdiccional, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

II. Resolver las contradicciones de criterios, tesis o jurisprudencias sustentados por las Salas Regionales y Secciones de Sala Superior, según sea el caso, determinando cuál de ellos debe prevalecer, lo cual constituirá jurisprudencia;

III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, incluidos aquellos que sean de competencia especial de la Primera y Segunda Secciones; con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección;

IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción;

V. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias;

VI. En los asuntos del conocimiento del Pleno Jurisdiccional, ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la instrucción;

VII. Resolver, en Sesión Privada sobre las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal. Así como habilitar a los Primeros Secretarios de Acuerdos de los Magistrados de las Salas

Regionales para que los sustituyan; y en su caso, señalar la Sala más próxima que conocerá del asunto, y

VIII. Las señaladas en las demás leyes que competa conocer al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal.

Capítulo VI
De las atribuciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior

Artículo 19. Son facultades de la Primera y Segunda Sección, las siguientes:

I. Elegir de entre los Magistrados de la Primera Sección o bien, de los Magistrados integrantes de la Segunda Sección, según sea el caso, al Presidente de la Sección correspondiente;

II. Dictar sentencia definitiva en los juicios que traten las materias señaladas en el artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior, a excepción de aquéllos en los que se controvierta exclusivamente la aplicación de cuotas compensatorias;

III. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, con excepción de los que sean competencia exclusiva de la Tercera Sección;

IV. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre de instrucción;

V. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con el cumplimiento de las resoluciones y determinar las medidas que sean procedentes para la efectiva ejecución de las sentencias que emitan;

VI. Ordenar que se reabra la instrucción y la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al procedimiento, o en que así lo amerite;

VII. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia de la Primera y Segunda Sección, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

VIII. Resolver los conflictos de competencia de conformidad con las disposiciones legales aplicables;

IX. Resolver los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se funden en un Tratado o Acuerdo Internacional para evitar la doble tributación, o en materia comercial, suscrito por México, o cuando el demandante haga valer como concepto de impugnación que no se haya aplicado a su favor alguno de los referidos Tratados o Acuerdos.

Cuando exista una Sala Especializada con competencia en determinada materia, será dicha Sala quien tendrá la competencia original para conocer y resolver los asuntos que se funden en un Convenio, Acuerdo o Tratado Internacional relacionado con las materias de su competencia, salvo que la Sala Superior ejerza su facultad de atracción;

X. Designar al Secretario Adjunto de la Primera y Segunda Sección que corresponda, a propuesta del Presidente de cada Sección, y

XI. Las señaladas en las demás leyes como de su exclusiva competencia.

Artículo 20. Las resoluciones de la Primera y Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, se tomarán por unanimidad o mayoría de votos.

Los Magistrados integrantes de la Primera y Segunda Sección sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedimento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

En los asuntos del conocimiento de la Primera y Segunda Secciones, en caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que se convocará a los Magistrados que no estuvieren legalmente impedidos; si en esta sesión tampoco se obtuviere mayoría, se desechará el proyecto y el Presidente de la Sección designará a otro Magistrado para que, teniendo en cuenta las opiniones vertidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persistiera el empate, el Presidente de la Sección tendrá voto de calidad.

Capítulo VII
De las atribuciones de la Sección Tercera de la Sala Superior

Artículo 21. Son facultades de la Tercera Sección las siguientes:

I. Elegir al Presidente de la Tercera Sección de entre los Magistrados que la integran;

II. Resolver el recurso de apelación que interpongan las partes en contra de las resoluciones en materia de responsabilidades administrativas, dictadas por las Salas Regionales ;

III. Resolver los juicios con características especiales que atraiga el Pleno de la Sección, competencia de las Salas Regionales, a que se refiere el artículo 36 de esta Ley;

IV. Resolver el recurso de reclamación que proceda en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves;

V. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia, de las Salas Regionales, en las materias a que se refiere el artículo 36 de esta Ley, conforme a las disposiciones legales aplicables, aprobar las tesis y sus precedentes, así como ordenar su publicación en la Revista del Tribunal;

VI. Designar al Secretario Adjunto de la Tercera Sección, a propuesta del Presidente de la Sección, y

VII. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la Sección.

Capítulo VIII
De las atribuciones de la Junta de Gobierno y Administración

Artículo 22. La Junta de Gobierno y Administración será el órgano del Tribunal que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, y contará con autonomía técnica y de gestión para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Artículo 23. La Junta de Gobierno y Administración se integrará por:

I. El Presidente del Tribunal, quien también será el Presidente de la Junta de Gobierno y Administración;

II. Dos Magistrados de la Sala Superior, y

III. Dos Magistrados de Sala Regional.

Los Magistrados de Sala Superior y de Sala Regional que integren la Junta de Gobierno y Administración serán electos por el Pleno General en forma escalonada por periodos de dos años y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente. Sólo serán elegibles aquellos Magistrados cuyos nombramientos cubran el periodo del cargo en dicha Junta.

Los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración no ejercerán funciones jurisdiccionales. Una vez que concluyan su encargo, se reintegrarán a las funciones jurisdiccionales por el tiempo restante del periodo por el cual fueron designados.

Artículo 24. Son facultades de la Junta de Gobierno y Administración, las siguientes:

I. Proponer, para aprobación del Pleno General, el proyecto de Reglamento Interior del Tribunal;

II. Expedir los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del Tribunal;

III. Aprobar la formulación del proyecto de presupuesto del Tribunal, para los efectos señalados en el artículo 17, fracción II de esta Ley;

IV. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos que le requiera el Pleno General, para los efectos del artículo 17, fracción VI, de esta Ley. La evaluación se basará en los elementos objetivos y datos estadísticos sobre el desempeño del cargo, de conformidad con las disposiciones aplicables;

V. Llevar a cabo los estudios necesarios para determinar las regiones, sedes y número de las Salas Regionales; las sedes y número de las Salas Auxiliares; la competencia material y territorial de las Salas

Especializadas, así como las materias específicas de competencia de las Secciones de la Sala Superior y los criterios conforme a los cuales se ejercerá la facultad de atracción, de acuerdo con lo que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Adscribir a las Salas Regionales ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas a los Magistrados Regionales;

VII. Designar a los Magistrados Supernumerarios que cubrirán las ausencias de los Magistrados de Sala Regional;

VIII. Aprobar los nombramientos de los servidores públicos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal, observando las Condiciones Generales de Trabajo respecto a los trabajadores a los que les sean aplicables;

IX. Establecer, mediante acuerdos generales, las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal, de conformidad con su presupuesto autorizado;

X. Proponer al Pleno General, acorde con los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, el Estatuto de la Carrera, que contendrá:

a. Los criterios de selección para el ingreso al Tribunal en alguno de los puestos comprendidos en la carrera jurisdiccional;

b. Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y promoción en los cargos, y

c. Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a los servidores públicos jurisdiccionales de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria del Tribunal;

XI. Expedir las normas de carrera para los servidores públicos a que se refieren las fracciones XI y XIII del artículo 41 de esta Ley;

XII. Autorizar los programas permanentes de capacitación, especialización y actualización en las materias competencia del Tribunal para sus servidores públicos, que elabore el Centro de Estudios Superiores de Derecho Fiscal y Administrativo;

XIII. Dictar las reglas conforme a las cuales se deberán practicar visitas para verificar el correcto funcionamiento de las Salas Regionales, ordinarias, auxiliares, especializadas o mixtas, así como señalar las que corresponderá visitar a cada uno de sus miembros;

XIV. Acordar la distribución de los recursos presupuestales conforme a la ley y el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, dictar las órdenes relacionadas con su ejercicio en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y supervisar su legal y adecuada aplicación;

XV. Establecer las comisiones que estime convenientes para su adecuado funcionamiento, señalando su materia e integración;

XVI. Fijar las comisiones requeridas para el adecuado funcionamiento del Tribunal, indicando el o los servidores públicos comisionados, así como el objeto, fines y periodo en que se realizarán, determinando, en su caso, su terminación anticipada;

XVII. Llevar el registro de los peritos del Tribunal y mantenerlo actualizado;

XVIII. Nombrar, remover, suspender y resolver todas las cuestiones que se relacionen con los nombramientos de los servidores públicos de la carrera jurisdiccional, en los términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Nombrar, a propuesta de su Presidente, a los titulares de los órganos auxiliares y unidades de apoyo administrativo, así como a los titulares de las comisiones, y removerlos de acuerdo con las disposiciones aplicables;

XX. Nombrar, a propuesta del superior jerárquico, y remover a los servidores públicos del Tribunal no comprendidos en las fracciones XIII y XIV de este artículo;

XXI. Conceder licencias pre pensionarias con goce de sueldo a los Magistrados, Titular del Órgano Interno de Control, Secretario General de Acuerdos y Secretarios Adjuntos de las Secciones, hasta por tres meses;

XXII. Conceder licencias con goce de sueldo a los Magistrados por periodos inferiores a un mes y sin goce de sueldo hasta por dos meses más, siempre que exista causa fundada que así lo amerite, en el entendido de que en caso de enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia;

XXIII. Aprobar la suplencia temporal de los Magistrados de Sala Regional, por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente;

XXIV. Conceder o negar licencias a los Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales, así como al personal administrativo del Tribunal, en los términos de las disposiciones aplicables, previa opinión, en su caso, del Magistrado o del superior jerárquico al que estén adscritos;

XXV. Regular y supervisar las adquisiciones de bienes y servicios, las obras y los arrendamientos que contrate el Tribunal y comprobar que se apeguen a las leyes y disposiciones en dichas materias;

XXVI. Dirigir la buena marcha del Tribunal dictando las medidas necesarias para el despacho pronto y expedito de los asuntos administrativos del Tribunal y aplicar las sanciones que correspondan;

XXVII. Imponer a solicitud de los Magistrados Presidentes de Sala Regional, la multa que corresponda, a los Actuarios que no cumplan con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

XXVIII. Evaluar el funcionamiento de las áreas administrativas, de informática, del Centro de Estudios Superiores en Derecho Fiscal y Administrativo y del área de publicaciones del Tribunal, a fin de constatar la adecuada prestación de sus servicios;

XXIX. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de partes comunes y de Sala, las coordinaciones y oficinas de Actuarios, así como de los archivos y Secretarías de Acuerdos o Secretarías Técnicas en las Salas y Secciones del Tribunal, según sea el caso;

XXX. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación, para que quienes estén interesados puedan solicitar la devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por ellos;

XXXI. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y supervisar que se solventen las observaciones que formule, a través de la Secretaría Técnica correspondiente;

XXXII. Integrar y desarrollar, dentro del Sistema de Justicia en Línea, un subsistema de información estadística sobre el desempeño del Tribunal,

de los Plenos y de las Secciones de la Sala Superior, así como de las Salas Regionales, que contemple por lo menos el número de asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o modificadas;

XXXIII. Establecer y administrar el Boletín Electrónico para la notificación de las resoluciones y acuerdos, de conformidad con lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como el control de las notificaciones que se realicen por medios electrónicos y supervisar la correcta operación y funcionamiento del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal para la tramitación de los juicios en línea;

XXXIV. Emitir los acuerdos normativos que contengan los lineamientos técnicos y formales que deban observarse en la substanciación del juicio en línea;

XXXV. Supervisar la publicación de las jurisprudencias, precedentes y tesis aisladas emitidas por las Salas y Secciones en la Revista del Tribunal;

XXXVI. Formular la memoria anual de funcionamiento del Tribunal para ser presentada al Presidente de la República y al Congreso de la Unión;

XXXVII. Llevar el registro de firmas de los Magistrados y Secretarios del Tribunal, y

XXXVIII. Resolver los demás asuntos que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 25. Para la validez de las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración, bastará la presencia de tres de sus miembros, incluyendo la asistencia del Presidente de la misma.

Artículo 26. Las resoluciones de la Junta de Gobierno y Administración se tomarán por mayoría de votos de los Magistrados miembros presentes, quienes no podrán abstenerse de votar. En caso de empate, el Presidente de dicha Junta tendrá voto de calidad.
Las sesiones de la Junta de Gobierno y Administración serán privadas.

Artículo 27. El Presidente del Tribunal lo será también de la Junta de Gobierno y Administración. En el caso de faltas temporales del Presidente del Tribunal, será suplido por los Magistrados de Sala Superior integrantes de dicha Junta, siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Ante la falta definitiva, renuncia o sustitución de los Magistrados previstos en las fracciones II y III del artículo 23 de esta Ley que integren la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno General designará a un nuevo integrante para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo como integrante de la Junta de Gobierno y Administración en el periodo inmediato siguiente.

Las faltas temporales de los Magistrados que integren la Junta de Gobierno y Administración serán suplidas por los Magistrados de Sala Superior o de Sala Regional que determine el Pleno General de la Sala Superior, según sea el caso, siempre que sean elegibles para ello en los términos de esta Ley.

Artículo 28. La Junta de Gobierno y Administración, para atender los asuntos de su competencia, contará con los Secretarios Técnicos, Operativos y Auxiliares necesarios.

Capítulo IX
De las Salas Regionales Ordinarias, Auxiliares, Especializadas o Mixtas

Artículo 29. Las Salas Regionales tendrán el carácter siguiente:

I. Ordinarias: Conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 3, 4, 5 y 6 de esta Ley, con excepción de aquéllos que sean competencia exclusiva de las Salas Especializadas y de las Secciones;

II. Auxiliares: Apoyarán a las Salas Regionales con carácter de Ordinarias o Especializadas, en el dictado de las sentencias definitivas, diversas a las que se tramiten en la vía sumaria. Su circunscripción territorial la determinará el Pleno General a propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, de acuerdo a los estudios cualitativos y cuantitativos;

III. Especializadas: Atenderán las materias específicas, con la jurisdicción, competencia y sedes que se determinen en esta Ley o en el Reglamento Interior de este Tribunal, de acuerdo a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las necesidades del servicio, y

IV. Mixtas: Serán aquellas que contengan dos de las funciones anteriores.

Artículo 30. El Tribunal tendrá Salas Regionales, con jurisdicción en la circunscripción territorial que les sea asignada en el Reglamento Interior del Tribunal, integradas por tres Magistrados cada una.

Artículo 31. Para los efectos del artículo 30 de esta Ley, el territorio nacional se dividirá en regiones con los límites territoriales que se determinen en el Reglamento Interior del Tribunal, conforme a los estudios y propuesta de la Junta de Gobierno y Administración, con base en las cargas de trabajo y los requerimientos de administración de justicia, así como la disponibilidad presupuestaria del Tribunal.

Artículo 32. Los asuntos cuyo despacho competa a las Salas Regionales, serán asignados por turno a los Magistrados que integren la Sala de que se trate.

Para la validez de las sesiones de la Sala, será indispensable la presencia de los tres Magistrados y para resolver bastará mayoría de votos.

En los juicios en la vía sumaria, el Magistrado que haya instruido el juicio lo resolverá, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Las sesiones de las Salas Regionales, así como las diligencias o audiencias que deban practicar serán públicas. No obstante, serán privadas las sesiones en que se designe al Presidente de la Sala, se ventilen cuestiones administrativas o la ley así lo prevea.

Artículo 33. Los Presidentes de las Salas Regionales, serán designados por los Magistrados que integren la Sala en la primera sesión de cada ejercicio, durarán en su cargo un año y no podrán ser reelectos para el periodo inmediato siguiente.

En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 34. Los Presidentes de las Salas Regionales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Atender la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma;

II. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

III. Dictar las medidas que exijan el orden, buen funcionamiento y la disciplina de la Sala, exigir que se guarde el respeto y consideración debidos e imponer las correspondientes correcciones disciplinarias;

IV. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sala;

V. Realizar los actos jurídicos o administrativos de la Sala que no requieran la intervención de los otros dos Magistrados que la integran;

VI. Proporcionar oportunamente a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal los informes sobre el funcionamiento de la Sala;

VII. Dirigir la oficialía de partes y los archivos de la Sala;

VIII. Verificar que en la Sala se utilice y mantenga actualizado el sistema de control y seguimiento de juicios, así como el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

IX. Vigilar que sean subsanadas las observaciones formuladas a la Sala Regional durante la última visita de inspección;

X. Proponer a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal se imponga una multa al actuario que no cumpla con sus obligaciones legales durante la práctica de las notificaciones a su cargo;

XI. Comunicar a la Junta de Gobierno y Administración la falta de alguno de sus Magistrados integrantes, así como el acuerdo por el que se suplirá dicha falta por el primer Secretario de Acuerdos del Magistrado ausente, y

XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Capítulo X
De las Salas Regionales Ordinarias

Artículo 35. Las Salas Regionales Ordinarias conocerán de los juicios por razón de territorio, atendiendo al lugar donde se encuentre el domicilio fiscal del demandante, excepto cuando:

I. Se trate de personas morales que:

a. Formen parte del sistema financiero, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o

b. Tengan el carácter de controladoras o controladas, de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, y determinen su resultado fiscal consolidado.

II. El demandante resida en el extranjero y no tenga domicilio fiscal en el país, y

III. Se impugnen resoluciones emitidas por la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria o por las unidades administrativas adscritas a dicha Administración General.

En los casos señalados en estas fracciones, será competente la Sala Regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que haya dictado la resolución impugnada y, siendo varias las resoluciones impugnadas, la Sala Regional ordinaria de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad que pretenda ejecutarlas.

Cuando el demandante resida en territorio nacional y no tenga domicilio fiscal, se atenderá a la ubicación de su domicilio particular.

Si el demandante es una autoridad que promueve la nulidad de alguna resolución administrativa favorable a un particular, será competente la Sala Regional de la circunscripción territorial en que se encuentre la sede de la autoridad actora.

Se presumirá que el domicilio señalado en la demanda es el fiscal salvo que la parte demandada demuestre lo contrario.

Artículo 36. Además de los juicios a que se refiere el artículo anterior, las Salas Regionales conocerán de aquellos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:

I. Las acciones de responsabilidad administrativa que promuevan las autoridades competentes, para la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos derivadas de actos u omisiones que constituyan faltas administrativas graves y sanciones a los particulares vinculados con las mismas, así como para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales;

II. Las resoluciones dictadas en los recursos de revocación emitidas por la Secretaría de la Función Pública o los Órganos Internos de Control, en materia de sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de la Ley General de Responsabilidades;

III. Las resoluciones definitivas relacionadas con la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Las dictadas por autoridades administrativas en materia de licitaciones públicas;

V. Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación, o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante, y las que por repetición impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado los pagos correspondientes a la indemnización, en los términos de la ley de la materia;

VI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, respecto de los supuestos descritos en los incisos anteriores de este artículo;

VII. Las dictadas en los juicios promovidos por los secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal del tribunal, en contra de sanciones derivadas de actos u omisiones que constituyan faltas administrativas no graves, impuestas por la Junta de Gobierno y Administración o por el Órgano Interno de Control, en aplicación de la Ley de Responsabilidades, y

VIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo.

Artículo 37 Los Magistrados instructores de las Salas Regionales con carácter de ordinarias, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Admitir, desechar o tener por no presentada la demanda o su ampliación, si no se ajustan a la ley;

II. Admitir o tener por no presentada la contestación de la demanda o de su ampliación o, en su caso, desecharlas;

III. Admitir o rechazar la intervención del tercero;

IV. Admitir, desechar o tener por no ofrecidas las pruebas;

V. Sobreseer los juicios antes de que se cierre la instrucción, cuando el demandante se desista de la acción o se revoque la resolución impugnada, así como en los demás casos que establezcan las disposiciones aplicables;

VI. Admitir, desechar y tramitar los incidentes y recursos que les competan, formular los proyectos de resolución, de aclaraciones de sentencia y de resoluciones de queja relacionadas con el cumplimiento de las sentencias, y someterlos a la consideración de la Sala;

VII. Dictar los acuerdos o providencias de trámite necesarios para instruir el juicio, incluyendo la imposición de las medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones, acordar las promociones de las partes y los informes de las autoridades y atender la correspondencia necesaria, autorizándola con su firma;

VIII. Formular el proyecto de sentencia definitiva y, en su caso, de cumplimiento de ejecutorias;

IX. Dictar los acuerdos y providencias relativas a las medidas cautelares provisionales en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como proponer a la Sala el proyecto de resolución correspondiente a la medida cautelar definitiva que se estime procedente;

X. Supervisar la debida integración de las actuaciones en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal;

XI. Proponer a la Sala Regional la designación de perito tercero, para que se proceda en los términos de la fracción V del artículo 43 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;

XII. Tramitar y resolver los juicios en la vía sumaria que por turno le correspondan, atendiendo a las disposiciones legales que regulan dicho procedimiento;

XIII. Radicar las acciones de responsabilidad administrativa presentadas por las autoridades competentes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

XIV. Determinar la no responsabilidad cuando del análisis de informes de presunta responsabilidad se derive que no se trata de una falta administrativa grave, de conformidad en los términos de la Ley General de Responsabilidades;

XV. Instruir y proveer las acciones necesarias para determinar con certeza si el acto u omisión objeto de la acción de responsabilidad actualiza el supuesto previsto en la falta administrativa grave que se le imputa al probable infractor;

XVI. Resolver sobre el otorgamiento de medidas cautelares que correspondan;

XVII. Formular el proyecto de resolución correspondiente y en caso de determinar la comisión de una falta administrativa grave, preverá la sanción correspondiente, la cual incluirá el pago de las indemnizaciones que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, y

XVIII. Las demás que les correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.

Capítulo XI
De las Salas Regionales Auxiliares

Artículo 38. Las Salas Auxiliares ejercerán jurisdicción material mixta y territorial en toda la República, y tendrán su sede en el lugar que determine el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 39. Dichas Salas auxiliarán a las Salas Regionales tanto en el dictado de las sentencias definitivas, como en la instrucción de los juicios, según lo defina la Junta de Gobierno y Administración.

Artículo 40. Las Salas Auxiliares también auxiliarán a las Salas Regionales en la instancia de aclaración y en el cumplimiento de ejecutorias del Poder Judicial de la Federación, cuando corresponda a sentencias dictadas por ellas mismas, en los juicios instruidos por las Salas Regionales que se determinen por el Pleno General de la Sala Superior, en los términos de lo establecido por el artículo 17, fracción XI, de esta Ley.

TÍTULO TERCERO
DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL

Capítulo Único
Disposiciones generales

Artículo 41. El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes:

I. Magistrados de Sala Superior;

II. Magistrados de Sala Regional;

III. Magistrados Supernumerarios de Sala Regional;

IV. Secretario General de Acuerdos;

V. Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones;

VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior;

VII. Secretarios de Acuerdos de Sala Regional;

VIII. Actuarios;

IX. Oficiales Jurisdiccionales;

X. Titular del Órgano Interno de Control;

XI. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares;

XII. Director del Centro de Estudios sobre Justicia Administrativa, y

XIII. Los demás que con el carácter de mandos medios y superiores señale el Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto autorizado.

Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados personal de confianza.

El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su presupuesto.

Artículo 42. Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince años improrrogables.

Artículo 43. Los Magistrados de Sala Regional y los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años.

Los Magistrados de Sala Regional, podrán ser considerados para nuevos nombramientos.

Los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, no podrán ser nombrados nuevamente para ocupar dicho cargo.

Artículo 44. Son requisitos para ser Magistrado los siguientes:

I. Ser mexicano por nacimiento;

II. Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

III. Ser mayor de treinta y cinco años de edad a la fecha del nombramiento;

IV. Contar con notoria buena conducta;

V. Ser licenciado en derecho con título registrado, expedido cuando menos diez años antes del nombramiento, y

VI. Contar como mínimo con ocho años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Artículo 45. Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal, padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo, así como cumplir setenta y cinco años de edad.

Artículo 46. Cuando los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan sido nombrados, la Secretaria Operativa de Administración lo hará saber al Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, quien notificará esta circunstancia al Presidente de la República y, podrá someter a su consideración la propuesta que previamente haya aprobado el Pleno General.

Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido nombrados, se comunicarán de inmediato al Presidente de la República por el Presidente del Tribunal, quien someterá a su consideración la propuesta que, en su caso, haya aprobado el Pleno General, para que se proceda a los nombramientos de los Magistrados que las cubran.

Las faltas definitivas de Magistrados en Salas Regionales, serán cubiertas provisionalmente por los Magistrados Supernumerarios adscritos por la Junta de Gobierno y Administración o a falta de ellos por el primer secretario del Magistrado ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este artículo.

Las faltas temporales y las comisiones a que se refiere el artículo 24, fracción XVI de esta Ley hasta por un mes de los Magistrados en Salas Regionales, se suplirán por el primer secretario del Magistrado ausente. Las faltas temporales o las comisiones antes citadas superiores a un mes serán cubiertas por los Magistrados Supernumerarios o a falta de éstos por el primer secretario del Magistrado ausente. La suplencia comprenderá todo el lapso de la falta temporal, o de la

comisión, salvo en aquellos casos en los que la Junta de Gobierno y Administración determine la conclusión anticipada de la misma.

El Reglamento Interior del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignación de expedientes en los casos de faltas temporales, excusas o recusaciones de los Magistrados de la Sala Superior.

Artículo 47. El Tribunal contará con diez Magistrados Supernumerarios de Sala Regional, que cubrirán las faltas de los Magistrados de dichas Salas, en los casos previstos en esta Ley.

Los Magistrados Supernumerarios, durante el tiempo que no cubran las faltas señaladas en el párrafo anterior, deberán desempeñar las tareas que les encomiende el Pleno General.

Artículo 48. Para ser Secretario de Acuerdos se requiere:

I. Ser mexicano;

II. Ser mayor de veinticinco años de edad;

III. Contar con reconocida buena conducta;

IV. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, y

V. Contar como mínimo con tres años de experiencia en materia fiscal o administrativa.

Para ser designado Primer Secretario de Acuerdos de Sala Regional se requiere tener treinta y cinco años de edad y tres años de antigüedad en el cargo de Secretario de Acuerdos.

Los Actuarios deberán reunir los mismos requisitos que para ser Secretario de Acuerdos, salvo el relativo a la experiencia, que será como mínimo de dos años en materia fiscal o administrativa.

Los Oficiales Jurisdiccionales deberán ser mexicanos, mayores de dieciocho años, pasantes en derecho y de reconocida buena conducta.

Artículo 49. El Tribunal contará con un sistema profesional de carrera jurisdiccional, basado en los principios de honestidad, eficiencia, capacidad y experiencia, el cual comprenderá a los servidores públicos a que se refieren las fracciones VI a IX del artículo 41 de esta Ley.

El sistema abarcará las fases de ingreso, promoción, permanencia y retiro de dichos servidores públicos, de manera que se procure la excelencia por medio de concursos y evaluaciones periódicas, y de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en el Estatuto correspondiente.

Con base en lo previsto en este artículo, el Tribunal establecerá y regulará, mediante disposiciones generales, el sistema de carrera de los servidores públicos previstos en las fracciones XI y XIII del artículo 41 de esta Ley.

Artículo 50. Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes:

I. Representar al Tribunal, a la Sala Superior, al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, ante toda clase de autoridades y delegar el ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo, así como atender los recursos de reclamación de responsabilidad patrimonial en contra de las actuaciones atribuidas al propio Tribunal;

II. Despachar la correspondencia del Tribunal;

III. Convocar a sesiones al Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior y a la Junta de Gobierno y Administración, dirigir sus debates y conservar el orden en éstas;

IV. Someter al conocimiento del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior los asuntos de la competencia del mismo, así como aquéllos que considere necesario;

V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno General y Jurisdiccional de la Sala Superior, y firmar el engrose de las resoluciones;

VI. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos al Pleno para su resolución;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante cualquiera de los Plenos;

IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de los Plenos;

X. Presidir las sesiones de la Sección que lo requiera para integrar el quórum;

XI. Fungir provisionalmente como Presidente de Sección, en los casos en que ésta se encuentre imposibilitada para elegir a su Presidente;

XII. Rendir a través de la Secretaría General los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sala Superior, al Pleno General de la Sala Superior o a la Junta de Gobierno y Administración, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo;

XIII. Tramitar y someter a la consideración del Pleno las excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados del Tribunal;

XIV. Rendir anualmente ante la Sala Superior un informe dando cuenta de la marcha del Tribunal y de las principales jurisprudencias establecidas por el Pleno y las Secciones;

XV. Autorizar, junto con el Secretario Auxiliar de la Junta de Gobierno y Administración, las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de la Junta de Gobierno y Administración, y firmar el engrose de las resoluciones respectivas, y

XVI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 51. Compete a los Presidentes de las Secciones:

I. Atender la correspondencia de la Sección, autorizándola con su firma;

II. Convocar a sesiones, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones;

III. Autorizar las actas en que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos, así como firmar los engroses de las resoluciones;

IV. Rendir los informes previos y justificados cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la Sección, así como informar del cumplimiento dado a las ejecutorias en dichos juicios;

V. Tramitar los incidentes, recursos, aclaraciones de sentencias, así como la queja, cuando se trate de juicios que se ventilen ante la Sección;

VI. Enviar al Presidente del Tribunal las excusas, excitativas de justicia y recusaciones de los Magistrados que integren la Sección, para efectos de turno;

VII. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios cuando a juicio de la Sección se beneficie la rapidez del proceso;

VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones de la Sección;

IX. Ejercer la facultad de atracción de los juicios con características especiales, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de someterlos a la Sección para su resolución, y

X. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

Artículo 52. Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal:

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno General;

II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno General de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Revisar los engroses de las resoluciones del Pleno formulados por el Magistrado ponente, autorizándolos en unión del Presidente del Tribunal;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Pleno General, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución del Pleno General;

VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sala Superior y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

VIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes que obran en la Sala Superior, y

IX. Las demás que le correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 53. Corresponde a los Secretarios Adjuntos de Acuerdos de las Secciones:

I. Acordar con el Presidente de la Sección, lo relativo a las sesiones de la misma;

II. Dar cuenta en las sesiones de la Sección de los asuntos que se sometan a su consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y comunicar las decisiones que se acuerden;

III. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sección correspondiente, autorizándolas en unión del Presidente de la Sección;

IV. Tramitar y firmar la correspondencia de las Secciones, cuando ello no corresponda al Presidente de la Sección;

V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias, estudios o proyectos para las resoluciones de las Secciones;

VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de las Secciones;

VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Sección y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VIII. Las demás que les encomiende el Presidente de la Sección.

Artículo 54. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior:

I. Auxiliar al Magistrado al que estén adscritos en la formulación de los proyectos de resoluciones que les encomienden;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado ponente;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado al que estén adscritos cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala Superior;

IV. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Ponencia a la que estén adscritos;

V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las constancias de los expedientes electrónicos de la Ponencia a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones, y

VI. Desempeñar las demás atribuciones que las disposiciones aplicables les confieran.

Artículo 55. Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de Sala Regional:

I. Proyectar los autos y las resoluciones que les indique el Magistrado instructor;

II. Autorizar con su firma las actuaciones del Magistrado instructor y de la Sala Regional;

III. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado instructor cuando éstas deban practicarse fuera del local de la Sala y dentro de su jurisdicción;

IV. Proyectar las sentencias y engrosarlas, en su caso, conforme a los razonamientos jurídicos de los Magistrados;

V. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de la Sala a la que estén adscritos;

VI. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requiera incorporar a un expediente tramitado en línea, así como imprimir y certificar las

constancias de los expedientes electrónicos de la Sala a la que estén adscritos y las reproducciones en medios electrónicos de dichas actuaciones;

VII. Elaborar el proyecto de acuerdo de radicación de las acciones de responsabilidad remitidas por las autoridades competentes en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves;

VIII. Realizar el proyecto de devolución de las acciones de responsabilidad, cuando de su análisis determine que la conducta no está prevista como falta administrativa grave;

IX. Formular el proyecto de resolución correspondiente, que incluirá la imposición de las sanciones administrativas que correspondan al servidor público que haya cometido faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que hayan incurrido en las mismas, y

X. Las demás que señalen las disposiciones aplicables.

Artículo 56. Corresponde a los Actuarios:

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la ley, las resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados;

II. Practicar las diligencias que se les encomienden, y

III. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 57. Corresponde al Secretario de la Junta de Gobierno y Administración:

I. Preparar los proyectos y resoluciones que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta;

II. Supervisar la ejecución de los acuerdos tomados por la Junta, y asentarlos en el libro de actas respectivo;

III. Asistir al Presidente del Tribunal en las sesiones que se lleven a cabo por la Junta en los asuntos que sean de su competencia conforme a esta Ley, a su Reglamento Interior y a los acuerdos generales correspondientes, levantando las actas respectivas, y

IV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento Interior del Tribunal.

El Secretario de la Junta de Gobierno y Administración, para el ejercicio de las funciones citadas en las fracciones anteriores, se auxiliará del personal que al efecto establezca el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 58. El Tribunal contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular ejercerá las facultades que a que se refiere la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

Artículo 59. El Tribunal contará con un registro de peritos, que lo auxiliarán con el carácter de peritos terceros, como profesionales independientes, los cuales deberán tener título debidamente registrado en la ciencia o arte a que pertenezca la cuestión sobre la que deba rendirse el peritaje o proporcionarse la asesoría, si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados y, si no lo estuvieren, deberán ser personas versadas en la materia.

Para la integración del registro y permanencia en el mismo, así como para contratación y pago de los honorarios de los peritos, se estará a los lineamientos que señale el Reglamento Interior del Tribunal.

Artículo 60. El Tribunal contará con un Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo. Al frente del mismo habrá un Director General el cual será nombrado por el Pleno General, a propuesta del Presidente del Tribunal, y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Promover la investigación jurídica en materia fiscal y administrativa;

II. Convocar a congresos y seminarios a Magistrados y servidores públicos de la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones profesionales representativas e instituciones de educación superior, a fin de promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla;

III. Dirigir la Revista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y proponer, compilar, editar y distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento de los temas de índole fiscal y administrativa, y

IV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas.

El Centro, coordinará, promoverá e impartirá cursos de estudios superiores en materia de derecho fiscal y administrativo, de conformidad con el reconocimiento de validez oficial que le otorguen las autoridades competentes.

Artículo 61. El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones que coincidirán con los del Poder Judicial de la Federación.

Se suspenderán las labores generales del Tribunal y no correrán los plazos, los días que acuerde el Pleno General del Tribunal. Durante las vacaciones del Tribunal, la Junta de Gobierno y Administración, determinará el personal que deberá realizar las guardias necesarias en las diferentes regiones y preverá que entre dicho personal se designe, cuando menos, a un Magistrado, un Secretario de Acuerdos, un Actuario y un Oficial Jurisdiccional en cada región, para atender y resolver, en los casos urgentes que no admitan demora, las medidas cautelares y suspensión en términos de lo establecido por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Únicamente se recibirán promociones en la oficialía de partes de cada Sala durante las horas hábiles que determine el Pleno General del Tribunal.

En el caso de faltas temporales de los Presidentes, serán suplidos por los Magistrados de la Sección siguiendo el orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sección designará Presidente para concluir el periodo del Presidente faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser designado Presidente en el periodo inmediato siguiente.
En el caso de faltas temporales, los Presidentes serán suplidos por los Magistrados de la Sala en orden alfabético de sus apellidos.

Si la falta es definitiva, la Sala designará nuevo Presidente para concluir el periodo del Magistrado faltante. El Magistrado designado para concluir el periodo no estará impedido para ser electo Presidente en el periodo inmediato siguiente.

Artículo 62. Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Oficiales Jurisdiccionales estarán impedidos para desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado, excepto los de carácter docente u honorífico.

También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, adoptante o adoptado, o de sus parientes por consanguinidad hasta el cuarto grado.

Artículo 63. Durante el ejercicio de sus cargos, los Magistrados del Tribunal únicamente podrán ser privados de los mismos por el Presidente de la República en los casos de responsabilidad administrativa grave a que se refiere la Ley de Responsabilidades, o cuando dejen de satisfacer los requisitos previstos en el Artículo 45 de esta Ley, previo procedimiento seguido ante la Junta de Gobierno y Administración y resuelto por el Pleno General de la Sala Superior.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PRECEDENTES, TESIS Y JURISPRUDENCIA

Capítulo Único
Los precedentes, las tesis y jurisprudencia

Artículo 64. La jurisprudencia y precedentes que deban establecer la Sala Superior actuando en Pleno o Secciones y los criterios aislados que pronuncien las Salas Regionales, en los asuntos de sus competencias, se regirán por las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Artículo 65. La Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, será el órgano competente para compilar y sistematizar los criterios aislados precedentes y jurisprudencias emitidas por los órganos colegiados del Tribunal. Su titular deberá satisfacer los requisitos exigidos para ser secretario de acuerdos y tendrá el personal subalterno que fije la Junta de Gobierno y Administración. Llevará a cabo todas aquellas tareas que fueren necesarias para la adecuada difusión virtual de las tesis y jurisprudencias que hubieren emitido los órganos colegiados del Tribunal.

Artículo 66. En términos de la fracción XXXV del artículo 24 de esta Ley, la Junta de Gobierno y Administración, vigilará que las publicaciones de la Revista se realicen con oportunidad.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

TERCERO. La Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves entrará en vigor a los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Con la entrada en vigor de la Ley quedarán abrogadas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y se derogarán los Títulos Primero, Tercero y Cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en la Ley.

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

A la fecha de entrada de la Ley, todas las menciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos previstas en las así como en cualquier disposición jurídica, se entenderán referidas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.

CUARTO. La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.

Dentro de los sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la Ley, el Comité Coordinador deberá emitir la convocatoria con el objeto de integrar al Comité de Participación Ciudadana en términos de esta Ley.

La designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, por única ocasión, se sujetará a las siguientes reglas:

I. El Comité Coordinador, de conformidad con los lineamientos que expida, incluirá una propuesta para que uno de los aspirantes a integrar el Comité de Participación Ciudadana sea directamente designado como presidente de dicha instancia;

II. Para asegurar la renovación escalonada de los miembros del Comité de Participación Ciudadana, en los primeros nombramientos, el Comité Coordinador, designará integrantes de transición por un término menor al establecido en esta Ley, por lo que especificará el periodo de ejercicio para cada integrante, tomando en consideración lo siguiente:

a. Nombrará a dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuyos mandatos concluirán hasta el 31 de marzo de 2017.
b. Nombrará a dos integrantes del Comité de Participación Ciudadana, cuyos mandatos concluirán hasta el 31 de marzo de 2018.
c. Nombrará a un integrante del Comité de Participación Ciudadana, cuyo mandato concluirá hasta el 31 de marzo de 2019, y

III. En el caso de los primeros integrantes del Comité de Participación Ciudadana, estos no podrán ser ratificados para un segundo periodo.

Quienes sustituyan a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la fracción II, durarán en su encargo cuatro años y podrán ser ratificados para un segundo periodo en los términos establecidos en el Título Quinto de esta Ley.

Para efecto de dar cumplimiento a este Transitorio, y la debida integración del Comité de Participación Ciudadana, se llevará a cabo la Sesión Preparatoria de Instalación del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales posteriores a la publicación del presente Decreto, debiendo reunirse para tal efecto los demás miembros del Comité para la Sesión Preparatoria de Instalación de dicho órgano, para la designación de su Presidente, la aprobación de los lineamientos para la convocatoria y designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

La Sesión de Instalación Constitutiva del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se llevará a cabo dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales posteriores a que se haya integrado en su totalidad el Comité de Participación Ciudadana en los términos de los párrafos anteriores.

La Cámara de Diputados establecerá las partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para que vía la Secretaría de la

Función Pública, se asignen al Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

QUINTO. La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior y en los párrafos siguientes.

A partir de la entrada en vigor de la Ley, se abroga la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre del año dos mil siete.

El Reglamento Interior del Tribunal que se encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley, seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno General expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en este ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán desempeñando los mismos cargos hasta que la Junta de Gobierno y Administración acuerde la creación de los nuevos órganos administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos.

Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en ejercicio de sus cargos, continuarán en ellos hasta concluir el periodo para el cual fueron designados, de acuerdo con la Ley que se abroga. Al término de dicho periodo entregarán la Magistratura, sin perjuicio de que el Tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, de ser elegibles, para ser nombrados como Magistrados en términos de lo dispuesto por esta Ley.

Los juicios iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

Todas las referencias que en las leyes se haga al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se entenderán referidas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

SEXTO. Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves, salvo en el caso de la fiscalización de la Cuenta Pública a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la misma Ley, la cual se llevará a cabo en los términos previstos en este Decreto, a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

Las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entrarán en vigor a partir de la fiscalización la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016.

SÉPTIMO. Las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto, sin perjuicio de lo previsto en el Tercero Transitorio anterior.

OCTAVO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

NOVENO. En tanto entra en vigor la legislación secundaria a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de

Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, las referencias contenidas en el presente Decreto a la Unidad de Medida y Actualización se entenderán hechas al salario mínimo diario general vigente en la Ciudad de México.

Dado en la Sede del H. Senado de la República, el día 1° del mes de marzo de 2016.

Atentamente,

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES **SEN. ENRIQUE BURGOS GARCÍA**

VOLUMEN III

CONTINUACIÓN DE LA SESIÓN 5 DEL 16 DE JUNIO DE 2016

DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTAMEN DE LEY O DECRETO

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Declaratoria de Publicidad.
Junio 16 del 2016.

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, le fueron turnados para su estudio, análisis y elaboración del dictamen procedente las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se proponen modificaciones a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, que se detallan en el apartado de Antecedentes de este dictamen.

Quienes integramos esta Comisión procedimos al estudio de las iniciativas citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base a las reformas planteadas, con el propósito de emitir el presente dictamen.

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), así como numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en relación a los diversos 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, formulamos nuestro dictamen al tenor de la siguiente:

METODOLOGÍA:

I. En el apartado de **"ANTECEDENTES"**, se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas que se conjuntan para la elaboración del presente dictamen.

II. En el apartado relativo al **"OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS"**, se sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio.

III. En el apartado de **"CONSIDERACIONES"**, se expresan las razones que sustentan la valoración hecha por esta Comisión en torno a las propuestas de reforma que nos ocupan, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.

IV. En el apartado relativo al **"PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO"**, se plantean las propuestas específicas de modificaciones a la Ley

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Orgánica de la Administración Pública Federal que esta Comisión somete a la consideración del Pleno.

I. ANTECEDENTES.

1. En la sesión ordinaria celebrada el 04 de noviembre de 2015, la Diputada Lorena del Carmen Alfaro García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, a través de la cual devuelve facultades a la Secretaría de la Función Pública.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación a fin de que realizara el estudio, análisis y dictamen correspondiente.

2. En la sesión de 1º de marzo de 2016, el Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, a través de la cual devuelve facultades a la Secretaría de la Función Pública.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación a fin de que realizara el estudio, análisis y dictamen correspondiente.

3. En la sesión de 04 de mayo de 2016, el Dip. Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través de la cual crea la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo Federal.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación a fin de que realizara el estudio, análisis y dictamen correspondiente.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

4. En la sesión de 25 de mayo de 2016, el Dip. Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional, presentó iniciativa que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, a través de la cual devuelve facultades a la Secretaría de la Función Pública.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a la Comisión de Gobernación a fin de que realizara el estudio, análisis y dictamen correspondiente.

5. Asimismo, esta Comisión desea incluir dentro de los antecedentes, las iniciativas de los Senadores Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expiden, reforma y adicionan diversas leyes para la reglamentación integral del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la del Senador Pablo Escudero Morales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expiden la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y modificaciones a otros ordenamientos, ambas presentadas el 1° de marzo de 2016, particularmente en lo referente a las modificaciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismas que se estima pertinente analizar y contemplar para la formulación del presente dictamen.

Dada la materia coincidente de las iniciativas y considerando lo establecido en el transitorio segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, en el sentido de que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el mismo, esta Comisión estima necesario formular un único proyecto de dictamen.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

En virtud de lo anterior, procedemos a señalar el objeto de las iniciativas que nos ocupan:

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS

1. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.

La iniciativa en comento señala que "con el fin de lograr un nuevo sistema de control gubernamental la presente administración propuso desaparecer la Secretaría de la Función Pública, distribuyendo sus facultades en distintas dependencias del Ejecutivo federal previendo además la conformación de un órgano constitucional autónomo responsable de combatir la corrupción."

Que "a consecuencia de la iniciativa presentada por legisladores federales de Acción Nacional en el pasado mes de noviembre de 2014, se conformó en Nuestra Carta Magna el Sistema Nacional Anticorrupción."

Que "en su aprobación, el Constituyente estableció que la Secretaría de la Función Pública, como la responsable del control interno del Ejecutivo federal, debía reasumir las funciones que tenía previo a las reformas publicadas el 2 de enero de 2013."

Que "la Secretaría de la Función Pública es indispensable no sólo para el adecuado funcionamiento de la administración pública federal, sino para dar plena vigencia a las atribuciones que se proponen reasignarle y que permitirán lograr los objetivos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, dentro del cual dicha dependencia es una institucional fundamental para su diseño e instrumentación."

Que "es necesario restablecer formalmente a la Secretaría de la Función Pública y dotarla de las atribuciones que le fueron eliminadas para que pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan el adecuado funcionamiento del Sistema."

Que "la Secretaría de la Función Pública se encargará del control interno de todas las dependencias del gobierno federal."

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Que "dotar de las atribuciones que correspondían a la Secretaría de la Función Pública previo a las reformas de enero de 2013 no sólo es oportuno sino necesario, pues dicha dependencia debe tener desde ya la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción, mismas atribuciones que se realizarán acorde a lo aprobado en el Sistema Nacional Anticorrupción, una vez que éste entre en vigor."

En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa, se inserta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las modificaciones propuestas:

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	Artículo Único. Se reforman los artículos 25 y 26; se adiciona el 37 y se derogan los artículos 31, fracciones V, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y 44, todos ellos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o la Oficina de la Presidencia de la República necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus atribuciones, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a lo que determine la Secretaría de Gobernación.	**Artículo 25.** Cuando alguna Secretaría de Estado necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente **a las normas que determine** la Secretaría de **la Función Pública**.
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social;	**Artículo 26.** Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Desarrollo Social

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Energía Secretaría de Economía Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Comunicaciones y Transportes **Secretaría de la Función Pública** Secretaría de Educación Pública Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Turismo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... ... **XIX.** Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de	**Artículo 31.** A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. ... II. ... III. ... IV. (Se deroga). V. ... VI. ... VII. ... VIII. ... X. ... X. ... XI. ... XII. ... XIII. ... XIV. ... XV. ... XVI. ... XVII. ... XVIII. ... **XIX. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;	
...	XX. ...
XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;	**XXI. Se deroga.**
...	
XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;	**XXII. Se deroga.**
...	XXIII. ...
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos	XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;	humanos, contratación y remuneraciones del personal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro, **las cuales deberán opinarse previo a su implementación o entrada en vigor por la Secretaría de la Función Pública.**
XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;	**XXV. Se deroga.**
XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;	**XXVI. Se deroga.**
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de	**XXVII. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	
XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;	**XXVIII. Se deroga.**
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;	**XXIX. Se deroga.**
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;	**XXX. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal;	**XXXI. Se deroga.**
XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa;	**XXXII. Se deroga.**
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables;	**XXXIII. Se deroga.**
...	XXXIV. ....
Artículo 37.- (Se deroga)	**Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:** **I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; III. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño, su evaluación y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción; IV. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, así como aquellas que impulsen la simplificación administrativa; V. Vigilar el cumplimiento de las normas de control así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; VI. Vigilar en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación el cumplimiento de las normas fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, conforme a las reglas que emita el Sistema Nacional Anticorrupción;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	VII. Realizar investigaciones y auditorias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control, conforme a las reglas y bases generales que emita el Sistema Nacional Anticorrupción. VIII. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores, en términos de las disposiciones aplicables; IX. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, y emitir conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción, las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	dependencias como para las entidades de la administración pública federal; **X. Dirigir, organizar y operar el sistema de servicio profesional de carrera en la administración pública federal conforme a lo que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción, y en los términos de las disposiciones aplicables;** **XI. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas;** **XII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos, así como Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal, conforme a las bases que establezca el Sistema Nacional**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	Anticorrupción y las disposiciones aplicables; XIII. Opinar previo a su entrada en vigor, sobre las políticas, normas y criterios correspondientes en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; XIV. Designar, llevar a cabo el registro y mantener un padrón actualizado de los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño; XV. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal, conforme a los perfiles que establezca el Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones aplicables; XVI. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y de la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, conforme a lo que determine la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al titular de dicha secretaría; **XVII. Colaborar y coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades en términos de las disposiciones aplicables;** **XVIII. Informar periódicamente al Sistema Nacional Anticorrupción y al Ejecutivo federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de investigación y fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales intervenciones, asimismo proponer y dar seguimiento a cumplimiento de las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	conforme a las bases que dicte el Sistema Nacional Anticorrupción; **XIX. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la administración pública federal, conforme a las bases que determine el Sistema Nacional Anticorrupción en donde se incluirán, las declaraciones patrimoniales, de intereses y su evolución, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;** **XX. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en la plataforma que para los efectos se determine por el Sistema Nacional Anticorrupción, y verificar y dar seguimiento a la evolución patrimonial de los mismos, mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;** **XXI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como informar al Sistema Nacional Anticorrupción del seguimiento de las mismas, en términos de las disposiciones aplicables;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	XXII. Implementar las acciones de participación ciudadana que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción en la celebración de convenios o contratos que celebren con los particulares, las dependencias y entidades de la administración pública federal, en términos de las disposiciones aplicables; **XXIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas leves; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;** **XXIV. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas graves y remitir para su sanción al Tribunal Superior de Justicia Administrativa y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida;** **XXV. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	XXVI. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal; **XXVII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.** **XXVIII. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales;** **XXIX. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, la secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	XXX. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad; XXXI. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, en términos de las disposiciones aplicables; XXXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República; XXXIV. Formular y conducir la política general de la administración pública federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	genere, conforme a lo que establezca el Sistema de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción en términos de las disposiciones aplicables; **XXXV. Promover y coordinarse las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, en términos de las disposiciones aplicables;** **XXXVI. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.** **El nombramiento que someta el presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración sobre conflictos de interés o vínculos de amistad, con relación al titular del Ejecutivo federal y con cualquier titular de las dependencias y entidades de la Administración Pública así como de las empresas productivas del Estado.** **Para ser nombrado secretario de la Función Pública, se requiere:** **a) No ser ni haber sido miembro del mismo partido político o de alguno de la coalición, en su caso, que haya postulado al titular del Ejecutivo federal en funciones;** **b) No haber sido candidato por el partido político o coalición que haya postulado al titular del ejecutivo en funciones;**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	c) No tener relaciones de afecto o amistad estrecha ni con el Presidente de la República ni con los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además	**Artículo 44. Derogado**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema. Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías. En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de la Dip. Lorena del Carmen Alfaro García.	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión. Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	
	Transitorios **Artículo Primero.** El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. **Artículo Segundo.** Las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública que dependan del Sistema Nacional Anticorrupción deberán ser ejercidas por la dependencia en tanto no entre en vigor dicho Sistema y emita los actos propios de su competencia conforme a la ley que lo regule. **Artículo Tercero.** El presidente de la República, en un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor de la presente ley, deberá someter a consideración del Senado de la República la ratificación del secretario de la Función Pública.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

1. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que "tras la reforma del 27 de mayo de 2015, en materia de anticorrupción, se cumple la condición establecida en el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."

Que "al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional correspondiente, el Congreso de la Unión revisará que el control interno y el sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las bases y principios del Sistema Nacional de Fiscalización, para lo cual realizará las reformas legales a que haya lugar."

Que "si bien es cierto a la fecha no se ha completado el proceso para que se perfeccione el Sistema Nacional Anticorrupción, también lo es, que es necesario que dicho sistema sea perfeccionado con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que otorgan las facultades que correspondan a la Secretaría de la Función Pública."

Que su iniciativa "busca reincorporar a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal las facultades de la Secretaría de la Función Pública (...) tomando en consideración las nuevas atribuciones que se desprenden del Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular con el Sistema Nacional de Fiscalización en el ánimo de evitar duplicidad de algunas acciones con la Auditoría Superior de la Federación."

En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa, se inserta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las modificaciones propuestas:

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
Artículo 37.- (Se deroga)	**Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:** **I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales. Y el impacto de los programas y políticas públicas de modo que sean congruentes con el presupuesto basado en resultados. **Así como validar los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables.** **II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la administración pública federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo.** **III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como coordinar, asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal.** **IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores. **VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las entidades de la administración pública federal;** **VII. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal en los términos de la ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas.** **VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas. **IX. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y entidades de la administración pública federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal.** **X. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	XI. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño. **XII. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, delegados de la propia secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración pública federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la administración pública paraestatal.** **XIII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la administración pública federal y de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales federales, representando al titular de dicha secretaría.** **XIV. Coordinarse con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	XV. Informar periódicamente al Ejecutivo federal sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal. **Y en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación informará al Ejecutivo, de las dependencias y entidades que hayan sido objeto de fiscalización, y del cumplimiento que dichas entidades hayan realizado de las recomendaciones y acciones que la Auditoría Superior de la Federación les haya hecho.** **XVI. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar los servidores públicos de la administración pública federal, ante la secretaría o ante los órganos de control interno de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables.** **XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la administración pública federal, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	XVIII. Conocer e investigar de manera directa o a través de los órganos internos de control las conductas de los servidores públicos, que pueda constituir delitos, responsabilidades administrativas, o hechos de corrupción; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de la ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, o ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida. **XIX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la administración pública federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.** **XX. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal.** **XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la administración pública federal;** **XXII. Conducir la política inmobiliaria de la administración pública federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales. **XXIII. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos.** **Para tal efecto, la secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países.** **XXIV. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad;** **XXV. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la administración pública federal y, en su caso, representar el interés de la federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	XXVI. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente. **XXVII. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del procurador general de la República.** **XXVIII. Formular y conducir la política general de la administración pública federal en cumplimiento de las leyes de transparencia en la gestión pública, las relativas a la rendición de cuentas, y al acceso a la información pública por parte de los particulares a la información que aquélla genere;** **XXIX. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico.** **XXX. Recurrir, en su caso, a las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, apartado C, fracción VII, y 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** **XXXI. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.** **XXXII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. José Alfredo Ferreiro Velazco	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**
	Transitorio **Único.** La presente reforma entrará en vigor el mismo día de la entrada en vigor de las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE PRD.

La iniciativa señala que "tiene el objeto de crear la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, entidad que se encargará de vigilar, prevenir y corregir posibles actos u omisiones que se susciten en la administración pública federal y para que en caso de detectar anomalías, sustancie y presente las denuncias correspondientes."

Que "con la entrada en vigor de la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se traslada en forma exclusiva a la Secretaría de Hacienda una atribución que anteriormente requería del trabajo coordinado con la Secretaría de la Función Pública. Por tal motivo, con su iniciativa se propone ampliar esta atribución a la nueva Secretaría de Control Interno del Ejecutivo."

Que "se propone trasladar a la nueva Secretaría, las facultades que en el decreto del 2 de enero de 2013 se establecieron como facultades exclusivas de la Secretaría de Hacienda, ya que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, el Congreso de la Unión, al expedir la legislación secundaria, deberá garantizar que la Secretaría no solo mantenga las atribuciones que tenía sino que además se fortalezca y potencie sus mecanismos para la prevención, evaluación, corrección, auditoría e investigación y pueda estar en condiciones óptimas para sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos y presentar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción."

Que "dentro de las nuevas disposiciones que se incorporan en esta propuesta destacan el nuevo procedimiento para la designación del titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, que de acuerdo con lo que establecen las nuevas

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

disposiciones del artículo 76 constitucional aprobadas con la reciente reforma anticorrupción, la Cámara de Senadores intervendrá en la ratificación del funcionario que proponga el Presidente de la República."

Que "la Secretaría de Control Interno será la autoridad encargada de llevar el registro y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, con lo cual cobra vigencia la nueva disposición constitucional establecida en el artículo 108 respecto a la nueva obligación que tienen los servidores públicos de presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses."

Que "como integrante del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría deberá informar periódicamente los resultados de la evaluación sobre la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal."

Que "también atenderá las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción."

En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa, se inserta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las modificaciones propuestas:

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	ÚNICO.- Se Reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; Se Adiciona el artículo 37, así como un tercer párrafo al artículo 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; (Sin Correlativo) Secretaría de Desarrollo Social;	**Artículo 26.** Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; **Secretaría de Control Interno del Ejecutivo** Secretaría de Desarrollo Social;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... ... **XIX.** Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables; ... XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos	**Artículo 31.** A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: **I.- XVIII.- (...)** **XIX.** Coordinar **conjuntamente con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo** la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables; **XX.- (...)** **XXI.-Se deroga**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;	
XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;	**XXII.- Se deroga**
XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;	**XXIII.- Vigilar en coordinación con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo** el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales,	**XXIV. Se deroga**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;	
XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;	**XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y sistematizar la información con la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo.**
XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;	**XXVI. Se deroga**
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	**XXVII. Se deroga**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;	**XXVIII. Se deroga**
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;	**XXIX. Se deroga**
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;	**XXX. Se deroga**
...	XXXI.(...)
...	XXXII.(...)
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y	**XXXIII. Se deroga**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
...	XXXIV.(...)
Artículo 37.- (Se deroga)	**Artículo 37.- La Secretaría de Control Interno del Ejecutivo es la entidad encargada de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas.** **El titular de la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo será propuesto por el Presidente de la República y ratificado por la mayoría de los senadores, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.** **A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:** **I.- Conocer, investigar y en su caso, sustanciar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos y particulares, por actos u omisiones que afecten los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.** **II.- Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y presentar las denuncias correspondientes por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.** **III.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. IV.- Recibir y registrar, verificar y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables; V.- Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y el personal de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; VI. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	VII. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal; **VIII. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;** **IX. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;** **X. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores;** **XI.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET,**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada; XII. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; XIII. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; XIV.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; XV. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; XVI.- Designar a los titulares de los Órganos Internos de Control de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño; XVII. Colaborar con la Auditoría Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; XVIII. Informar periódicamente al Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización; XIX. Atender las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Rector del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; **XXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;** **XXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;** **XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y** **XXIV. Las demás que le otorguen expresamente las leyes y reglamentos.**
Artículo 43 Ter.- La Administración Pública Centralizada contará con Órganos Reguladores Coordinados en Materia	**Artículo 43 Ter.- (...)**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Energética, con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Serán creados por ley, misma que establecerá su competencia así como los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Energía. Los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Pública Centralizada y el régimen especial que, en su caso, prevea la ley que los regula. Sin correlativo	**(...)** **Cada uno de los Órganos Reguladores contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y funcionarán de conformidad con lo que establezca la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.**
Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas	**Artículo 44. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los titulares de los Órganos Internos de Control, serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, para apoyar la política de control interno y la**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.	**toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.**
Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades.	**Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.**
Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de	**(...)**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema. Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías. En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.	**En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Control Interno del Ejecutivo, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Omar Ortega Álvarez	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	**(Se suprime Quinto Párrafo)**
Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.	**Artículo 50.-** Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto **de los Órganos Internos de Control,** sin perjuicio de las atribuciones que competan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.
	Transitorios **Único.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

4. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

En esta iniciativa se señala que "a partir de las publicaciones de los decretos que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y disciplina financiera (...) deben integrarse y coordinarse cambios que son indispensables en la modificación y actualización de la legislación secundaria. Dentro de este nuevo andamiaje jurídico y administrativo está la creación de la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa."

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Que con las modificaciones a los artículos 26, 31, 37, 44 y 50, se transfirieron temporalmente las atribuciones de la Secretaría de Función Pública a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

Que "el Grupo Parlamentario de Morena propone que la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, cumpla con tres objetivos básicos: Regular, Vigilar y Evaluar."

Que "la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa coordinará, asesorará y supervisará que los funcionarios de la administración pública federal cumplan con los instrumentos y procedimientos de control gubernamental en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal."

Que "la Secretaria de Control y Vigilancia Administrativa vigilará que los funcionarios de la administración pública federal no comentan posibles actos u omisiones que no están contemplados en la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos, estableciendo para ello las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y en caso de que detecte anomalías, integre toda la información disponible y presente las denuncias correspondientes, ya sea ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuando sea necesaria una sanción de carácter administrativo, o bien, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuando se trate de anomalías graves que sean consideradas como actos de corrupción, acorde a la Ley General de Responsabilidad de Servidores Públicos."

En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa, se inserta un cuadro comparativo entre el texto vigente y las modificaciones propuestas:

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	Artículo Único. Se Reforman los artículos 26, 31, 44 y 50; y se adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder	**Artículo 26.** Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; (Sin Correlativo) Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación Secretaría de Relaciones Exteriores Secretaría de la Defensa Nacional Secretaría de Marina Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Secretaría de Energía Secretaría de Economía Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Secretaría de Comunicaciones y Transportes **Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** Secretaría de Educación Pública Secretaría de Salud Secretaría del Trabajo y Previsión Social Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: ... XVII. Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que establezca el	**Artículo 31.** A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I.- XVI.- (...) XVII.- Llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera **la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa para** el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y presupuestos de egresos, así como presidir las instancias de coordinación que

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;	establezca el Ejecutivo Federal para dar seguimiento al gasto público y sus resultados;
...	XVIII. ...
XIX. Coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;	**XIX.** Coordinar **conjuntamente con la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** la evaluación que permita conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la validación de los indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;
...	XX. ...
XXI. Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;	**XXI. Se deroga.**
XXII. Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas	**XXII. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;	
XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;	XXIII.- Vigilar **en coordinación con la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;
XXIV. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;	**XXIV. Se deroga.**
XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;	**XXV. Llevar el registro de la declaración fiscal de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, sistematizar la información y proporcionarla a la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa.**
XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de las dependencias	**XXVI. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;	
XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	**XXVII. Se deroga.**
XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;	**XXVIII. Se deroga.**
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público	**XXIX. Se deroga.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación; XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal; XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa; XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; ...	**XXX. Se deroga.** **XXXI. Se deroga.** **XXXII. Se deroga.** **XXXIII. Se deroga.** XXXIV. ....
Artículo 37.- (Se deroga)	**Artículo 37. La Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa es la entidad encargada de prevenir, corregir e**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. **A esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:** **I.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;** **II.- Revisar y vigilar que los instrumentos y procedimientos normativos de control interno de la Administración Pública Federal que incluye la aplicación de recursos públicos federales, se realicen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad.** **III.- Investigar y en su caso, sustanciar denuncias ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por las faltas administrativas en las que incurran los servidores públicos y particulares, o en su caso integrar la información para presentar las denuncias correspondientes por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	IV.- Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. V.- Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro. VI.- Recibir y registrar, verificar y dar seguimiento a las declaraciones de intereses y patrimoniales de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	VII.- Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoria preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoria preventiva de su sector correspondiente; **VIII.- Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;** **IX. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; **X.-Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;** **XI.-Asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el cumplimiento de las normas de control y fiscalización;** **XII.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control;** **XIII.- Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; **XIV.- Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;** **XV. Realizar, por sí o a solicitud del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, auditorias y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;** **XVI. Colaborar con la Auditoria Superior de la Federación para el establecimiento de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;** **XVII. Elaborar bimestralmente un informe sobre el resultado de la evaluación y seguimiento respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública federal, que incluya las acciones correctivas que deben adoptar los entes públicos que hayan sido objeto de fiscalización;** **XVIII. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así**

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
	como de aquellas que hayan sido objeto de fiscalización; XIX. Atender las solicitudes que le presenten los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con lo que establece la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente; XXI.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
	públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación; **XXII. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;** **XXIII.- Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y** **XXIV. Las demás que le otorguen expresamente las leyes y reglamentos.**
Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior,	**Artículo 44.** Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal **y los titulares de los Órganos Internos de Control,** serán responsables de mantener el control interno y de gestión de la dependencia o entidad**. Los titulares de los Órganos Internos de Control tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa,** para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Las unidades de auditoria preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior,

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades.	procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita **la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa** respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoria preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades.
Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.	Las unidades de auditoria preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.
Las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías.	(...)
En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y	En los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como **a la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa,** sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y ejecución de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente , por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión. Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como **la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa,** formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión. **(Se deroga Quinto Párrafo)**
Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la	**Artículo 50.-** Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto **de los Órganos Internos de Control,** sin perjuicio de las atribuciones que competan a la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Cuadro comparativo de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del Dip. Virgilio Dante Caballero Pedraza	
TEXTO VIGENTE	**TEXTO PROPUESTO**
dependencia coordinadora del sector correspondiente.	dependencia coordinadora del sector correspondiente.
	Transitorios **Primero.** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. **Segundo.-** El Titular de la Secretaría de Control y Vigilancia Administrativa, dentro de los treinta días siguientes a su designación, iniciará con el proceso para la designación de los Titulares de los Órganos del Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

III. CONSIDERACIONES.

Quienes integramos esta Comisión consideramos de la mayor relevancia los planteamientos formulados para enriquecer el orden jurídico federal en materia control interno de la Administración Pública Federal.

Con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de enero de 2013, se eliminaron diversas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de avanzar en la creación de un nuevo modelo de control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas, en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno.

Como consecuencia de los trabajos legislativos de aquella Legislatura, se dio paso a importantes avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, que se vieron concretados en la reciente reforma publicada en mayo de 2015, que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y fortaleció al Sistema Nacional de Fiscalización y a la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; haciendo necesario que la autoridad responsable del control

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

interno del Ejecutivo Federal, en este caso la Secretaría de la Función Pública, reasumiera todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no habían sido consolidadas a esta última en la reforma al sistema financiero.

Lo anterior ya que el control al desempeño de la Administración Pública Federal es una piedra fundamental de la función de gobierno, por ello se hace necesario establecer las bases de operación de la Secretaría de la Función Pública, en el marco a las reformas en materia de transparencia y anticorrupción que le permitan fungir como órgano de control interno de la Administración Pública Federal, ya que para esta Comisión resulta evidente que la corrupción es un problema transversal que afecta diversas áreas de nuestra sociedad, y que, de no atenderse, puede constituir un lastre a la generación de bienestar social y desarrollo económico.

Así pues, coincidimos con los iniciantes en que es necesario dotar de más atribuciones a la Secretaría de la Función Pública, pues dicha dependencia debe tener la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción.

Con la presente modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se reafirma la necesidad de contar con una Secretaría de la Función Pública que permita el adecuado engranaje entre el ejercicio de la Administración Pública Federal y la transparencia y rendición de cuentas, toda vez que para dar plena vigencia a las atribuciones que se proponen reasignarle, es necesaria la aprobación de la demás legislación en la materia, ya que a través de ello, se permitirá alcanzar los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, impulsados por todos y cada uno de los partidos representados en el Congreso de la Unión.

A través del presente dictamen, se establecen las facultades para que la Secretaría pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan su adecuado funcionamiento en aras de fortalecer al ejecutivo en su capacidad de control y prevención en la actividad administrativa, sin dejar de lado que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal deben verse como un complemento a lo establecido para el Sistema Nacional Anticorrupción, que integre armónicamente las facultades de la Función Pública con el referido Sistema, así

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

como con el Sistema Nacional de Fiscalización, en el ánimo de evitar duplicidad de funciones y con ello, limitantes a la responsabilidad de las mismas.

Se trata de armonizar la operación de la Secretaría de la Función Pública, con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en especial, con el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por autoridades de los tres Poderes y de todos los órdenes de gobierno, entre ellos la propia Secretaría; que le permitirán la correcta realización de sus atribuciones sin caer en la burocratización y propugnando por la simplificación administrativa en aras de mantener un ejercicio transparente y focalizado en la rendición de cuentas, evitando excesos que saturen de información al sistema y a su paso, afecten la transparencia misma y la rendición de cuentas objeto de la presente modificación legal.

Ahora bien, debe señalarse que las iniciativas a estudio coinciden en su mayoría respecto a las atribuciones esenciales del órgano de control interno de la Administración Pública Federal, por lo que las mismas se aprueban con las modificaciones siguientes:

Primeramente se optó por mantener la denominación de Secretaría de la Función Pública, en virtud de que el mismo ya es conocido en la sociedad mexicana, además de que existe otra legislación que hace referencia a Función Pública, por lo que modificar la denominación podría traer confusiones y generar la necesidad de nuevas modificaciones a otros ordenamientos; asimismo se considera que el cambio de nombre podría acarrear un costo económico a la federación.

Asimismo se eliminaron referencias innecesarias y reiterativas al Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que se mantuvo la obligación de adoptar los criterios que este emita pero concentrándolos dentro del artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

De igual manera se eliminaron las referencias a las auditorías preventivas, en aras de mantener la simplificación administrativa a la que todas las iniciativas hicieron referencia, al considerar que la inclusión específica del término podría causar confusión respecto a la figura y su diferencia con la figura de la auditoría que se mantiene en el proyecto y que puede ser ejercida en cualquier momento por los órganos internos de control.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

El eje de los Órganos Internos de Control está contenido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, puesto que serán los responsables del buen funcionamiento del sistema de control interno de la unidad a la que se encuentren adscritos.

En relación a lo anterior, se armonizó el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con lo previsto en el proyecto ciudadano de Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que la Secretaría se encuentre habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa, considerando que incluso en la actualidad la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas puede atraer asuntos.

También se sustituyeron las referencias a la Auditoría Superior de la Federación por las del Sistema Nacional de Fiscalización, del cual es parte dicho órgano constitucional y que es mucho más amplio en sus facultades.

Asimismo se incluyó a la Procuraduría General de la República dentro de los sujetos a los que les aplica la presente reforma, a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de especialización y fin específico, requieren un control especial.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

En torno a lo anterior, esta dictaminadora no deja de lado que existen entidades cuya operación es distinta a las unidades administrativas gubernamentales, como en el caso de las empresas productivas del Estado y las instituciones de banca de desarrollo, que requieren controles distintos derivados de su finalidad y de sus mecanismos de funcionamiento. Por ello, la reforma en materia financiera de enero de 2014, estableció mecanismos específicos para la evaluación, control y vigilancia de las disposiciones administrativas respecto a presupuesto y responsabilidad hacendaria; contrataciones públicas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de servidores públicos, y transparencia y acceso a la información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En este sentido, si bien en el presente dictamen se precisa que la Secretaría de la Función Pública es la autoridad competente para regular y vigilar, así como establecer la normatividad en materia de contrataciones públicas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, ello no implicará de ningún modo una interferencia en el régimen especial que la Constitución Federal otorga a las empresas productivas del Estado.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

De igual manera se añadió la facultad de Hacienda y Crédito Público y Función Pública, para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación; haciendo hincapié en que aunado a lo anterior, las empresas paraestatales deberán continuar sujetándose a la normatividad en materia de presupuesto, obra pública, responsabilidades administrativas y fiscalización en lo relativo a su operación y funcionamiento.

Asimismo se mantiene y promueve la profesionalización de los servidores públicos de la Función Pública, a través de la ocupación con los mejores perfiles, lo cual permite una labor de investigación realizada por expertos con la capacitación técnica y académica suficiente que les permita detectar conductas indebidas, con la finalidad de perseguirlas y sancionarlas efectivamente.

De conformidad con los razonamientos expresados en el presente apartado de consideraciones sobre las iniciativas que se dictaminan, se presenta el siguiente cuadro comparativo entre los textos constitucionales en vigor y las propuestas de modificaciones que se contienen en el proyecto de decreto que culmina este documento, adicionando comentarios a las mismas:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL	**Único.** Se REFORMAN el artículo 19; el artículo 26; las fracciones XXI y XXIV del artículo 31; el artículo 37; el artículo 44 y el artículo 50, y se DEROGAN las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV del artículo 31, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:	
Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.	Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, **mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública.** En cada una de las	Se añade la obligación de poner a disposición del público en consulta a través del registro electrónico, los manuales de procedimientos y de servicios al público.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
	dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.	
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes;	Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes;	Se añade nuevamente a la Secretaría de la Función Pública dentro de las dependencias del Poder Ejecutivo.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
(No tiene correlativo) Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	**Secretaría de la Función Pública;** Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.	
Artículo 31.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. a XX. ... XXI. ~~Coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficiencia y simplificación administrativa;~~ XXII. ~~Emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en materia de adquisiciones,~~	Artículo 31. ... I. a XX. ... XXI. **Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;** XXII. **(Se deroga)**	Se derogan y modifican algunas de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se modifica la facultad para establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal. Se eliminan las facultades correspondientes a la Función Pública, además de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
~~arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Administración Pública Federal; emitir y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, llevar los procedimientos de conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respectivas y aplicar la Ley de Firma Electrónica Avanzada;~~		que se adiciona el establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto, en concordancia con la naturaleza, el objeto y las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
XXIII.- Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación nacional, así como de programación, presupuestación, contabilidad y evaluación;	XXIII. ...	
XXIV. ~~Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, y~~ ejercer el control presupuestario de los servicios personales, ~~con las respectivas~~ normas de control de gasto en ese rubro;	XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales **y establecer** normas **y lineamientos en materia** de control del gasto en ese rubro;	
~~XXV. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal,~~	XXV. **(Se deroga)**	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
~~incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su seguimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos aplicables;~~		
~~XXVI. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y personal de las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspondiente;~~	XXVI. **(Se deroga)**	
~~XXVII. Coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;~~	XXVII. **(Se deroga)**	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
~~XXVIII. Designar a los comisarios de las entidades de la Administración Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;~~	XXVIII. **(Se deroga)**	
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;	XXIX.	
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos	XXX. ...	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;		
~~XXXI. Coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los órganos y servidores públicos de la Administración Pública Federal;~~	XXXI. **(Se deroga)**	
~~XXXII. Emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa;~~	XXXII. **(Se deroga)**	
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y	XXXIII. **...**	
XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.	XXXIV. ...	
Artículo 37.- (Se deroga)	**Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:**	Se reasignan las facultades que habían sido conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
	I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la	En concordancia con lo establecido en el segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, se otorga a la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;	Secretaría de la Función Pública, la facultad de organizar y coordinar el sistema de control interno de la Administración Pública Federal.
(No tiene correlativo)	**II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;**	En concordancia con la fracción anterior, se adiciona la facultad de expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno, así como la facultad de requerirle a las dependencias, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, sujetando las mismas a las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
	III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	Esta fracción se considera acorde a las facultades indispensables de la Secretaría de la Función Pública, particularmente en lo relativo a la revisión al cumplimiento de las normas de control a las que se encuentren sujetos las dependencias de la Administración Pública Federal.
	IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización	Como máximo órgano de control interno, se devuelven las facultades actualmente conferidas a la Secretaría de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;	Hacienda y Crédito Público dentro de la fracción XXVII del artículo 31, además de adicionar a la Procuraduría General de la República, así como la facultad de realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.
	V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;	Se devuelven las facultades actualmente conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de la fracción XXIII del artículo 31, además de adicionar las materias de ingresos, financiamiento, inversión, deuda, y patrimonio.
	VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o	Se devuelven las facultades actualmente conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de la fracción XXI del artículo 31, además de adicionar la organización del desarrollo administrativo integral; así como, la facultad de realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, para la mejor realización de sus actividades.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;	
	VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;	Se devuelven las facultades actualmente conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de la fracción XXIV del artículo 31.
	VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;	En congruencia con la naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública, se añade la facultad de realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, sustituyendo el ejercicio que realizaban las unidades de auditoría preventiva.
	IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y	En congruencia con la naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública, se añade la facultad de fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
	disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; **X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;**	de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal.
	XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;	Se considera que a través del establecimiento de delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública ejerce de mejor manera las atribuciones que le son encomendadas.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
	XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;	En congruencia con la naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública, se devuelve la facultad de designar y remover a los titulares de los órganos internos de control, añadiéndose además a las empresas productivas del Estado y a la PGR.
	XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;	A través de esta fracción se sienta la base para permitir el intercambio de información, así como el establecimiento de mejores políticas que permitan una coordinación transversal entre la Secretaría de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.
	XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema	Con esta nueva facultad, se propone que aquellas

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables.	acciones relativas a la participación ciudadana que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, deban ser implementadas por la Secretaría.
	XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;	Por medio de la presente se estrecha el lazo de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le permite a este último, conocer los resultados de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, incidiendo positivamente en la persecución y corrección de las irregularidades que se llegaren a detectar.
	XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la	Se devuelve la facultad actualmente conferida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de la fracción XXV del artículo 31.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;	
	XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;	Se considera que esta fracción abona a la transparencia y permite que los particulares puedan inconformarse con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República.
	XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de	En congruencia con la naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública; asimismo se considera acorde y armónica a los demás procedimientos objeto de las reformas en materia de transparencia y combate a la corrupción, en especial a lo previsto en el proyecto ciudadano de Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que la Secretaría se encuentre habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;	
	XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;	En relación a su naturaleza, se considera positiva la inclusión de la presente fracción, como aspecto preventivo en el combate a la corrupción, dejando a la Secretaría la facultad de generar, establecer y en su caso, modificar sus propios mecanismos en materia de prevención.
	XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;	Se considera acorde a la naturaleza de la Secretaría de la Función Pública, además de que respeta los principios establecidos en la Ley de Responsabilidad Hacendaria.
	XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores	Se considera acorde a la naturaleza de la Secretaría de la Función Pública.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;	
	XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno	Se adicionan los conceptos de gobierno digital, gobierno

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;	abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en pro de la transparencia y las nuevas tecnologías de la información.
	XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;	Se considera acorde a lo establecido en las leyes de transparencia.
	XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;	Se adiciona la presente fracción para estar acorde a lo establecido en el artículo 109, fracción III, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la	Se considera acorde a lo establecido en el artículo 113, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	corrupción en la Administración Pública Federal;	
	XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y	Además de promover la simplificación administrativa, se estrecha el lazo de colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, al obligar a tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
	XXVII. Seleccionar a los integrantes de los Órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, y	Se promueve la profesionalización de los servidores públicos de la Función Pública, a través de la ocupación con los mejores perfiles.
	XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.	A través de esta fracción se busca promover positivamente el comportamiento de los servidores públicos, mediante la emisión de códigos de ética y reglas de integridad para el ejercicio de la función pública.
	XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
	El nombramiento del Secretario de la Función Pública que someta el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	El nombramiento que realice el Ejecutivo Federal respecto del Secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado de la República, esta adición plantea la necesidad de establecer ciertos requisitos objetivos que deberá cubrir el nombramiento propuesto por el Presidente de la República, en los que por la importancia y trascendencia de sus atribuciones, deberá estar ausente de cualquier conflicto de interés.
Artículo 44.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno ~~y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de unidades de auditoría preventiva. Los propios titulares tendrán la obligación de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia y entidad, con base en los perfiles que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al~~	Artículo 44. Los titulares **de los órganos internos de control** de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal **y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades,** serán responsables de mantener el control interno **de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos**	Este párrafo es congruente con lo adicionado en el artículo 37 respecto a la responsabilidad de los órganos internos de control, incluyendo además los supuestos relacionados a regímenes especiales como en el caso de las sociedades nacionales de crédito.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
~~correcto manejo de los recursos públicos.~~	**de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.**	
~~Las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las disposiciones generales que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría preventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. Las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el referido sistema.~~		

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
(No tiene correlativo)	**Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.**	Se devuelven las atribuciones a la Secretaría de la Función Pública y se favorece a la transparencia al incluir la obligación a los órganos internos de control de observar lo dispuesto en la normatividad de transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción, adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, entre otras; además se fortalecen los mecanismos de colaboración y coordinación al obligar al cumplimiento de las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos y en lo relacionado a la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.
Las unidades ~~de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad~~ formularán en el mes de	**Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la**	De igual manera que en el párrafo anterior, se devuelven las atribuciones a la Secretaría de la Función Pública y se fortalece la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
noviembre su plan anual de trabajo y ~~de auditorías.~~	**Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.**	estrategia en materia de combate a la corrupción y de fiscalización, al señalar que las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.
	Las **unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control** formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y **de evaluación.**	Se devuelven las facultades a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos establecidos en la presente modificación.
En los meses de mayo y noviembre entregarán informes ~~tanto al titular de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,~~ sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos ~~y ejecución~~	**Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control,** *en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular* **de dicha Secretaría,** sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos **y sobre la**	Se devuelve la facultad a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos establecidos en la presente modificación, resaltando particularmente la obligación de informar sobre los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control, el porcentaje de los procedimientos iniciados por que culminaron con una sanción firme y en su caso,

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
~~de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los servicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrativa y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos de corrupción. Con base en dichos informes, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, formularán las recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.~~	**relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.**	a cuánto ascienden las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. De igual manera, por congruencia a las modificaciones derivadas de la reforma en materia de transparencia y combate a la corrupción, se adiciona lo relacionado a las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes, así como a las denuncias por actos de corrupción que estos presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
~~Los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.~~	**Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.**	Se devuelven obligaciones a la Secretaría de la Función Pública y se adiciona que la Secretaría y demás dependencias, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión con base en los informes señalados en la fracción anterior y con las recomendaciones, las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
	Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así	Se modifica el supuesto actual para ajustarlo a la

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
(No tiene correlativo)	**como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.**	figura de órgano interno de control.
Artículo 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la ~~dependencia~~ coordinadora del sector correspondiente.	Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, **control** y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público **y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,** sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.	Se añade a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de su competencia participe en el sistema nacional de planeación y en los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación.
(No tiene correlativo)	**Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el**	En congruencia con la separación en torno a las entidades cuya operación es distinta a las unidades administrativas gubernamentales, como en el caso de las empresas productivas del Estado y las instituciones de banca de desarrollo, que requieren

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	**TEXTO INICIATIVA**	**COMENTARIOS**
	propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.	controles distintos derivados de su finalidad y de sus mecanismos de funcionamiento, se establece la facultad para que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, emitan los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación.
TRANSITORIOS		
	PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	
	SEGUNDO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.	
	TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones de	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda. Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden. Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las	

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

CUADRO COMPARATIVO		
TEXTO VIGENTE	TEXTO INICIATIVA	COMENTARIOS
	Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales. **Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con dichos programas.**	

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 19, el artículo 26, las fracciones XXI y XXIV del artículo 31, el artículo 37, el artículo 44 y el artículo 50, y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31. ...

I. a XX. ...

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;

XXII. (Se deroga)

XXIII. ...

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. ...

XXX. ...

XXXI. (Se deroga)

XXXII. (Se deroga)

XXXIII. ...

XXXIV. ...

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables.

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los Órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos, y

XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública.

XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que someta el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.

Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda.

Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

CÁMARA DE DIPUTADOS
LXIII LEGISLATURA

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con dichos programas.

Palacio Legislativo, 15 de junio de 2016.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad, y en virtud de que se ha cumplido con dicho requisito consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que el dictamen de la Comisión de Gobernación se someta a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se autoriza.

16-06-2016
Cámara de Diputados.
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 450 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
Diario de los Debates, 16 de junio de 2016.
Discusión y votación, 16 de junio de 2016.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal.

Para fundamentar el dictamen por la comisión, tiene la palabra la diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, muy buenos días. El día de ayer, en sesión extraordinaria de la Comisión de Gobernación, se aprobaron diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el objetivo de devolver y fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, como dependencia encargada del control interno del Ejecutivo federal.

Lo anterior, en el marco del proceso para la reglamentación del sistema nacional anticorrupción y para generar las condiciones organizacionales y jurídicas para una cabal rendición de cuentas en nuestro país.

Debe señalarse que las iniciativas y demandas que tienen que ver precisamente con la transparencia y el combate a la corrupción son causas de interés general, expresan el sentir de todos los sectores de la sociedad mexicana, han convocado y reunido el compromiso de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Se trata de demandas que son, además, aspectos sustantivos del acuerdo nacional que ha venido transformando las instituciones nacionales, por lo que no pertenecen a nadie, en particular. Son causas a las que todos estamos convocados y ante las cuales todos debemos asumir nuestra responsabilidad.

De su éxito depende un cambio de fondo a favor de la integridad en el servicio público y en el establecimiento de una relación más cercana, confiable y directa entre autoridades y ciudadanía.

De la misma forma, como ustedes saben, para dar cumplimiento al transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a las que he hecho referencia.

En ese sentido, cobran importancia las coincidencias de los distintos grupos parlamentarios, representados en este Congreso, para dar curso a estas modificaciones. Así, con la aprobación de este proyecto, la Secretaría de la Función Pública será la autoridad encargada de organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.

Podrá inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos en un marco que favorezca el desarrollo del gobierno digital, el gobierno abierto y la rendición de cuentas.

En el ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría contará con órganos internos de control, delegados y comisarios públicos que realizarán un constante trabajo de vigilancia en toda la administración pública federal.

Asimismo, coincidimos en que la Secretaría mantenga estrecha colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción y con el Sistema Nacional de Fiscalización, como máximas instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción, que además permiten a la ciudadanía incidir directamente en el establecimiento de bases y principios para la integridad y la transparencia en la gestión pública.

Consideramos también necesario que la Secretaría tenga la facultad de revisar el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, para prevenir responsabilidades administrativas y sancionar los actos u omisiones que constituyan responsabilidad sobre lo que deberá informar periódicamente a su comité coordinador y al Ejecutivo federal.

Estos informes serán la base para que el comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emita las recomendaciones pertinentes a la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias y entidades en la implementación de las acciones necesarias que incidan en una mejor gestión gubernamental.

Por su parte, al ser encargada de llevar y normar el registro de servidores públicos de la administración pública federal, así como de recibir, registrar y verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses que estos deban presentar, podrá conocer e investigar las conductas que puedan constituir responsabilidades administrativas, pudiendo aplicar sanciones y en los casos que ameriten, ejercer la acción de responsabilidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Así pues, se trata de que el Legislativo cumpla su tarea ante la reiterada demanda de transparencia y combate a la corrupción. De responsabilizarnos con la creación de las instituciones y los mecanismos para garantizar a los mexicanos un sector público con datos abiertos, soportado con un marco jurídico completo, accesible y con altos estándares en su aplicación y cumplimiento, por lo cual, las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación sometemos a su atenta consideración el asunto señalado.

Asimismo, señor presidente, con fundamento en el artículo 26, numeral 1, 27, numeral 1 y 28 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, hago de su conocimiento que se presentó una propuesta de modificación al presente dictamen, por lo cual le solicito respetuosamente ponga a consideración de la asamblea esta propuesta de adenda presentada por la Junta Directiva de esta Comisión de Gobernación. Por su atención, a todos muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Guillén. Pido a la Secretaría dé cuenta para ilustrar plenamente a la asamblea, de la propuesta de modificación a la que se refirió la diputada Guillén.

¿Lo tenemos ahí a la mano? Si no... Bien.

Dijo que había una propuesta, pero no se sabe cuál es. Entonces lo pertinente y aconsejable es que se diga en qué consiste. Por eso le pido a la Secretaría que dé lectura, y si no, le pedimos a la diputada proponente que esté pendiente porque anunció la inclusión de modificaciones, pero no se presentaron expresamente. Están acá. ¿Sí tiene claro la Secretaría en qué consisten?

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Sí.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ¿Sí? Adelante, entonces. Nada más le pido que esté pendiente, por si hay algo que no queda claro. Gracias.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Propuesta de modificación presentada por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Como lo expresó la diputada Guillén, que fundamentó el dictamen a nombre de la comisión, estas modificaciones vienen consensuadas y avaladas

por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación. Entonces en tal virtud y ya dadas a conocer a la asamblea, consulte la Secretaría si se aceptan las modificaciones.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, a ver, antes. Sonido en la curul de la diputada Rocío Nahle, por favor. Adelante, diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente, ayer se votó en Comisión de Gobernación, este dictamen en la tarde. Este adendum no estaba. Este adendum ahorita aquí en el pleno, después de que la presidenta presenta el proyecto, nos lo están presentando al pleno. No ha llegado. No lo hemos analizado. Esto es un albazo prácticamente. Yo creo que esto es una falta de respeto para los integrantes, para los diputados, en que nos estén informando de las adiciones de esta manera.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: A ver, sonido ahí en la curul del diputado Macedonio Tamez, por favor.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (desde la curul): Gracias, presidente. Haciendo eco a lo que ha dicho mi compañera Rocío Nahle. Hay una imprecisión que se acaba de hacer, no ha habido ninguna reunión de la Mesa Directiva de la Comisión de Gobernación, de tal manera que avalo lo dicho por mi compañera, y sí hago un extrañamiento y cuestionamiento público. Gracias, señor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Aquí en las propuestas de modificación que tenemos, que se señala de entrada que vienen suscritas por la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación, vienen también las firmas correspondientes. Yo no quiero contradecir o contravenir los dichos de quienes han cuestionado el asunto. Están por ahí teniendo un diálogo los inquirentes con la diputada presidenta de la comisión. No sé si sugieran algo, qué curso darle a la propuesta.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sí, diputado. Perdón, nada más diputado Ramírez Marín.

Diputada Guillén, ¿se ratifica la propuesta para que el pleno pueda admitir o no admitir, en su caso, las propuestas de modificación, se mantiene la propuesta? Que le presten el micrófono en la curul de la diputada Nahle. Diputada Guillén, adelante.

La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Para decir que efectivamente se mantiene la petición de la adenda y que estamos, o ya aclaramos con la diputada Nahle y con el diputado, con el doctor Tamez, para aclarar de que era un simple error. Pero sí se mantiene, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Muchas gracias. Sonido en la curul del diputado Ramírez Marín, por favor.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente era sugerir que mientras se desahogaba la explicación pudiéramos continuar con los posicionamientos, pero creo que ya ha quedado claro.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ramírez. Continuamos. Consulte la Secretaría a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Guillén a nombre de la Comisión.

El Secretario diputado Ramón Bañales Arambula: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aceptan las modificaciones propuestas por la diputada Guillén. Las

diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: En consecuencia está a discusión en lo general con las modificaciones propuestas por la comisión y aceptadas por la asamblea el dictamen en su conjunto.

Ya tenemos integrada una lista de diputadas y diputados para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios. Por lo tanto tiene la palabra el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. Las intervenciones serán hasta por cinco minutos.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, diputado Ferreiro. Sonido en la curul del diputado Clouthier, por favor. ¿Con qué propósito, diputado?

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul). Entiendo que pedí en su oportunidad el participar también en posicionamiento, entonces creo que por tradición siempre voy primero yo, pero usted manda.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Yo creo que lo que manda es la cortesía parlamentaria y en este caso ya le habíamos otorgado la palabra al diputado Ferreiro. Yo sugeriría que lo escucháramos e inmediatamente después, a menos que el diputado Ferreiro... Ya está aquí, dice, entonces inmediatamente después de esto, diputado Clouthier, con todo gusto, atendiendo a lo que hemos establecido ya prácticamente como procedimiento, como costumbre, aquí. Sonido en la curul del diputado Clouthier de nueva cuenta.

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Yo no tengo inconveniente, presidente, en la medida nada más de que se me dé la voz.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Así será en cuanto...

El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo (desde la curul): Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: ...concluya la participación del diputado Ferreiro. Muchas gracias. Adelante, diputado, por favor.

El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con la venia, señor presidente, diputadas y diputados. Antes que nada, una disculpa al diputado Clouthier por haber pasado yo primero, pero no teníamos conocimiento de que iba a pasar.

El control interno del Ejecutivo federal es una parte central de la administración pública, por ello resulta de vital importancia la operación de la Secretaría de la Función Pública, y que además su función sea armónica con los demás instrumentos que en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, traerá consigo el nuevo Sistema Anticorrupción.

Esta reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la administración pública federal en materia de control interno del Ejecutivo federal, busca precisamente esa armonización, de tal suerte que la Secretaría de la Función Pública sea eficiente y efectiva, sin caer en la burocratización de su ejercicio. Salvar ese aspecto era preocupación del Partido Encuentro Social, por eso presentamos en marzo pasado, una iniciativa en materia de control interno del Ejecutivo federal, a través de lo que se buscaba devolverle las facultades a la Secretaría de la Función Pública.

El propósito lo vemos cumplido con este dictamen, fue revisar el control interno, el Sistema Integral de Control y Evaluación Gubernamental, fueran congruentes con el Sistema Nacional Anticorrupción, y en particular con el Sistema Nacional de Fiscalización, en el ánimo de evitar duplicidad de algunas acciones con la Auditoría Superior de la federación.

Se armonizó el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo previsto en el proyecto ciudadano de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que la secretaría se encontrara habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas.

Además un punto importante es que se incluyó a la Procuraduría General de la República como uno de los sujetos a los que se le aplica la presente reforma, así como a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de especialización y fin específico, requieren de control especial.

Ese fue el espíritu de nuestra propuesta, fortalecer el control interno de la administración pública federal. Por ello venimos a esta tribuna a cohesionar este dictamen que votaremos a favor, ya que consideramos que todo esfuerzo dirigido a mantener un marco jurídico actualizado, no es cosa menor cuando estamos por entrar en un esquema más fuerte de combate a la corrupción en nuestro país.

La iniciativa que nos ocupa consiste en devolverle a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para que pueda cumplir con su encomienda en un contexto de entrada en vigor del nuevo modelo de control y rendición de cuentas, de todas las dependencias públicas en los tres niveles de gobierno de todos los poderes del Estado.

Coincidimos que el fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se le otorguen mecanismos de control suficientes y necesarios para que pueda actuar apoyando de manera significativa al Ejecutivo en su tarea de control y prevención de la administración interna.

Señoras y señores diputados, no podemos dejar a un lado las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deben verse como un complemento a lo establecido para el Sistema Nacional de Anticorrupción y que fortalecer a la Secretaría de la Función Pública se busca armonizar con los demás engranajes, uno de los cuales es el Sistema Nacional de Fiscalización, y el fin último es evitar la duplicidad de funciones, y que sea más clara, más eficiente y más eficaz el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ferreiro. Entiendo que había por ahí alguna confusión sobre los dictámenes puestos a discusión. Vamos a continuar el orden en que los habíamos enumerado. El diputado Clouthier está interesado en participar en la discusión de otro de los dictámenes que en esta sesión se pondrán a discusión.

Continuamos, tiene ahora la palabra el diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: La tarea de impulsar la transparencia y el combate a la corrupción, si queremos que nuestras instituciones funcionen es prioritario dotarlas de las facultades necesarias para ello.

Con su venia, señor presidente, me dirijo a esta asamblea para manifestar la aprobación del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza al dictamen que reforma y adiciona las diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo federal.

Como recordaremos, las reformas a esta ley llevadas a cabo en enero de 2013, eliminaron una amplia diversidad de funciones conferidas a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, con la creación de un nuevo modelo de control y de rendición de cuentas, conformado por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, se hace necesario retomar la existencia de una Secretaría de la Función Pública, cuyas funciones y atribuciones le permitan insertarse adecuadamente en el engranaje operacional de la administración pública federal, a fin de que funcione como un verdadero órgano de control interno.

Mediante esta reforma las facultades otorgadas a la citada secretaría contribuyen a integrarla de manera armónica con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y fiscalización, evitando con ello duplicidades que, como sabemos, socaban la investigación y fincamiento de responsabilidades.

Vemos hoy con optimismo que la presente reforma habilita a esta dependencia del Ejecutivo, para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa.

También resaltamos la inclusión como sujetos de aplicación de este ordenamiento a la Procuraduría General de la República, a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que, por su grado de especialización y fin específico, requieren de un control especial previendo un régimen específico para las tareas de vigilancia, auditoría, atención a quejas y denuncias, así como la investigación y sanción de faltas administrativas acorde a su particular naturaleza.

En Nueva Alianza estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de derecho. Congruentes con nuestros principios nos sumamos a todos los esfuerzos que se realicen para restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y fundamentalmente en los servidores públicos. Por este motivo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Valles. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

El diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros, los mexicanos no estamos de mal humor. Los mexicanos no estamos de mal humor, los que están de mal humor son aquellos que ya se están dando cuenta de que la gente no los quiere. Aquellos que habiendo pretendido gobernar como si fuesen grandes estadistas este país y conducirnos a mayores o más altos niveles de civilidad y de bienestar, están logrando lo contrario a través de dejar hacer, a través de acciones y omisiones, a través de su banalidad y su incapacidad.

Yo creí que iban a leer el mensaje y no lo han leído. Pasa como decían las señoras de antes, ven la tempestad y no se hincan. Obviamente no pretendo que se hinquen, es una metáfora, pero sí que reaccionen ante una sociedad desesperada, insatisfecha, inconforme que está cada vez optando por otras alternativas, que ojalá y siempre sea la política, la alternancia que aunque no ha dado los resultados esperados, algún día los habrá de dar. Espero que la alternativa no sea la violencia ni el radicalismo.

En este caso me refiero al Sistema Nacional de Seguridad en lo general, un sistema que está quedando ligero, bajo en calorías, light, valga el anglicismo. Un sistema que podría ser mucho más contundente y efectivo para evitar la corrupción, y que se está quedando en una nada honrosa medianía.

En particular la ley que estamos comentando, la Ley de la organización del gobierno federal, es una ley que pudo haber sido reformada todavía con mayor contundencia para tener transparencia y dar más acceso a la sociedad. No fue así, se quedó corta y por lo tanto anuncio que los diputados de Movimiento Ciudadano, a pesar de que votaremos en lo general a favor, porque ciertamente tiene sus ventajas, nos hemos guardado unas reservas que junto con las de otros partidos pretende darle más armas, más luz, más efectividad a esta reforma de orden legal.

Mientras tanto dejo este mensaje, dejo esta inconformidad personal, de mi partido, de la sociedad ante esta medianía, y espero que a través de la discusión que se está abriendo y de las reformas que se habrán de aprobar y de las reservas que se habrán de discutir, se logre un mejor Sistema Nacional Anticorrupción. Es lo que México requiere, es lo que México demanda. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes.

Hace tres semanas el Grupo Parlamentario de Morena y el Partido del Trabajo presentamos una iniciativa de ley para reformar el artículo 108 constitucional. El propósito es que en la Carta Magna se establezca una medida para combatir realmente la corrupción desde la cabeza del sistema y no solo medidas que no resuelven el problema de fondo.

Para Morena, el punto más importante es que el país cuente con un sistema anticorrupción robusto. Para ello se requieren mecanismos eficientes que permitan medir resultados y, sobre todo, un profundo cambio de régimen.

En enero de 2013, el Ejecutivo federal propuso la desaparición de la Secretaría de la Función Pública. Hoy la reviven para reasumir todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como órgano fiscalizador, lo cual ha sido un error.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó el 25 de mayo una iniciativa, mediante el cual se reforman los artículos 26, 31, 44 y 50 y se adiciona el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con la finalidad de contribuir a la construcción de un andamiaje jurídico y administrativo y crear un real sistema nacional de fiscalización.

Lamento que no se retomara en forma íntegra en esta ley que hoy se presenta.

Para el Grupo Parlamentario de Morena propusimos que esta Secretaría debe cumplir con tres objetivos básicos: regular, vigilar y evaluar. Para cumplir con estos objetivos es necesario que esta Secretaría goce de independencia y autonomía. Lo más correcto es que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea ratificado por el Congreso, no solo por los senadores.

Esto representa un pequeño paso para la independencia. La independencia de este órgano de control es de gran relevancia, ya que esta Secretaría es la autoridad encargada de sancionar a los servidores públicos del Ejecutivo federal que incurran en algunas responsabilidades administrativas.

Hasta el momento la designación por parte del Ejecutivo ha constituido un área de opacidad y complacencia en la actuación de las personas adscritas a este órgano de control, en perjuicio de la legalidad.

Hasta hoy el gobernante en turno designa al titular de control interno federal. Las expectativas de este funcionario son altas, ya que es el encargado de vigilar el cumplimiento de la norma administrativa y, por lo tanto, se esperaría que este personaje deba cumplir con un perfil profesional en la materia de experiencia reconocida y en lo personal tener un código de conducta intachable, en donde la congruencia entre ética profesional y personal se vea reflejada en el trabajo diario, y esto no se cumple.

La impunidad, el abuso del poder y el tráfico de influencias ha permeado el actuar de los funcionarios de esta Secretaría. Quién puede olvidar a la esposa de un ex secretario de la Función Pública, que aparece con averiguación previa por la PGR en torno a una red de corrupción y extorsión que cobraba cuotas y sobornos a los gasolineros, que amparada por su cónyuge y como subprocuradora de verificación de la Profeco operaba para dar avisos anticipados.

Actualmente, el encargado de esta Secretaría, Virgilio Andrade, tiene la tarea gubernamental, pero se ve implicado en una serie de complicidades y tráfico de influencias, con secuaces gubernamentales de la misma convicción, consiguiendo empleos para fines personales, ignorando y pisoteando el principio de honradez en un código de conducta, que él mismo publicó y que con la protección de su jefe se placea con impunidad.

Esperando que esta impunidad no sea un pago por los servicios de exoneración que se brindaron, por ejemplo, en el caso Higa. Por ello, es necesario contar con una Contraloría Interna del Ejecutivo federal, que sea objetiva y cuya función se apegue a los más altos estándares de cumplimiento normativo. Lo ideal, es que sea autónoma. Debe estar encabezada por un secretario de la Función Pública eficiente y racional, que abarque todo el sector público.

Las reformas a leyes, como la Ley de Adquisición, Arrendamiento y Servicio del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deben propiciar las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez. Estos principios deben de abarcar a todo el sector público, incluyendo a las empresas productivas del Estado, que hoy en esta ley se están excluyendo.

Si no se robustece el Sistema Nacional de Fiscalización con órganos bien estructurados, con una Secretaría de la Función Pública fortalecida, pues esto no va a llegar a buen fin. Morena propone, concluyo, que los órganos internos de control deban ser auditados y revisados por este Congreso, ya que las experiencias anteriores reflejan que estos entes se extralimitaron con mandos medios y encubrieron a los altos mandos.

Esperemos que las reservas presentadas por el Grupo Parlamentario de Morena sean aprobadas para así abonar en esta ley necesaria, y poder votar a favor para dotar de un sistema de supervisión más justo.

Queremos que los consejeros independientes de Pemex, de la CFE que están designando y que están tomando decisiones importantes en las empresas productivas que más presupuesto manejan, estén dentro de esta ley para ser auditados. Porque esta ley los está amparando, los excluye. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Tiene ahora la palabra el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, estamos en un proceso de modernización del país, de las instituciones y la administración pública toda no es la excepción.

Por tal razón, diversos diputados, senadores y grupos parlamentarios propusieron modificaciones a diversas leyes, entre ellas, la de la administración pública federal.

Las dos Cámaras, Senadores, Diputados, hemos venido trabajando en el tema de anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas.

Es por ello que para darle cauce a este tema, dentro del Ejecutivo federal se requiere de reconocer, darle atribuciones y fortalecer sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

Siguiendo esta línea de acción es necesario que sea la misma administración pública federal la que se convierta en ejemplo para todos los órganos de gobierno del país. De manera que el presente dictamen que está a discusión tiene como objetivo mejorar las bases en las cuales se fundamentan las actividades de la Secretaría de la Función Pública, al tiempo que se realiza una adaptación necesaria, derivada de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción.

La Secretaría de la Función Pública requiere de los ajustes que se mencionan en el dictamen, a fin de que pueda cumplir con su función como órgano interno de control de la administración federal, para prevenir y sancionar la corrupción, para investigar y sustanciar faltas administrativas, para realizar auditorías a tiempo, para fortalecer la profesionalización.

En síntesis, es el órgano inmediato en cada dependencia del Ejecutivo donde se revisa cualquier anomalía de los servidores públicos y de los procesos administrativos; se le regresen atribuciones que anteriormente tenía y se le asignan nuevas. Asimismo, se armonizaron sus funciones de manera que no existiera confusión con otros instrumentos que conforman ahora el sistema nacional anticorrupción. Algunas de las atribuciones que se le suprimieron siguen la lógica de que ya se encuentran consideradas dentro de otros marcos normativos del ámbito federal.

Somos Cámara de origen de esta ley, que forma parte no de tres sino de siete leyes que se están modificando para darle un fuerte sustento al sistema nacional anticorrupción. No quitemos importancia a ninguna, no desviemos la atención sobreponiendo a una sobre todas las demás.

Seamos responsables y hablemos claro. Todo es importante, todo ayuda, todo es para combatir la corrupción. Todos debemos estar interesados en que las modificaciones se aprueben y formen parte de este cambio que estamos realizando nosotros, junto con los ciudadanos.

Es por lo anteriormente expuesto que quienes integramos el Grupo de Partido Verde respaldamos este dictamen. Votaremos a favor, el cual consideramos de vital importancia para la administración pública federal. Pero sobre todo, que permita a las instituciones de gobierno recobrar la confianza de los ciudadanos. Es cuanto señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Izquierdo.

Saludamos la presencia de integrantes de Estructura Infantil, del municipio de Atizapán de Zaragoza, estado de México, invitados por el diputado Román Francisco Cortés Lugo. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario.

Tiene ahora la palabra el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD. Andaba cabildeando por otro lado o lo andaban cabildeando. Quién sabe. Esperemos que sea lo primero.

El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Una de las principales condiciones que se establecieron en la reforma constitucional en la materia anticorrupción del 2015 es que cobrara vigencia en el sistema nacional anticorrupción las modificaciones para la figura del órgano de control interno con más facultades, hoy fortalecida Secretaría de la Función Pública.

De tal forma, que hoy los diputados estamos cumpliendo con nuestro compromiso y hemos hecho nuestras las exigencias de una sociedad que está cansada de tantos abusos y de tantos excesos por parte de quienes detenta el poder en este país. Nuestro precario régimen de responsabilidades ha hecho proliferar la impunidad y la corrupción en el servicio público, lo cual ha vulnerado gravemente nuestras instituciones y amenaza seriamente nuestra seguridad, estabilidad y el desarrollo de las presentes y futuras generaciones.

Votaremos a favor de esta reforma, porque sabemos que este país se encuentra en una situación límite y porque estamos conscientes de la urgencia de edificar un nuevo régimen de responsabilidades que fortalezca el ejercicio de la función pública. Esta reforma va a tener un impacto directo en el desempeño de los servidores públicos federales, de las secretarías de Estado, así como las empresas paraestatales y de manera temporal en la Procuraduría General de la República, en tanto ésta se consolide como una fiscalía con rango de órgano constitucional autónomo.

La Secretaría de la Función Pública será uno de los eslabones principales del sistema nacional anticorrupción, que se coordinará con el Inai, con la Auditoría Superior de la Federación, con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, bajo la dirección del Comité de Participación Ciudadana.

La renovada secretaría, se encargará de organizar y coordinar el sistema de control interno, evaluará la gestión gubernamental e inspeccionará el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos. También establecerá las bases para generales para la realización de auditorías internas, trasversales y externas, y expedirá las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno con las dependencias y entidades de la administración pública federal.

La Secretaría de la Función Pública se encargará de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones en materia de sistema de registro, contabilidad y contratación de adquisiciones, arrendamientos y ejecuciones de obra pública.

La reforma a la Ley Orgánica también incluye la disposición para que el nombramiento del secretario de la Función Pública que haga el presidente sea ratificado por el Senado de la República e incorporará la obligación de presentar su declaración de intereses por una cuestión de ética.

Nosotros queremos hacer un llamado al presidente de la República para que una vez que entre en vigor esta nueva reforma, se inaugure un nuevo comienzo en la asignación de un nuevo titular que concite el más amplio consenso entre la sociedad. Esta solicitud no es menor ya que un nuevo nombramiento dotaría de nueva legitimidad mayor a este órgano de control con nuevas facultades y altas expectativas para la sociedad mexicana. El titular actual simboliza la ineficacia y un tanto la simulación que son características de la etapa que queremos dejar atrás.

Con esta reforma los legisladores del Congreso de la Unión le estamos dando al Ejecutivo el instrumento y el marco jurídico necesarios para emprender cambios de fondo y el presidente tiene ahora en sus manos la posibilidad de demostrar que también quiere una transformación real presentando un nuevo nombramiento ante la Cámara de Senadores para que sea ratificada una persona con alta calidad, ética, que prefigure el nivel de compromiso con el combate a la corrupción que el servidor público necesita.

Como promovente de una de estas iniciativas que dieron origen al presente dictamen reconozco la inclusión que hizo la dictaminadora de nuestras propuestas, pero insisto, las y los legisladores hemos cumplido. Ahora el presidente tendrá la última palabra de ir a fondo con las transformaciones y renovaciones de esta institución. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Ortega. Tiene ahora la palabra la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas. El día de hoy, en el marco de las reformas que crean las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, esta soberanía estará en este momento poniendo a consideración de ustedes el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y en ese sentido yo quisiera aquí con todos ustedes hacer una recapitulación de algunos de los antecedentes que nos llevaron precisamente a estar el día de hoy aquí analizando el dictamen de esta iniciativa.

Primero que nada decirles que en el mes de enero del 2013, una vez que el Ejecutivo federal propuso que se eliminara la Secretaría de la Función Pública, que se le quitaran las atribuciones que tenía esa secretaría y se distribuyeran a diferentes dependencias de la administración pública federal, y que estas atribuciones se incorporaran en otras dependencias, pero de manera particular en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esto se aprobó en esta Cámara, el desaparecer la secretaría, de quitarle atribuciones y distribuirlas en otras dependencias de la administración pública federal, con el propósito, con el compromiso de que se iba a establecer un órgano constitucional que se encargaría de realizar estas funciones de control interno, un órgano constitucional que nunca fue creado y que nunca fue aprobado. Esto originó que durante muchos meses esta secretaría se quedara sin titular, y con ello no tenía esa fuerza necesaria, y es el motivo que hoy nos ocupa el día de hoy aquí, que tenemos que restablecer a esta secretaría y regresarle las atribuciones que le fueron quitadas.

Fue hasta el año pasado, en un ambiente de un escándalo de corrupción por la investigación que tenía que hacerse en el caso de la Casa Blanca, que fue nombrado el actual titular de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, desde el 2013 hasta el 2015, la secretaría no tenía titular, y de 2015 en que se nombra al titular, precisamente con motivo de este escándalo, nos damos cuenta que el funcionamiento de la secretaría, bajo una subordinación, no es el más adecuado.

Bien, derivado de todo ello estamos el día de hoy atendiendo a la reforma constitucional que se da para que se puedan reestablecer las funciones a la Secretaría de la Función Pública, y sí me gustaría recordar que esto se da y tiene su origen en la iniciativa presentada en noviembre de 2014, por los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Es importante resaltar también que este análisis, esta discusión, se empezó a dar precisamente a finales del segundo período de sesiones, aun y cuando desde el mes de noviembre del año pasado este tema estaba puesto sobre la mesa para su análisis y discusión.

Esto lo menciono porque quiero hacer énfasis en el compromiso que en todo momento el Grupo Parlamentario del PAN ha tenido con la aprobación de las leyes secundarias de este Sistema Nacional Anticorrupción.

En todo momento hemos buscado la participación de la sociedad civil, escucharlos porque ellos obviamente han estado muy activos y en ese sentido hemos estado muy atentos a todos sus planteamientos y sus observaciones.

Es por ello, compañeros y compañeras diputadas, que el día de hoy queremos, desde esta tribuna, solicitar que voten a favor del presente dictamen para que así podamos responder a una exigencia compartida por todos los sectores de la sociedad en el efectivo combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Alfaro. Tiene ahora la palabra la diputada Martha Hilda González Calderón, del Grupo Parlamentario del PRI, y con la intervención de la diputada González, se terminará el plazo para la presentación de reservas a este dictamen.

La diputada Martha Hilda González Calderón: Con la venia de la Presidencia. La transparencia y el acceso a la información deben constituirse como herramientas que permitan mejorar la rendición de cuentas públicas, pero también combatir y prevenir eficazmente la corrupción, fomentando la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales y en el respeto a las leyes.

La corrupción no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de distintas formas de trasgresión al Estado de derecho, por lo que no puede combatirse de manera eficaz persiguiendo solamente a los individuos que han cometido faltas, sino construyendo garantías y creando políticas integrales que permitan disminuir esas conductas.

La administración pública federal es fundamento en la función del gobierno, por ello es necesario establecer las bases de operación de la Secretaría de la Función Pública en el marco de las reformas en materia de transparencia y anticorrupción, que le permitan fungir como órgano de control interno de la administración.

En razón de lo anterior, el dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación establece as facultades para que la Secretaría de la Función Pública pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan su adecuado funcionamiento para fortalecer su capacidad de control y prevención en la actividad administrativa.

Por ello se armoniza la operación de la Secretaría de la Función Pública con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en especial con el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por autoridades de los tres poderes y de todos los órdenes de gobierno, que le permitirán la correcta realización de sus atribuciones sin caer en la burocratización y propugnando por la simplificación administrativa en aras de mantener un ejercicio transparente y focalizado en la rendición de cuentas.

Reconocemos el trabajo de todas y de todos los integrantes de la Comisión de Gobernación; a su presidenta, nuestra compañera diputada Mercedes Guillén, y a todos, y a todas las diputadas y a todos los diputados que integran esta comisión de los distintos partidos políticos representados en esta soberanía, por contribuir en la construcción de acuerdos y la promoción del trabajo legislativo a favor de lograr un gobierno transparente, en donde nadie, nadie, esté por encima de la ley.

Es nuestra obligación como representantes de la ciudadanía lograr un México donde las políticas públicas promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Desde el inicio de la presente legislatura las diputadas y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI nos hemos comprometido a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las autoridades del Estado mexicano en todos los niveles y órdenes de gobierno, con la garantía del escrutinio constante de su actividad, y con la certeza del ejercicio diligente, responsable, honesto y legal de los recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada González. Saludamos la presencia de alumnos de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la ciudad de Puebla, invitados por el diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos aquí a este recinto parlamentario.

Tiene ahora la palabra para hablar en pro, el diputado Edgar Spinoso Carrera, del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista.

El diputado Edgar Spinoso Carrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la reforma constitucional de enero de 2013 en materia de combate a la corrupción mandata al Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones de ley en la administración pública federal, con el objeto de que la secretaría responsable del control interno del Ejecutivo, es decir la Secretaría de la Función Pública asumiera las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la propia reforma y en las leyes que se deriven de ella.

No obstante que se preveía la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, una vez que se concretara la reforma constitucional ello no ocurrió, por lo cual dicha reforma no puede considerarse como derecho vigente, en virtud de que la condición prevista para su vigencia no se actualizó. Por el contrario, en consonancia con el

diseño institucional del Sistema Nacional Anticorrupción aprobado en 2015, la pasada legislatura decidió ratificar la existencia orgánica de la Secretaría de la Función Pública y revalidar su competencia funcional.

No se puede soslayar que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción conformó un régimen de cooperación entre las instituciones que de forma directa o indirecta, antes o después del hecho, previenen o combaten la corrupción en México. Es decir, la Secretaría de la Función Pública, la nueva Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, el cual será puesto a determinar y sancionar las violaciones de tipo administrativa.

En este sentido, resulta imprescindible restablecer y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, a partir de las disposiciones constitucionales en la materia, necesarias para hacer frente al control interno de los entes públicos del Poder Ejecutivo federal.

En esencia, la reforma propuesta contempla nuevas atribuciones para la Secretaría de la Función Pública, así como la reasignación de otra respecto a aquellas que en su momento se propuso otorgarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Conforme al nuevo régimen de responsabilidades, se pretende sentar las bases para transitar hacia una profesionalización de los servidores públicos. Estos, los responsables de desempeñar funciones de control interno, lo cual resultará en un gran avance en los índices de eficacia y mejora de la gestión pública, así como en mejores prácticas de prevención y de responsabilidades administrativas.

Las funciones de investigación deben ser desempeñadas por personas con la correcta capacitación, académica y técnica, así como la experiencia profesional que les permita detectar la conducta que la sociedad más reclama: la honestidad y la honradez.

En cuanto a las entidades paraestatales, se considera pertinente actualizar la regulación de las mismas, dejando atrás esquemas rígidos que no guardan congruencia con las necesidades operativas y de control, que actualmente requieren dichas instituciones. Pero eso sí, respetar el régimen especial de control y vigilancia que ya existe en el seno de las mismas, en virtud de su propia naturaleza.

Lo anterior, es sin que se pretenda de manera alguna que dichas entidades paraestatales dejen de sujetarse a todas las disposiciones en materia presupuestal, de contrataciones públicas, de fiscalización ni de responsabilidades administrativas, entre otras que deben de regir el sector paraestatal.

En el Grupo Parlamentario del Partido Verde, estamos seguros que la presente reforma contribuirá significativamente para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado y, en particular, de la administración pública, garantizando la actuación de los servidores públicos y que en la conducta de ellos se apegue a los principios de legalidad, de honradez, de lealtad e imparcialidad que mandata y están establecidos en el artículo 113 de nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Spinoso. Tiene ahora la palabra el diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.

El diputado Rafael Hernández Soriano: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Sin duda el acto legislativo que en esta Cámara se está discutiendo, que es la reforma a una de las piezas legislativas que han de ser modificadas por mandato ciudadano y también por mandato constitucional que integran en su conjunto todo el Sistema Nacional Anticorrupción, debemos de reconocer en esta Cámara que se nos había olvidado, se les había olvidado a las legislaturas anteriores atender una demanda ciudadanía que es el combate, de verdad, al lastre que representa la corrupción y esto denota la importancia de la ley que estamos discutiendo.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se están presentando y que fueron discutidas ampliamente en la Comisión de Gobernación, tienen precisamente como objeto trasladar las facultades que había perdido, en la reforma de 2013, la Secretaría de la Función Pública y con ello darle su espacio a esta Secretaría, que es una de las siete piezas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción.

Se determina también trasladar otras más a Hacienda, como hasta ahora, a partir de la reforma de 2013 las venía ejerciendo, de ahí la importancia de lo que estamos discutiendo.

Estamos dando un mensaje a la demanda ciudadanía, que sin duda en las discusiones que tendremos en las siguientes horas en este pleno, habremos de encontrar algunas dificultades, algunos defectos de las piezas que estaremos aprobando, pero que en su conjunto nadie puede regatear que significa un paso histórico a una demanda y un clamor social.

Como parte del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática informo que votaremos en pro, por la trascendencia y la importancia de la reforma. Sin embargo, es menester señalar que todo el bagaje normativo que vamos a modificar también tiene que estar a prueba en su aplicación, y de acuerdo a los especialistas, tardarán 10 o 15 años en demostrar la eficacia de todo el sistema.

Cuando un funcionario se corrompa, o un particular que también lo hiciera sea sancionado y haya sanciones ejemplares, estaremos dando muestras de su eficacia.

Por eso, en esta ocasión solicitamos al Ejecutivo federal que para que tenga buen inicio esta aplicación del sistema nacional anticorrupción, reconsidere la permanencia del secretario de la Función Pública, que por todos es sabido, nos une una relación de amistad y fue puesto en su encargo, precisamente, para cubrir con la impunidad actos de corrupción en los más altos niveles de la administración pública federal.

El que lo haga será un buen gesto a sus declaraciones que hace algunos días realizó ante los hombres de negocios, algunos de los más importantes del país, en el sentido de que sí hay una voluntad real para erradicar la corrupción de una vez por todas, y aceptar que no es un asunto cultural, que es un asunto institucional y requiere de decisiones legislativas y decisiones de gobierno. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Hernández. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Suficientemente discutido en lo general.

Se informa que, de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han reservado para su discusión en lo particular los siguientes artículos: el 37 en sus diversas fracciones y el artículo 44.

Pido a Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Presidente

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Perdón, antes sonido en la curul del diputado Triana Tena, por favor.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Gracias, presidente. Solamente para hacer un respetuoso extrañamiento a la Comisión de Gobernación. Se circuló una adenda, una solicitud de modificación al dictamen que estamos a punto de votar. Tenemos acceso al documento, de rebote nos enteramos –prácticamente por terceras personas– que existía esta adenda o el contenido de la misma porque no fue circulada a nuestros diputados integrantes de la mesa directiva. Tenemos tres secretarios y no estaban enterados del contenido de la misma.

Consideramos que esta es una falta al procedimiento. Consideramos que no se está respetando la reglamentación interna y queremos hacer este respetuoso señalamiento, insisto, a la presidenta de la Comisión de Gobernación. Es cuanto, presidente. Gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Nada más le recuerdo, diputado, con todo respeto, que en el momento procesal oportuno, cuando se presentó la propuesta de adenda, de modificación el pleno mismo la votó, la decidió.

En todo caso, creo que este asunto deberá ser retomado internamente por la comisión en su momento. Aquí, de hecho, ya estamos sobre esta base terminando la discusión en lo general. A ver, de nueva cuenta sonido ahí en la curul del diputado Triana.

El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Sí, diputado, entendemos esta parte y además la compartimos. Nos dimos por enterados en el momento procesal que usted está señalando de manera muy puntual.

Nuestro señalamiento es simplemente porque no se circuló a nuestros tres secretarios integrantes de la Junta Directiva para que pudieran llevar a cabo la firma respectiva de la adenda. Es un tema de procedimiento y nada más quiero que esto quede asentado. Es todo, presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Quedan recogidas sus expresiones, diputado Triana. Entonces, continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados, con la propuesta de la comisión aceptada por la asamblea.

(Votación)

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Saludamos la presencia de alumnos de la Telesecundaria, número 1023, de la comunidad la Norita del Refugio, del municipio San Luis de la Paz, Guanajuato. Invitados por el diputado Timoteo Villa Ramírez. Bienvenidas, bienvenidos a este recinto parlamentario de San Lázaro.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Falta alguna diputada o diputado por emitir su voto? Todavía está abierto. ¿Todavía falta algún diputado, alguna diputada por votar? Adelante diputada, adelante. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 447 votos a favor, cero abstenciones, cero en contra.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 447 votos, unanimidad de los presentes.

La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Sonido en la curul de la diputada por favor.

La diputada Mariana Trejo Flores (desde la curul). Mi voto sería a favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Vamos a tomar extemporáneamente la votación, para que se incorpore, por 448 votos.

El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Virgilio Caballero también a favor. Un voto más. Ya. Tan, tan. Otro más allá.

El diputado Timoteo Villa Ramírez (desde la curul): A favor.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: El diputado Timoteo Villa, a favor. Entonces ya. No se me retrasen porque luego retrasamos todo.

Tiene ahora la palabra la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuestas de modificación al artículo 37 en sus fracciones X, XI y XII.

La diputada Araceli Damián González: Gracias, señor presidente. Diputadas, diputados, ahora que se revive a la Secretaría de la Función Pública otorgándosele ciertas atribuciones de control, no han quedado claramente establecidos muchos de los procedimientos para la correcta fiscalización y control interno de la administración pública, se prestaría a arbitrariedades en la designación y remoción de funcionarios, por eso es que propongo reforma a las fracciones X, XI y XII, que se refieren a la asignación y remoción de funcionarios, pero que esta se hace según las, no se establecen los criterios para realizarlo, y consideramos que se tiene que fundamentar y tiene que quedar en la ley que cualquier asignación, y sobre todo, remoción de un funcionario que esté relacionado con estas funciones, tienen que estar establecidas claramente las razones por las cuales se le remueve, porque si no, van a empezar a entrar y salir funcionarios a contentillo de quien encabece la Función Pública.

También estamos proponiendo una reforma a la fracción XXII del artículo 37, en la que se otorgan facultades al secretario de la Función Pública para que establezca lineamientos de transparencia que pueden contravenir lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que le otorga únicamente al INAI estas facultades: transparencia, anticorrupción, y una verdadera fiscalización sobre la administración pública; es lo que busca Morena, y lo que se pretende hacer con estas reservas. Y espero que la aplanadora ¿verdad? apoye estas modificaciones y estas reservas.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Damián. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas de modificación.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Tiene ahora la palabra el diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar propuesta de modificación al artículo 37 en sus fracciones XI, XII, XXVII y al 37 Bis. Además al artículo 44, en su párrafo quinto.

Vamos a dejar el mismo tiempo, y vamos a ser tolerantes con el mismo, sabiendo que va a presentar tres propuestas de modificación, para que no lo presionan allá abajo, pero para que no abuse tampoco usted, de la asamblea.

El diputado Macedonio Tamez Guajardo: Gracias, presidente. Compañeros, traigo tres reservas, pero voy a ser muy breve, porque verdaderamente se redunda mucho en este medio y no es bueno.

En primer lugar es una adición que proponemos al artículo 37. Proponemos un artículo 37 Bis, en donde pedimos que para ser secretario de la Función Pública se establezcan requisitos en donde al candidato propuesto por el presidente, se le desvincule de cualquier partido político, se prohíba que alguien que ha sido miembro de un partido, o que es miembro de partido haya sido candidato, pueda ser secretario de la Función Pública.

Y miren, ustedes me darán la razón, uno de los lastres que tiene nuestro sistema político, es precisamente esa ominosa mezcla que se hace en este país entre la administración pública y la política electoral y partidista.

Esto contamina campañas, contamina precampañas, establece compromisos inenarrables, de esos que son inenarrables pero que deberían narrarse en expedientes judiciales, de tal manera que debemos avanzar hacia un sistema con un servicio civil de carrera que incluya a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública, y en particular al titular, separar a la política y a la administración pública, y en particular aquella que tiene a su cargo la supervisión y el control de la Función Pública.

En segundo lugar, proponemos una modificación al artículo 37, en sus fracciones XI y XII, es muy sencillo, así como el Secretario de la Función Pública tiene la facultad de nombrar a los titulares de los órganos de control

de cada dependencia federal, lo que pedimos es que los escojan no libremente, sino dentro de una terna que proponga el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esto es para blindar esos nombramientos para evitar que suceda lo que viene sucediendo, que se escoja un favorito para que haga las funciones de control y de esta manera lograr más credibilidad y mejores resultados de los órganos de control.

Y finalmente, el artículo 44, pedimos que los informes que den los titulares de los órganos de control también sean turnados al comité coordinador y al Comité de Participación Ciudadana para hacerlos del conocimiento de todo mundo. Es una reserva que hago en favor de esa transparencia que tanto necesitamos. Gracias, y buenas tardes.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputado Tamez. Ya ven, ni los tres minutos se llevó. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de modificación presentadas.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desechan y se reservan para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Tiene ahora la palabra la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo 37 en su fracción XXI.

La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su permiso, señor presidente. Presidenta de la Comisión de Gobernación, he estado señalando sobre esta reserva al artículo 37, fracción XXI, donde a la Secretaría de la Función Pública le corresponde establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez: emitir normas y lineamientos.

Sin embargo, en toda esta descripción señala este artículo que corresponde a esta Secretaría, varias secretarías de Estado, pero maneja, señala que con excepción de las empresas productivas del Estado. Es decir deja a Pemex y a la CFE fuera de esto, precisamente donde más adquisiciones, donde más obras de arrendamientos y contratos se llevan a cabo.

Me comentan: Es que fíjate que ya está en otra ley. ¿Por qué no ponerla aquí, por qué incluso colocar excluir a las empresas productivas del Estado? Es ahí donde hacen negocios, es ahí donde se dio Oceanografía, es ahí donde estuvieron los hijos de Martha Sahagún. Es ahí donde han estado un sinfín de corruptelas y dice: Es que tiene su propio órgano interno de control. Sí, pero dependen de la Secretaría de la Función Pública y tienen como intermediario al propio director de Pemex como jefe.

Eso es lo que hace que no funcione la Secretaría de la Función Pública. Eso es lo que a Morena decimos necesitamos una ley, sí, pero una ley a profundidad porque si no es lo mismo, es simulación, es nada más una secretaría para tapar a los amigos e irse con los mandos medios y tapar a los altos mandos.

Hay denuncias interpuestas contra los propios contralores de las diferentes subsidiarias. No pasa nada. En este artículo señalan con excepción de las empresas productivas. ¿Qué propongo?, que se elimine la palaba excepción y se añada y empresas productivas del Estado. Esa es mi reserva. Solicito de la manera más atenta que este pleno considere y vote a favor esta reserva. Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias, diputada Nahle. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación de los artículos 37 y 44 en términos del dictamen modificado por decisión de la propia asamblea.

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación nominal de los artículos 37 y 44 en términos del dictamen.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Modificado.

(Votación)

El Secretario diputado Juan Manuel Celis Aguirre: ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar? Está abierto el sistema, por favor. ¿Algún diputado, alguna diputada falta por votar todavía? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 388 votos a favor, 7 votos se abstuvieron y en contra 58.

El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen por 388 votos. En consecuencia, aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo federal. **Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.**

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-1042
EXP. **776**

Secretarios de la
H. Cámara de Senadores,
Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal, con número CD-LXIII-I-1E-72, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 16 de junio de 2016.

Dip. Ramón Bañales Arambula
Secretario

RECIBIDO
2016 JUN 16 PM 2 47
CAMARA DE SENADORES
SECRETARIA GENERAL DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS
0 4 3 4 9

JJV/rgj

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

M I N U T A
PROYECTO
DE
DECRETO

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL.

Artículo Único.- Se reforman los artículos 19; 26; 31, fracciones XII, XXI, XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV; 37; 44 y 50, y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31. ...

I. a **XI. ...**

XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;

XIII. a **XX. ...**

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;

XXII. (Se deroga)

XXIII. ...

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXXI. (Se deroga)

XXXII. (Se deroga)

XXXIII. Reinvidicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las

normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

procedente la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los Órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y

XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que someta el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.

Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Segundo. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

Tercero. Por lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda.

Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con dichos programas.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 16 de junio 2016.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente

Dip. Ramón Bañales Arambula
Secretario

JJV/rgj

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA; SOBRE LA MINUTA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL.

HONORABLE ASAMBLEA:

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, en atención a la Minuta con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, misma que fue turnada a estas Comisiones Legislativas para su estudio, análisis, discusión y dictaminación.

Por ello, con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, fracción I, 136, 150, 166, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado de la República; las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda; someten a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen, sustentándose para ello en la siguiente:

METODOLOGÍA[1]

I. En el capítulo de "***ANTECEDENTES***" se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo.

II. En el capítulo de "***OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA***" se expone el objeto contextual de la minuta recibida.

III. En el capítulo de "***ANÁLISIS DE LA PROPUESTA***" se realiza un estudio de las propuestas.

IV. En el capítulo de "***CONSIDERACIONES***" se expresan las razones que sustentan el presente dictamen.

ANTECEDENTES

I. El 16 de junio de 2016, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, con 450 votos a favor y fue remitido a esta Cámara de Senadores.

II. En esa misma fecha, fue recibida en el Senado de la República la Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal y turnada por la Mesa Directiva, a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda.

[1] *Vid*., artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, señala el contenido que deberá integrar un dictamen que se presente ante el Pleno.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

Esta minuta remitida por la Cámara de Diputados establece que el titular de cada Secretaría de Estado deberá expedir los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Así pues, los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, la minuta prevé que la Secretaría de la Función Pública conocerá e investigará las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo que podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La minuta señala que la Secretaría de la Función Pública deberá organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el

ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental.

Asimismo, la Secretaría coordinará y supervisará el sistema de control interno y establecerá las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; así como deberá expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, y realizará las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control.

Ahora bien, la minuta dispone que la Secretaría de la Función Pública tendrá la facultad de designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, designará y removerá a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales.

Finalmente, la minuta establece que la nueva Secretaría del Función Pública del Ejecutivo Federal colaborará en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes.

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS

La corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca diversos efectos; que va desde el pago ilícito a un policía hasta el deficiente funcionamiento de un sistema político; por lo que la problemática de la corrupción no sólo es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y cultural de un país.[2] Así pues, la corrupción es un fenómeno que ha existido desde siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema político y cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.[3]

En este sentido, la corrupción genera más corrupción, como lo explica el concepto de *naturaleza retroalimentativa*[4] de la corrupción, también conocido como *efecto contagio*, que se refiere a la relación inversa existente entre la cantidad de corrupción de una comunidad y el riesgo de verse involucrado; es decir, la aplicación de una sanción dependerá del grado de corrupción existente en la sociedad; por lo que en gobiernos en los que no esté arraigada la corrupción, una persona corrupta carece de cómplices y el peligro de ser sancionado es mayor, pues no encontrará una justificación frente a la opinión pública; por otra parte, en las sociedades corruptas, mayor es el número de involucrados en los actos de corrupción, menor el riesgo de ser sancionado y, así, mayor es la impunidad al cometer los mismos.

Existen múltiples formas de corrupción y resulta imprescindible distinguir entre los factores que facilitan el crecimiento de este fenómeno, que puede versar en factores históricos, estructurales y culturales de un país, de aquellos que sean las causas más directas, toda vez que el desarrollo de la corrupción depende no sólo de la presencia de

[2] DEL CASTILLO, ARTURO, *Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición de Cuentas*, Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas 5, Auditoría Superior de la Federación, México, 2003, p. 14.
[3] LAPORTA, FRANCISCO y ÁLVAREZ, SILVINA (eds.), La corrupción política, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 19.
[4] MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID, La corrupción y su efecto retroalimentativo: Una de las mayores amenazas a la democracia, *Letras Jurídicas*, Núm. 29, Enero-Junio 2014, pp. 107-118.

ciertas variables estructurales e históricas, sino también en las oportunidades, los riesgos y las consecuencias de la detección, incluyendo su sanción.[5]

Esto entraña un fenómeno complejo por su ramificación institucional; por la multiplicidad de conductas que lo generan, por la ausencia de mecanismos eficaces y efectivos para su combate; por ello, actualmente se advierte una debilidad en la capacidad de afrontar a la corrupción en cada uno de los ámbitos en que se genera.

Económicamente, la corrupción desencadena acciones que constituyen un importante obstáculo para el crecimiento de la economía. Uno de los detonantes primordiales del crecimiento económico que es directamente afectado por la valoración del grado de corrupción en un país determinado es la inversión extranjera directa que recibe. Como han mostrado diversas investigaciones[6], las prácticas de corrupción imponen costos de transacción elevados para los inversionistas que se traducen en una especie de impuesto informal e ilegal a las inversiones, lo cual reduce el atractivo del país para estos capitales.

En lo que respecta a los arreglos institucionales para combatir la corrupción y el problema de la coordinación interinstitucional; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró una investigación comparada de los distintos arreglos institucionales de diversos países para combatir la corrupción[7], aunque hacen énfasis en el papel de las Agencias Anti-Corrupción con mandato independiente, considerar estos puntos puede ser útil también para tener referentes de otros contextos, por lo que a continuación se presentan las principales conclusiones.

---

[5] ROUSSEAU, RICHARD, "Political Corruption in Contemporary Democracies: Newness, Scale and Varieties", *IBSU Scientific Journal*, 2 (1), 2008, pp. 82–83.
[6] POPE, JEREMY, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, *TI Source Book 2000*, Transparency International, United Kingdom, 2000, p. 5.
[7] *Institutional Arrangements to Combat Corruption A Comparative Study*, United Nations Development Programme, Thailand, Keen Publishing Co., Ltd., 2005.

La Agencia Anti-Corrupción debe[8]:

- Ser independiente de influencias externas para poder procesar legalmente presuntos actos de corrupción a todos los niveles.
- Operar sobre la base de un marco legal sólido e integral.
- Contar con un fuerte respaldo político en lo más altos niveles del gobierno.
- Tener recursos financieros, técnicos y humanos adecuados.
- Operar bajo un liderazgo ejemplar con la más alta integridad.
- Tener una estrategia coherente y holística para combatir la corrupción, con un enfoque en la prevención, investigación y concientización.
- Tener el apoyo de la sociedad en general para ser exitosa.

Asimismo, menciona los siguientes factores adicionales:

- Aproximación sistemática, integral y de largo plazo contra la corrupción.
- Una relación adecuada entre ella, la Fiscalía y el Poder Judicial.
- Considerar particularmente el papel de la institución de auditoría y del ombudsman, dado que pueden desempeñar papeles complementarios.
- Asegurar la existencia de canales y mecanismos que garanticen la cooperación y coordinación entre las distintas instituciones involucradas en estas tareas.

[8] *Ibidem*, pág. 5-10.

El estudio señala que "muchas de las ventajas [de crear una Agencias Anti-Corrupción], como especialización, experiencia e incluso el necesario grado de autonomía, pueden obtenerse estableciendo unidades especializadas dentro de las agencias existentes para la aplicación de la ley" [9], aunque concluye que en estos casos uno de los principales problemas se vuelve la coordinación entre dichas agencias.

Debido a la gran diversidad de las arenas en que pueden ocurrir actos de corrupción y de los ámbitos en que éstos pueden repercutir, gradualmente se han multiplicado los actores involucrados en el combate a la corrupción. Esto hace necesario contar con mecanismos específicos para asegurar la coordinación y cooperación entre las agencias involucradas y crear definiciones precisas de las esferas de acción de cada una para evitar que se traslapen sus atribuciones, o que haya responsabilidades que queden desatendidas.

Al respecto, *"Índice de Percepción de la Corrupción*[10]*"* de Transparencia Internacional[11], por ejemplo, asignó a nuestro país, en el año 2012 y 2013, 34 puntos sobre 100; similar a la obtenida en el año 2014 con 35/100 quedando en el lugar 103.

Por otra parte, el *"Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno"* elaborado en 2010 por Transparencia Mexicana[12], presenta los siguientes datos:

- En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como

[9] *Ibidem*, pág. 17.
[10] El *Índice de Percepción de la Corrupción* asigna una puntuación y clasifica a países/territorios según las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en su sector público. Se trata de un índice compuesto integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo.
[11] Corruption Perceptions Index 2014, *International Transparency*. <http://www.transparency.org/cpi2014/results>
[12] "Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno", *Transparencia Mexicana*, Informe Ejecutivo 2010. <http://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2011/05/INFORME_EJECUTIVO_INCBG2010.pdf>

concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones de actos.

- En 2010, una "mordida" costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. En 2007 el promedio fue de $138.00.

- En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en "mordidas". En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos.

- En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro.

- Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo representó 33% de su ingreso.

- La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 10.0 en 2007 a 10.3 en 2010.

- Dieciséis entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 2007; en las otras dieciséis entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o se incrementó.

- De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción.

- Veintiún trámites empeoran sus niveles de corrupción.

A partir del análisis de diversos estudios comparativos, un documento de trabajo del Centro de Recursos Anticorrupción U4[13] encuentra una serie de problemas y obstáculos prevalecientes, en mayor o menor medida, en numerosos países para lograr una adecuada coordinación y cooperación interinstitucional, entre los que destacan que:

[13] CHÊNE MARIE, *Coordination Mechanisms of AntiCorruption Institutions, U4 Expert Answer*, Anti-Corruption Resource Centre, Transparency International, Chr. Michelsen Institute, Norway, 2009.

- Las entidades encargadas de la coordinación generalmente carecen de un enfoque proactivo. Además no tienen mucha visibilidad, poderes o influencia como para lograr incidir directamente en las demás instituciones.

- No están bien delimitadas las atribuciones y las líneas de responsabilidad de los distintos actores.

- La necesidad de la coordinación no fue considerada de forma plena y adecuada desde la fase de diseño de las políticas y estrategias. Esto implica que no haya una visión integral en la que se articulen las distintas instancias y lleva a distintos problemas prácticos en su interrelación.

- Las entidades de coordinación reciben pocos recursos y no tienen una capacidad adecuada de personal especializado y de otros elementos técnicos para emprender sus actividades.

- No existen disposiciones legales o mecanismos específicos para promover, incentivar o, incluso, forzar la coordinación.

- Faltan canales de comunicación adecuados para facilitar la interacción entre las agencias y la vinculación con la ciudadanía.

- Las políticas, estrategias y otros documentos básicos no son adecuadamente diseminados entre los organismos responsables y entre la sociedad, debido a que su publicación no es sistemática o que no se difunden y mantienen de formas fácilmente accesibles.

- No se involucra a las diversas agencias anticorrupción en el diseño de las políticas y mecanismos de supervisión y evaluación. La revisión de casos específicos es útil para conocer y comparar algunas formas de resolver los numerosos obstáculos para lograr la coordinación.

El estudio del PNUD[14] analiza los casos de Bulgaria y Sudáfrica, en donde no existe una agencia anticorrupción independiente. Ambos países coincidieron en plantear la resolución del problema de la coordinación interinstitucional a través de la instauración de dos componentes estratégicos.

El primero se trató de la creación de una instancia específica de carácter colegiado en donde participen representantes de diversas agencias y el segundo fue formalizar la elaboración de una estrategia nacional contra la corrupción.

En el caso de Bulgaria, el órgano colegiado consiste en una comisión interministerial donde participan representantes de los Ministerios de Finanzas, del Interior, de Justicia y la Oficina de la Auditoría. Su función es coordinar y dirigir la implantación de la estrategia contra la corrupción y analizar la efectividad de dichos esfuerzos. No cuenta con poderes de investigación, ni puede intervenir en casos de corrupción.

Sudáfrica, por su parte, creó un comité de coordinación conformado por todas las agencias con funciones anticorrupción, así como representantes del gobierno del nivel nacional y local. Este comité se reúne periódicamente y se apoya de una unidad administrativa permanente que se encarga de desarrollar e implantar la estrategia anticorrupción, así como de supervisar la coordinación entre agencias, recopilar y analizar información sobre corrupción y asesorar a todo el sector público en el desarrollo de políticas anticorrupción. Esta unidad no tiene tampoco facultades de investigación, ni interviene en casos concretos de corrupción.

Es así que algunas de las ideas desarrolladas en este sentido son: crear sistemas estandarizados para compartir información, formar grupos consultivos y de trabajo, llevar

[14] *Institutional Arrangements to Combat Corruption a Comparative Study*, *op. cit.*

a cabo capacitaciones conjuntas y crear marcos comunes de referencia sobre normas, indicadores y lineamientos, entre otros elementos.

En los últimos años, el Estado Mexicano ha creado e impulsado diversas instituciones cuya finalidad es lograr una adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía; por ejemplo, en materia de fiscalización, con la creación de la Auditoría Superior de la Federación[15]; en materia de transparencia, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales[16]; en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, se instauró la Fiscalía Especializadas en materia de Combate a la Corrupción[17]; y, en materia de control, evaluación y vigilancia, a través de la Secretaría de la Función Pública[18].

Así, conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, es necesario establecer un Sistema Nacional que conjunte herramientas y mecanismos para la investigación, la prevención, el combate y la sanción del fenómeno de la corrupción, que impacta tan perniciosamente al Estado Mexicano, e incluso alrededor del mundo; por ello, resulta imprescindible instaurar nuevamente una dependencia que esté encargada del control interno del Ejecutivo Federal que asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional.

[15] La entidad de fiscalización superior de la federación se creó con el Decreto por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio de 1999.
[16] Órgano creado con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014.
[17] El 12 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/ 011 /14, por el que se crea la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, en cumplimiento del artículo Décimo Octavo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014.
[18] Decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003.

Es importante recordar que con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal[19], se eliminaron diversas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de avanzar en la creación de un nuevo modelo de control y rendición de cuentas de todas las dependencias públicas, en los tres Poderes y en los tres órdenes de gobierno. Por ello, se dio paso a importantes avances en materia de transparencia y combate a la corrupción, que se vieron concretados en la reciente reforma publicada en mayo de 2015, que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y fortaleció al Sistema Nacional de Fiscalización y a la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción; haciendo necesario que la autoridad responsable del control interno del Ejecutivo Federal, en este caso la Secretaría de la Función Pública, reasumiera todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no habían sido consolidadas a esta última en la reforma al sistema financiero.

CONSIDERACIONES

El miércoles 27 de mayo de 2015, fue publicado el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción.

Tras la publicación del Decreto en materia de combate a la corrupción, el artículo 73 Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, faculta y constriñe al Congreso de la Unión a expedir las siguientes leyes:

[19] El 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

a) La ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;[20]

b) Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos de la federación;[21]

c) La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que establezca su organización y su funcionamiento;[22] y

d) La ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.[23]

En tal tesitura, conforme a lo dispuesto por el párrafo sexto de la fracción II de artículo 79 Constitucional, las Comisiones Unidas coinciden en que los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su

[20] *Vid*., fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.
[21] *Ibídem*.
[22] *Vid*., fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.
[23] *Vid*., fracción XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México.

caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Así, con base en estos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejorar su gestión.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 109 de la Constitución política de los Estados unidos Mexicanos, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

Así pues, estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora en la necesidad de prever y enriquecer el orden jurídico federal en materia control interno de la Administración Pública Federal conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción; toda vez que el control interno respecto del desempeño de la Administración Pública Federal es una piedra fundamental en su función gubernamental, por ello se considera imprescindible establecer las bases de operación de la Secretaría de la Función Pública, en el marco a las reformas en materia de transparencia y anticorrupción que le permitan fungir como órgano de control interno de la Administración Pública Federal, pues, en concordancia con lo expresado con la Colegisladora, resulta evidente que la corrupción es un problema transversal que afecta diversas áreas de nuestra sociedad, y que, de no atenderse, puede constituir un lastre a la generación de bienestar social y desarrollo económico.

Así, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con lo dispuesto por la minuta de la Cámara de Diputados, respecto a la importancia de devolver las atribuciones

correspondientes a la Secretaría de la Función Pública, en razón que ésta deberá contar con la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción.

Ahora bien, la presente modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, planteada por la minuta, reafirma la obligación de este Congreso de instaurar una Secretaría de la Función Pública que permita el adecuado engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción, entre el ejercicio de la Administración Pública Federal, la transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que para dar plena vigencia a las atribuciones que se proponen reasignarle, es necesaria la aprobación de la legislación en la materia, a fin de alcanzar los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, atendiendo los preceptos constitucionales.

Estas Comisione Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en establecer las facultades de la Secretaría de la Función Pública que le permitan ejercer los mecanismos de control necesarios para su adecuado funcionamiento con la finalidad de fortalecer al Ejecutivo Federal en su capacidad de control y prevención respecto a la actividad administrativa; no obstante, para estas Comisiones Unidas, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son complemento de lo establecido para el Sistema Nacional Anticorrupción, que integran armónicamente las facultades de la Función Pública con el Sistema Nacional, así como con el Sistema Nacional de Fiscalización.

Así pues, estas Comisiones Unidas están de acuerdo con la Cámara de Diputados en armonizar la operación de la Secretaría de la Función Pública, con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, especialmente con el Sistema Nacional Anticorrupción, al ser uno de sus integrantes; y se considera imprescindible establecer un instrumento legal que le permita a la Secretaría el correcto desarrollo de sus atribuciones.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por la minuta, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en mantener la denominación de Secretaría de la Función Pública, toda vez que ésta ya es conocida por la sociedad mexicana, además de que existe otra legislación que hace referencia a Función Pública, por lo que en caso de modificar la denominación podría traer confusiones y generar la necesidad de nuevas modificaciones a otros ordenamientos; tomando en cuenta también que el cambio de nombre podría acarrear un costo económico a la federación en el cambio de recursos materiales.

Estas Comisiones Legislativas están de acuerdo en eliminar las referencias a las auditorías preventivas, a fin de garantizar la simplificación administrativa, al considerar que la inclusión específica del término podría causar confusión respecto a la figura y su diferencia con la figura de la auditoría que se mantiene en el proyecto y que puede ser ejercida en cualquier momento por los órganos internos de control.

En concordancia con el contenido de esta minuta, estas Comisiones Dictaminadoras consideran pertinente establecer el eje de los Órganos Internos de Control en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que serán los responsables del buen funcionamiento del sistema de control interno de la unidad a la que se encuentren adscritos.

De igual forma, estas Comisiones Unidas estiman oportuno armonizar el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que la Secretaría de la Función Pública se encuentre habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa, considerando que actualmente la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas puede atraer asuntos.

Por otra parte, las Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en incluir a la Procuraduría General de la República dentro de los sujetos a los que les aplique esta reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a las empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de especialización y naturaleza, requieran un control especial.

Respecto a las entidades cuya operación es distinta a las unidades administrativas gubernamentales, como en el caso de las empresas productivas del Estado y las instituciones de banca de desarrollo, que requieren controles distintos derivados de su finalidad y de sus mecanismos de funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que estableció mecanismos específicos para la evaluación, control y vigilancia de las disposiciones administrativas respecto a presupuesto y responsabilidad hacendaria; contrataciones públicas; conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; responsabilidades administrativas de servidores públicos, y transparencia y acceso a la información pública; por ello, si bien esta minuta precisa que la Secretaría de la Función Pública es la autoridad competente para regular y vigilar, así como establecer la normatividad en materia de contrataciones públicas para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estas Comisiones Unidas están de acuerdo con la Colegisladora en que, lo anterior, no implicará de ningún modo una interferencia en el régimen especial que la Constitución otorga a las empresas productivas del Estado.

Asimismo, estas Comisiones Legislativa estiman oportuno lo dispuesto por la minuta enviada por la Cámara de Diputados, al añadir la facultad de la Secretaría Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales; con el propósito de establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización , funcionamiento, control y evaluación; además, las empresas paraestatales deberán continuar sujetándose a la

normatividad en materia de presupuesto, obra pública, responsabilidades administrativas y fiscalización, en lo relativo a su operación y funcionamiento.

Estas Comisiones Dictaminadoras sostienen el argumento de la Colegisladora para mantener y promover la profesionalización de los servidores públicos de la Función Pública, a través de la ocupación de cargos con los mejores perfiles, a fin de alcanzar una labor de investigación realizada por expertos con la capacitación técnica y académica suficiente que les permita detectar conductas indebidas, a efecto de perseguirlas y sancionarlas efectivamente.

Estas Comisiones Unidas coinciden en añadir la obligación de poner a disposición del público, en consulta a través del registro electrónico, los manuales de procedimientos y de servicios al público, y modificar la facultad para establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal.
Se reasignan las facultades que habían sido conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, las Comisiones Dictaminadoras estiman oportuno incluir la facultad de expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno, así como la facultad de requerir a las dependencias, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo, sujetando las mismas a las recomendaciones del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora bien, en razón de su naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública, estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladoras en incorporar la facultad de realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en armonía con lo establecido por la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción; así como la facultad de fiscalizar

directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal.

Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras estiman oportuno sentar la base para permitir el intercambio de información, así como el establecimiento de mejores políticas que permitan una coordinación transversal entre la Secretaría de la Función Pública, el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización; así como establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le permite al Sistema conocer los resultados de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, a fin de incidir de manera positiva y eficiente en la persecución y corrección de las irregularidades que se llegaren a detectar por parte de servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda; someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19; 26; 31, fracciones XII, XXI, XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV; 37; 44 y 50, y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31.- ...

I. a **XI.** …

XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;

XIII. a **XX.** ...

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;

XXII. (Se deroga)

XXIII. ...

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente.

XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXXI. (Se deroga)

XXXII. (Se deroga)

XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal,

contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las Empresas Productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación

necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como

substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que

corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios

de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los Órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y

XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que somete el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por

actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.

Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos

mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda.

Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con dichos programas.

16-06-2016
Cámara de Senadores.
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de control interno del Ejecutivo Federal.
Aprobado en lo general y en lo particular, por 106 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones.
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Gaceta Parlamentaria, 16 de junio de 2016.
Discusión y votación 16 de junio de 2016.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL

Honorable Asamblea, informo a ustedes que las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, hicieron llegar a la Mesa Directiva los siguientes dictámenes:

Que contiene proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.

Y que contiene proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que los dos dictámenes se incorporen a la agenda de esta sesión extraordinaria para su trámite.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se integren a la agenda los dictámenes descritos por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza su incorporación, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Ambos proyectos están disponibles en su escaño. El despacho de los dictámenes será separadamente con su respectiva discusión y votación. Comenzamos con el dictamen con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL

(Dictamen de primera lectura)

Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se omita la lectura del dictamen

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se omita la lectura del dictamen referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de manera inmediata.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se dispensa la segunda lectura, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, hasta por diez minutos.

La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

Hoy cerramos el primer ciclo de reformas de la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción de mayo de 2015, tenemos hacia adelante dos grandes retos, en primer lugar, continuar con la armonización normativa de al menos otra docena de leyes y la implementación.

Quiero, al final de ese primer ciclo, agradecer al Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, por permitirme presentar este dictamen a nombre de la comisión, y reconocer también el trabajo de los Senadores Yunes Márquez, Presidente de la Comisión de Justicia; y de Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, así como el de todos los demás integrantes de las comisiones y de la sociedad civil.

Sin duda, éste es el resultado de un trabajo colectivo y de la voluntad de todos, de generar bienes públicos para nuestro país.

El dictamen que hoy presentamos y que aprueba reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que pueda cumplir su rol dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, reconociendo y devolviéndole a plenitud su papel dentro de la Administración Pública Federal como entidad insustituible, responsable del control interno.

Una característica imprescindible para aspirar a que el control interno sea eficaz, es un mínimo de independencia y autonomía muchas veces durante este proceso de discusión y de construcción de las leyes anticorrupción, manifestamos nuestra preocupación porque los actuales contralores son nombrados por los titulares de las dependencias, y todos lo sabemos, ningún subordinado se atreverá a sancionar a quien le debe el trabajo.

El marco de la política nacional anticorrupción que se generará para poder prevenir, detectar y sancionar la corrupción, los titulares de los órganos internos de control tienen un papel fundamental, les corresponderá instrumentar la política de prevención y la cultura de integridad en el servicio público, además, sustanciarán investigaciones y sancionarán hechos de corrupción no graves.

De ahí la importancia de que estos órganos internos de control, los titulares tengan un mínimo de independencia, así como el mínimo de independencia que requiere el propio Secretario o Secretaria de la Función Pública; y la importancia del nuevo modelo de ratificación de este funcionario, que como saben, a partir de la reforma constitucional tendrá que ser ratificado por dos terceras partes del Senado de la República, y que se desarrolla o se recoge de la reforma constitucional en este dictamen, así como este cambio en la designación de los titulares de los órganos internos de control que nuevamente serán nombrados por la Secretaría de la Función Pública.

Insisto, de esta manera estamos corrigiendo una mala práctica que se generó recientemente sobre la designación de los titulares de los órganos internos de control.

Los aspectos fundamentales, además de esto, que están en el dictamen son:

En primer lugar, como comenté, se restablece la Secretaría de la Función Pública como encargada del control interno de la Administración Pública Federal.

Se reincorporan las funciones que se le habían conferido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que correspondían a la Secretaría de la Función Pública, y establece aquellas que abonan al mejor cumplimiento de las acciones en materia de combate a la corrupción, estableciendo, entre otras, organizar el Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia y entidad que estimulen su desempeño.

Vigilar el cumplimiento de las normas de control.

Vigilar, en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación, el cumplimiento de las normas de fiscalización.

Realizar investigaciones y auditorías en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Vigilar a estas en materia de contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, adquisiciones, arrendamientos y ejecución de obra pública, la instrumentación y difusión de un código de ética.

Sujetar, como lo comentaba, el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública, al Senado de la República. Además del desarrollo de las facultades de la Secretaría de la Función Pública para investigar, sustanciar y resolver las faltas administrativas no graves, así como remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su sanción las que se consideren graves.

Quiero terminar esta presentación reiterando el reconocimiento y el agradecimiento a todos los grupos parlamentarios, y especialmente a los Senadores que hemos participado en las comisiones.

Y a nombre de la comisión, les pedimos su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senadora Rojas Hernández.

Informo a la Asamblea que el Senador Fernando Yunes Márquez entregó el texto de la presentación del

dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia, para que se integre al Diario de los Debates. Por lo cual, se instruye que se proceda de esta manera.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra el Senador Alejandro Encinas Rodríguez, para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

A nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, debo de venir a plantear el fundamento que nos ha llevado a la aprobación de la minuta enviada por la Cámara de Diputados respecto a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y de la reforma al artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Como ya lo ha señalado la Senadora Laura Rojas, con estos dictámenes cerramos un primer ciclo en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde si bien las siete leyes que hemos aprobado, con éstas, en el periodo extraordinario de sesiones, constituyen el fundamento básico para la conformación del sistema, habrá todavía que revisar un conjunto de leyes que deben garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y particularmente, la implementación de los instrumentos que se crean para combatir la corrupción en nuestro país, entre otros, y de manera particular, la Ley de Obras Públicas; la Ley de Asociaciones Público Privadas, que deberán formar parte de este marco legislativo, que esté vinculado con el conjunto del sistema.

Hay que señalar que las minutas que nos han enviado de la Cámara de Diputados fue aprobada el día de ayer, por unanimidad, aunque en la discusión en lo particular se reservaron 16 artículos en los cuales no hubo consenso.

En primer lugar, debo destacar algunos de los aspectos importantes que se introducen en este dictamen, así como los temas que quedan pendientes aún por resolver.

Creo que dentro de lo más importante está el que se incorpore a la fiscalización de las participaciones federales de manera directa, incluyendo la aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales a las entidades federativas, lo cual va a dar certeza de cómo se está instrumentando, además de la Ley de Coordinación Fiscal, los mecanismos de asignación de los recursos públicos a cada una de las entidades federativas en el país.

Otro aspecto que cabe destacar, es cómo ahora la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones públicas, privadas o cualquier otra figura jurídica que adopte el manejo de recursos públicos con particulares, al mismo tiempo que los que se establezcan entre los distintos órdenes de gobierno estableciendo, además un seguimiento de las garantías que se establezcan sobre los empréstitos que promuevan los estados y municipios en el país.

De la misma forma, cualquier persona podrá presentar denuncias que permitan revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas que de hecho son prácticamente todas las entidades del sector público.

Dentro de los asuntos, que estoy convencido, tendremos que revisar en su oportunidad o en otras leyes que deben conformar parte de estas reformas que crean el Sistema Nacional Anticorrupción, es el hecho de que en estas minutas no se mantiene con claridad la prescripción de las responsabilidades, ya que actualmente se estableció en siete años para la prescripción de la responsabilidad, cuando lo más adecuado, y así lo habíamos propuesto en los debates públicos, ésta fuera de diez años, a fin de que pudiera tener un periodo de duración la prescripción mayor al periodo de desempeño del titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Otro tema que habrá que revisar con detenimiento, es el hecho de que de las auditorías de desempeño se limitan en este dictamen a la verificación del grado de cumplimiento de los objetivos federales en la fiscalización

de la Cuenta Pública, cuando deben hacerse evaluaciones como se ha planteado en otros artículos del dictamen, del cumplimiento de metas, objetivos y sus resultados.

Y finalmente, creo que dentro de las limitaciones del dictamen, es que se eliminó como causal de remoción del titular de la Auditoría Superior de la Federación el que este destruya documentos o que los utilice para su beneficio personal.

Será un avance. Yo entiendo que es difícil hacer la corrección de estas minutas en los tiempos actuales donde estamos entrando en la recta final del periodo extraordinario de sesiones, y eso implicaría regresar a la Cámara de Diputados la minuta que, sin lugar a dudas, acredita un buen desempeño de la Colegisladora, pero espero que exista sensibilidad para que coadyuvemos, además de construir el marco legislativo necesario, crear las condiciones para su implementación y que ésta tenga buenos resultados.

Muchas gracias por su atención.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias a usted, Senador Encinas Rodríguez.

Concluida la presentación de dictámenes por las comisiones, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 del Reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción II del Reglamento, serán por orden creciente.

En ese sentido, tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para fijar posicionamiento.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor Presidente.

Al inicio de este sexenio se decidió desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, ¿se acuerdan? En el programa y en el gran planteamiento que hizo el Presidente, estaba la desaparición de la Secretaría de la Función Pública en su sistema anticorrupción.

Después de esa desaparición planteada han ido reviviendo a esa Secretaría, la sacan del panteón a consecuencia, recordemos, estamos analizando una institución, a consecuencia de los escándalos de corrupción del Presidente de la República y su familia.

Entonces se recupera esta Secretaría ya liquidada, porque resultaba útil para sancionar lo que el Presidente quería, ahí viene de regreso.

Los acontecimientos vinculados a la casa blanca, el Grupo Higa y OHL, serán más que meros incidentes que nos recordarán a todos los mexicanos la precariedad y la corrupción del presente sexenio. No estoy inventando nada, así fue.

Les decía yo que una imagen que refleja toda la supuesta lucha anticorrupción, es Peña Nieto entronizando a ese Secretario que es una pantomima, para que, acto seguido, con una instrucción declara que todo lo que había pasado estaba bien: una carta de buena conducta. Además les recuerdo para ver a qué grado llega el desprecio a la opinión pública.

El Presidente una vez que termina esa imagen, hay que tener presente, porque una imagen refleja claramente el contenido moral del sistema, los periodistas presentes bien informados no aplauden y el Presidente les censura y les dice: "¡Ah! Ustedes no aplauden".

¿Qué pasó con la casa blanca?

¿Qué pasó con Grupo Higa? Exhibido públicamente.

¿Qué pasó con OHL?

Los enormes negocios de estos mexiquenses desde el Estado de México, son descubiertos de las tranzas que hacían: subir, inflar las inversiones para garantizarles más recuperación, movimiento y triquiñuelas para que el gobierno del Estado de México públicamente les subiera las tarifas para cada coche, ¿y qué pasó? Nada. Esta es la Secretaría y éste es el Secretario por ahora, que forma parte de este Sistema Nacional Anticorrupción. Falso, falso.

Lo vamos a repetir y vamos a estar hasta el final analizando el sistema, conscientes de que esto molesta al poder y que pueden montar una campaña de descalificación que va desde los periódicos que están de alguna manera controlados, hasta López Dóriga que hasta allá llega la censura, el señalamiento.

Pero lo peor que puede ocurrir es que los Senadores tengan miedo, que se olviden y se hagan guajes de que la corrupción empieza en donde lo hemos señalado nosotros, y aunque no les guste a quienes están en defensa de esos intereses, dispuestos a deturpar, a descalificar, a mentir y atacar, no nos preocupa y lo vamos a seguir haciendo.

En cuanto al dictamen, hemos insistido que los titulares de los órganos e instancias encargadas de la corrupción, debieran ser electas por los ciudadanos, por el voto de estos en las urnas y no por designaciones presidenciales y cuotas de partidos mayoritarios.

Es el mismo sistema que no funciona porque tenemos creado un conjunto de "instituciones autónomas" que no sirven para nada porque están colonizadas por los intereses.

En el caso del Secretario de la Función Pública, su nombramiento será sometido por el Presidente de la República al Senado para que éste, por mayoría de los presentes, lo ratifique.

Es evidente que este procedimiento no garantiza de ninguna manera la independencia del titular de la Secretaría de la Función Pública, porque este funcionario le deberá su cargo al Presidente de la República, al partido mayoritario que lo ratifique y a quienes se suman en estas reformas de los otros partidos.

El supuesto vigilante, esta Secretaría de la Función Pública, deberá su función y su nombramiento a los vigilados que lo nombran.

Así fuimos viendo cómo cada una de las piezas de este sistema es falso.

Lo anterior no es menor, si tomamos en cuenta que el artículo 37 del dictamen concede poderes inmensos al Secretario de la Función Pública, a ese Secretario que ya lo vimos actuar.

¿Poderes inmensos para qué? Porque no los usa para lo que debería hacerlo.

Entre esas facultades está la de nombrar y remover, fíjense ustedes, nombrar y remover a todos los contralores de la Administración Pública Federal. El señor éste, nombrado por el Presidente, va a nombrar a todos los que van a controlar cada una de las Secretarías, ¿cuál es la garantía que hay ahí? Y lo hace tanto con la administración centralizada, como la descentralizada, incluyendo al Contralor de la Procuraduría General de la República y a los de las empresas productivas del Estado, todo va a vigilar este Secretario, de una Secretaría que ya vemos como ha funcionado.

Además, el titular de esa Secretaría tendrá competencias para verificar, de manera aleatoria, las declaraciones patrimoniales, podrá verificar, hay que estar atentos a esto, señores, y no distraigan a los Senadores que están muy interesados en oír.

Además, el titular de esa Secretaría tendrá competencia para verificar de manera aleatoria las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, amén de iniciar investigaciones y procedimientos y presentar denuncias, entre otras.

Por eso les decíamos que el 3 de 3, d que han hecho un gran escándalo, y esa real manifestación impresionante de los empresarios con sus secretarias, sus Mercedes, ayer en Paseo de la Reforma que reclaman que ésta es la solución, que es la solución de la corrupción, de atacar la anticorrupción, es una mentira, y lo dijimos.

Por eso cuando nos acusa el PRD, ayer y en estaciones de radio, de que nosotros, el PT, no votó con ellos por intuición, diría su coordinador, porque nunca nos hablaron y nos dijeron nada, porque parecía que lo que querían era perder, porque no se ocuparon de que estuviera completa la bancada, y lo mismo con el PAN.

Entonces resulta que la bancada del PRD, con sus ausencias, que tengo entendido que no les avisaron a muchos, que era el voto histórico para el PRD, el voto histórico con el que iban a coronar su lucha en contra de la corrupción, no se ocuparon sospechosamente de que estuvieran todos, ni siquiera avisaron que iba a haber este voto fundamental.

Pero dice Ríos Piter, qué lástima que no esté aquí en su recorrido que hace por las estaciones de radio, le dicen: "Oiga, señor Senador, ahí tengo la grabación, señor Senador Ríos Piter, faltaron 3 de sus…". Bueno, sí, por alguna razón; pero lo que estuvo muy mal fue que los del PT no votaran con nosotros, por intuición, ya nos explicaron, y lo mismo en el PAN.

La derrota que sufrieron aquí, de eso que era fundamental, la esencia de su combate anticorrupción, pues fue porque no quisieron defenderla, no nosotros, pero eso les da pie a los López Dóriga y a los periódicos para atacarnos en lo personal. Decir: "estos no votaron". Nosotros no teníamos por qué haber votado en lo que no estamos de acuerdo, en esta farsa, porque se lo vuelvo a decir aquí y va a seguir apareciendo, vean ustedes, se los vuelvo a decir: "El titular de la Función Pública, de ese Secretario que será el ricitos de oro u otro el titular de esa Secretaría, tendrá la competencia para, óiganlo bien, vigilar, verificar de manera aleatoria las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, amén de iniciar investigaciones, también será aleatorio, y procedimientos y presentar denuncias, entre otras".

Por eso les explicaba a nosotros, pero nadie tomó en cuenta esa discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que es una farsa, y todos se fueron a lo que los empresarios los habían ordenado hacer.

Las declaraciones, éstas tan importantes, las va a juzgar este Secretario, por ejemplo, las que se hayan hecho ya, hemos oído hablar de que qué pasó, ya se investigó la de fulano y perengano, para no personalizar, no lo van a hacer porque este señor es el que no investigó la casa blanca, no investigó a López Dóriga, se hizo guaje con OHL, bueno, cuando se trate de revisar las declaraciones, éstas que van a ser la maravilla, ese señor va a decir quién sí y quién no.

Y en un sistema fallido, corrupto, que no sirve para nada, en ese sistema, pues de qué sirve tener ahí unas declaraciones para que se aclare la corrupción.

Ahora la indignación de los empresarios es verdaderamente ridícula, y su manifestación por la reforma que llegaron todos en sus coches, Mercedes y todos estos acompañados de sus secretarias, de sus empleados.

Todo eso, muchas gracias.

¿Sigo adelante? Gracias, señor Senador.

Pero todo eh, esto y lo demás, pero claro que sí.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Un momento, Senador Bartlett Díaz.

Sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Señor Presidente, le solicito la palabra para hechos.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Una vez que concluya el orador.

Continúe el orador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Alguien más?

Por otra parte, el dictamen indica que contra el principio de reserva de la ley, último párrafo del artículo 50 del dictamen. Es decir, en contra del artículo 90 de la Constitución, que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales, tanto las que cumplan funciones institucionales como las que realizan objetivos comerciales.

Esto es una delegación de competencia ilegal.

Quien tiene que definir esos criterios es la ley, no dárselas a la Secretaría para que defina los criterios de clasificación e investigación.

Al Ejecutivo se le entrega lo que tiene que hacer el Legislativo.

Lo que no me sorprende dado el presidencialismo acusado que caracteriza este sexenio, aunque, desde luego, ello sea violatorio a la Constitución.

Es importante también señalar que ante los hechos bochornosos, públicos y privados del señor Virgilio Andrade, este Senado debe solicitarle al Presidente de la República su remoción inmediata.

Es una burla todavía venir con esa propuesta aquí, con ese Secretario allá, si hubiera realmente una voluntad de atacar a la corrupción. Hay que pedir la destitución inmediata del señor, este Procurador tapadera, de las corrupciones en este sexenio.

Concluyo señalando que ese dictamen es otro ejemplo de simulación y de mentira.

Para nosotros la corrupción debe combatirse con mecanismos de democracia participativa que en nuestro país no existe revocación de los mandatos de los servidores electos, consultas obligatorias y vinculantes para las principales decisiones administrativas del país y referéndums para aprobar reformas constitucionales, tratados y leyes como los que ahora se someten a nuestra consideración.

Para nosotros cualquier esquema anticorrupción debe garantizar la protección plena de los derechos laborales, políticos y cívicos, de quienes denuncien actos de corrupción ante el servicio público, al sector social y a las empresas privadas.

Para combatir la corrupción, se requiere de una Ley de Austeridad y Gasto Eficiente que debería expedir el Congreso de la Unión, y que no se acompaña en este paquete legislativo.

Y vean cómo siguen subiendo, pese a todo, siguen subiendo los presupuestos de las obras públicas, empezando por el aeropuerto y toda una serie de obras que se han multiplicado los costos en los últimos días.

Los indicadores de desempeño deberían, en caso de ser violados, implicar el delito de traición al mandato por parte de los servidores públicos, a los contratistas, concesionarios, permisionarios, personas físicas, accionistas y/o directores de empresas, se les debería prohibir donar recursos en efectivo o en especie a las precampañas y campañas.

Los contratistas o concesionarios que donarán a las campañas, no deberían participar nunca en las licitaciones o contratos de obras públicas.

La Ley Penal debería establecer los delitos de corrupción como delitos imprescriptibles.

La ley debería regular que las declaraciones patrimoniales de interés y fiscales, así como de las declaraciones juradas, sean totalmente públicas.

Todos los servidores públicos de primer nivel, en los poderes e instancias de autoridad y los particulares que ejerzan o administren recursos públicos o reciban contratos. Estos son nuestros planteamientos.

Y volvemos a encontrar que esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es lo mismo, pero además acompañada de una desvergüenza y un cinismo, porque traen a esa Secretaría que ha hecho gala de ser simplemente una tapadera de la corrupción que ha reinado en este sexenio y que los electores han repudiado hace unos tantos días.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Ha solicitado el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, por alusiones personales. Para hechos, una vez que termine el capítulo de posicionamientos, con todo gusto, a quienes lo han solicitado.

Tiene usted el uso de la palabra, Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

Solamente para contestarle al Senador Bartlett Díaz, lo que escuché.

Le molestó al Senador Bartlett Díaz que le echáramos en cara de que no quiso votar, pues aquí estábamos presentes, Senador Bartlett Díaz. Yo le gritaba a usted, que por favor votara, y usted decidió no hacerlo, que hubiera gente, y que hay asientos de miles de personas que en las redes le estén imputando a usted que no quiso votar, y que haya gente que legítimamente se siente indignada, porque usted decidió quedarse en aquella esquina cruzado de brazos viendo el tablero, y decidió no votar a favor, no votar en contra, ni siquiera decidió poner abstención.

Usted lo que quiso hacer es pasar desapercibido y se lo digo con toda claridad y con toda puntualidad, si no, revisen las cámaras de ese día del Canal del Congreso, y usted estaba ahí presente Senador Bartlett Díaz. Seguramente no le gusta, porque a usted y a muchos de sus compañeros del movimiento de Andrés Manuel López Obrador solamente les gusta de construir, les gusta subirse a esta tribuna a señalar todo lo malo que está.

Hay que señalar lo que hay mal en este país, sin duda, pero sabe que lo invito, lo invito a proponer y lo invito a no ocultarse en no exhibir su voto, porque no se construye el país, no se arma historia escondiéndose. No se arma historia diciendo, *nos echan en cara algo falso*. Dé la cara con su voto Senador Bartlett Díaz, para eso es el tablero, para eso le paga el pueblo de México, para que si usted se desvela toda la noche para escuchar y para plantear, usted tiene la obligación de votar, tiene la obligación de decir si está a favor, si está en contra o usted se abstiene.

No se quede sin votar Senador Bartlett Díaz y menos aún venga a decir que lo que yo digo son mentiras, porque sí le puedo echar en cara muchas cosas de las que usted ha sido parte de esta historia del país, de las que yo no soy, y tengo toda la capacidad de echárselas directamente en cara.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter.

Tiene el uso de la palabra por alusiones, ¿no?

Inmediatamente después de la intervención, continuaremos con la lista de oradores.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) No sé en qué venga la intervención del Senador Bartlett Díaz, con mucho gusto la escucharé, atentamente, pero entiendo que no hay alusiones sobre alusiones, entonces voy preparándome para que, incumplido el Reglamento, también me deje participar.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Así es, si no tiene inconveniente, abriremos un capítulo para que sea abra un debate de alusiones por alusiones, una vez que termine el posicionamiento de los grupos, con todo gusto Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Mencioné con pena a este joven, a ese joven al que yo le quisiera prometer un futuro brillante, pero sí me dio mucha pena oírlo en las estaciones de radio, y ahí está, tengo la grabación cuando le preguntan: *"bueno, señor Ríos Piter, ¿usted es Senador?, ¿no estuvieron presentes ahí de su bancada?"*

Dice: "Bueno, pero eso es por algunas razones. Pero eso sí, lo que no es aceptable es que el PT no haya votado con nosotros".

¿Y por qué yo iba a votar por ustedes, si estamos en contra de todo lo que han hecho?

Hemos votado en contra todo este sistema. Consideramos que es una mentira, lo acabo de decir hace un momento.

Pero entonces me parece que es hasta vergonzoso, y sospechoso, que cuando no se ocupan de tener a los miembros de su bancada aquí, se permita el Senador decir, "*bueno, eso está bien, pero no votó el PT",* nosotros no votamos con ustedes, votamos en contra. Y los estuvimos observando, y ahí estaba yo, y no nos subimos y los estuvimos observando de ver cómo defendieron una posición que era su bandera, con ganas de perderla.

Nadie, nadie, Senador Ríos Piter, y todos los demás, nadie nos fue a decir lo que fueron a decir allá afuera; salieron aquí sorpresivamente a dar una conferencia de prensa, a hacer una cuenta, diciendo que tenían tantos votos, y tantos; y con los del PT, ganamos.

Entraron aquí y jamás nos dijeron nada, se lo dije a Barbosa Huerta ayer, jamás pidieron el voto del PT, porque sabían que estábamos en contra de todo lo que han hecho ustedes en este sistema que es una farsa. De manera que me parece muy pobre que diga que hay que dar la cara. La he dado toda mi vida, señor Ríos Piter.

Ahora, si quiere usted hacemos un análisis de mi vida privada y todo lo que usted quiera, pública, lo que quiera, no le tengo miedo.

Lo que ustedes provocaron con esa farsa también de salir y decir: "con los votos del PT ganamos". No, nosotros no íbamos a votar con eso, es una mentira, y lo acabo de explicar en mi intervención.

Esa publicidad de los datos fundamentales para acabar con la corrupción en el país que tanto pelearon y no lo defendieron el día que había que hacerlo aquí, eso no sirve para nada.

¿Por qué se los expliqué?

El que va a haber si analiza y está mal las declaraciones estas tan importantes que ustedes no defendieron ni perdieron, van a ser el Secretario de la Función Pública y los órganos de control de cada Secretaría que estaban en sus manos.

Por eso hemos dicho, mientras no exista un sistema de verdad, y ustedes se han sumado en todo esto al PRI y al PAN, durante meses han votado junto todo a ellos de un sistema que no sirve para nada, es una engañifa en contra de los intereses de la población que está indignada por lo que está pasando.

Votaron todo.

Todo lo votaron, ahí tengo los votos.

¿De dónde íbamos a votar con ustedes, dígame usted?

Pero entonces van y arman todo un escándalo que, claro, lo retoman los que están dispuestos a amenazarnos y a decir que serán capaces de destruirnos en todo, pero en esa historia que usted puede contar, señor Senador, podrá contar que no les tengo miedo, ni a los señores de la televisión a los que hemos acusado, ni a TV Azteca que es un sistema que se robaron del Estado, Salinas Pliego y Salinas de Gortari, no les tenemos miedo.

Aquí hemos dicho que mientras el Presidente de la República no sea impugnable por delitos de corrupción, no habrá nada, y mientras los ex presidentes que se han llenado de dinero y están convertidos en "tótems", nombradores de funcionarios, dueños de redes, de control, de política, de economía, mientras ellos no estén señalados, no va a haber sistemas de corrupción, y lo hicimos durante todo el debate, subimos a la tribuna, dimos la cara, estuvimos en contra, señalamos a quien había qué señalar.

Claro que esa argucia de que ustedes perdieron la votación porque el PRD no votó, es una tontería porque nosotros no estamos con ustedes, en ésta no estamos con ustedes porque no sirve, y ya se lo demostré, no sirve porque el que lo va a revisar es el que fue nombrado por el Presidente.

Entonces, díganme ustedes si el Secretario de la Función Pública, que acaban de presentar como pieza maestra del Sistema Anticorrupción, bueno, díganme ustedes con el órgano de control que va a nombrar en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, van a enjuiciar al Secretario de Comunicación y Obras Públicas, que es el responsable de todos esos arreglos con OHL, con todo lo que ha hecho, los negocios y el aeropuerto que sube y sube de precio.

No, señor Senador, sí he dado la cara toda mi vida.

Cuando crezca usted, ojalá reaccione y no vaya a decir mentiras en las estaciones de radio, porque se vio muy mal, y usted sabe que lo aprecio en lo personal, pero hay cosas que nos han echado encima, todas las cadenas, todo mundo, y dice:

"¡Es que todos los de las redes estaban esperanzados!"

Estamos en contra.

¿Por qué estaban esperanzados en las redes? Porque no saben lo que ha pasado, porque la desinformación es la que se mantiene aquí, que se presentó la iniciativa que presentamos nosotros, el voto particular pidiendo que se enjuicie al Presidente y a los ex presidentes.

¿Alguien lo supo? Nadie señor Senador, las redes no están enteradas el país está desinformado, hay una dictadura mediática que impide que sepan, y claro, los empresarios, sus amigos, a los que defendieron ayer vehementemente, porque los atacó aquí el terrible Break, que es capaz de eso y más, pero, en fin.

Aplauso, por favor.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Concluya, Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Entonces, esta marrullería de ocultar que quienes perdieron fueron ustedes y los panistas, de algo que era todo su, ¿verdad?

Queda la esencia de la anticorrupción, porque todo lo demás lo votaron con el PRI, sin ninguna pena ni nada, están comprometidos con el Sistema Nacional Anticorrupción. Lo demás nosotros no teníamos por qué votar por algo que estamos censurando, aquí en la tribuna lo dije.

No sirve eso, ¡hombre!, es toda una simulación, incluso la 3 de 3, lo que sea. ¿Por qué? Ya se los expliqué, porque es mentira, porque lo van a vigilar los que no quieren ser vigilados.

Muchas gracias, y lo voy a escuchar con toda atención y diciéndole con todo cariño y afecto, podría ser usted mi hijo, claro, no hago el comentario. Con toda simpatía me parece un gran muchacho, yo quisiera que se libere, que crezca, porque puede ser un gran funcionario en bien de México, en esta ocasión te viste muy mal.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, Senador Bartlett Díaz.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estamos en este momento en el posicionamiento de la discusión de un dictamen, las alusiones personales ya se agotaron. Ésta es alusión por alusión.

Adelante Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Bartlett, usted sabe que le tengo aprecio y que el debate público tiene que ser público.

En efecto, estoy joven, como usted lo dice. Yo tenía 15 años en 1988, y cuando tenía 15 años, lo recuerdo a usted que en aquél momento dio la cara por el sistema, y la dio moviendo un lápiz con la mano, tratando de explicar por qué había fallado el proceso de control de votos.

Porque es importante decir eso, cuando aquí lo que se viene a decir es que nosotros hemos defendido hoy el tema para la ciudadanía, sin duda alguna, que es el tema anticorrupción, y usted viene a decirme a mí que soy un farsante.

Y yo no le voy a aceptar eso, por más aprecio que le tenga, no se lo voy a aceptar, porque aunque usted me diga que no tiene miedo, lo que sí le puedo decir es de dónde venimos y dónde estamos dando la lucha, es muy distinto, Senador Bartlett, yo no he sido parte del sistema durante cuatro décadas de mi vida, tengo 43 años, o cinco décadas.

Entonces, se lo quiero subrayar con toda claridad, por algo que veo que le duele y le molesta, pero que no puedo admitir que usted en la tribuna venga a decir que miento.

Usted estaba presente durante la votación, y usted debió haber votado. Si votaba con nosotros o no, no es el tema, usted quiere que yo venga y le acerque el fierro a mis compañeros de partido, porque no le gusta, porque dice que militamos en la izquierda de manera compartida. Que yo diga que el PT y sus integrantes no votaron, pues no votaron, estaban ahí presentes y no manifestaron si estaban a favor, si estaban en contra o si se abstenían.

¿Pero sabe lo que sí ocurrió? Que por haberse abstenido, por no haber siquiera querido votar, terminaron dándole una cómoda mayoría a los votos del PRI, implícitamente, le guste o no, el dejar de votar implica que los votos que tuvo el PRI y el Partido Verde fueron mucho mayores en términos de ese dictamen.

Y se molesta usted, porque también por diferencia de edades, usted no logra entender que hoy los mecanismos de comunicación que hay, a través de las redes, que usted dice "la gente está desinformada", "la gente no existe"; bueno, yo comparto con usted, porque soy de Guerrero, que hay muchos millones de mexicanos que hoy desafortunadamente no están conscientes y no saben lo que está pasando en el país, pero hay muchos que sí, hay 630 mil que se organizaron para tener una iniciativa ciudadana, que sacaron las firmas, y me consta que no fue un aparato de movilización, como dice el célebre político que cita frecuentemente el frijol y el gorgojo, estos ciudadanos que no creen en esa lógica clientelar de la desinformación se movilizaron, 630 mil firmas, muchos hombres y mujeres que confiaron que la iniciativa ciudadana podía ser un motivo para discutir aquí.

¿Y sabe lo que terminó haciendo usted, ausentándose de su voto? Le dijo la razón al PRI y al Verde, le dio la razón al PRI y al Verde.

Es lo que no le gusta, implícitamente hoy, le guste o no, el PRI, el Verde y los petistas votaron en el mismo sentido.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, para fijar posicionamiento por el grupo parlamentario del PRD.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Señor Presidente, ya le dio usted la palabra al Senador, y a mí no me la ha dado.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Para hechos, ya está usted inscrita en cuanto terminen los posicionamientos.

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Fui aludida.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: No, no fue aludida.

Informo a la Asamblea que la participación del Senador Carlos Alberto Puente Salas, a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la ha presentado por escrito y se insertará en el Diario de los Debates.

El Senador Carlos Alberto Puente Salas: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, señor Presidente.

El combate a la corrupción contempla, además de las políticas de prevención, investigación y sanción, el fortalecimiento de las atribuciones que tienen los entes encargados de combatir dichos actos dotándolos de facultades amplias en la materia.

En este sentido, México debe basarse en dos pilares fundamentales. Por un lado, el reconocimiento de las libertades públicas como limitante al poder público; y otro, el establecimiento de los controles democráticos, ya sean internos o externos, de la administración pública.

Si bien se considera que la reforma que estamos discutiendo es sumamente necesaria, no podemos dejar de lado que también esta se deriva ya que el gobierno preparó una propuesta para desaparecer la Secretaría de la Función Pública, el día 2 de enero de 2013, con la cual se derogó el artículo 37 que corresponde a las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En los artículos transitorios de la reforma se señalaba que continuaría funcionando hasta que se constituyera el órgano constitucional autónomo en materia anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, lo cual no llegó a concretarse.

Por lo que se restablecen ahora dichas facultades en la ley, a excepción de las vinculadas con el control presupuestal de los servicios personales y la desincorporación de activos de la Administración Pública Federal, que pasan ahora a ser facultades de la Secretará de Hacienda y Crédito Público.

Ahora bien, dentro del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción se estableció, a nivel federal, la Secretaría de la Función Pública; y a nivel de las entidades federativas, a los órganos de control locales, que son instancias de control de auditoría internos de la administración pública y forman parte también del Sistema Nacional de Fiscalización.

Además, se le faculta para vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización por parte de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública establecerá las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas, y expedirá las normas que regulen los instrumentos y los procedimientos de control interno con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Se establece que la Secretaría de la Función Pública conducirá la política general de contrataciones públicas que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se homologarán los criterios, normas y políticas en la materia

entre las dependencias de la Administración Pública Federal, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y en general todos los entes públicos con regímenes de contratación pública.

Dentro del sistema democrático de pesos y contrapesos, en el cual se ha convertido en una necesidad imperiosa de combatir formalmente el cáncer que genera la corrupción, es necesario que la o las personas que se encuentran en una secretaría encargada de la supervisión y del control de legalidad de la Administración Pública Federal, reúnan diversos requisitos de idoneidad y que no sólo sea impuesto por el titular de este poder, sino que sea ratificado por una de las Cámaras integrantes del Poder Legislativo Federal.

Por ello, es importante resaltar que la reforma constitucional incluyó la disposición para que el nombramiento del Secretario de la Función Pública que haga el Presidente, sea ratificado por el Senado de la República.

Desafortunadamente, esta disposición constitucional será aplicada a partir de la siguiente persona que ocupe este cargo, y no se desarrolla en la ley orgánica las condiciones en las que deberá darse esta ratificación diseñada para impedir que los secretarios sean personas incondicionales del Ejecutivo Federal en turno.

Otro de los elementos que vemos sumamente positivos dentro de esta reforma, es que se establece que el nombramiento de los titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y de las entidades de la Administración Pública Federal, lo realizará la propia Secretaría de la Función Pública, donde se deberá nombrar a los mejores candidatos o candidatas para ocupar los puestos a través de un procedimiento transparente, objetivo y equitativo, lo cual elimina la mala práctica que existía de que dichas personas eran designadas unilateralmente por los titulares de las dependencias y entidades, restándoles la autonomía mínima que requieren estos funcionarios.

Una atribución que también deberá realizar la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al nuevo modelo anticorrupción, es la de llevar y normar el registro de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Por último, esta reforma adecúa el artículo 44, relativo a los Órganos Internos de Control, a las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo que ambas leyes quedarán homologadas y fomentarán un mejor desempeño de los mismos. Lo menos que esperamos es que la Secretaría de la Función Pública sea un actor coadyuvante en el seguimiento y la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y no sea evidenciada por omisión o por complicidad, en hechos de corrupción de altos servidores públicos, como ha sido una constante en este país.

En suma, aunque se encuentran espacios de oportunidad para avanzar aún más con esta construcción del Sistema Nacional Anticorrupción sólido, las modificaciones representan una enmienda a la política de Estado que, en su momento, pretendió desaparecer a la Secretaría de la Función Pública, dándole su verdadero papel de ser el control interno y no del Ministerio Público que absuelve a su jefe.

Como cuerpo legislativo, podemos siempre avanzar hacia el mejoramiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, cuestión que en este momento estamos llevando a cabo con toda responsabilidad.

Es cuanto, señor Presidente.

Gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Gracias, y gracias por ceñirse al tema, Senadora Dolores Padierna Luna.

A continuación, tiene el uso de la palabra la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al posicionamiento sobre el proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar nuestra posición a favor del dictamen sobre la minuta que contiene proyecto de Decreto mediante la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal.

De acuerdo al artículo 113 constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.

Por ello, ante el rediseño institucional necesario para que todos los integrantes del sistema cumplan con su función, era necesario revisar el marco jurídico que las rige, por eso era indispensable hacer cambios sustanciales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tal como quedó establecido en los transitorios de la reforma constitucional que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

Y es en cumplimiento a tal mandato, que este dictamen propone el establecimiento de las facultades para que la Secretaría de la Función Pública pueda ejercer los mecanismos de control necesarios que permitan su adecuado funcionamiento en aras de fortalecer al Ejecutivo en su capacidad de control y prevención en la actividad administrativa.

Las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, deben verse entonces como un complemento a lo establecido ya en el Sistema Nacional Anticorrupción, para que se integren de manera armónica las facultades, por un lado, otorgadas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y con ello se pueda evitar duplicidad de funciones limitantes a la responsabilidad de las mismas.

Se trata de armonizar la operación de la Secretaría de la Función Pública con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en especial con el Sistema Nacional Anticorrupción, conformado por autoridades de los tres poderes y de todos los órdenes de gobierno, entre ellos la propia secretaría, que le permitirán la correcta realización de sus atribuciones sin caer en burocratización y propugnando por la simplificación administrativa en aras de mantener un ejercicio transparente y focalizado en la rendición de cuentas, evitando excesos que saturen de información al sistema y a su paso afecten o puedan afectar la transparencia misma y la rendición de cuentas, que es objeto de la presente modificación legal.

Este dictamen es producto de la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Diputados, que se dio a la tarea de analizar todas las iniciativas presentadas con relación a este tema, y que a partir del análisis realizado, hicieron modificaciones importantes, entre las cuales se señalan las siguientes:

Se mantiene la denominación de Secretaría de la Función Pública, en virtud del posicionamiento que tiene la misma con la sociedad mexicana.

Se establece la obligación de adoptar los criterios que ésta emita, pero concentrándolos en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Se eliminaron las referencias a auditorías preventivas en aras de mantener la simplificación administrativa a la que todas las iniciativas hicieron referencia.

El eje de los Órganos Internos de Control estará contenido en el artículo 44 de la misma ley, puesto que serán los responsables del buen funcionamiento del sistema de control interno de la unidad a la que se encuentren adscritos.

Se armoniza el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con lo previsto en el proyecto ciudadano de Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que sea la Secretaría la que se encuentre habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de unidades especializadas u otros entes que tengan adscritos de forma directa.

Se sustituyen las referencias a la Auditoría Superior de la Federación por las del Sistema Nacional de Fiscalización.

Se incluye a la Procuraduría General de la República dentro de los sujetos a los que se les aplica la presente reforma, a las empresas productivas del Estado y aquellas entidades que por su grado de especialización y fin específico requieren un control especial.

En cuanto a las entidades cuya operación es distinta a las Unidades Administrativas Gubernamentales, como el caso de las empresas productivas del Estado, se hace énfasis en que éstas mantienen su régimen especial.

Y también consideramos que era necesario mantener los mismos, como se especifica en el dictamen que se pone a su consideración, en este caso porque sus Órganos Internos de Control se sujetarán a las leyes especializadas correspondientes. Era muy importante hacer esta precisión.

Se añadió la facultad de las Secretarías de Hacienda y Crédito Pública y de la Función Pública para la clasificación de las entidades paraestatales, conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y realicen fines comerciales con el propósito de establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización.

También se mantiene y promueve la profesionalización de los servidores públicos de la función pública, a través de la ocupación con los mejores perfiles, lo que hará posible contar con expertos en capacitación técnica y académica suficiente, que les permita detectar conductas indebidas con la finalidad de perseguirlas y sancionarlas efectivamente.

En suma, con las modificaciones planteadas en el dictamen y que fueron originadas en la Cámara de Diputados, estas adecuaciones armonizan la operación de la Secretaría de la Función Pública con los demás instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Es por ello que pedimos que el voto de este Pleno sea a favor del presente dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Ortega Martínez.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Jesús Casillas Romero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar el posicionamiento correspondiente.

El Senador Jesús Casillas Romero: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Senadores:

El combate a la corrupción es un problema que afecta a diversos ámbitos de nuestra sociedad, por lo que se ha puesto en el centro de la discusión de la agenda pública nacional.

En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, aspectos imprescindibles para garantizar un ejercicio de los recursos públicos eficaz y eficiente.

La prevención, combate y erradicación de la corrupción impone la necesidad de realizar una transformación sustancial en el orden jurídico nacional, es ahí donde radica la idoneidad de las reformas y adiciones del dictamen mediante el cual se busca reivindicar a la Secretaría de la Función Pública como garante de un gobierno honesto, eficiente y transparente.

El objetivo del producto en análisis es devolverle facultades y otorgarle otras más a la Secretaría de la Función Pública, lo anterior, además de su importancia intrínseca, para que contribuya a consolidar el proceso de reglamentación del Sistema Nacional Anticorrupción al establecer las bases organizacionales y jurídicas para hacer asequible la plena rendición de cuentas.

Con las reformas y adiciones que se ponen a consideración de esta Asamblea, se fortalece a la Unidad de Control Interno de la Administración Pública Federal. Un aspecto medular es que se mantiene, moderniza y promueve la profesionalización de los servidores públicos de la función pública, privilegiando los perfiles más idóneos.

Lo anterior, bajo la premisa de que la Secretaría de la Función Pública se constituya y consolide como la autoridad encargada de organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental.

En esta alta responsabilidad, esta dependencia tendrá Órganos Internos de Control, delegados y comisarios públicos que llevarán a cabo a la constante labor de vigilancia, de la conducción que tenga la Administración Pública Federal. Asimismo, contará con la valiosa colaboración del Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización, las que se erigen como las principales instituciones en materia de transparencia y combate a la corrupción.

Es importante precisar que al regresarle facultades que habían sido conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública vuelve a ser la responsable de expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal.

También le corresponderá vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, financiamiento, deuda y patrimonio que la ley dispone.

La Secretaría vuelve a tener la potestad de designar y remover a los titulares de los Órganos Internos de Control, así como de las empresas productivas del Estado y de la Procuraduría General de la República.

Estos son algunos de los beneficios contemplados e impulsados a través del dictamen que se encuentra a nuestra consideración.

Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, es medular contar con una Secretaría de la Función Pública sólida, con los instrumentos necesarios para prevenir y combatir el terrible fenómeno que representa la corrupción.

Al votar a favor del presente dictamen, estamos dando un paso importante en la construcción y fortalecimiento de los procedimientos, bases, principios e instituciones en la fiscalización y vigilancia de todas y cada una de las dependencias públicas que forman parte del Estado mexicano.

Por su atención, muchas gracias.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Casillas Romero.

Pasamos a la discusión en lo general. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

La Senadora Anabel Acosta Islas: Gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros:

Primeramente, quiero decirles que celebro la culminación de un proceso de gran trascendencia para nuestro país y un proceso que se llevó a cabo abierto a la ciudadanía, en la que junto con los grupos de la sociedad civil y junto con todos los grupos parlamentarios construimos un sistema que ha sido un reclamo social generalizado por mucho tiempo, como lo es el tema de la corrupción.

Por ello, no quiero dejar de destacar, pero también felicitar a quien coordinó y moderó todos los trabajos de todo este proceso que dará grandes resultados para nuestro país, el Senador Pablo Escudero.

Contar con mecanismos eficientes de control en la Administración Pública Federal nos permitirá identificar los resultados, los avances, pero sobre todo las tareas pendientes y los desafíos que se habrán de atender.

El dictamen que hoy discutimos buscará que la Secretaría de la Función Pública asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en la reforma constitucional de combate a la corrupción.

Estos cambios permitirán a la Secretaría de la Función Pública fungir como Órgano de Control Interno de la Administración Pública Federal y, con ello, tener un instrumento más para prevenir, identificar y sancionar los casos de corrupción en nuestro país.

El dictamen, que estoy segura aprobaremos, fortalece a la entidad responsable del control interno del Ejecutivo Federal, para que vigile el ejercicio efectivo de la Administración Pública Federal, con la absoluta transparencia y rendición de cuentas.

Votaremos a favor de la armonización de nuestros distintos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, lo cual se traducirá en la prevención de duplicidades institucionales, en la simplificación administrativa y en un ejercicio más transparente focalizado en la rendición de cuentas.

Basta decir que se ajustó el texto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que así la Secretaría de la Función Pública tenga las atribuciones de investigar posibles actos de corrupción.

Además, se ampliaron los sujetos obligados a seguir la normatividad, entre ellas destaca la Procuraduría General de la República, las empresas productivas del Estado y las entidades que por su grado de especialización y fin específico, requieren un control especial.

Compañeras y compañeros: En el grupo parlamentario del PRI consideramos de la mayor relevancia estos planteamientos para enriquecer y consolidar nuestro marco jurídico federal, relativo al control interno de la Administración Pública Federal.

Y bajo estas premisas, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen, debido a que constituye un paso importante en materia de transparencia y combate a la corrupción en nuestro país.

Su voto a favor representa un impulso para concretar un modelo de control y rendición de cuentas eficaz, eficiente e innovador, bajo el cual estarán sujetos todas las dependencias públicas de los diferentes órdenes de gobierno.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora Acosta Islas.

A continuación, tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, del grupo parlamentario del PRD, a fin de presentar su posicionamiento en la discusión en lo general.

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente.

En esta discusión que estamos abordando en lo general para comentar este dictamen que viene de la Cámara de Diputados, que complementa todo el paquete de leyes que hemos estado discutiendo para resolver ya de manera correcta, aunque no plena, el tema del combate a la corrupción, buscaremos decir que en esta Secretaría que estamos recuperando, las facultades que se están recuperando en la Ley Orgánica, no prosperaron.

Estas facultades de fiscalización que se le habían entregado al órgano que gastaba, o sea, el órgano que gastaba era el que estaba encargado de auto cuidarse y establecerse la normatividad.

Y esto se fue limitando todavía más, aparte de lo absurdo de darle esa facultad, por el escándalo en que se vio envuelto el Secretario de Hacienda, por las propiedades no muy claras en las que se vio inmerso, y este tipo de escándalo limitó el alcance y las funciones de esta comisión.

Por eso celebramos que hoy se le esté regresando esta fiscalización interna a un órgano independiente dentro del mismo aparato del Estado y establecerá las facultades que ellos tienen para darse la normatividad a fiscalizar.

Digo, pareciera que es algo que no está contribuyendo, lo que estamos planteando, pero es parte de la necesidad de ir cobrando credibilidad en este sentido.

Por eso creemos que esta capacidad fiscalizadora se está regresando para normar lo que se va a hacer.

Y bien se decía aquí, que no van a ser solamente ellos solos, sino ahora va a estar también el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción, quienes van a ser la pinza que cierre este tipo de conductas para que no tengamos, en ese sentido, cuestionamientos y señalamientos posteriores de cosas que se dejaron pasar.

Por eso, incluso, miren, en esta parte de lo que tenemos que ver y que ha sido parte de un debate, hace un momento, de los señalamientos que se cruzan por cómo se interpreta y cómo se ve lo que es este sistema, y nace particularmente de la señalización en el dictamen de la Ley 3 de 3.

Pues yo quiero decirles y llamarlos a que cuando menos de parte de la izquierda no caigamos en una manipulación mañosa que hacen los medios de información, porque lejos de señalar a los responsables que no tomaron en cuenta las propuestas de la iniciativa ciudadana, nos estamos bronqueando aquí los compañeros que se abstuvieron de votar con los que votamos y no alcanzamos el número.

En ese sentido, yo creo que vale la pena que se enderecen correctamente las baterías y se vea quién faltó al compromiso.

Ha sido muy doloso, muy lastimoso que los medios hagan responsable a la izquierda de que esta cuestión no prosperara, cuando la mayoría la tienen en otro lado, compañeros del PRI y compañeros del Verde, que restaron los votos suficientes para que esto pudiera caminar.

Pero quiero decirles, incluso en descargo de la preocupación que tienen que si estas reformas que le hicimos al artículo 29 o la reserva que se hizo al artículo 29 hubiera prosperado aquí, en este Senado, pues no hubiera prosperado allá en la Cámara de Diputados, como prosperó en el dictamen.

Yo creo que ya algunos se dieron cuenta que aunque protestó la iniciativa privada llamando a reorientar el contenido de estas leyes, no pasó nada, porque allá tampoco hicieron caso los Diputados, y aunque se votó de alguna manera unida PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT, hasta algunos de Morena, ni siquiera logramos incidir en el resultado de estas reservas del 29 y del 32.

Por eso creo que es innecesario un debate entre nosotros, y reorientar la discusión acerca de cómo poder hacer las propuestas necesarias para que, en cuanto entre en vigor esta ley, pueda modificarse e incidirse en este resultado que buscamos, de verdad, transparentar la riqueza de los funcionarios que aprovechan los cargos públicos para amasar fortunas.

Por eso, compañeros, esta parte de este sistema que le regresa al órgano de fiscalización, pues va a tener que recuperar credibilidad en ese terreno, que no sea nuevamente un subordinado el que le limpia el camino al superior jerárquico y de repente los exculpa y los absuelve de responsabilidades.

Esta parte es la que está en litigio, esta parte es la que debemos trabajar, en esa parte es donde debemos profundizar nosotros la discusión y creo que no contribuye que nos señalemos nosotros mismos en estos temas que a veces gozan quienes tienen la mano metida ahí, y avientan la piedra y esconden la mano.

Gracias, señor Presidente.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senador Pedraza Chávez.

Informo a la Asamblea que recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Jorge Aréchiga Ávila, la cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Asimismo, me permito entregar a la Secretaría el texto de mi intervención, la cual se integrará también, al Diario de los Debates.

(Intervención del Senador Arturo Zamora Jiménez)

Informo también a la Asamblea que para hechos se han inscrito los Senadores: Luis Humberto Fernández Fuentes, Layda Sansores San Román, Laura Angélica Rojas, Fidel Demédicis Hidalgo, Marco Antonio Blásquez Salinas y Armando Ríos Piter.

Una vez que concluya esta etapa, solicitaré a la Secretaria consulte a la Asamblea si el asunto se encuentra suficientemente discutido, para que pasemos inmediatamente después a la votación.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Partido de la Revolución Democrática, para hechos.

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Con su venia, su señoría. Buenas tardes.

Con profundo respeto, Senador Bartlett, lo aludo con claridad. Me veo obligado a puntualizar por la naturaleza de su intervención, y me obliga porque no podemos aceptar una descalificación a un trabajo tan amplio y tan intenso que venimos realizando para construir las leyes anticorrupción, en el caso de mi fracción.

Propusimos siete leyes, de las cuales fueron elementos importantes del debate, en algunos casos fueron parte de los proyectos que se aprobaron.

En lo personal propuse a esta Soberanía la iniciativa para Código Penal Federal, y participamos de manera activa e intensa en todo este proceso de construcción.

No puedo aceptarlo, porque en mi caso, y creo que hablo a nombre del grupo, nunca hubo ninguna presión, ninguna agenda que no fuera la de hacer lo correcto, y yo he dedicado mi vida a estudiar la administración pública, tengo un doctorado con mención honorífica, y todo mi talento y toda mi capacidad se la dediqué a construir estas leyes.

Puse muy claro en esta tribuna, pero lo puse también por escrito, en todo lo que difería, y quiero decir que a lo mejor no se aceptó todo, pero sí lo debatimos y lo platicamos. Por eso quiero ser muy claro en este punto.

Pero también lo hago porque creo que podemos ser actores y no testigos de lo que pasa, porque creo que no podemos juzgar sin participar, porque desde la atalaya flamígero se puede juzgar, pero no se hacen buenas leyes.

Y hay muchos temas que valdría la pena comentarlos, la verdad es que es un trabajo intenso, es un trabajo muy amplio que se ha venido realizando y que no creo que admita esta descalificación.

Y concluiría, de manera muy breve, con una sola pregunta, y es: ¿Si ya renunciamos a la posibilidad de hacer buenas leyes y de participar en todo el proceso, o si nos vamos a limitar a juzgarlas y hablar de ellas en el Pleno?

Realmente se le extrañó al PT en las comisiones.

Yo estuve en todas las sesiones, participamos sábados y domingos, y nunca oí una participación del PT. Se extrañaron también las iniciativas.

En lo personal, yo leí las iniciativas del PRI, leí las iniciativas del PAN, leí la iniciativa de la Senadora Tagle, pero no recuerdo que esté en el debate una iniciativa, o nadie tampoco, en lo personal, yo fui con los que estaban participando para decirles por qué eran las razones de las ideas que estaban proponiendo, pero nunca leí ni tuve ninguna comunicación por alguien del PT.

Y se le extrañó, no lo digo como recriminación, se le extrañó porque seguramente hubiera sido muy útil que sus opiniones o sus participaciones nos ayudaran a hacer una mejor ley.

Yo lo único que solicitaría es que no descalifiquemos un producto que sí tiene sus limitaciones, las hemos planteado aquí, pero, sin embargo, no podemos caer en el dilema de que es esto o la nada, porque la nada no nos sirve, tenemos que construir leyes, no somos jueces, somos legisladores.

Por su atención, muchas gracias.

PRESIDENCIA DEL SENADOR
LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Fernández Fuentes.

¿Dígame, Senador Bartlett?

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) Por alusiones personales, pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Lo anoto para hechos, Senador, porque no hubo alusión a su persona.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: (Desde su escaño) ¡Ah, cómo no! Sí hubo, claro.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Lo reconoce el Senador.

Adelante, Senador Bartlett.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Gracias, señor Presidente, por su aceptación de esta intervención.

Hubo una alusión personal muy clara, o casi toda la presentación fue una alusión en general a mi persona y a la bancada.

Con el mismo respeto con que se expresó esta crítica, estoy obligado, yo también, a contestar.

Voy a empezar por el final de lo que usted dijo, señor Senador.

Dice usted que nunca conoció ninguna iniciativa del PT en comisiones y que hubiera sido bueno porque hubiera sido importante, y lo extrañó.

Con todo respeto, claro que hubo, hubo una iniciativa a la que no le hicieron el menor caso. Y ese es uno de los problemas que tenemos, no se dictaminó la iniciativa que hicimos nosotros.

Es una iniciativa que empieza por reformas a la Constitución, por reformas al artículo que establece que el Presidente no es punible durante el periodo de su encargo. Y está la iniciativa en donde pedimos que se aprobara una comisión de la verdad.

Eso, de ahí deriva o derivó en nuestra iniciativa toda una serie de principios en los cuales establecimos que mientras eso se mantenga así, en este país no va a haber lucha contra la corrupción.

No hemos tomado la tribuna, señor Senador, con el ánimo de votar en contra de todo lo que somos oposiciones, de verdad ¿eh? Nosotros sí somos oposición de verdad, y hemos tratado todo ese largo periodo, que ya se está acabando, casi de demostrar que somos oposición de verdad.

Usted señala que en la tribuna no se debe venir a criticar sino a construir, y termina usted diciendo que se hizo un enorme esfuerzo, usted, porque no lo dudo, con todo y su diploma de doctor en derecho, lo que sea, con mención honorífica, pero le voy a contestar a eso, la tribuna es para discutir, la tribuna es precisamente un parlamento, es eso, y lo que hemos hecho una y otra vez es plantear nuestra postura de oposición. Así es que no es venir con el dedo flamígero a acabar con todo, no. Hemos tratado de que cada uno de nuestros votos esté debidamente fundado en argumentos.

Así es que yo le contesto a usted que esta tribuna es para eso, no para venir a leer lo que les reparten a algunos, no, es para debatir. Y lo que ha faltado aquí es debate, porque como hay una mayoría aquí tripartita peñanietista, ¿entonces para qué discuten, si ya tienen los votos? Nada más se dice: "Se pregunta a la Asamblea si quieren ustedes escuchar algo". Nada, vámonos, eso es lo que ha habido, no hay discusión.

Segundo. No hay análisis de las iniciativas, dice usted que le dedicó tanto tiempo, esfuerzo, que nos platica, y no leyó nuestra iniciativa que era la única diferente a las demás, y llega usted a ese análisis de que no estuvo completo esto, lo han estado diciendo ustedes, le faltó, podía haber sido mejor. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, esa gran frase, nada más que le voy a decir una cosa que lo hemos comentado.

Esa postura es el apoyo clarísimo al Presidente Peña Nieto. Cuando se lanzan todos y terminan diciendo: "Bueno, esto es lo más que pudimos hacer", "va a quedar pendiente esto, va a quedar pendiente lo otro, pero apoyamos". Entonces eso es el apoyo funcional que da una oposición que no se opone, que nos dice, fíjense nada más en este tema. Cómo pueden defender la oposición, de cualquiera de los dos lados, sin tener arreglos, como los vimos en las elecciones, cómo pueden defender que esa Secretaría de la Función Pública, ¡por favor!, que nombra a todos los que van a vigilar a los Secretarios, cómo pueden defender que esté bien, lo nombra el Presidente.

Es grotesco, es algo que no se puede defender, eso no es un debate de verdad, eso es falso, no es cierto. Hay quienes vienen a decir que esa Secretaría de la Función Pública va a tener una serie de funciones bajo el mandato del Presidente, que es el que lo nombra, o con la participación de nosotros que siempre se reparte la cuestión. No se puede defender.

Yo pienso que lo que le ha faltado, y lo hemos dicho, al Ejecutivo, ha sido control. Entregó el territorio nacional, la energía de este país, el territorio con las regiones que van a manejar trasnacionales, y nadie lo ha detenido, nadie.

Ha reformado la Constitución con el apoyo de la supuesta oposición y ha tocado los aspectos más importantes, no hay control, no hay división de poderes, cuando se unen todos, y cuando la Suprema Corte de Justicia que tiene también su responsabilidad, se hace guaje en la reforma energética que fue con violaciones permanentes, está en las instancias internacionales, la Suprema Corte no lo vio, no atrajo el caso, buscó que lo resolvieran por allá abajo algún magistrado que aceptara decir una mentira porque resolvió otra cosa.

Ni la Suprema Corte, y se los dije yo a los ministros en ese momento, les dije: Si la Suprema Corte no aplica el control de constitucionalidad al Congreso, estamos en la dictadura clarísima, no hay oposición.

Entonces, Peña Nieto y los intereses que representa, que ustedes saben cuáles son, los negocios, las grandes obras, los inmensos costales de dinero que sacan, ése no tuvo freno, no ha tenido freno.

Y lo que representa Peña Nieto es lo más nefasto que podría presentar, lo antinacional, el desinterés de la población mexicana, la pobreza creciente, no ha tenido Peña Nieto ningún freno, ninguno, ni la Suprema Corte que fue de lo más funcional, ni una oposición que dice, bueno, éste es un poquito de avance, porque lo único que van haciendo es justificando los intereses de un Ejecutivo que ha traicionado a este país y que no tiene quién lo detenga.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Le pido concluya su participación, Senador.

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Es una tragedia nacional.

Muchas gracias, señor Presidente, por su amabilidad.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias a usted, Senador Bartlett Díaz.

Tiene el uso de la tribuna la Senadora Layda Sansores San Román, para hechos.

La Senadora Layda Sansores San Román: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros.

Usted, señor Presidente, llámele como quiera, pero no es para hechos, es para alusiones personales de mi estimado compañero, el Senador Ríos Piter.

Me parece que es irresponsable andar buscando culpables cuando ustedes pactaron su derrota, porque ustedes todo lo pactan.

Nuestro voto no era definitivo, y lo saben bien. Y si el PAN y el PRD, ese día se hubiesen portado con responsabilidad, hubiesen podido sacar adelante la iniciativa, porque el PRI tenía unos compañeros menos.

¡No! Pero a la hora de la verdad, que se esfuman como acostumbran.

Ustedes promueven la Ley 3 de 3, pero ocultan su patrimonio, porque de todos estos que se envolvieron en la Ley 3 de 3, y se cobijan con las seiscientas treinta y tantas mil firmas, sólo un perredista y 10 panistas han presentado su declaración pública. Eso es no tener vergüenza, eso es ser incongruente.

Y por otro lado, la Ley 3 de 3 se supone que es para combatir la corrupción, pero se pasaron todo el día votando con el PRI para crear una farsa de Sistema Nacional Anticorrupción, que nace muerto, y que nosotros sabemos que más que combatir la corrupción, lo que va a ser es legitimar la impunidad.

Y, mire, esta Ley 3 de 3 es un artículo, la quieren hacer por los medios, porque lo tomaron como bandera. ¡No! Es un artículo de los 363 artículos de las siete leyes que componen este sistema.

Lo importante es que realmente se combata desde arriba, ese era el meollo de este sistema, que se combata desde arriba la corrupción.

¡Ah, pero al señor Presidente no se atreven a tocarlo ni con el pétalo de un artículo!

Esa fue una propuesta que hizo Morena, que se modificara el 108 constitucional, para que también el Presidente pudiera ser juzgado por corrupción. Por eso es que nace muerta.

Y usted presume como medalla que no ha pertenecido al sistema del gobierno. Yo no sé si eso es pecado, pero usted miente, porque usted fue asesor del Secretario de Hacienda, Gurría; y también fue Subsecretario de Gobierno en la gubernatura de René Juárez. Yo no sé a eso qué le llama.

¿Viene de la izquierda de los grupos guerrilleros?

Bueno, aquí, yo creo que ustedes resultaron peor que los priístas, porque al menos los priístas se muestran como son, y ustedes caminan con máscara. Y a mí me extrañó tanta enjundia y tanta vehemencia, pero lo entiendo, les pudo mucho la derrota con la que la ciudadanía contestó su traición.

Gracias.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Para alusiones, tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Un beso de amistad siempre es bueno antes de un buen debate.

Senadora Sansores, yo quiero decirle con toda claridad que ese discurso político que usted viene a traer aquí a la mesa, lo único que le ayuda es nuevamente al PRI y al Verde.

Cuando usted empieza a señalar en la misma lógica que lo hace su líder político, a la izquierda, yo debo de dejar claro que usted lo hace con la intención de eso, de simple y sencillamente capitalizar políticamente.

Trabajé un año en este tema, en el Sistema Nacional Anticorrupción. De tal manera que cuando usted viene a decir que yo hice una faramalla al defender esto, ¡miente! Y tengo la obligación de echárselo en cara, porque usted, oí las declaraciones que le hizo a Denise Maerker, dijo: "Debí haber votado"; ¡pues hubiera votado!

¿Qué viene entonces a alegar aquí? ¡Hubiera votado!

¡Ah!, pero cuando está en los medios y la están escuchando, le sale lo política. Aquí de repente se convierte en la gran luchadora social. Nada más que le voy a decir algo. Sí, yo he trabajado en muchas administraciones, trabajé en administraciones del PRI, en las administraciones del PAN, en las del PRD, nada más que le voy a decir a qué se dedica mi papá y mi mamá: Mi papá tiene 73 años y todavía trabaja, tiene que trabajar porque de eso se trata, de trabajar para vivir. Mi mamá tiene 70 años y todavía trabaja.

¿Quién es su papá, Senadora?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Mi papá ya murió.

El Senador Armando Ríos Piter: Por eso es importante saber de dónde venimos, Senadora, es indispensable saber de dónde venimos cada quien cuando venimos a defender las cosas de la izquierda.

A mí me apasiona mucho cómo defiende usted los temas, pero cuando usted viene aquí a atacarlos y a atacar el Partido de la Revolución Democrática, es mi obligación identificar desde qué trinchera estamos cada uno de nosotros.

¡Yo no le acepto que usted venga a decir que yo miento! No le acepto que usted venga a decir que yo defiendo de dientes para afuera un tema que le duele a mi generación, es el tema de la corrupción; es el tema que tiene que ver con los muertos de mi pueblo, de Ayotzinapa. Yo la he visto ahí a usted, nada más que usted se engola en el tema atacando a Peña Nieto, cosa que yo también comparto, pero en la ausencia de su voto termina dándole la razón a Peña Nieto, termina defendiendo al PRI y al Verde en sus votos.

Entonces, Senadora, seamos congruentes, se lo digo con todo cariño y con todo respeto, porque venimos de lugares distintos y posiblemente tengamos objetivos similares, pero cuando usted sube una fotografía en el twitter diciendo que mi bancada reunida está haciendo una faramalla, no se lo acepto. No se lo acepto porque es simple posición política. Es un compromiso para mí como miembro de mi generación ir en contra de lo que el PRI y el Verde durante tantas décadas hicieron. No es un asunto sólo de Peña Nieto, es parte de todo un sistema, de un sistema en el cual las herencias también tienen condenas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Ríos Piter.

Senadora Layda Sansores, dígame, ¿para qué asunto?

La Senadora Layda Sansores San Román: (Desde su escaño) Para alusiones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: No hay alusiones sobre alusiones, Senadora, pero con gusto la anoto para hechos.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, para hechos.

El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: Muy bien, muchas gracias, señor Presidente. Con el permiso de la Asamblea.

Quiero, primero que nada, felicitar a los compañeros del Partido Acción Nacional. Son unos campeones del teatro, de la simulación y de la mentira, porque resulta que siendo ustedes los que generaron este engaño público a la Nación y a quienes dicen representar, estamos aquí enconados los compañeros del PRD y los del PT en un debate que no tiene mayor trascendencia ni necesidad.

Quiero decirles a las 630 mil firmas ciudadanas, que con toda aspiración signaron esa iniciativa, que fueron engañados; fueron engañados por la curia empresarial de este país y fueron engañados por los señores Senadores del Partido Acción Nacional, salvo los que por vergüenza se salieron del recinto.

Es muy fácil armar una campaña de linchamiento en redes, yo soy comunicólogo, tenían su teatrito armado y había que culpar a los que por definición política decidimos no participar en su juego, porque es mentira que los representan ciudadanos, mentira que tienen aspiración de combatir la corrupción. Ustedes usaron como papel higiénico esa iniciativa, y si hubieran tenido vergüenza y hubieran tenido un compromiso real con esas 630 mil firmas, no lo hubieran metido para última hora, como una débil reserva, así, como se trata cualquier documento, era una iniciativa.

Aclaro, esa reserva al artículo 29 intrascendente que ustedes presentaron no es la Ley 3 de 3. No se hagan majes, y eso se los digo a todos los corifeos que tienen, porque tenían perfectamente armado su teatro. Esa es la prueba de su simulación y su mentira.

La iniciativa ciudadana de ley, que les fue depositada a su recaudo se llama Iniciativa Ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, trae muchos capítulos, y les voy a leer lo que tiene que ver con el Título Segundo, Capítulo Único, artículo 10, fracción XIV.

Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por las leyes:

Estoy hablando de la Ley 3 de 3, no de la Ley 3 de 3 incompleta que inventaron aquí al final.

Y resalto: “Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”.

Entonces preguntamos: ¿De dónde viene ese invento de la reserva al artículo 29 y ese alegado de que quienes votaron en contra o decidimos no participar en su juego? ¿Estamos en favor de la opacidad, cuando aquí se específica en esta iniciativa que ustedes recibieron, cuáles son los alcances de la declaración?

Pero, miren, son muy buenos para simular, son muy buenos para armar sus teatros, son terribles para gobernar, pero dejan pistas.

Aquí en la madrugada se presentó una reserva al artículo 32. El compañero Cárdenas Fonseca lo hizo.

Y le quiero decir a la curia empresarial, a ésos que se han dedicado a linchar a quienes tenemos ideas de avanzada, que tenemos ideas progresistas, a la Coparmex, que se pusieron en tan malas manos que esa reforma al artículo 32 que los sujeta obligadamente a compartir las responsabilidades con los servidores públicos, fue avalada y aplaudida por quienes se dicen sus aliados. Si no, hay que revisar los votos que se recibieron a esa reforma del artículo 32.

Y ayer vimos la manifestación de los señores empresarios, que dicen: "si la justicia es nada más en los bueyes de mi compadre, ¿cómo se va a hacer en el mío?"

Pues sí, señores de la curia, los empinaron sus aliados del PAN.

De manera que los que estamos en esto por convicción y no necesariamente vivimos de los salarios que aquí se nos pagan, estamos acostumbrados a muchas cosas. A mí me han pasado por muchos infiernos de linchamiento de redes sociales, de twitter, de Facebook y esas cadenitas de fanáticos que utilizan.

Pero sí les pido un favor, no mientan, porque lo de menos es que con sus aliados de la curia empresarial, ya voy a terminar, señor Presidente, ustedes se arreglan en un arrimón ahí que se den en algún coctel tomando sus champañas, pero a esos 630 mil ciudadanos que efectivamente pusieron en sus manos esta iniciativa, ustedes fueron los que los traicionaron.

Es la cuenta, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Blásquez Salinas.

Tiene la palabra la Senadora Layda Sansores San Román.

La Senadora Layda Sansores San Román: Nada más para unas frasecitas.

Mire, estimado compañero, ¿por dónde anda? ¿A poco ya se fue? ¿También se esfumó?

Qué cosa. Bueno, ahí le mandan recadito porque luego no oye y viene enardecido, y ni siquiera había escuchado al Senador Bartlett Díaz.

En primer lugar, él fue quien inicia este debate entre gentes de izquierda y de semi-izquierda, pero creo que tiene la memoria corta y la mecha más corta, porque viene furioso.

Yo, Senador, defiendo mi biografía y me parece que es cobarde que usted quiera imputarme acciones de las cuales no soy responsable.

Pero con todo, fíjense, rica o muy rica que me quieran ver, yo he presentado mi declaración patrimonial pública, incluso la de 3 de 3, cuando ni siquiera existía esta iniciativa.

¿Cuándo la presentó usted?, ¿me puede contestar sí ya la hizo pública?, y ¿sus compañeros cuándo? Porque eso es hipocresía.

Y solamente le digo que yo aquí vengo a defender mis posiciones con toda la firmeza, no estoy en contradicciones.

A Denise Maerker lo que le dije que tal vez de manera personal, porque nosotros estábamos convencidos y éramos congruentes con la línea que habíamos defendido todo el día de que este sistema es inútil, costoso y no va a servir para nada, que ya tendríamos que estar organizando el funeral y nosotros ya traemos las flores.

Pero que dado que mi familia había participado en esta colección de firmas, como muchos ciudadanos de buena fe, que no sabían que esto valía siempre y cuando hubiera un Sistema Nacional Anticorrupción que realmente lo avalara, pero que no nos juzgaran los mismos corruptos, que son los que lo van a encabezar, y usted lo sabe bien. Si antes ya se había puesto a Peña Nieto para encabezarlo, ahora nos va a poner a uno de sus empleados favoritos.

Así que yo no tengo nada de qué ocultarme, aquí con valor he venido a decir muchas cosas y pongo el riesgo, Senador, y no ando haciendo como que defiendo al pueblo, pero bien que anda aquí cabildeando para atender los intereses del poder.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Para alusiones, Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: Muchas gracias, señor Presidente.

Senadora, le ofrezco una disculpa por haber mencionado a su padre que ya ha fallecido, fue un personaje público, le ofrezco una disculpa. Pero el punto que yo quise hacer es el siguiente:

Hay regularmente estas actitudes de ciertos políticos y políticas, que muchas veces se engolan en el disfraz que buscan aparentar, no digo que es el caso de usted, yo creo que legítimamente usted cada vez que la veo en esta tribuna usted plantea defensas, planteamientos y críticas especialmente al gobierno de Peña Nieto que yo he acompañado, por eso no comparto que usted diga que yo me la vivo cabildeando, no se lo acepto; no se lo acepto porque está bien que lo haga para el debate, pero usted sabe que no es cierto. Lo que sí le digo es que no venimos de los mismos lugares usted y yo, no tenemos las herencias iguales. Las herencias hacen muchas veces que se tenga la capacidad de venir a defender otras cosas de las que uno viene.

Qué bueno que usted ha cambiado el rumbo, pero sí es importante que usted reconozca de dónde viene, porque si no lo reconoce, entonces difícilmente podemos entender esa complicidad que se tiene con el pasado.

Solamente lo dejo con toda claridad, Senadora, porque esa verdad, aunque vengo a solicitarle una disculpa por haber mencionado a su padre muerto, la tengo que dejar clara: usted y yo no venimos de lugares iguales.

Posiblemente vayamos a lugares similares, pero con la actitud que usted tiene; cuando usted viene a decir que no votó, que le dice a Denise Maerker: “Es que yo no voté, aunque debía haber votado”, por más que nos venga aquí a revolcar los temas, lo real es que usted no votó y estaba aquí presente.

Entonces, el punto que yo he venido debatiendo es usted, al no votar, usted y sus compañeros al no votar, votaron implícitamente con el PRI y el Verde que tanto critica, y no es la primera vez que nos pasa que El Peje hace eso, no es la primera vez.

Yo entiendo que ustedes estén metidos en una carrera presidencial y que lo que buscan es diferenciarse; nada más que así no se construye el país que yo quiero, porque del país que ustedes vienen, no es el país que yo quiero para mis hijos hacia el frente.

Un país en el que se ha vivido, se ha tenido herencias, si ha sido parte de la élite. ¡Ah! pero ahora sí vamos a cambiarlo, ahora sí lo vamos a cambiar porque nosotros ya tenemos con qué.

Es lo que le quiero dejar en claro, Senadora Layda Sansores, si vamos a luchar por un país distinto, entonces hay que empezar reconociendo cuando no se vota, hay que empezar diciendo cuáles son los tres dichos, no mentir, ¿qué otro es?, creo que ustedes se los deben de saber.

Los tres dichos que tenemos nosotros: no mentir, no engañar al pueblo, hay tres ahí que dice siempre Andrés Manuel, entonces no mienta Senadora. No mienta porque entonces le está quedando mal usted a su líder pseudo-religioso.

Entonces si usted no votó, reconozca que no votó y que implícitamente votó con el PRI y el Verde.

¿Y sabe en qué estamos de acuerdo usted y yo? Que con este debate, mientras se ríen los priístas, lo que estamos haciendo es garantizar que ese régimen de corrupción que mató a 43 estudiantes y que se quedó con la Casa Blanca, siga impune.

Entonces no se enoje de que yo le eche en cara de dónde viene, mejor construyamos hacia dónde vamos.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Compañeras y compañeros, hemos permitido un debate, mejor dicho un post-debate que no tiene que ver con el tema que estamos tratando. No es el tema que estamos tratando.

Este es el dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sin embargo, hemos permitido un post-debate. Les pido nos permitan concluir este trámite, por favor.

Recibimos en la Mesa Directiva el texto de la intervención del Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, el cual se integrará al Diario de los Debates.

El Senador Héctor Adrián Menchaca Medrano: Intervención. Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: En virtud de que no hay otros oradores registrados ni artículos reservados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de la votación. Se emitieron 106 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones.

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Está aprobado en lo general y en lo particular el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal**. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.**

DECRETO por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:

QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL EJECUTIVO FEDERAL.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 19; 26; 31, fracciones XII, XXI, XXIV, XXIX, XXX, XXXIII y XXXIV; 37; 44 y 50, y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación;

Secretaría de Relaciones Exteriores;

Secretaría de la Defensa Nacional;

Secretaría de Marina;

Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Secretaría de Desarrollo Social;

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

Secretaría de Energía;

Secretaría de Economía;

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;

Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

Secretaría de la Función Pública;

Secretaría de Educación Pública;

Secretaría de Salud;

Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;

Secretaría de Cultura;

Secretaría de Turismo, y

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Artículo 31. ...

I. a **XI. ...**

XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;

XIII. a **XX. ...**

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Federal;

XXII. (Se deroga)

XXIII. ...

XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;

XXV. (Se deroga)

XXVI. (Se deroga)

XXVII. (Se deroga)

XXVIII. (Se deroga)

XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general correspondiente;

XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación;

XXXI. (Se deroga)

XXXII. (Se deroga)

XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las disposiciones aplicables; y

XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones aplicables;

II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y emitir las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias;

VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administración de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de servicios personales;

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad en su gestión y encargo;

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;

XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la República; así como normar y controlar su desempeño;

XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría;

XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes;

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;

XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables;

XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y promover, con la intervención que corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, las entidades federativas y demás entes públicos encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de políticas, normativas y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional;

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad;

XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales;

XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la Administración Pública Federal;

XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XXVIII. Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y

XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que somete el Presidente de la República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad.

Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de dichos órganos.

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y las mejores prácticas que considere el referido sistema.

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación.

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe.

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión.

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión.

Artículo 50. Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales, para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de considerar la conveniencia de su adopción.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

SEGUNDO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013.

TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda.

Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes Nacionales.

Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con dichos programas.

Ciudad de México, a 17 de junio de 2016.- Dip. **José de Jesús Zambrano Grijalva**, Presidente.- Sen. **Roberto Gil Zuarth**, Presidente.- Dip. **Verónica Delgadillo García**, Secretaria.- Sen. **María Elena Barrera Tapia**, Secretaria.- Rúbricas.**"**

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dos mil dieciséis.- **Enrique Peña Nieto**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Miguel Ángel Osorio Chong**.- Rúbrica.